



FLACSO
MÉXICO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Sede Académica de México

Maestría en Ciencias Sociales

XXII Promoción

2018-2020

**Oportunidades políticas, paz y democracia en las luchas por la defensa del territorio en Antioquia:
los casos del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) y del Cinturón
Occidental Ambiental (COA) en el ciclo 2010-2018**

Tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Sociales

Presenta

Lic. Gonzalo Galindo Delgado

Directora de tesis:

Dra. Ligia Tavera Fenollosa

Lectores:

Dr. Gabriel Ignacio Gómez Sánchez

Dr. Martín Aguilar Sánchez

Seminario de tesis: Actores y Procesos Contenciosos en las Sociedades Latinoamericanas
Contemporáneas

Línea de investigación: Sociedad Civil, Diversidad y Multiculturalismo en América Latina y el Caribe

Ciudad de México, agosto de 2020

Esta maestría fue realizada gracias a una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT, México)

Resumen

En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Tal proceso se inscribió en el ciclo político más amplio 2010-2018, caracterizado por grandes transformaciones socio-políticas, en medio de las cuales los movimientos sociales demandaron la construcción de una paz que atendiese las cuestiones de la democracia y el territorio. En este contexto, la presente tesis estudia el modo en que dos movimientos sociales que luchan por la defensa del territorio en Antioquia (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas (EOP) en el ámbito regional. Para ello se propone un enfoque analítico que integra el paradigma del proceso político con problemas teóricos y contextuales relacionados con la estatalidad y el giro eco-territorial en América Latina. Se utiliza una estrategia comparada y cualitativa que consulta los sentidos implicados en la acción política de los actores sociales para argumentar que, en medio de un escenario de tensiones, los movimientos analizados proponen una praxis política renovada que se aprovecha de los espacios discursivos proporcionados por el proceso de paz y los espacios institucionales generados por las oportunidades políticas, en el marco de agendas emancipatorias post-extractivistas.

Palabras clave: Oportunidades políticas, Proceso político, Territorio, Proceso de paz en Colombia, Movimientos Sociales, Estado y Democracia, Luchas socio-territoriales en América Latina.

Abstract

In 2016, the Colombian State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army (FARC-EP) signed a Peace Agreement. The peace process was part of the broader political cycle of 2010-2018, characterized by great socio-political transformations, in the midst of which social movements demanded the construction of a peace that would address the issues of democracy and territory. This dissertation aims at studying how two social movements that struggled for the defense of the territory in the province of Antioquia -Movete and COA-, experienced the configuration of political opportunities (POS) at the regional level. We propose an analytical approach that integrates the political process perspective with theoretical and contextual problems related to the State and the eco-territorial turn in Latin America. Following a comparative and qualitative strategy we analyze the meanings involved in the political action of social actors and we argue that, amid a scenario of tensions, Movete and COA propose a renewed political praxis that takes advantage of the discursive spaces provided by the peace process and the institutional spaces generated by political opportunities, within the framework of post-extractivism emancipatory agendas.

Keywords: Political opportunities, Political process, Territory, Peace process in Colombia, Social Movements, State and Democracy, Socio-territorial struggles in Latin America.



*A mi mamá, Myriam Cecilia, por su amor
sempiterno, indiferente a desaires y
desafueros.*

*A mi papá, Campo Elías, por su ejemplo
consistente, sobrio, elegante, impasible.*

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Antioquia, a la que, *tangamente*, le he de repetir: gracias por ser mi “Cafetín de Buenos Aires”, mi “escuela de todas las cosas”.

Al Movete y al COA, por permitirme acercarme, observar y conversar, aún en ejercicio de un rol no siempre grato para las organizaciones sociales: el investigador que llega, entrevista y se va. Esta tesis no dice nada que ellos ya no sepan porque su autor no sabe, no vivió ni luchó tanto como ellos, pero intenta reflexionar, entender y comunicar a partir de su experiencia.

A la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes concibo como la consagración institucional de una rebeldía solidaria sedimentada en la *longue durée*: el exilio de los intelectuales críticos latinoamericanos perseguidos por las dictaduras del Cono Sur, la hospitalidad sin igual del pueblo mexicano, el esfuerzo por construir pensamiento socio-político desde América Latina, y, en fin, la generosidad institucional para que estudiantes de la región latinoamericana pudiéramos gozar de todo ello sin otra preocupación distinta que la reflexión intelectual.

A la XXII Promoción de la Maestría en Ciencias Sociales de la Flacso-México. Compañeras y compañeros de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y México. Profesionales en Antropología, Geografía, Comunicación Social, Sociología, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Una miríada de colores y matices que expandieron mi comprensión de los problemas latinoamericanos, pero más importante aún, de los asuntos humanos.

A mi familia, amigas y amigos en Colombia, que nunca dejaron de comunicarme su afecto.

Al personal docente, administrativo y de servicios de la Flacso-México, que siempre fue afectuoso, respetuoso y diligente.

Al equipo del Seminario *Actores y Procesos Contenciosos en las Sociedades Latinoamericanas Contemporáneas*, que propició un clima solidario para la reflexión y la crítica intelectual.

A Ligia Tavera Fenollosa, para quien no fue suficiente poner su inteligencia aguda al servicio de este trabajo. Además, se propuso enseñarme, acompañarme y abrirme nuevos caminos.

A Martín Aguilar Sánchez, quien fue generoso al leer y comentar esta tesis con base en una trayectoria intelectual que me sirvió de ejemplo y referencia.

A Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, quien estimulando nuestra curiosidad epistemológica e invitándonos a soñar, rompió nuestro escepticismo respecto de aquello que apenas creíamos posible.

Al pueblo de México, porque posibilitó con su trabajo un proyecto académico de esta naturaleza, y no bastando con ello, me enseñó y conmovió con su historia: la historia de un país tan hermoso y tan brutal como el mío.



Tabla de contenido

Introducción.....	1
Capítulo 1. Oportunidades políticas y democracia. Consideraciones analíticas para la comprensión de las luchas socio-territoriales en el departamento de Antioquia	16
1.1. Los fundamentos analíticos de la teoría de las oportunidades políticas	17
1.1.1. La premisa macro-histórica de Charles Tilly en el nivel epistemológico	18
1.1.2. La premisa macro-estatal de Alexis de Tocqueville en el nivel teórico	20
1.1.3. La premisa sub-estatal de Peter Eisinger en el nivel metodológico	21
1.2. La teoría de las oportunidades políticas al interior de la sociología de los movimientos sociales ..	23
1.2.1. El nacimiento dentro del choque de paradigmas dominantes.....	23
1.2.2. Los conceptos, las relaciones y las variables.....	25
1.3. Las oportunidades políticas y la democratización.....	32
1.4. Las críticas.....	35
1.4.1. Las críticas internas	35
1.4.2. Las críticas externas	36
1.5. La EOP en el estudio de las luchas socio-territoriales en Antioquia.....	39
1.5.1. Problematicación para el caso colombiano	39
1.5.2. Recortes teóricos y analíticos para el estudio de la EOP en las luchas socio-territoriales en Antioquia.....	41
1.6. Recapitulación	43
Capítulo 2. Colombia ante un nuevo ciclo político: democratización, proceso de paz y territorio....	46
2.1. Colombia en el contexto latinoamericano: democracia oligárquica y violencia	48
2.1.2. El problema de la democratización en Colombia.....	51
2.1.3. La democratización del régimen político colombiano en cuatro etapas.....	52
2.2. El cambio de la estructura de oportunidades políticas a nivel nacional	60
2.2.1. Las oportunidades políticas a nivel estructural	61
2.2.2. Las oportunidades políticas a nivel coyuntural en el ciclo 2010-2018.....	65
2.3. El territorio y la ampliación de la frontera extractiva.....	76
2.3.1. América Latina: del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities	77
2.3.2. Colombia: del modelo agro-exportador al modelo minero-exportador.....	80
2.4. Las luchas sociales	87
2.5. Recapitulación	91
Capítulo 3. La lucha en defensa del territorio antioqueño: los casos del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) y El Cinturón Occidental Ambiental (COA)	93
3.1. El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio -Movete.....	93
3.1.1. El territorio oriental: región estratégica.....	93
3.1.2. La cuarta generación del movimiento social en el Oriente: El Movete.....	102
3.1.3. El conflicto político, “demasiados frentes de lucha”.....	109



3.2.	El Cinturón Occidental Ambiental -COA-	110
3.2.1.	El suroeste y el <i>Territorio COA</i>	110
3.2.2.	La Articulación <i>COA</i> : vertientes y raíces de la acción colectiva regional	119
3.2.3.	¿El Cinturón de oro, <i>middle</i> o ambiental? La disputa y el conflicto político	122
3.3.	Recapitulación	125
	Capítulo 4. Paz, territorio y oportunidades políticas en las luchas del Movete y el COA	126
4.1.	Los significados políticos de la paz.....	127
4.1.1.	El Movete, la paz territorial desde abajo y desde las comunidades	129
4.1.2.	El COA, la paz territorial con justicia social y ambiental	137
4.2.	Oportunidades políticas y democratización.....	146
4.2.1.	El Movete: forzando la apertura en un oriente conservador.....	147
4.2.2.	EL COA: ires y venires dentro de una apertura relativa.....	156
4.3.	Las nuevas modalidades de la lucha socio-territorial, “aquello que nunca se había visto”	164
4.3.1.	Las tensiones de la paz	165
4.3.2.	Las tensiones de la EOP	166
4.3.3.	El producto de las tensiones: lo nunca antes visto y las veces primeras	167
4.4.	Recapitulación	169
	Conclusiones	171
	Referencias	175
	Anexos	187

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS, MAPAS Y FIGURAS

TABLAS

Tabla 1. Resumen de los fundamentos analíticos de la teoría de las oportunidades políticas.....	23
Tabla 2. Resumen del clúster de variables que componen la estructura de oportunidades políticas en diferentes autores	28
Tabla 3. Oportunidades políticas en el nivel estructural y coyuntural.....	32
Tabla 4. Estructura de oportunidades políticas a nivel nacional en el ciclo 2010-2018.....	76
Tabla 5. Tipos de extractivismo durante el <i>Commoditie Boom</i>	82
Tabla 6. Estructura de oportunidades políticas a nivel subnacional para el Movete y COA.....	163

GRÁFICOS

Gráfico 1. Histórico de ejecuciones extrajudiciales que involucran al ESMAD.....	74
Gráfico 2. Evolución de los índices de victimización en el marco del conflicto armado interno (1980-2012)	75
Gráfico 3. Evolución de los términos de intercambio en países de América Latina (2000-2018)	79
Gráfico 4. Precios de los commodities y términos de referencia (2000-2015)	79
Gráfico 5. Renta minera como % del PIB en Colombia (2000-2017)	83
Gráfico 6. Renta del Petróleo como % del PIB en Colombia (2000-2017)	83
Gráfico 7. Renta del Carbón como % del PIB en Colombia (2000-2017)	84
Gráfico 8. Exportaciones de alimentos como % del total de exportaciones en Colombia (2000-2018)	84
Gráfico 9. Índice de GINI de ingresos para países seleccionados de ALC, CIRCA 2000-CIRCA 2013.....	85
Gráfico 10. Número de movilizaciones sociales por año en Colombia (1990-2015)	90
Gráfico 11. Evolución de la intensidad del Conflicto del COA (2009-2016)	145

MAPAS

Mapa 1. Mapa del Oriente antioqueño en el departamento de Antioquia y Colombia.....	94
Mapa 2. Mapa del suroeste antioqueño en el departamento de Antioquia y Colombia.....	111
Mapa 3. Mapa del Middle Cauca Belt.....	114
Mapa 4. Mapa del Territorio COA.....	114
Mapa 5. Mapa del Cinturón de Oro de Colombia.....	119

FIGURAS

Figura 1. Las dimensiones del ciclo político 2010-2018 en Colombia en el contexto latinoamericano.....	4
Figura 2. Línea del tiempo mínima: Movete y COA en el ciclo político 2010-2018.....	15
Figura 3. Etapas de la democratización del régimen político colombiano.....	55
Figura 4. Etapas de la movilización social en Colombia (1958-2010)	88
Figura 5. Etapas de la relación entre movilización, territorio y conflicto en el Oriente antioqueño (1960-2018)	95
Figura 6. Las cuatro generaciones de la movilización social oriental.....	102

SIGLAS

ACUERDO DE PAZ. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

COA. Cinturón Occidental Ambiental

CORNARE. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

CORANTIOQUIA. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia

CRS. Corriente de Renovación Socialista

EOP. Estructura de Oportunidades Políticas

ELN. Ejército de Liberación Nacional

EPL. Ejército Popular de Liberación

EMAD. Escuadrón Móvil Antidisturbios

FARC-EP. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

FARC. Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común

M-19. Movimiento 19 de Abril

MAQUL. Movimiento Armado Quintín Lame

MOVETE. Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio

PDET. Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

PNIS. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

PRT. Partido Revolucionario de los Trabajadores

Introducción

En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz que daría fin al conflicto armado interno más longevo del hemisferio occidental: el sostenido durante más de medio siglo por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Tras cuatro años de arduas negociaciones las partes en contienda convinieron la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”¹, dando paso a un escenario sociopolítico inédito en la historia del país. Este acontecimiento, a su vez, tuvo lugar en el marco de un ciclo político más amplio, desarrollado entre los años 2010-2018, que corresponde a los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón, y que se caracterizó por un conjunto de transformaciones sensibles en la estructura política, económica y social del país.²

En este sentido, durante el ciclo político 2010-2018, Colombia sufrió cambios acelerados que, combinados con un proceso de paz de alta significación histórica, dieron lugar a la reconfiguración de las relaciones Estado-Sociedad, en medio de sendos proyectos y expectativas de futuro. Los movimientos sociales, en tanto agentes de estas transformaciones, tuvieron un lugar privilegiado. No sólo irrumpieron en la esfera pública con una magnitud y frecuencia desconocidas en la historia reciente del país, sino que posicionaron debates críticos que desafiaron las visiones más restringidas de la paz, aquellas limitadas al desarme, la desmovilización y la reintegración de los insurgentes.

A través de debates, movilizaciones y protestas, diversos actores sociales, de un lado, reclamaron que la construcción de paz tendría que acompañarse de la posibilidad de que ciudadanos y comunidades participaran en las decisiones que los afectan en condiciones mínimas de equidad política, económica y social (cuestión democrática). De otro lado, plantearon que la paz debía generar condiciones que garantizaran el respeto por las relaciones materiales, culturales y simbólicas que pobladores, campesinos e indígenas habían construido con su entorno (cuestión territorial). En este orden de ideas, mientras el país atravesaba por cambios sociopolíticos de

¹ En adelante, “Acuerdo de Paz”. Con la expresión “Proceso de paz” nos referiremos, precisamente, al proceso de negociaciones que culminó con tal Acuerdo y que tuvo una “fase exploratoria” entre los años 2010-2012 y una “fase pública” entre los años 2012-2016.

² Para una mejor ubicación temporal en los ciclos y eventos en los que se enmarca la presente investigación, véase la Figura 2 al final de la presente introducción.

naturaleza histórica y estructural, los actores sociales experimentaban, interpretaban y dotaban de sentido estas transformaciones en la perspectiva de una paz democrática, territorial y con justicia social.

La presente tesis de maestría pretende explorar las dimensiones políticas de este problema a través del estudio de dos experiencias de movilización social que nacieron dentro del ciclo político 2010-2018 con el objetivo de defender el territorio de proyectos extractivos, a través de visiones alternativas de la democracia y la paz. En este sentido, con este trabajo buscamos *comprender la manera en que procesos de movilización socio-territorial específicos experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio*. En las siguientes páginas describiremos los elementos contextuales, metodológicos y expositivos que fundamentan nuestra investigación.

Contexto nacional: un nuevo ciclo político definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio

Este trabajo pone el foco sobre un ciclo político que coincide con los dos períodos presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018), y que está definido por tres dimensiones relacionadas con la política estatal, la economía y la sociedad civil, dentro de un contexto latinoamericano *en movimiento*. Así, en primer lugar, *la dimensión política* refleja dos fenómenos de fundamental importancia. Primero, un cambio en la estructura de oportunidades políticas (EOP) a nivel nacional, es decir, una transformación general de cuatro variables del régimen político colombiano: los puntos de acceso formal al sistema político, el sistema de alianzas de las élites, la disponibilidad de aliados para actores alternativos de la sociedad civil y los niveles de represión hacia la movilización social. En segundo lugar, el proceso de paz, que es consecuencia del cambio en la EOP y que, además, lo profundiza. Estas transformaciones, de impacto en todo el país, gravitaron en torno a acontecimientos del sistema político nacional, en el registro socio-espacial de la *nación*.

En segundo lugar, *la dimensión económica* se refiere a los elementos centrales del régimen de acumulación, caracterizados por una ampliación de la frontera extractiva que, en Colombia, así como en muchos territorios de América Latina, ha hecho reverberar las resistencias y los conflictos socio-ambientales. Para nuestro caso, el gobierno que dirigió el poder ejecutivo durante el ciclo

referido, hizo célebre en el debate público el concepto de *Locomotora minero-energética*, tras ser consagrado como uno de los pilares de su Plan de Desarrollo Nacional.³ El problema del extractivismo, que ha sido gestado por las lógicas del capitalismo global e incorporado al escenario nacional con el auspicio del Estado, ha sido especialmente resistido y discutido en el registro socio-espacial de la *región*.

Finalmente, *la dimensión societaria* de este ciclo político, expresa profundos cambios en las dinámicas de la acción colectiva de tipo contencioso en Colombia. Durante este período se produjo el mayor número de movilizaciones medias por año del que se haya tenido noticia en su historia republicana. Floreció la protesta y la organización popular: se adelantaron procesos de movilización colectiva de alcance nacional que involucraron a actores campesinos, étnicos y urbanos. Ejemplos paradigmáticos de ello fueron el Paro Nacional Agrario, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y el Paro Nacional Universitario.⁴ Además, de manera especial, se asistió la emergencia de nuevas luchas socio-territoriales, agenciadas por movimientos sociales que, enraizados en las regiones del país, se organizaron para resistir a grandes proyectos de desarrollo. En este sentido, la movilización social durante este ciclo operó con fuerza en los espacios *nacional* y *regional*.

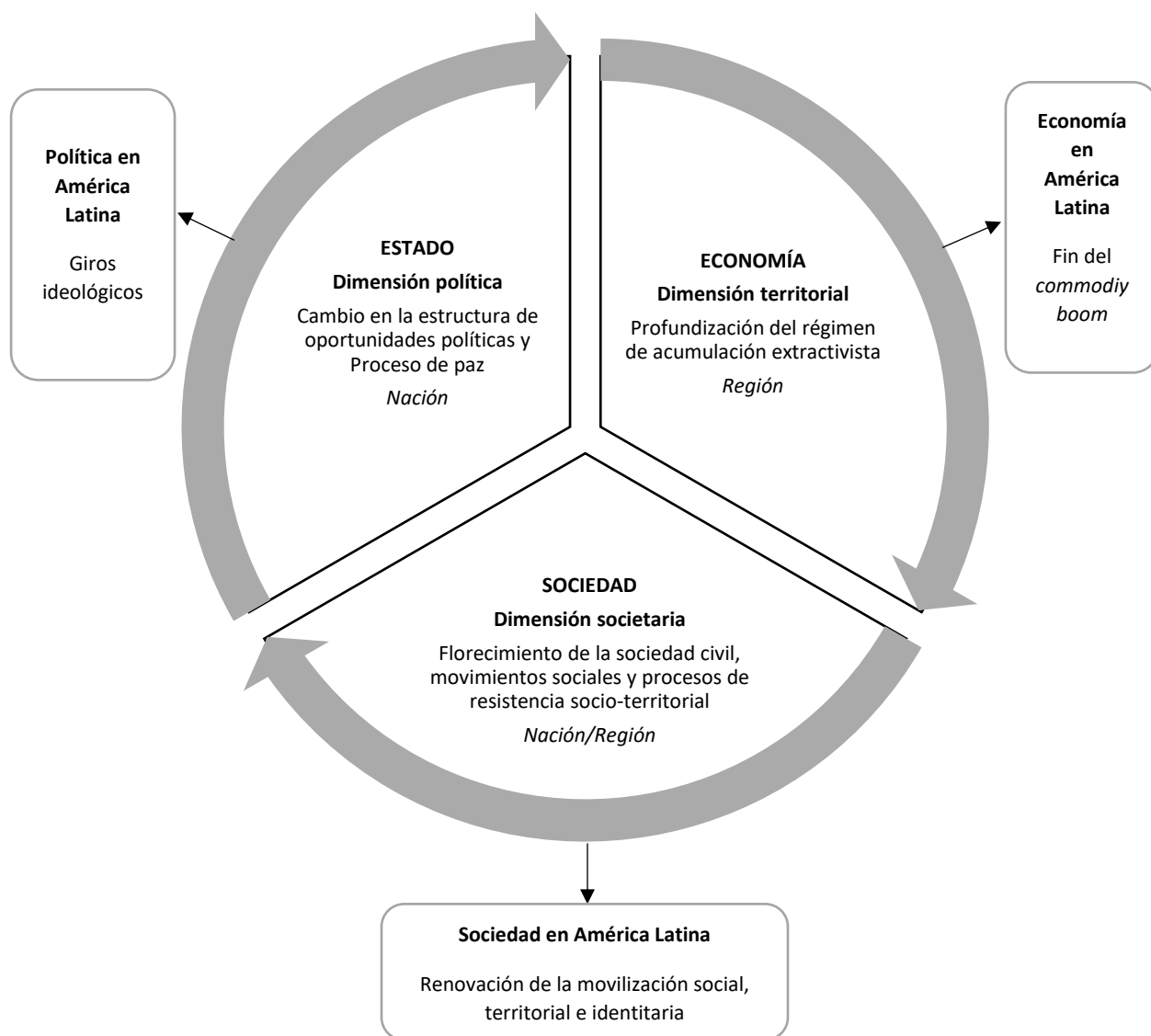
Estas transformaciones, a su vez, se producían en un contexto en el que el proceso político latinoamericano experimentaba un reflujo. Buena parte de las experiencias gubernamentales de signo progresista retrocedían ante contradicciones internas y procesos recesivos en el cierre del *commodity boom*. Tales circunstancias fueron aprovechadas por golpes de estado de nuevo tipo (suaves, blandos, institucionales, legislativos, judiciales, parlamentario-judiciales) que consolidaron un giro ideológico regional, el llamado “giro a la derecha”. Al mismo tiempo, la movilización social y la protesta popular, protagonistas en la instauración de los gobiernos progresistas, se renovaron incorporando identidades ambientales, territoriales y feministas, para volver a ponerse en el centro de la agenda pública latinoamericana. Entretanto, países que nunca “giraron a la izquierda” como Colombia, México o Chile, inauguraron procesos de cambio

³ Plan Nacional del Desarrollo “Todos por un nuevo país” de Colombia (2014-2018).

⁴ Durante los últimos dos meses de la segunda década del siglo se alcanzó el sùmmum de este proceso con el “Paro Nacional del 21N”. Un Paro Cívico de tal magnitud, no se vivía en Colombia desde el Paro Cívico Nacional de 1977.

histórico, en las cuestiones del conflicto, el régimen político y el orden constitucional, respectivamente. En la Figura 1 ilustramos las dimensiones contextuales descritas.

Figura 1. Las dimensiones del ciclo político 2010-2018 en Colombia en el contexto latinoamericano



Fuente: Elaboración propia

Actores y contexto regional: El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio y el Cinturón Occidental Ambiental en la disputa por el territorio en Antioquia

Dentro del contexto nacional referido, decidimos comparar la experiencia de dos actores que se encuentran en el cruce de caminos expresado por las dimensiones precedentes -*política, territorial y societaria en el contexto de las nuevas disputas latinoamericanas*-: luchas socio territoriales que

nacen en este ciclo de transformaciones políticas y que desafían el modelo extractivo a través de la defensa de sus territorios. Para ello nos situamos en el departamento⁵ de Antioquia: el más poblado del país⁶, el más golpeado por la guerra⁷, el más movilizad⁸ y, además, el que es considerado reserva política y cultural del proyecto político dominante durante la mayor parte de este siglo en Colombia, el *uribismo*: un proyecto inspirado en la obra de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de naturaleza conservadora y contrainsurgente, que fundamentó la oposición activa hacia al proceso de paz y que ha definido la cartografía política nacional durante las últimas dos décadas.

Adicionalmente, se trata de un departamento con una composición geográfica, económica, étnica y cultural altamente compleja: allí se encuentran el mundo caribe y el andino; el indígena, el negro y el mestizo; el ribereño, minero, cafetero, industrial y bananero; el de la montaña, el mar, la selva tropical y el llano; el guerrillero, el paramilitar, el armado-institucional y el narco-criminal. En Antioquia se expresan muchas de las especificidades que hacen de Colombia uno de los países más complejos del continente. En consecuencia, se trata una región crítica para la comprensión de los problemas del país y, en particular, para la interpretación de las transformaciones sociopolíticas que aquí nos ocupan.

Dentro de Antioquia, elegimos analizar dos procesos de movilización social, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) y el Cinturón Occidental Ambiental (COA), dos espacios de articulación que integran las luchas de organizaciones sociales de diversos municipios, movilizándose por la defensa del territorio en dos subregiones de especial importancia departamental, el Oriente y el Suroeste antioqueños. En este orden de ideas, nos propusimos contrastar estas dos experiencias al descubrir que comparten semejanzas y diferencias que convierten la comparación en un ejercicio provechoso, no sólo para pensar en los dilemas del país, sino también para proyectarlos.

⁵ Colombia está conformada por 32 departamentos, que son las principales entidades territoriales en las que se divide el país. Tienen un una autonomía política y administrativa limitada por tratarse de un país organizado bajo la forma de “república unitaria”.

⁶ Con una población de 6’407.102 de personas según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), año 2018.

⁷ Con un total de 1.701.482 de víctimas según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia.

⁸ Es el departamento más movilizad, pero la entidad territorial más movilizad es Bogotá, que no es departamento sino Distrito Capital (Cinep, 2016a). Lo mismo sucede con la población.

Metodología

Pregunta, selección de casos y enfoque metodológico

Con estas preocupaciones en mente, en la presente tesis de maestría buscamos abordar el siguiente interrogante: *¿De qué manera procesos de movilización socio-territorial específicos (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio?*

La selección de estos casos se fundamentó en las similitudes y diferencias que hacen de ellos experiencias comparables. Dentro de las primeras resaltamos las siguientes: i) Enmarcan su lucha en la defensa del territorio y en contra del modelo extractivista, con sus particulares incursiones mineras, energéticas y agroindustriales, en Antioquia ii) Expresan resistencias de tipo regional, esto es, agrupan organizaciones y conflictos de varios municipios con características culturales y socio-territoriales similares, sin llegar a englobar a todo el departamento iii) Se ubican en las regiones del Oriente y el Suroeste, que son, después del Valle de Aburrá -en donde está la capital departamental-, las más densamente pobladas y de mayor unidad socio-cultural de Antioquia (Iner, 2003; Iner, 2003a) iv) Surgen en el ciclo 2010-2018, período dentro del cual se adelantó el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, estando la cuestión de la paz y la democratización en el centro de la agenda política nacional v) Son casos cruciales para el país por su significación histórica vinculada a la paz y el renacer de una sociedad civil triturada por la guerra (Movete) y por el despliegue de repertorios jurídico-políticos modulares en una lucha territorial de trascendencia nacional (COA).

Por otro lado, dentro de sus diferencias, son relevantes las siguientes: i) Sus actores y territorios experimentaron la guerra bajo modalidades e intensidades diferentes. En el caso del territorio del Movete (Oriente antioqueño) la guerra alcanzó altos niveles de violencia, estructurando uno de los escenarios de victimización más sensibles a nivel nacional y subnacional. No sucedió así con el territorio del COA (Suroeste antioqueño), que como región no fue víctima de la presencia y confrontación generalizada de los actores del conflicto, aunque en determinadas veredas y municipios se padecieron crímenes y acciones relacionadas con el mismo ii) Sus trayectorias de movilización y lucha social son ampliamente divergentes. A pesar de ser territorios cultural y políticamente conservadores, el Oriente goza de una rica tradición cívica y organizativa de movimientos populares, dentro de la cual se destaca la experiencia del Movimiento Cívico del

Oriente Antioqueño, exterminado por actores estatales y para-estatales en el marco del conflicto. El suroeste, al contrario, no cuenta con legados históricos de tan honda significación en términos de movilización social, de suerte que esta aparece hoy, para muchos de sus territorios, como anomalía o novedad.

Para responder a la pregunta de investigación seguimos la idea de Cohen y Arato (2000) acerca de la complementariedad necesaria entre dos aproximaciones clásicas en el estudio de los movimientos sociales: i) la “aproximación hermenéutica a la autocomprensión de los actores colectivos contemporáneos *vis-a-vis* su identidad, objetivos, metas y estrategias” (p. 557) y ii) la “ciencia social sistemática” que “implica tomar el punto de vista del observador, en vez del de los participantes” (p. 558). Con esto buscamos que nuestros hallazgos no terminaran siendo sobredeterminados por una aproximación epistemológica parcial, de manera que cayéramos presos del famoso dilema que inspiró la obra de Mauricio Archila (2018) sobre los movimientos sociales en Colombia, *¿los movimientos sociales son lo que son, lo que dicen ser o lo que los analistas creen que son?*

Además, por la naturaleza de nuestro problema, que es multiescalar y que demanda la valoración de las dimensiones de la política contenciosa, tanto a nivel nacional, como a nivel subnacional o regional, una aproximación de este tipo se impone como necesidad y contribuye, a su vez, con el desarrollo de una relación dinámica entre los niveles micro y macro del análisis sociológico (Alexander, 1994). Así, al tiempo que se esclarecen las condiciones ordenadoras del conflicto y el régimen político, se atiende la voz de los sujetos que lo agencian (Ragin, 2007). En otras palabras, nuestro trabajo, definido por una metodología de tipo cualitativo, ofrece una mirada mixta que, de un lado, explora las representaciones subjetivas de los actores acerca del conflicto político en el que se encuentran implicados y, de otro lado, contextualiza tales imaginarios bajo una ordenación teórica y contextual que es capaz de abstraer las especificidades de los casos para pensar analíticamente acerca de los mismos.

Fuentes, trabajo de campo y proceso analítico

En la línea de las consideraciones metodológicas previas, nuestra investigación se fundamenta en fuentes directas obtenidas en medio de un trabajo etnográfico, combinadas con fuentes de tipo hemerográfico y bibliografía secundaria. Nuestro trabajo de campo se realizó en diversos

municipios del Oriente⁹ y el Suroeste¹⁰ antioqueños, además de la capital departamental, Medellín, entre el 26 de julio y el 8 de septiembre del año 2019. En esta etapa de la investigación adelantamos dos tipos de estrategias de recolección de información: i) La realización de entrevistas semi-estructuradas a líderes de los movimientos estudiados y a un congresista del partido FARC¹¹ y ii) La observación participante en las siguientes actividades de las organizaciones estudiadas: Reunión preparatoria del XII Festival del Agua¹² y Seminario académico-político interno del Movete, y “Tercera Travesía por el Suroeste de Antioquia. Un abrazo a la montaña: Participación y Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial”¹³ del COA.

Del primer tipo de estrategia de recolección de información (entrevistas semiestructuradas), obtuvimos un total de 17 entrevistas registradas en audio, que corresponden: 1 a Representante a la Cámara por Antioquia de FARC, 9 a líderes y organizaciones aliadas del Movete y 7 a líderes y organizaciones aliadas del COA. Del segundo tipo de estrategia de recolección de información (observación participante), obtuvimos notas de campo y audios de diversas intervenciones públicas que se dieron en medio de la etnografía por parte de los protagonistas de los conflictos estudiados. En el Anexo 1 puede visualizarse una tabla que ilustra las entrevistas realizadas.

Para el análisis de las entrevistas utilizamos el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. Construimos un sistema categorial a través del cual fue posible la aproximación al material transcrito bajo los ejes teóricos que orientaron la investigación. Para ello diseñamos una serie de códigos, agrupados en familias, que comprenden las diferentes dimensiones de la categoría teórica central: oportunidades políticas tanto a nivel nacional, como a nivel subnacional. De manera complementaria utilizamos códigos que, de un lado, permitieron una mirada distinta a las ideas que los informantes tienen acerca de las estrategias y repertorios de lucha política (por ejemplo, las familias “repertorios” y “valoraciones de los campos de actuación política”) y que, de otro lado,

⁹ Marinilla, Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y Cocorná.

¹⁰ Támesis, Caramanta, Pueblorrico, Tarso, Jericó, Valparaíso, Andes, Jardín y Resguardo Indígena Karmata Rúa.

¹¹ Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Partido político constituido por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo -FARC-EP-, tras los Acuerdos de Paz de la Habana.

¹² El “Festival del Agua” es el repertorio de movilización nuclear del Movete. Consiste en un espacio de encuentro y movilización de alrededor de dos días en el que se combinan actividades de protesta, debate público, reflexión interna y manifestaciones culturales.

¹³ El “Abrazo a la Montaña” es el repertorio de movilización nuclear del COA. Consiste en una “travesía” de una semana por los diferentes municipios y resguardos indígenas del suroeste antioqueño que hacen parte del *Territorio COA* (véase capítulo 3). En medio de la misma se realizan marchas, debates con autoridades públicas, reflexiones colectivas al interior del COA, actividades de reconocimiento del territorio y manifestaciones culturales.

auxiliaron un análisis que consideró variables o explicaciones alternativas a las planteadas en el marco teórico (por ejemplo “hipótesis alternativas” o “acontecimientos”). En el Anexo 2 puede visualizarse este sistema de códigos.

El trabajo académico precedente

Nuestro diseño metodológico, la puesta en práctica de la investigación y la escritura de esta tesis se desarrollaron considerando la literatura existente acerca de los casos bajo estudio, es decir, el trabajo intelectual que nos precede. Para mostrarle con mayor claridad al lector en qué consiste nuestro aporte específico, consideramos importante evidenciar el estado de conocimiento sobre la materia.

La investigación académica sobre el Movete

La intensidad con la que el Oriente experimentó tanto la guerra como la organización social de base popular, despertó el interés de múltiples investigadores que desde hace más de dos décadas han venido arrojando luces sobre la compleja configuración de la guerra, el poder y las resistencias en la geografía oriental. Se trata de trabajos pioneros concentrados en problemas y fenómenos previos o concomitantes al proceso de pacificación¹⁴ alcanzado entre los años 2005 y 2008 en la región. Después del año 2010 se han venido realizando nuevas investigaciones con preocupaciones socio-temporales más cercanas a la conflictividad en la que se inscribe la acción colectiva del Movete.

Dentro de estos, como referencia principal, se destaca el trabajo *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño*, publicado por el Comité de Formación e Investigación del Movete en el año 2018. Se trata de una publicación especialmente relevante por haber sido construida, en su proceso de investigación y escritura, por integrantes y líderes del movimiento. En ella constan diferentes ensayos con propósitos diversos: revisión histórica de la trayectoria de movilización social que desemboca en el Movete (Higuita y Rupp,

¹⁴ Para una explicación del *proceso de pacificación*, véase el capítulo 3. Por lo pronto, baste decir que se trata de un hito en la historia del oriente antioqueño en el que, hacia el año 2008, se alcanzó un estado de paz negativa (silencio de los fusiles) por medio de una estrategia militar y contrainsurgente. Parte importante de este hito fue el Proceso de Justicia y Paz, a través del cual el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -máxima organización del paramilitarismo- negociaron un proceso de desmovilización, desarme y reintegración en medio de una estrategia de cooperación para derrotar a la insurgencia. Para una mirada a este proceso dentro de la temporalidad de nuestro trabajo, véase la Figura 2 al final de esta introducción.

2018); elaboración del panorama de los conflictos socioambientales en torno a los cuales se moviliza Movete (Villada y Jiménez, 2018); inventario de las acciones colectivas del movimiento (Salazar, 2018); estudio de caso de uno de los conflictos de la organización: la defensa del río Samaná Norte (Arias, 2018); y finalmente, exposición del Plan estratégico, los balances y las proyecciones del Movete (Bernal y Osorio, 2018). Este trabajo se suma a otra propuesta de sistematización hecha por los mismos activistas. Los integrantes del movimiento Los Vigías del Río Dormilón (2016) -articulado a Movete- consignaron su experiencia organizativa y los avatares de su lucha, en una Cartilla que ha sido fundamental para construir memoria en torno a tal proceso.

A estos trabajos, contruidos por los mismos actores, se suman una serie de reflexiones académicas bajo la forma de tesis de grado y maestría, así como artículos de revista. Una parte de estos se ha ocupado de analizar la configuración de los proyectos extractivos a diferentes niveles, dando cuenta del proceso de planeación corporativa del territorio, así como de las consecuencias de diferentes proyectos hidroeléctricos y mineros (Agudelo, 2018; Echeverry, 2018; Restrepo, 2015). Otras investigaciones han abordado este problema centrándose en el estudio de los conflictos socio-ambientales y del neoextractivismo en la región (Ávila Escobar, 2017). Varios trabajos han situado su interés en el análisis de la movilización social y los procesos de acción colectiva (Echeverry Ocampo, 2018; Ávila y Montenegro, 2018). Algunos más, bajo una mirada de tipo antropológico, se han ocupado del estudio de los procesos comunitarios y campesinos bajo conceptos rectores como “prácticas socioculturales” o “procesos hidrocomunitarios” (Jiménez, 2017; Gómez, Conda, et al, 2017).

La investigación académica sobre el COA

Tras el nacimiento del COA en el año 2011, comenzaron a desarrollarse diversos trabajos académicos que se han propuesto el examen de diferentes contextos, organizaciones y problemáticas relacionadas con tal movimiento. La mayoría de estos trabajos han sido elaborados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, oriundos del suroeste y activistas de los procesos sociales y comunitarios que sustentan al COA. Asimismo, dichos trabajos han enfatizado el nivel de análisis micro, con metodologías de tipo cualitativo marcadas por aproximaciones de tipo etnográfico.

Los enfoques disciplinarios privilegiados han sido los de tipo sociológico, antropológico y socio-espacial, con algunas variantes interesantes, como la aproximación desde el saber indígena cultivado en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia y los estudios decoloniales. En este orden de ideas, por ejemplo, existe un primer grupo de trabajos que corresponden a tesis de Pregrado, que incluye estudios sobre los imaginarios sociales en torno a la minería en Támesis (Hincapié, E., 2015), el rol de la comunicación en el Comité para la defensa ambiental y del territorio de Támesis (Torres, J. y Cáceres, N., 2012) o la caracterización socio cultural del Resguardo indígena Marcelino Tascón (Tascón Tascón, O., 2013). También es posible encontrar dentro de este grupo, trabajos con preocupaciones pedagógicas a partir del saber ancestral (Tascón Yagari, G., 2013; Yagari González, D., 2017), análisis de las organizaciones, conflictos y resistencias en Pueblorrico (González, 2013), lecturas del COA en tanto expresión de decolonialidad (López Toro, 2018) y preocupaciones en torno a la producción y la soberanía alimentaria (Montaño y Hernández, 2013).

Un segundo grupo de trabajos han sido desarrollados como tesis de Maestría. Dentro de ellos se encuentra el estudio de la relación entre espacio, poder y resistencia en la conflictividad social, ambiental y política de Pueblorrico (González, 2018), el discurso y las prácticas del COA (Palacio, 2016), la relación entre conocimiento y poder en la construcción de espacios extractivos en el suroeste de Antioquia (Perdomo, 2016) y, finalmente, la experiencia de gestión comunitaria del agua en Támesis en tanto política de lo común (Villada, 2016).

Nuestra contribución

Considerando las empresas investigativas previamente descritas, nuestro trabajo agrega perspectivas valiosas en cuatro niveles, que a su vez corresponden a cuatro vacíos hallados en la literatura. En primer lugar, nuestra investigación busca desarrollar un análisis del proceso socio-político que se mueve en dos escalas, la nacional y la subnacional, para encontrar en los relatos de los actores las mediaciones existentes entre esos dos niveles y, en consecuencia, los impactos que los grandes procesos de cambio político nacional tienen en el ámbito territorial.

En segundo lugar, en el momento analítico del trabajo, intentamos una estrategia de comparación entre casos, que no existe para el caso de los movimientos estudiados y que es extraña en el contexto de la literatura colombiana sobre movimientos sociales. De esta manera buscamos, de un lado, ampliar el marco de comprensión del fenómeno bajo estudio contrastando experiencias

de movilización semejantes y sometidas a las mismas transformaciones sociopolíticas del ciclo 2010-2018. De otro lado, con esto pretendemos identificar regularidades y matices a partir de los cuales potenciar procesos de inteligibilidad entre actores y conflictos con horizontes históricos compartidos.

En tercer lugar, en esta investigación avanzamos en la tarea de analizar la territorialización de la política contenciosa considerando al Estado, en su registro nacional y en su configuración local, como un factor central en la lucha de los movimientos socio-territoriales. Procedemos en esta dirección en un contexto en el que la literatura dominante ha desplazado la cuestión estatal para revelar otro tipo de complejidades en los procesos de acción colectiva, como aquellas implicadas en los procesos autonómicos y comunitarios, las formas de ordenación socio espacial, las búsquedas de alternativas al desarrollo, o los regímenes contemporáneos de despojo en el capitalismo moderno.

En cuarto lugar, se trata de una mirada que persigue una conversación fructífera entre el paradigma hegemónico en la sociología de los movimientos sociales norteamericana y los problemas, discusiones y explicaciones planteados desde América Latina. Con esto perseguimos un diálogo entre tradiciones que es, al mismo tiempo, consciente de sus limitaciones en la comprensión de los procesos de acción colectiva: se circunscribe las relaciones entre instituciones políticas y movimientos sociales y, dentro de ellas, al examen de la naturaleza dinámica, relacional y desagregada del fenómeno político.

Hechas las aclaraciones metodológicas de esta introducción, para el lector ha debido quedar claro que este trabajo reconoce limitaciones en dos niveles. En cuanto al *nivel de observación*, esta investigación no se propone una mirada sistemática a los procesos globales que ordenan la conflictividad social, política y ambiental en los territorios implicados, ni tampoco un examen sistemático de los conflictos agenciados por el Movete y el COA. Como se verá a lo largo de este trabajo, estos ostentan un alto nivel de desagregación organizacional, territorial y conflictual, de modo que nuestro esfuerzo se limita a identificar las interpretaciones predominantemente compartidas acerca de las cuestiones de la paz, la democracia y el territorio.

En cuanto al *registro de la observación*, no es una tesis que indague por lógicas de la acción social relacionadas con la identidad, la organización, las redes o la historicidad del Movete y el COA. En su lugar, se concentra en su experiencia de *la política* dentro de los ejes contextuales y

temporales definidos, integrando la explicación del cambio socio-político con la comprensión de los sentidos de la acción social relacionados con el mismo.

La estructura del trabajo

La exposición de este trabajo está ordenada en cuatro capítulos. Cada uno responde a una pregunta relacionada con un objetivo específico de la investigación. El desarrollo de los mismos nos permite, en conjunto, cumplir con nuestro objetivo principal, a saber, *comprender de qué manera procesos de movilización socio-territorial específicos (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio.*

En el Capítulo 1 exponemos las bases teóricas de la investigación. Para ello buscamos responder a la pregunta ¿Qué herramientas nos proporcionan la teoría de la estructura de oportunidades políticas y las discusiones concomitantes acerca de la democratización para estudiar dos procesos de movilización socio-territorial específicos en un ciclo político definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio en Colombia?

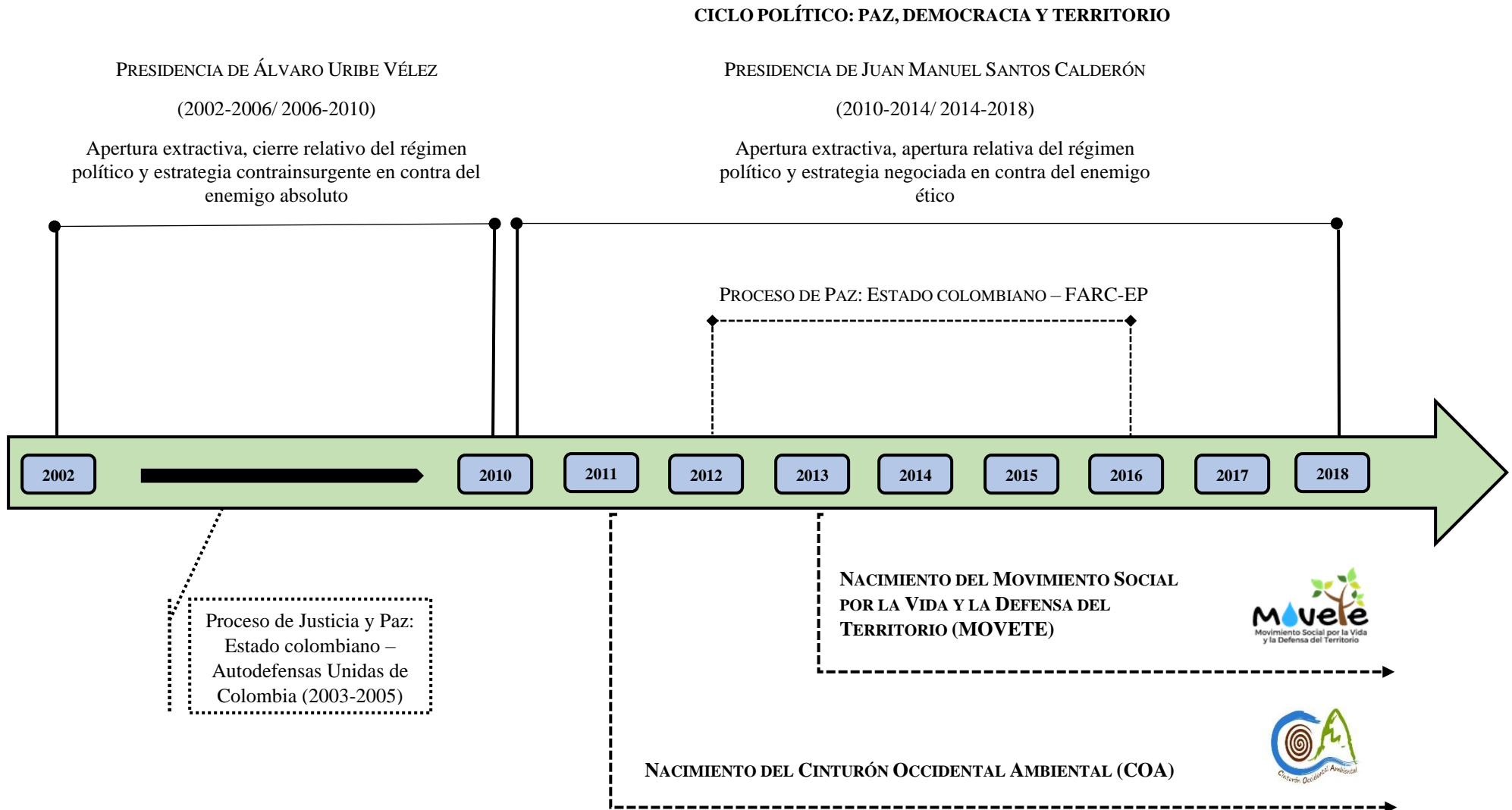
En el Capítulo 2 abordamos un análisis en el nivel macro para ilustrar el contexto socio-político en el que se desarrollan las movilizaciones del Movete y el COA. La pregunta que nos orienta es ¿En qué consiste el ciclo político 2010-2018 en Colombia y qué cambios en la estructura de oportunidad política nacional se producen para la acción contenciosa de los movimientos sociales?

En el Capítulo 3 reconstruimos los aspectos históricos necesarios para comprender los procesos de movilización en defensa del territorio protagonizados por el Movete y el COA. Con ello le hacemos frente a nuestro tercer interrogante ¿Cuáles son los elementos del conflicto político y socio-territorial que nos permiten entender al Movete y al COA como luchas en defensa del territorio enmarcadas en el ciclo 2010-2018?

En el Capítulo 4 desarrollamos el análisis del material obtenido en campo, construyendo el argumento que nos permite responder a nuestro interrogante principal *¿De qué manera procesos de movilización socio-territorial específicos (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio?*

En suma, el lector se encontrará con una tesis estructurada en dos grandes momentos. Una primera parte (capítulos 1 y 2), predominantemente *macro*, centrada en grandes discusiones teóricas y en el análisis de la política contenciosa colombiana en el nivel del *régimen*. Y una segunda parte (capítulos 3 y 4), predominantemente *micro*, en donde cobran protagonismo los *actores sociales* a través de los elementos objetivos y subjetivos que dan forma al proceso de movilización del Movete y el COA. Al final, podrá encontrar nuestras conclusiones en las que integramos las dimensiones y niveles del análisis para esclarecer, en último término, *la relación entre política y territorio* en los casos propuestos.

FIGURA 2. LÍNEA DEL TIEMPO MÍNIMA: MOVETE Y COA EN EL CICLO POLÍTICO 2010-2018



Fuente: Elaboración propia

Capítulo 1. Oportunidades políticas y democracia. Consideraciones analíticas para la comprensión de las luchas socio-territoriales en el departamento de Antioquia

Oportunidad, Opportunitas, Ob-portus-tat:

“cualidad de estar frente a un puerto” o

“de una apertura que nos deja salir del lugar o situación en la que estamos”

Raíz etimológica

Cuando después de 15 años -los más violentos de la confrontación entre el Estado colombiano y las FARC-EP- el Presidente de la República comunicó públicamente el nuevo intento de terminar el conflicto armado por la vía de la negociación política, uno de los sustantivos que protagonizó los debates de la esfera pública fue el de *oportunidad*¹⁵. Los “puertos” que, en tal sentido, se avizoraban con la paz, llevaban los más variados significantes: el desarrollo, el crecimiento, la corrección de las injusticias, un nuevo contrato social, entre otros horizontes *ad infinitum*.

Ciertamente, todo proceso de paz representa una oportunidad porque toda guerra es fuente de constricciones inagotables. La lectura del Acuerdo de Paz admitía esta mirada: con el desarrollo de sus cinco puntos sustanciales, las partes en la negociación anunciaban al país que el proceso de paz era una oportunidad para el desarrollo rural (punto 1), la participación política (punto 2), el desarme de la insurgencia (punto 3), la solución al problema de los cultivos de uso ilícito (punto 4) y la garantía de los derechos de las víctimas (punto 5).¹⁶ Todo esto, en fin, decía el Acuerdo, era una oportunidad *para profundizar la democracia*.

En el presente capítulo precisaremos las reflexiones teóricas y las herramientas analíticas que nos ayudarán a someter tales consideraciones a prueba en el ámbito de dos experiencias de movilización socio-territorial concretas. Para responder a la pregunta sobre la manera en que el Movete y el COA experimentaron la configuración de oportunidades políticas dentro del ciclo

¹⁵ El Estado colombiano y las FARC-EP ya habían intentado, sin éxito, tres procesos de negociación política: En la Uribe-Meta, durante la presidencia de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986); en Caracas y Tlaxcala, durante la presidencia de César Gaviria Trujillo (abril-junio de 1992); y en San Vicente del Caguán, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

¹⁶ El sexto punto corresponde a los mecanismos dispuestos por las partes para refrendar, verificar e implementar lo Acordado en los cinco puntos sustanciales.

2010-2018, es prioritario esclarecer un ordenamiento conceptual que nos permita organizar nuestra mirada en torno a las categorías de *oportunidades políticas y democracia/democratización*.

Para ello proponemos una utilización crítica del *modelo del proceso político*, un paradigma teórico que nos provee de instrumentos para el análisis de las *relaciones socio-estatales* en el estudio de los movimientos sociales y del conflicto político. Con este propósito en mente, procederemos en el siguiente orden. Primero, explicaremos los fundamentos analíticos que sustentan este modelo, las cuestiones a las que busca dar respuesta y el enfoque a través del cual lo hace. Después, mostraremos cuáles conceptos y variables han ordenado la teoría de la estructura de oportunidades política, retomando los esquemas de algunos de sus principales exponentes. En tercer término, abordaremos las conexiones entre las oportunidades políticas y los procesos de democratización. En cuarto lugar, haremos manifiestas las críticas y debilidades del enfoque con base en la literatura especializada. Finalmente, problematizaremos el marco teórico y justificaremos nuestras elecciones considerando las especificidades de nuestro problema de investigación.

1.1. Los fundamentos analíticos de la teoría de las oportunidades políticas

En el presente trabajo partimos de la idea de que un marco teórico está sostenido por una serie de premisas analíticas extraídas del análisis sistemático de los fenómenos sociales y políticos. Tales premisas sostienen el edificio conceptual a construir y señalan las relaciones lógicas e inferenciales entre las categorías, que pueden ser entendidas como variables y relaciones entre variables para cuya relevancia epistemológica se impone un ejercicio de tipo comprensivo o interpretativo que las vincule con la realidad.

En este sentido, nuestra estrategia en este primer apartado consiste en presentar los rasgos principales de nuestro modelo teórico a través de sus tres grandes premisas analíticas, que a su vez corresponden: a distintos niveles del análisis sociopolítico: i) macro-histórico ii) macro-estatal y iii) sub-estatal. A estadios cronológicos distintos en la construcción de la propuesta: i) La construcción del Estado-nación en el tránsito a la modernidad (s. XVIII) ii) La consolidación del Estado-nación (s. XIX) y iii) El funcionamiento del Estado-nación (s. XX). Y finalmente, a niveles cognitivos diferenciados: i) Epistemológico (el enfoque socio-histórico de Tilly) ii) Teórico (la

teoría de la formación del Estado y la sociedad civil de Tocqueville) y iii) Metodológico (la definición de variables y su aplicación mediante un método de estudio por Eisinger).

1.1.1. La premisa macro-histórica de Charles Tilly en el nivel epistemológico: El auge y la caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de las oportunidades democráticas. Los movimientos sociales modernos nacen como consecuencia de las oportunidades políticas abiertas por la interacción entre Estado, coerción y capital

Los movimientos sociales, como fenómeno histórico y construcción analítica, están inexorablemente vinculados a *la política*, en particular al Estado, entendido como la forma histórico-institucional de *lo político* en las sociedades contemporáneas. En efecto, los movimientos, como forma de acción colectiva, no han existido en todo tiempo y lugar. En consecuencia, su comprensión sólo puede ser posible a partir de una contextualización espacio-temporal que identifique sus especificidades y lógicas en cuanto fenómeno político y social.

Estas son las premisas que fundamentan el trabajo Charles Tilly (1978), quien, desde la historia social y la sociología, ha contribuido a dar forma a uno de los enfoques que mayor atención ha merecido en el estudio de los movimientos sociales y de la política contenciosa en general. Respaldo en un trabajo sistemático y exhaustivo de tipo histórico, Tilly ha mostrado que la forma de contienda política comprendida dentro de la noción de “movimiento social”, es producto de la modernidad, de los procesos económicos (capitalismo), y, sobre todo, políticos (Estado-nación), que le han dado forma. Sidney Tarrow (2012, p. 136), su discípulo y compañero de trabajo intelectual, lo expresó de una manera terminante: “Los Estado y el capitalismo: he ahí los principales orígenes y objetivos de la acción colectiva”.

La construcción del Estado-nación fue el marco dentro del cual nacieron los movimientos sociales modernos. Tal proceso definió un contexto político e institucional al que los estados dieron forma en sus tareas de hacer la guerra, formar ejércitos, recaudar impuestos, construir carreteras, proveer a las ciudades, definir fronteras y, de esta manera, monopolizar los medios legítimos de coerción y legalidad, respaldándose en nociones jurídico-políticas como constitución,

nacionalidad, ciudadanía y derechos (Tilly, 1985). Innovaciones sociales y políticas como la letra impresa y las asociaciones, ancladas a ese proceso, fomentaron la aparición de una forma de acción colectiva desconocida hasta entonces.

Para Tarrow (2012) la novedad estuvo definida por la transición de un repertorio tradicional de tipo local, directo, corporativo y rígido¹⁷ a un repertorio moderno de tipo nacional, flexible, autónomo y *modular* (peticiones, asambleas, reuniones, marchas, creación de comités, manifestaciones, huelgas, concentraciones públicas). Para Tilly (2010), la especificidad de esta nueva forma de la contienda política estuvo dada por la combinación de tres elementos:

1. Un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas (*campaña*).
2. El uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política: creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos y propaganda (*repertorio del movimiento social*).
3. Manifestaciones públicas de WUNC¹⁸ de los participantes: valor, unidad, número y compromiso, tanto de los actores como de su circunscripción (*demonstraciones de WUNC*).

En síntesis, en la propuesta de las oportunidades políticas, nos enfrentamos a una primera premisa de tipo macro-histórico que Tilly (2010, p. 21) expresa de la siguiente manera:

La historia es de utilidad [...] porque se centra en las cambiantes condiciones políticas que propiciaron la aparición de los movimientos sociales. Si los movimientos sociales comienzan a desaparecer, su desaparición será la prueba de la debacle de uno de los principales vehículos de participación del ciudadano de a pie en la política pública. El auge y caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de las oportunidades políticas.

¹⁷ “El localismo, la acción directa y la especificidad se combinan formando cuatro tipos de revueltas que dominaron el registro histórico hasta bien entrado el siglo XVIII. En los conflictos en torno al pan, las creencias religiosas, la tierra y la muerte, la gente corriente intentaba corregir abusos inmediatos o incluso ajustar cuentas con aquellos a quienes odiaban, empleando esquemas de acción colectiva directos, locales e inspirados por sus quejas” (Tarrow, 2012, p. 89).

¹⁸ Tilly (2019) explica que “la expresión «WUNC» resulta extraña, pero alude a algo con lo que estamos familiarizados. Las demostraciones WUNC pueden adoptar la forma de declaraciones, eslóganes o etiquetas que impliquen las nociones de valor, unidad, número y compromiso” (p.23). Así, la sigla WUNC alude a las letras iniciales de los cuatro elementos mencionados, en donde la letra “v” de valor es sustituida por la letra “w”.

1.1.2. La premisa macro-estatal de Alexis de Tocqueville en el nivel teórico: el tipo de construcción estatal, centralizada -fuerte- o descentralizada -débil-, define las oportunidades políticas para la formación de sociedades civiles y movimientos sociales, débiles o fuertes, respectivamente

Tocqueville no se propuso, en ninguna de sus obras, el estudio de los movimientos sociales como forma de política contenciosa característica de la modernidad. Sin embargo, Sidney Tarrow, en diversos trabajos, ha defendido la idea de que el vizconde francés es el padre de la teoría de las oportunidades políticas al ser “el primer observador moderno que hizo explícita la vinculación existente entre estados y movimientos sociales” (Tarrow, 1999, p. 77).

El desencanto del autor de *La democracia en América* respecto de la forma que adquiriría la democracia en su país natal, marcada por altos niveles de centralización política, lo condujo a adelantar un trabajo comparativo, orientado por su amable contemplación del asociacionismo norteamericano. Su hallazgo teórico, es resumido por Tarrow (1999, p. 78) así: “*cuanto más fuerte sea el Estado, más debilitada estará la tendencia a la participación institucional y mayores incentivos habrá para un tipo de acción colectiva volcada en la confrontación y la violencia*”. La idea, abstraída de su poderosa argumentación, no era excesivamente compleja: en estados fuertes (como el francés) hay sociedades civiles débiles, y viceversa, en estados débiles (como el norteamericano) hay sociedades civiles fuertes.

Tarrow (2012), en su lectura, sigue tirando del hilo y extrayendo dos nuevas conclusiones. Primero, señala que Tocqueville “mostró que las diferencias en la centralización del Estado producían diferencias en la estructura de oportunidades de los movimientos sociales” (p. 149). En segundo término, concluye que “el mensaje implícito en la visión de Tocqueville es que la construcción del Estado crea una estructura de oportunidades para la acción colectiva de la que se aprovecha la gente” (p. 149).

Además de destacar estos aportes de Tocqueville para la comprensión de la relación entre los movimientos sociales y el Estado, Tarrow (1999) critica sus hallazgos y observaciones.¹⁹ Sin

¹⁹ “Si los movimientos sociales comenzaron a desarrollar un vigor y una base organizativa similar en países tan diferentes como los Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, no puede deberse a especificidades en la estructura estatal

embargo, el enfoque analítico utilizado por el intelectual francés termina siendo valorado como la primera piedra del que un siglo más tarde se convertiría en el edificio teórico de las oportunidades políticas.

1.1.3. La premisa sub-estatal de Peter Eisinger en el nivel metodológico: la protesta florece en un sistema marcado por una paradoja. La paradoja de la protesta consiste en que, mientras, de un lado, ésta aparece en respuesta a ciertas características o factores de cierre, de otro lado, ella solo toma lugar en sistemas políticos en los cuales otras características o factores de apertura están presentes

A comienzos de los años 70, en el contexto de la guerra fría y de la efervescencia de la movilización social en Estados Unidos, Peter K. Eisinger (1973) escribe el trabajo seminal en el estudio contemporáneo de las oportunidades políticas, *The Conditions of Protest Behavior in American Cities*. A diferencia de Tocqueville, Eisinger adelanta una investigación que se desarrolla dentro de los parámetros metodológicos de la ciencia política norteamericana de la segunda mitad del siglo XX: definición de variables explicativas y dependientes, control de los efectos causales mediante variables de control, utilización de métodos de recolección sistemática de información (en su caso hemerográficos), construcción de hipótesis principal y alternativa, y utilización de herramientas de estadística inferencial como la regresión lineal.

Prevalido de tales instrumentos y situado en el análisis de la política urbana, el autor buscó analizar la relación entre i) Variables asociadas al *ambiente político*, concebidas como un agregado de elementos que dan forma a un *contexto* en donde la política toma lugar y que, en tal sentido, son comprensibles como componentes de la particular *estructura de oportunidades políticas* de una comunidad; y ii) Variables asociadas al *comportamiento político*, en concreto, aquel comportamiento relacionado con actividades de protesta en contra de instituciones urbanas, agencias y funcionarios en 43 ciudades estadounidenses.

que produjeran los resultados que Tocqueville describió para el caso francés. En los tres países fue el proceso entero que rodeó a la *construcción* estatal el que más contribuyó al surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales. La aparición, en todo occidente, de lo que Tilly denomina el *Estado consolidado*, creó los movimientos sociales, y esto aplica tanto a la Norteamérica colonial y revolucionaria, como a la mercantilista y parlamentaria Inglaterra o a la Francia centralizada y cosmopolita” (Tarrow, 1999, p. 82).

Para el análisis de dicha relación Eisinger (1973) considera dos hipótesis que clasifica bajo las nociones de *modelo lineal* y *modelo curvilíneo de las condiciones de protesta*. Según el primero, la incidencia de la protesta varía negativamente en función de una estructura de oportunidades políticas abierta: a mayores facilidades dentro del sistema político, menor protesta y mayor comportamiento institucionalizado. De acuerdo con el segundo, la protesta ocurre cuando un sistema político comienza abrirse, de suerte que estén presentes factores de apertura, pero también factores de cierre. En este sentido, la protesta no sería probable en sistemas extremadamente cerrados (represivos) ni en sistemas extremadamente abiertos (sensibles a las demandas): la apertura del sistema político, en un primer momento, incentiva la protesta, pero llega una fase en donde presenta lo que se conoce en lenguaje económico como rendimientos marginales decrecientes²⁰.

En síntesis, después de la sugerente idea de Michael Lipsky, según la cual los procesos de apertura del sistema político no eran un fenómeno privativo de la Unión Soviética, sino que podrían también evidenciarse al interior del sistema político norteamericano, haciéndolo más o menos receptivo a las demandas de diferentes grupos (McAdam, 1999, p. 24), el trabajo de Peter Eisenger (1973) fue el primero en analizar la cuestión de las oportunidades políticas de una manera sistemática, con evidencia empírica acerca de la relación entre protesta y ambiente político en 43 ciudades de Estados Unidos. Con esto inauguró todo un programa de investigación que los sociólogos de la acción colectiva incorporaron a su disciplina y discutieron de modo entusiasta durante las siguientes décadas.

²⁰ En nuestro caso: a partir de cierto punto en la relación sistema político/protesta una unidad adicional de apertura del sistema político produce una cantidad decreciente de protesta.

Tabla 1. Resumen de los fundamentos analíticos de la teoría de las oportunidades políticas

	Charles Tilly	Alexis de Tocqueville	Peter Eisinger
Aporte	Los movimientos sociales modernos son un producto de la historia que no existió en todo momento y que, en algún momento, dejarán de existir, al menos en la forma en que los conocemos. En consecuencia, es fundamental estudiar su origen, dentro del proceso de modernización, a la luz de la interacción entre Estado, coerción y capital.	El tipo de construcción estatal, centralizada y sin organizaciones que intermedien la relación con la sociedad, o descentralizada y con organizaciones que la intermedien, condiciona la existencia de sociedades civiles débiles o fuertes, respectivamente.	El sistema político, comprendido en sus elementos bajo la noción de estructura de oportunidades políticas, explica la actividad de protesta. Esta relación puede estudiarse mediante un modelo de relaciones entre variables, a través de herramientas de la estadística inferencial y de los métodos de investigación en ciencias sociales.
Nivel de análisis socio-político	Macro-histórico	Macro-estatal	Sub-estatal
Estadio cronológico del análisis	Formación del Estado-nación (S. XVIII)	Consolidación del Estado-nación (S. XIV)	Funcionamiento diversificado del Estado-nación (S. XX)
Nivel cognitivo	Epistemológico	Teórico	Metodológico

Fuente: Elaboración propia

1.2. La teoría de las oportunidades políticas al interior de la sociología de los movimientos sociales

1.2.1. El nacimiento dentro del choque de paradigmas dominantes

Como ha podido verse, el problema de la acción colectiva, la política y el cambio social constituye un campo reflexivo típicamente moderno, al menos en su origen. Es natural, en consecuencia, que los pensadores clásicos de los procesos de cambio histórico, político y social que estudiaron el tránsito a la modernidad, hayan establecido principios teóricos y metodológicos que perviven en los análisis contemporáneos de la acción colectiva. Fue el caso de Alexis de Tocqueville, pero, sobre todo, fue el caso de Karl Marx y de sus seguidores más ilustres, quienes se empeñaron en desentrañar las claves del proceso histórico y de los movimientos revolucionarios que le dan forma. En este sentido, la idea de transformaciones históricas y conflictos estructurales que desatan la acción colectiva (Marx), la importancia de la organización y los liderazgos (Lenin), así como de la formación de subjetividades colectivas con representaciones morales e ideológicas comunes acerca del conflicto (Gramsci) encuentran antecedentes importantes en dicha tradición (Tarrow, 2012).

Pero sólo fue hasta la segunda parte del siglo XX que esas ideas y las de otras tradiciones sociológicas se fueron estructurando en torno a conceptos y métodos de investigación más precisos para dar cuerpo a un campo disciplinario autónomo dentro de la sociología. Hasta tal punto fue así que autores como Touraine se propusieron pensar la sociología *desde* los movimientos sociales (Touraine, 1985). El nacimiento de ese nuevo campo fue, en muy buena medida, una contestación a las lecturas que, tras la segunda guerra mundial, se habían impuesto en la teoría social norteamericana, inspiradas por la tradición psico-social de la Escuela de Chicago y el estructural-funcionalismo parsoniano.

Se trataba de un paradigma teórico, guiado por una visión de los movimientos sociales que se caracterizaba por: i) Comprenderlos como un fenómeno de comportamiento colectivo con lógicas análogas a otros comportamientos como el pánico, la moda o los movimientos de masas; ii) Utilizar enfoques psicosociales para explicar su emergencia, vinculándola a la frustración, los agravios o la privación relativa sufridas por individuos y grupos sociales en donde los mecanismos de integración normativa habían fracasado, abriendo espacio a sentimientos y creencias generalizadas que guiaban la acción no-normativa o no-institucional; iii) Suponer, por tanto, que tales fenómenos se daban ante situaciones de *breakdown* en las cuales los mecanismos de integración y los órganos de control social enfrentaban cambios estructurales; y iv) Desconfiar, dados los acontecimientos que rodearon la segunda guerra mundial, de las experiencias de acción colectiva, privándolas de racionalidad y enmarcándolas dentro de otros sentidos de la acción vinculados a la alienación, la marginación y la frustración de expectativas (*sesgo irracionalizante*) (Cohen, 1985; Tavera, 2000).

A este *paradigma teórico clásico*, y al calor de los movimientos sociales de los años 60 y 70 que desafiaban sus planteamientos medulares, se formularon dos grandes respuestas: la estadounidense, *el paradigma de la movilización de recursos*, que enfatizó la racionalidad y el carácter estratégico de la acción colectiva; y la europea, *el paradigma orientado a la identidad*, que privilegió los rasgos expresivos, simbólicos y representacionales de la acción colectiva (Cohen, 1985). El enfoque del proceso político y de las oportunidades políticas (EOP) nace en el seno de la tradición norteamericana, compartiendo algunos de sus principales supuestos, pero enfatizando las relaciones y procesos políticos como variables explicativas de la acción colectiva, más que los recursos materiales y organizacionales.

En efecto, los teóricos de la movilización de recursos destacaron la centralidad de un conjunto de *variables objetivas* que explicaban mejor las dinámicas de la movilización social: la organización, los intereses, los recursos, las oportunidades y las estrategias para afrontar movilizaciones de larga escala. Para Cohen (1985), esta mirada partía de imputar una lógica neo-utilitaria a los actores colectivos, de modo que la idea del “actor racional” tenía un lugar privilegiado, con mayor fuerza en el enfoque organizacional de McCarthy y Zald (1977, 2002) y con menor fuerza en el modelo del conflicto político de Tilly, Obershall, Gamson y Tarrow. Al margen de sus diferencias, no obstante, estas variantes compartían los siguientes supuestos:

(1) Los movimientos sociales deben ser entendidos en términos de un modelo conflictivo de la acción colectiva. (2) No existe una diferencia fundamental entre la acción colectiva institucional y no institucional. (3) Ambas implican conflictos de intereses integrados en las relaciones de poder institucionalizadas. (4) La acción colectiva implica la búsqueda racional de intereses por parte de los grupos. (5) Las metas y los agravios son productos permanentes de las relaciones de poder y no pueden dar cuenta de la formación de movimientos. (6) Esto depende, más bien, de los cambios en los recursos, la organización y las oportunidades para la acción colectiva. (7) El éxito de la acción colectiva se evidencia por el reconocimiento del grupo como actor político o por mayores beneficios materiales. (8) La movilización implica organizaciones formales, burocráticas, dirigidas hacia un propósito y a gran escala (Cohen, 1985p. 675).

En síntesis, dirá Cohen (1985), las explicaciones construidas al interior de este paradigma son concebidas bajo una comprensión *clauswitziana* de la política.

1.2.2. Los conceptos, las relaciones y las variables

En su estudio pionero, Eisinger (1973, p. 12) señaló que “la manera en la cual los individuos y grupos se comportan en el sistema político no es simplemente una función de los recursos que ellos controlan, sino de las aperturas, puntos débiles, barreras y recursos del sistema político mismo”. En este sentido, agregó que “existe interacción o vínculo entre el ambiente -entendido en términos de estructura de oportunidades políticas- y el comportamiento político”.

Con este planteamiento de fondo, diversos investigadores emprendieron una prolífica experimentación teórica y metodológica que evidenció la plasticidad del concepto de estructura de oportunidades políticas, permitiendo entender, de un lado, su enorme potencial explicativo (para

fenómenos nacionales, subnacionales o comparados), pero, de otro lado, su no menos importante potencial como concepto *comodín* que, el pretender abarcarlo todo de manera indiscriminada, corría el riesgo de perder su valor heurístico. De esta manera, la literatura que se fundó en este enfoque, sirvió, al mismo tiempo, para imponer la necesidad de absolver los siguientes interrogantes (McAdam, 1999):

1. ¿Qué se entiende por estructura de oportunidad política? ¿Cómo se diferencia de otros factores que facilitan o constriñen la acción colectiva, como, por ejemplo, los recursos organizacionales, los marcos discursivos o el contexto cultural? ¿Qué variables, en consecuencia, integrarían tal concepto de modo que a través de él se puedan observar fenómenos socio-políticos específicos?

2. ¿Qué lugar ocupa la estructura de oportunidad política en los esquemas lógicos que pretenden explicar la acción colectiva? ¿Es una variable que explica o que debe ser explicada? ¿Y qué es lo que explica? ¿La forma del movimiento social, sus decisiones estratégicas, su emergencia, su desarrollo, su éxito o los ciclos de protesta?

3. ¿En qué nivel de análisis socio-político se inscribe, con mayor fuerza, la noción de EOP? ¿El subnacional, regional, estatal, trans-estatal? ¿Se estudian las oportunidades a nivel de Estado, sistema, régimen o gobierno? ¿Cómo interactúan las aperturas y cierres en cada nivel del análisis político en función de promover o no la acción colectiva de los movimientos sociales?

Como puede anticiparse, este conjunto de interrogantes ha dado lugar a múltiples y sofisticadas distinciones analíticas. A continuación, exploraremos algunas de ellas con el objetivo de sentar las bases conceptuales y metodológicas que orientarán el estudio de nuestro problema de investigación. En su desarrollo observaremos el orden y agrupación de las preguntas presentadas.

La estructura de oportunidad como clúster de variables políticas, formales e informales

Para la definición del concepto de estructura de oportunidad política existen tres consensos fundamentales. En primer lugar, se ha establecido que el carácter expansivo del concepto debe de ser controlado mediante su restricción a elementos de tipo político, es decir, que impliquen al sistema político, buscando así que tal categoría no se extienda de manera indiscriminada a ámbitos “no políticos” como la economía o la cultura. En segundo lugar, se ha planteado que más que una

variable se trata de un *clúster de variables*, de modo que para determinar la aparición de una estructura de oportunidad política favorable es necesario explorar y sopesar múltiples dimensiones del sistema político con distintos niveles de variación. Finalmente, se ha dejado sentado que tales variables atañen a aspectos tanto formales como informales del sistema político, con lo cual se abre el foco al análisis de relaciones de poder y correlaciones de fuerza que excedan lo establecido en las leyes o instituciones (McAdam, 1999; Kriesi, 1995).

En la revisión de la literatura adelantada por McAdam (1999) este encuentra, además, un consenso razonable en torno a las dimensiones de la estructura de oportunidad política utilizadas por diversos autores. Por un lado, para todos resulta importante la estructura institucional, formal o legal, que permite medir, en dicho nivel, la existencia de puntos de acceso o espacios abiertos para la agencia política de los movimientos sociales. Por otro lado, todos reconocen la importancia de la estructura de alianzas y el modo en que las élites políticas se unen y distancian, entre sí mismas y con los movimientos sociales. Finalmente, aunque no todos consideran relevantes los niveles de represión estatal, McAdam (1999) los añade dentro de las variables mencionadas para esbozar su propuesta sintetizadora.

En este orden de ideas, en el siguiente cuadro podemos ver las distintas variables consideradas por algunos de los cultores de este enfoque:

Tabla 2. Resumen del clúster de variables que componen la estructura de oportunidades políticas en diferentes autores

Autor	Variables independientes	Autor	Variables independientes
Brockett (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puntos de acceso significativo 2. Presencia de aliados 3. Fragmentación y conflicto entre las élites 4. Nivel de represión 5. Ubicación temporal en el ciclo de protestas 	McAdam (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La apertura o cierre relativos del sistema político institucionalizado 2. La estabilidad o inestabilidad de un amplio conjunto de alineamientos entre las élites que típicamente sostienen una política 3. La presencia o ausencia de élites aliadas 4. La capacidad y propensión estatal para la represión
Kriesi et al (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura institucional formal 2. Procedimientos informales en relación a un desafío dado 3. Configuración del poder respecto a un retador dado 	Rutch (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceso al sistema de partidos 2. Capacidad de implementación de políticas del Estado 3. Estructura de alianzas respecto a un retador dado 4. Estructura del conflicto respecto a un retador dado
Tarrow (1999)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grado de apertura de la comunidad política 2. Estabilidad de las alineaciones políticas 3. Presencia o ausencia de élites aliadas 4. Divisiones en el seno de las élites 	Eisinger (1973)	Ambiente político: “Término genérico usado de manera variada en la literatura de la ciencia política para referirse a, entre otras cosas, aspectos de la estructura política formal, el clima de respuesta o apertura gubernamental, la estructura y la estabilidad social” (p. 11) (traducción libre).
María Inclán (2018)	<i>En la emergencia del movimiento social</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aperturas del sistema político 2. Vulnerabilidad de las élites y aliados políticos potenciales en el poder 3. Amenazas represivas
	<i>En el éxito del movimiento social</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aperturas negociales 2. Vulnerabilidad de las élites 3. Aliados políticos potenciales en el poder
	<i>En la supervivencia del movimiento social</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Redes transnacionales de solidaridad 2. Encuadre del discurso

Fuente: Cuadro de McAdam (1999) complementado por el autor

Así las cosas, para Tarrow (1999, p. 89) la oportunidad política, enraizada en tales dimensiones del poder político formal e informal, debe ser comprendida como “*señales continuas -aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional- percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con lo que cuentan para crear movimientos sociales*”.

La estructura de oportunidad política como categoría móvil, explicada y explicativa de elementos diversos de la acción colectiva

En 1986, en su estudio clásico sobre el movimiento antinuclear, Herbert Kitschelt (1986) afirmó que el uso que se había hecho del concepto de oportunidades políticas, desde el trabajo de Eisinger (1973) hasta entonces, había sido algo unilateral, en el sentido de que sólo consideraba los procesos de *input* en los ciclos de decisión política. Sin embargo, el otro lado de la moneda, señalaba Kitschelt (1986, p. 62), consistía en que “la capacidad del sistema político para convertir las demandas en política pública también afecta la movilización social y su impacto, [es decir], la fase *output* del ciclo político también les da forma a los movimientos sociales y les ofrece puntos de acceso e inclusión en la construcción de la política pública”. A partir de este planteamiento Kitschelt señala las vías para complejizar el rol explicativo de las oportunidades políticas, diferenciando momentos de estas en un ciclo político que estaría definido, en sus extremos, por las fases de *input* y *output*.

Después vendrían nuevas distinciones asociadas a las diferentes etapas, ya no del ciclo político, sino del movimiento social: la emergencia, el desarrollo, el éxito y la supervivencia. El trabajo de Meyer y Minkoff (2004) fue pionero en este tipo de clasificación. En él, por ejemplo, se inspira María Inclán (2018) en su estudio el movimiento zapatista en México, en el que muestra que de las diferentes variables propuestas en la literatura para comprender la EOP, hay unas que sirven para explicar la emergencia de un movimiento social, mientras que hay otras que funcionan para explicar su éxito o su supervivencia (Tabla 2).

De otro lado, como lo explicara McAdam (1999), las variables dependientes, además de las etapas, pueden estar referidas a la forma de la movilización social. En este sentido, y dicho de manera esquemática, los sistemas políticos cerrados incentivarían formas revolucionarias de la acción contenciosa ante la inviabilidad de introducir cambios mediante reformas progresivas al interior de la institucionalidad. Entretanto, los sistemas políticos abiertos promoverían formas de la acción contenciosa más cercanas a la reforma, es decir, al uso de los canales formales para luchar por transformaciones progresivas del orden político y social.²¹

²¹ Nótese la semejanza de este planteamiento con el anteriormente expuesto de Tocqueville.

Finalmente, el mismo McAdam (1999) lleva aún más lejos la problematización metodológica de este enfoque para señalar que las oportunidades políticas también podrían ser estudiadas como variable dependiente, es decir, como fenómeno a explicar, bien sea por el ciclo de protesta, por el contexto internacional, por la misma acción de los movimientos sociales o por otros factores. Su conclusión, a la luz de todas estas variaciones, es que existe una “relación prototípica entre movimientos sociales y estructura de oportunidad política; algo fluido, recíproco impredecible y crucial” (p. 67).

En suma, las discusiones precedentes evidencian que dadas las múltiples distinciones hechas al interior del concepto de EOP y de las variables correlacionadas, es importante definir un posicionamiento analítico respecto del conjunto de las relaciones ilustradas. Sobre esto volveremos más adelante.

La estructura de oportunidad política como categoría transversal en los distintos niveles del análisis político

Si bien las ideas de Tocqueville estaban dirigidas al Estado como categoría macro-política, los desarrollos posteriores del enfoque de EOP procedieron mediante la desagregación de la misma, aludiendo a diferentes niveles del análisis político: el sistema, el régimen o el gobierno²². Asimismo, como lo hicieron Eisinger (1973) y Kitschelt (1986), el estudio de las oportunidades políticas se adelantó en perspectiva comparada, estatal y subnacional. En este sentido, Tarrow (1999) diferencia entre un enfoque *concreto* y otro *estatalista*.

El enfoque *concreto*, se concentra en el análisis de “las señales que los grupos perciben provenientes de su entorno político inmediato”, así como en los “cambios en su volumen de recursos o sus capacidades” (p. 73). La mayoría de este tipo de estudios, explica el autor, tiene carácter *infra-nacional* y han sido realizados en Estados Unidos. Dentro de estos identifica dos corrientes, unos que estudian las *oportunidades que surgen de situaciones político/administrativas concretas*, y otros que estudian *oportunidades de grupos específicos*.

El enfoque *estatalista*, centrado en la estructura macro-política nacional, se divide en dos corrientes complementarias. En primer lugar, Tarrow (1999) identifica *el estatalismo trans-*

²² Kitschelt, por ejemplo, diferencia entre un tipo de análisis dirigido a la *estructura del Estado* y otro, al cual él adscribe, enfocado en el *estilo político dominante* (Tarrow, 1999, p. 75).

seccional, orientado al análisis comparado entre estados para la determinación de los efectos que las semejanzas y diferencias tienen sobre la dinámica de la movilización social. En segundo lugar, destaca la existencia de un *estatalismo dinámico*, que estudia “los cambios que se producen en el Estado mismo, a efectos de discernir en qué medida estos cambios crean –o reducen- las oportunidades políticas” (p. 76). Tras exponer esta tipología, argumenta que el *estatalismo dinámico* se sostiene en un planteamiento más audaz según el cual:

Es el sistema político entero el que se ve sometido a cambios que modifican el medio en el que se mueven los actores sociales, al menos lo suficiente como para ejercer cierta influencia sobre el inicio, las formas y los resultados de la acción colectiva (Tarrow, 1999, p. 76)

Por otra parte, en la literatura latinoamericana sobre EOP ha sido especialmente relevante la distinción que Favela (2002, p. 93) propone entre el *nivel estructural* que “comprende los rasgos relativamente estables y permanentes” y el *nivel coyuntural* que se refiere a “los rasgos comparativamente volátiles, hasta cierto punto determinados por los elementos del nivel estructural”. Para la autora, ambos niveles determinan aspectos de la interacción entre los movimientos sociales y el sistema político. En este sentido, mientras en el *nivel coyuntural* propone un análisis centrado en las variables clásicas sintetizadas por McAdam (1999), en el análisis del *nivel estructural* propone otras cuatro variables que dan lugar a una relación del siguiente tipo:

Mientras que el nivel estructural define los ámbitos más estables del sistema político al fijar los principales factores de influencia en los movimientos sociales, los elementos coyunturales pueden reducir o ampliar las oportunidades para que tengan éxito, dentro de los límites establecidos por los elementos más permanentes. Aunque [los rasgos coyunturales] están limitados por el nivel estructural, pueden modificarse en relación con los virajes electorales, las decisiones políticas importantes, el escenario internacional y las interacciones entre los movimientos sociales y el ambiente político, lo que conforma el análisis dinámico de la influencia de la política sobre la movilización social (Favela, 2002, p. 103).

El modo en que se integran estos niveles y variables en la propuesta de Favela (2002) puede visualizarse en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Oportunidades políticas en el nivel estructural y coyuntural

Aspectos de la interacción entre los movimientos sociales y la sociedad	Nivel estructural	Nivel coyuntural
Número y tipo de puntos de acceso al gobierno	1) Distribución del poder entre ramas y niveles de gobierno	5) Disponibilidad de aliados
Importancia del proceso electoral como método de distribución del poder	2) Sistema electoral y de partidos	6) Alineamientos electorales
Participación de las organizaciones sociales en el proceso de toma de decisiones	3) Estructura de la representación de intereses	7) Cohesión de la élite
Definición y preservación del orden social	4) Legislación e instituciones relacionadas con la vigilancia y control de las protestas	8) Estrategias predominantes para la resolución de conflictos

Fuente: Favela (2002)

En síntesis, el panorama construido por Tarrow (1999) tras el análisis sistemático de las investigaciones de EOP, y los aportes complementarios de Favela (2002), nos permite evidenciar que tal enfoque teórico es transversal a los diferentes niveles del análisis político. En este sentido, la desagregación analítica presentada añade complejidad e impone la obligación de justificar, en función de cada problema de investigación, el nivel de análisis socio-político a elegir, el tipo de interacción que media entre niveles, y la manera en que la EOP puede servir para explicar el fenómeno de la acción colectiva en un nivel determinado.

1.3. Las oportunidades políticas y la democratización

Según enseña Tilly (1998), las discusiones precedentes guardan una estrecha relación con el problema de la democracia o, en el sentido dinámico del concepto, de la *democratización*. Como es sabido, este ha sido un tema profusamente discutido en la ciencia política comparada, en particular la referida a los problemas políticos latinoamericanos, que desde el paso de estados burocrático-autoritarios a regímenes demo-liberales en los años 80, ha desarrollado una agenda de investigación centrada en la transición y la calidad de la democracia en América Latina (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1989).

Pues bien, Tilly (1998), uno de los padres del modelo del proceso político según la exposición precedente, observa que los efectos del conflicto político han sido capturados a través

de las categorías de *reorganización, realineamiento, represión y realización*. Así, nos dice el autor, “no es ninguna coincidencia que se correspondan [...] con los elementos de la [...] EOP tal y como la entienden la mayoría de los analistas [...]: organización de instituciones políticas, alineamientos entre las élites, represión-facilitación, y apertura del sistema político” (p. 38). Acto seguido nos propone una relación más:

A su vez estas condiciones se corresponden con cuatro ejes que nos jerarquizan los diferentes regímenes desde los autoritarios hasta los democráticos: 1. Extensión de los derechos ciudadanos (0 a 1). 2. Igualdad entre los ciudadanos (0 a 1). 3. Protección de los ciudadanos frente a la acción arbitraria del gobierno (0 a 1). 4. Consulta vinculante a los ciudadanos respecto al personal del gobierno y a las políticas (0 a 1). De este modo, 0000 implica un régimen puramente despótico, 0010 una autocracia benevolente, 1100 un autoritarismo participativo y 1111 una democracia ideal (actualmente inexistente) (Tilly, 1998, p. 38).

Sobre la base de estas consideraciones, Tilly (1998) concluye que “*las investigaciones sobre el conflicto político, lejos de constituir un campo analítico separado, nos llevan directamente a problemas profundos de la teoría democrática*” (p. 39).

No es extraño, en consecuencia, que la literatura sobre movimientos sociales en América Latina haya construido relaciones semejantes entre la teoría de la modernización y la teoría de los movimientos sociales, reeditando el planteamiento que se encuentra en el núcleo de la propuesta de Tilly (2010), recordemos: *El auge y la caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de las oportunidades democráticas. Los movimientos sociales modernos nacen como consecuencia de las oportunidades políticas abiertas por la interacción entre Estado, coerción y capital.*

En este sentido, son visibles dos posiciones para el caso latinoamericano, de un lado la de Inclán (2018a), según la cual, a mayor democracia liberal en el marco del proceso de modernización (auge de las clases medias, urbanización, industrialización, secularización, etc.), mayor movilización social. El nexo causal entre las variables, en su caso, como en el de Tilly, tiene que ver con las oportunidades políticas, aunque por una vía distinta, pues, según la autora, en América Latina estas oportunidades se abren ante la caída de regímenes autoritarios, mientras que, en la Europa, del siglo XVIII tuvieron que ver con la construcción del Estado moderno (Tilly 2010). Una hipótesis alternativa es defendida por Almeida (2014), quien, en una línea hacia las relaciones

sociales del capitalismo moderno, sugiere que tanto la democracia liberal como el programa modernizador, convertidos en la base institucional del neoliberalismo, infligen agravios que detonan procesos de acción colectiva de tipo contencioso.

Esta discusión se inserta en un contexto intelectual en el que el problema teórico y político de la democracia/democratización se ha nutrido de nuevos debates y perspectivas. Tras los aportes de la literatura de la “transitología” (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1989), el devenir del contexto socio-político del subcontinente reveló el carácter problemático de un proceso concebido de manera finalista y lineal dentro de un esquema teleológico. (Carothers, 2002). Los regímenes híbridos (Levitsky y Way, 2011), la inestabilidad presidencial sumada los golpes blandos o institucionales (Pérez Liñán, 2008), los problemas de consolidación y de calidad de la democracia (Munck, 2011); al lado de otros problemas de índole económica, pero en todo caso fundamentales para el desarrollo del proceso democrático, como la globalización y el neo-extractivismo (Svampa, 2019); han dado lugar a nuevas formulaciones de la cuestión.

En este orden de ideas, para la comprensión de la relación entre EOP y democratización se retoman dos propuestas analíticas derivadas del debate precedente. En primer lugar, la noción de Santos (2004) sobre la relación entre democracia, liberalismo y movilización social. De acuerdo con su propuesta la teoría democrática debe robustecer la perspectiva implicada en los pensadores de la “transitología”: el régimen democrático-electoral no se presenta como fin último de los procesos de transición. La reflexión debe girar hacia el problema de la “democratización de la democracia” o la “profundización” de la misma, concebidos como procesos de apertura que implican un cierto reparto del poder político, económico y social, en donde los movimientos sociales y los actores de la sociedad civil vienen jugando un rol determinante (Santos, 2004).

En segundo lugar, el giro en los estudios sobre democratización desarrollado en el trabajo de Basset, Tahar-Chaouch y Aguilar (2014), en el que señalan tres caminos para iluminar terrenos inexplorados por el enfoque clásico de los estudios sobre la transición. En primer lugar, el desplazamiento del registro nacional al regional para pensar acerca de configuraciones políticas concretas sin imponerles de modo arbitrario las abstracciones propias del análisis macro-estatal. En segundo lugar, de lo institucional a lo social, para analizar el modo en que los actores experimentan los procesos de democratización. En tercer lugar, de la explicación a la comprensión para no restringir el examen a los esquemas de tipo causal e ir más allá al estudiar las

representaciones y sentidos implicados en los actores sociales que viven el cambio democrático regional.

1.4. Las críticas

La teoría de la estructura de oportunidades políticas ha sufrido críticas explícitas que buscan señalar las limitaciones del enfoque, sus puntos ciegos y las dimensiones de la acción colectiva que permanecen sin explicar tras la utilización de unos lentes acusados de ser estadocéntricos, utilitarios, racionalistas y excesivamente abstractos. Asimismo, existe otro tipo de críticas, más implícitas, orientadas a cuestionar sus raíces anglo-europeas que se alimentan de supuestos problemáticos a la hora de caracterizar los fenómenos sociales, políticos y culturales de América Latina.

Este conjunto de contestaciones al marco teórico de la EOP es de fundamental importancia para ejercer un control reflexivo sobre el enfoque y usarlo de modo creativo en función de explicar un conjunto de fenómenos que, ciertamente, van mucho más allá de la racionalidad estratégica y el Estado. En tal sentido, a continuación presentaremos las críticas más distintivas que aparecen en la literatura autorizada. Para tal efecto, diferenciaremos entre las *críticas internas* que nacen al interior del mismo *paradigma norteamericano*²³ y las *críticas externas* que surgen de otros paradigmas como, por ejemplo, el *paradigma orientado a la identidad*.

1.4.1. Las críticas internas

La organización y los recursos más que el ambiente político. Los autores más directamente relacionados con la teoría de la movilización de recursos entendieron que el motor de la movilización social no eran los agravios o las situaciones de privación relativa (*paradigma clásico*), pero tampoco eran las variables del ambiente político al estilo Eisinger (1973). Para investigadores como McCarthy y Zald (1977, 2002), desde fines de los años 70, el motor de la movilización social radicaba en los recursos, comprendidos bajo una visión tendencialmente economicista y ligada a

²³ Es importante no perder de vista, como lo expusimos con Cohen (1985), que este paradigma, fundamentalmente asociado con la movilización de recursos y caracterizado por una comprensión *clauswitziana* de la política, comprende una serie de variantes que, aunque comparten supuestos esenciales acerca de la acción social, pueden llegar a ser tan diferentes entre sí como lo son la *teoría de la movilización de recursos* (McCarthy y Zald, 1977, 2002) y la *teoría de los procesos de enmarcamiento* (Snow et al, 1986, 1988) (Benford, 1997) (Benford y Snow, 2000).

la sociología de las organizaciones: no se trata de que se produzca una crisis en la estructura de alianzas del poder político o de que se ejecuten una serie de reformas democratizadoras, lo importante es si los SMO (*social movement organization*) tienen dinero, organización, tiempo, fuerza de trabajo y aliados a su disposición para activar un programa de movilización que integre a *constituyentes, espectadores y adherentes*.

La micromovilización y los marcos que la hacen posible, más que los grandes cambios macro políticos. Echando mano de la noción goffmaniana de *frame*, Snow, Burke, Worden y Benford (1986) plantearon la necesidad de ahondar en la pregunta de por qué la gente se moviliza. El famoso problema del *free rider* de Olson (1992) obligaba a aportar razones convincentes que explicaran la activación política de sujetos que, para la obtención de determinados bienes públicos, no se veían racionalmente compelidos a ponerse en movimiento. Bajo esta línea de problematización, tales autores argumentaron que, más que a los problemas de la organización y la *macromovilización*, era importante atender a las cuestiones de la *micromovilización* y a los factores psico-sociales que la explicaban. En tal sentido, en lugar de buscar explicaciones tan lejanas a la realidad del sujeto como lo son las referidas a las modificaciones de la estructura política, incursionaron en el estudio de sus procesos interpretativos para postular que, en realidad, son los *frames* o *marcos de sentido*, en tanto esquemas interpretativos, los que explican la movilización de los integrantes de los SMO.

1.4.2. Las críticas externas

Las críticas de la identidad

La pregunta por el “cómo”. Uno de los más sólidos y célebres planteamientos analíticos acerca de la acción colectiva es, sin duda, el de Alberto Melucci (1999). Una de sus ideas más representativas parte de una crítica que es predicable, también, del enfoque de la EOP, y que consiste en que diversos estudios acerca de la acción colectiva la han considerado como “un dato empírico unitario” que es evidente por sí mismo. Para él, al contrario, la acción colectiva y los movimientos sociales se presentan como fenómenos que, lejos de ser evidentes, son altamente problemáticos, en el sentido de ser el resultado de un complejo proceso de interacción a través del cual se construye una identidad colectiva (Melucci, 1995). Así, los movimientos sociales, más que

ser un punto de partida, constituyen un punto de llegada que sólo es concebible después de responder la pregunta por el “nosotros” o por el “cómo” de la acción colectiva. La EOP, en este orden de ideas, ensombrecería el hecho de que los movimientos sociales son un sistema complejo de acción en el que se entretajan orientaciones de sentido diversas que, tras un proceso de negociación e interacción, construyen consensos básicos acerca de fines, medios y campos de disputa.

El sesgo racional-estratégico. Como lo enseña Cohen (1985), el *paradigma norteamericano o de la movilización de recursos*, contempla dentro de sus supuestos la idea de que la acción colectiva de tipo contencioso está integrada por grupos que comparten intereses y actúan racionalmente para asegurarlos. Aunque el enfoque de la EOP no lleva tal consideración al extremo que, por ejemplo, es visible en la perspectiva de *rational choice*, lo cierto es que sí supone que los actores sociales orientan su acción con fines políticos, disponiendo estratégicamente de las oportunidades y medios que articulan el proceso político. Un planteamiento neo-utilitario de esta naturaleza puede ser objeto de muy buena parte de las críticas enarboladas contra la acción racional. En este sentido distintas dimensiones de la acción como la simbólica y la expresiva pueden ser, voluntaria o involuntariamente, negadas por dicho sesgo. Diversos autores como Polletta y Jasper (2001) han mostrado que los elementos representacionales, constitutivos de la identidad, pueden condicionar las interpretaciones que los actores colectivos hacen de la llamada “estructura de oportunidades”, así como sus decisiones estratégicas en torno a repertorios y rutas de acción. Asimismo, Piven y Cloward (1991) han denunciado la “tendencia normalizante” de un paradigma que, como el de la EOP, puede oscurecer la lógica de dinámicas de protesta inscritas en un modelo de “acción no normativa”, en las que puede carecerse tanto de recursos como de cauces institucionales.

Las críticas de los Nuevos Movimientos Sociales

El estado-centrismo. El enfoque de EOP adolece de un *estado-centrismo* que ensombrece la reflexión acerca de los movimientos sociales. Estos, en la segunda mitad del siglo XX, desplegaron su praxis en el ámbito de la sociedad civil, proponiéndose transformaciones de patrones culturales y no conquistas en el ámbito de la representación o de la política pública (Cohen, 1985). Offe (1985) se mueve en esta dirección cuando argumenta que los nuevos

movimientos sociales desafían la concepción binaria de tipo liberal que “asume que toda acción puede ser categorizada como pública o privada” (p. 826). En tal sentido, los nuevos movimientos sociales se ubican a sí mismos en una “categoría intermedia”, de suerte que su espacio de actuación es el de la política no-institucional. En consecuencia, dice el autor: “el *nuevo paradigma* divide el universo de la acción en tres esferas: privada, política no-institucional, política institucional, reivindicando la ‘acción política dentro de la sociedad civil’ como su espacio, desde el cual desafía las prácticas e instituciones de las esferas pública y privada” (Offe, 1985, p. 832).

Las críticas latinoamericanistas

La impropiedad de la categoría de “movimiento social”. El enfoque de la EOP parte de un concepto de la acción colectiva y de los movimientos sociales que no da cuenta de las realidades y fenómenos que expresa la movilización popular latinoamericana en donde más que de movimientos sociales se evidencia el movimiento de *sociedades, pueblos, naciones o mundos “otros”*. Zibechi (2017), uno de los más importantes exponentes de esta crítica postula que:

En América Latina existen muchos movimientos sociales pero, junto a ellos, superpuestos, entrelazados y combinados de formas complejas, tenemos sociedades otras que se mueven no sólo para reclamar o hacer valer sus derechos ante el Estado, sino que construyen realidades distintas a las hegemónicas (ancladas en relaciones sociales heterogéneas frente a la homogeneidad sistémica) [...]. Esto ha sido posible porque los pueblos organizados han recuperado tierras y espacios y en ellos se han territorializado, que es una de las principales diferencias respecto a lo que sucede en otras partes del mundo, de modo muy particular en el Norte (p. 3).

La estatalidad anglo-europea y la estatalidad latinoamericana. El enfoque de la EOP se fundamenta en una comprensión del Estado como fenómeno homogéneo, unitario e institucional que no es aplicable a las sociedades latinoamericanas, en donde este se presenta como una realidad heterogénea, fragmentada y agrietada por factores reales de poder relacionados con el capital, la colonialidad y la criminalidad (Quijano, 2000). La estatalidad latinoamericana, por el modo mismo en que se produjeron la colonización y las posteriores guerras de independencia, ostenta rasgos más abigarrados que imponen un reto mayor al estudioso: una visión analítica desagregada y no normativa, toda vez que las brechas entre el *ser social* y el *deber ser institucional* adquieren dimensiones mucho más ostensibles.

1.5. La EOP en el estudio de las luchas socio-territoriales en Antioquia

De acuerdo al análisis precedente, en el modelo del proceso político el Estado-nación ocupa un lugar central, desde el punto de vista histórico y conceptual, a la hora de explicar la naturaleza de los movimientos sociales y, por tanto, a la hora de pensar en la estructura de oportunidades políticas. Sin embargo, las aproximaciones que se han desarrollado bajo esta teoría, se han centrado, fundamentalmente, en sociedades europeas y norteamericanas en donde el Estado-nación, según su concepción clásica, constituye una realidad fuera de discusión. A continuación problematizaremos tal enfoque en función de nuestro objeto de investigación.

1.5.1. Problematización para el caso colombiano

En América Latina, la estructuración de la relación Estado-sociedad ha corrido por sendas muy particulares. Esto ha llevado a autores como Zibechi (2017) a plantear que:

Los movimientos sociales en Europa y América del Norte se mueven en sociedades relativamente homogéneas en las que el control y explotación del trabajo se concreta básicamente a través del salario, y donde las relaciones sociales son relativamente homogéneas y, por eso, la lógica que gobierna el todo lo hace también sobre las partes. En tanto en América Latina contamos con cinco tipos de relaciones o modos de control del trabajo: esclavitud, servidumbre personal, reciprocidad, pequeña producción mercantil y salario (Quijano, 2000). Estamos ante lo que Quijano define como “heterogeneidad histórico-estructural” de nuestras sociedades, en las que se ponen en movimiento relaciones sociales diferentes y diversas. Por lo que resulta más conveniente denominar a nuestros movimientos colectivos como “sociedades en movimiento” o, como ellos mismos se denominan, “pueblos” o “naciones” que luchan por su soberanía y autodeterminación (p. 3).

Asimismo, la realidad del Estado como fenómeno institucional que concentra en sí el monopolio sobre las armas, los tributos y el derecho, es una experiencia de carácter relativo en sendos territorios del subcontinente, y de Colombia en particular. Esto ha dado lugar a diferentes conceptualizaciones que dan cuenta de esa presencia relativa que, en cuanto tal, altera las dinámicas socio-políticas previstas por la teoría anglo-europea: los márgenes del Estado (Das y Poole, 2008), las zonas grises (Auyero, 2007) o las zonas marrones (O’Donnell, 1993) son ejemplos importantes. Incluso en la literatura sobre conflicto, violencia y sociedad en Colombia, se resaltan los caracteres

diferenciados, en cuanto a naturaleza, causas y efectos, de la forma que ha adquirido el conflicto social y armado en cada territorio (González González, 2015).

En este sentido, en Colombia convergen dos factores estructurales que determinan una configuración particular y compleja de las dinámicas de movilización social y acción colectiva. De un lado, *el proceso de formación del Estado* que sido un proceso irregular en el que no se ha conseguido el monopolio de la violencia legítima, de la producción y aplicación del derecho, ni de los tributos. En razón de ello no se ha logrado una presencia plena de las instituciones sobre el territorio nacional (García y Santos, 2001). De otro lado, *la violencia*, de suerte que la disputa por el poder político y por el control del territorio entre ejércitos de alcance regional y Estatal ha sido una constante, al menos, desde la segunda mitad del siglo XX. Esta se ha manifestado de modo diferenciado en cuanto a su intensidad, sus modalidades y sus espacios de aparición, con participación de una multiplicidad de actores (estatales, para-estatales, insurgentes, empresariales, narcotraficantes) (González González, 2015).

En el estudio que se haga de los movimientos sociales, bajo los lentes del enfoque del proceso político, y a través del concepto de estructura de oportunidad política, esto tiene una consecuencia muy específica: *la relación compleja y diferenciada entre el Estado y el territorio*.²⁴ Es decir, las transformaciones producidas al *nivel del Estado*, que deriven en un cambio de la estructura de oportunidad política estatal, no tienen consecuencias directas ni automáticas en el *nivel del territorio*. Los espacios y los tiempos del territorio son unos, y los espacios y los tiempos del Estado son otros.

La relación entre ambos, por supuesto, existe, pues es justamente esta relación la que nos permite afirmar la pertenencia de un territorio determinado, como Antioquia, a un Estado determinado, en este caso el colombiano. Sin embargo, tal relación, insistimos, no es directa ni automática: grandes transformaciones estatales como la promulgación de una nueva Constitución, o la firma de un Acuerdo de Paz que finalice un conflicto histórico de ámbito nacional, tienen un proceso de traducción mucho más complejo hacia los territorios, que el que sería esperable, por ejemplo, en los Estados-modernos anglo-europeos. Así, dada esta diferenciación analítica, ante un

²⁴ Con la palabra “territorio” nos referimos en este caso a una unidad territorial y sociodemográfica de tipo subnacional o regional. En términos de la división político-administrativa del territorio colombiano, podría tratarse bien de un departamento, o bien, de un conjunto de municipios, agrupados en función de unos rasgos geográficos, sociales, económicos y culturales comunes.

cambio en el contexto político, pueden darse escenarios diversos: i) Se abre la estructura de oportunidad política al nivel nacional pero no al nivel territorial ii) Se abre la estructura de oportunidad política al nivel territorial pero no al nivel nacional iii) Se abre la estructura de oportunidad en los dos niveles. Tales aperturas y cierres, por tanto, pueden darse en momentos y espacios diferenciados.

Ante esta realidad y dada la naturaleza del problema y de las unidades de análisis seleccionadas, consideramos pertinente adelantar un *estudio de las oportunidades políticas a nivel subnacional o regional*. Esto no es del todo extraño al desarrollo de este enfoque de investigación: el mismo estudio fundacional de Eisenger (1973) se adelantó a nivel subnacional (al nivel de la ciudad) y, como explica Tarrow (1999) a través de su tipología sobre los estudios centrados en las estructuras de oportunidad, diversos trabajos se han adelantado en el marco de un “enfoque concreto” (por oposición a uno “estatalista”), de suerte que es “comprensible (aunque no inevitable) que el grueso de estos estudios tengan carácter incluso infra-nacional” (p. 73).

1.5.2. Recortes teóricos y analíticos para el estudio de la EOP en las luchas socio-territoriales en Antioquia

El examen de las luchas socio-territoriales en Antioquia admite muchas miradas, tantas como enfoques y matices hay dentro de la sociología de los movimientos sociales. En la presente tesis de maestría hemos optado por un recorte que pone en el centro la política al asumir que es en este terreno en el que se resolverán las disputas fundamentales en las que se encuentran inmersos el Movete y el COA: la decisiones sobre el futuro de los territorios para cuya defensa se han organizado estos movimientos, son el producto de un conjunto de relaciones de fuerzas e intereses canalizados a través de la estructura política legitimada para tomar decisiones sobre la vida colectiva.

Por esto la utilización del enfoque del proceso político o de la EOP es relevante para iluminar las lógicas y las posibilidades estratégicas dispuestas sobre el horizonte de la conflictividad socio-territorial en Antioquia. Sin embargo, las críticas y la problematización desarrolladas, así como la naturaleza de los casos de estudio nos obliga a tomar decisiones teóricas más específicas con el propósito de alcanzar una comprensión más profunda de los procesos

contenciosos que nos ocupan. Tales elecciones, como se verá a continuación, resultan de las reflexiones teóricas presentadas en este capítulo.

En el presente trabajo se adopta un enfoque “flexible” de la teoría de la estructura de oportunidades políticas inspirado por el “dinamismo” que Tarrow (1999) reclama para la misma y por la heterogeneidad social e institucional de los fenómenos bajo estudio. Lo que se busca, en consecuencia, es que la teoría sirva para comprender y explicar los casos y no que los casos sirvan para confirmar la teoría.

La primera implicación de esta elección, como ya lo mencionábamos, es que el análisis de los casos se inscribirá en el estudio de las oportunidades políticas en dos niveles: *el nacional* (régimen político colombiano) y el *subnacional* (régimen político antioqueño-regional). El contraste de las variaciones en ambos niveles con la dinámica de los movimientos estudiados nos permitirá entender la naturaleza de las relaciones en que los involucra. Con esta elección, además, se otorga densidad a las relaciones entre variables para no construir vínculos arbitrarios y artificiales entre, por ejemplo, la división de un directorio político en Bogotá y la activación de organizaciones comunitarias que defienden el territorio en el suroeste antioqueño.

La segunda consecuencia consiste en la adopción del modelo de análisis que propone el examen de las dinámicas de las EOP tanto a *nivel estructural* como a *nivel coyuntural* (Tabla 3). Así lograremos una imagen más integral, primero, del ciclo político 2010-2018, definido por transformaciones políticas, económicas y sociales que serán relatadas en el próximo capítulo. Y después, de los conflictos políticos protagonizados por el Movete y el COA que, en tal sentido estarán afectados por variaciones en la EOP en múltiples niveles: en el nacional, con una determinada EOP estructural y coyuntural, y en el subnacional, con una EOP coyuntural específica.

En tercer término, rechazamos la asunción conforme a la cual los actores sociales surgen y se desarrollan como efectos reflejo de las transformaciones estatales. Esto nos lleva a considerar, en un sentido muy weberiano, que las conexiones de sentido son fundamentales en la comprensión de la acción social. Por tanto, el análisis de los niveles del régimen político señalados en el anterior punto tendrá que conjugarse con el análisis de los datos cualitativos resultantes de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. Así, dicho análisis, sin exceder los marcos de lo que hemos denominado *enfoque flexible de la EOP*, irá más allá de la perspectiva racional-estratégica-utilitaria, para captar de manera sensible el modo en que aspectos relacionados con la historicidad,

la subjetivación y la identidad de los movimientos entrevistados, impactan en las dinámicas del conflicto político. Esto implica resaltar cómo, por ejemplo, los esquemas interpretativos dan forma a las *señales* u oportunidades del sistema político; o cómo los referentes identitarios determinan posiciones y estrategias ante la estatalidad nacional y subnacional. Estas apuestas apuntan, en el sentido en el que lo hacen Cohen (1985) y Polletta y Jasper (2001) a desafiar la dicotomía estrategia/identidad.

En cuarto lugar, con las anteriores consideraciones en mente, utilizaremos el *clúster de variables* que expone Favela (2002) para el nivel estructural y el *clúster de variables* que expone McAdam (1999) para el nivel coyuntural, pues ellas, además de integrar las dimensiones formales e informales que constan en la literatura sobre EOP, incluyen la dimensión referida a la represión o la violencia que es una variable crítica en contextos de conflicto armado como el colombiano. Con ellas trataremos no de explicar el surgimiento o los resultados de los movimientos estudiados, sino de comprender las dinámicas, límites y posibilidades que emergen en este ciclo político marcado por las cuestiones de la paz, la democracia y el territorio.

Finalmente, nuestro análisis acerca de las oportunidades políticas estará acompañado de una lectura en clave de *democratización*, por entender, como fue planteado, que son dos dimensiones de un mismo fenómeno. Al proceder de esta manera en el estudio de las luchas socio-territoriales del Movete y el COA en Antioquia: i) Ordenaremos el proceso macro-político, a saber, el ciclo 2010-2018 signado por la paz, en la cuestión histórica de la disputa por la democracia (Santos, 2017) ii) Operaremos el triple desplazamiento propuesto por Basset, Tahar-Chaouch y Aguilar (2014) para el estudio de los procesos de democratización (2014): de lo nacional a lo regional, de lo institucional a lo social y de la explicación a la comprensión iii) Evaluaremos la oposición entre la *Tesis Inclán* y la *Tesis Almeida* acerca de la relación entre movimientos sociales y democracia en América Latina.

1.6. Recapitulación

En el presente capítulo hemos dado respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué herramientas nos proporcionan la teoría de la estructura de oportunidades políticas y las discusiones concomitantes acerca de la democratización para estudiar dos procesos de movilización socio-territorial

específicos en un ciclo político definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio en Colombia?

Para ello, primero, desarrollamos una parte expositiva. Explicamos los fundamentos analíticos que sustentan el modelo teórico de la estructura de oportunidades políticas, retomando los aportes de tres autores clásicos: Charles Tilly, Alexis de Tocqueville y Peter Eisinger. Posteriormente descendimos al nivel de los postulados teóricos, estudiando, de un lado, los supuestos que agrupan tal teoría dentro del paradigma norteamericano de la movilización de recursos y, de otro lado, las variables y niveles explicativos desarrollados por la literatura académica acerca de la EOP. Con este edificio analítico y conceptual establecido, mostramos la relación de la EOP con la cuestión de la democracia, enriqueciendo este análisis con la literatura sobre transición a la democracia en América Latina y las propuestas alternativas en el estudio de los procesos de democratización.

Después del momento expositivo, cerramos el capítulo con una parte reflexiva. Así, pusimos de manifiesto las críticas y debilidades de nuestro modelo teórico. Nos basamos para ello en tres cuerpos de literatura: la del paradigma de la movilización de recursos, para exponer las críticas internas de la academia norteamericana; la del paradigma de la identidad y de los nuevos movimientos sociales, para explorar las críticas externas de la academia europea; y la de los estudios latinoamericanos, para esbozar las críticas externas de la academia de América Latina. Tras el estudio de estas críticas y la reflexión acerca del contexto de nuestro problema de investigación, tomamos cinco determinaciones teóricas.

Primero, el estudio de la EOP a nivel nacional y subnacional. Segundo, el examen de la EOP en el nivel estructural y coyuntural. Tercero, la adopción de un enfoque flexible mediante una aproximación cualitativa a los sentidos subjetivos implicados en la acción social del Movete y el COA. Cuarto la elección de las variables utilizadas por Favela (2002) para el análisis del nivel estructural de la EOP, y la elección de las variables utilizadas por McAdam (1999) para el análisis del nivel coyuntural de la EOP. Quinto, el estudio de la EOP en clave de democratización para la comprensión del ciclo 2010-2018 como parte de una disputa democrática (Santos, 2017), dentro de una lectura regional, social y comprensiva (Basset, Tahar-Chaouch y Aguilar, 2014) que nos permita comprender la relación entre EOP, democracia, modernización (Inclán, 2018a) y neoliberalismo (Almeida, 2014).



Con esta discusión teórica clara, y con la justificación de nuestras elecciones en torno a la misma, en el siguiente capítulo desarrollaremos una aproximación socio-política de tipo macro, para entender en qué consistió el ciclo político en el que se inscribe la experiencia del Movete y el COA. Con este propósito en mente, movilizaremos las consideraciones analíticas precedentes. Propondremos una lectura del proceso de paz en clave de democratización, estudiaremos la EOP a nivel nacional en sus dimensiones estructural y coyuntural, y analizaremos el ciclo político 2010-2018 en sus tres dimensiones: la política, económica y social.

Capítulo 2. Colombia ante un nuevo ciclo político: democratización, proceso de paz y territorio

Es difícil predecir la forma del cambio político y social que vendrá o sus consecuencias. Sin embargo, cualquier observador que no crea que Colombia está viviendo nada más que una pausa por el cansancio, está por llevarse una sorpresa bastante afilada

Eric Hobsbawm

Con estas palabras el historiador británico Eric Hobsbawm concluía, en 1963, su trabajo de interpretación histórica sobre la Colombia de mediados del siglo XX, *The revolutionary situation in Colombia*. Hacía sólo 5 años había iniciado el *Frente Nacional*, el pacto a través del cual el Partido Conservador y el Partido Liberal bajaron el telón del periodo histórico conocido como *La Violencia*, una guerra civil que, tras el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, devastó el mundo rural colombiano con una sangría liberal-conservadora que dejó una estela de alrededor de trescientos mil muertos.²⁵

Un año después de su investigación, el Estado colombiano decide bombardear la “república independiente” de Marquetalia, un espacio autónomo organizado por campesinos desposeídos, algunos ex-combatientes de las guerrillas liberales de la época de *La Violencia*, que reclamaban tierra y servicios públicos al Estado. Tras el bombardeo nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En paralelo, bajo el influjo de la Revolución Cubana, nace el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cuatro años después, ante las fracturas del comunismo internacional, nace la organización maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL) (Molano, 2015).

Así, tras el pacto oligárquico del *Frente Nacional*, que cerró el sistema político sin resolver las contradicciones sociales que dieron origen a *La Violencia*, nacieron los tres ejércitos guerrilleros más poderosos de la historia nacional. Hobsbawm tenía razón, *Colombia estaba viviendo nada más*

²⁵ Pocas décadas después de la independencia, hacia mediados del siglo XIX, se fundan los Partidos Conservador y Liberal en Colombia. Estos serían los protagonistas de las principales disputas políticas del país durante casi un siglo: centralismo-federalismo, estado confesional-estado laico, orden moral-libertades civiles, etc. Tras la violencia, las diferencias ideológicas comienzan a difuminarse, y con el arribo del siglo XX implosiona el sistema de partidos, de manera que proliferan nuevas denominaciones partidistas que consiguen alcanzar posiciones relevantes en los cargos de representación política.

que una pausa por el cansancio. El retorno a la actividad inauguró consigo el conflicto armado interno más longevo del hemisferio occidental, aquel que le daría forma a la vida pública y social de este país sudamericano durante más de medio siglo.

Los ciclos subsecuentes de la historia nacional se debatieron entre acciones que estrechaban el nudo de la violencia e intentos desesperados por desatarlo. Pero al cierre del siglo XX, parecían imponerse las ataduras: después de un primer período en el que el anidó el narcotráfico, nacieron los ejércitos paramilitares y fracasaron los primeros procesos de paz con las FARC-EP²⁶ (segunda parte del siglo XX, 1964-2000), la violencia crecería a niveles insospechados. Así, en medio de la vorágine, llegamos a un siglo XXI ordenado por dos ciclos políticos, liderados por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), que representarían, respectivamente, dos estrategias divergentes para volver a la *pausa* de Hobsbawm, una que fuera definitiva: la de la guerra antisubversiva contra el enemigo absoluto y la del diálogo político con el enemigo ético (Gómez, 2016).

En el presente capítulo nos concentraremos en este último período, que es el que propiamente atañe a nuestra pregunta de investigación. En la introducción a esta tesis argumentamos que este ciclo se caracterizó por transformaciones profundas en las dimensiones política, económica y social. A continuación profundizaremos en este argumento, enfatizando, primero, los cambios políticos (apartados 1 y 2), para después abordar las transformaciones económicas (apartado 3) y, finalmente esbozar la dimensión del auge de la movilización social (apartado 4). Con esto dejaremos sentadas las bases contextuales necesarias para profundizar en la mirada hacia los actores sociales en los capítulos 3 y 4.

Para cumplir con este objetivo, en primer lugar, situaremos a Colombia en el contexto latinoamericano, analizaremos las particularidades de su proceso de democratización y definiremos el papel que allí cumple el proceso de paz. En segundo lugar, con el auxilio de las herramientas analíticas desarrolladas en el capítulo 1, estudiaremos el cambio en la estructura de oportunidades políticas a nivel nacional para comprender la *dimensión política* del ciclo bajo examen. En tercer término, exploraremos las dinámicas del régimen de acumulación extractivo, también dentro del contexto latinoamericano, para entender la *dimensión económica*. Finalmente abordaremos la

²⁶ Procesos de paz con otras organizaciones insurgentes, como veremos más adelante, fueron llevados a feliz término.

dimensión social, para lo cual ilustraremos las nuevas dinámicas de la acción colectiva mediante datos agregados, abriendo así el horizonte reflexivo hacia el tipo de conflictos en que se encuentran implicados el Movete y el COA.

2.1.Colombia en el contexto latinoamericano: democracia oligárquica y violencia

El arribo del siglo XXI trajo altas expectativas económicas y políticas para América Latina. En perspectiva planetaria, se había terminado el siglo de las grandes crisis económicas, de las guerras mundiales y de la guerra fría. En el contexto regional se terminaron los regímenes dictatoriales y se superó la llamada “década perdida”: se había producido una transición a la democracia que fue acompañada de sendas reformas económicas e institucionales que pretendían modernizar las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, al mismo tiempo el subcontinente atravesaba por un momento de inestabilidad política especial. Las insuficiencias del programa democratizador y los agravios producidos por las reformas de mercado agitaron la movilización y la protesta social en contextos de crisis. Venezuela con el Caracazo, México con el zapatismo, Ecuador y Argentina con los corralitos y Bolivia con las guerras del gas y del agua son buenos ejemplos, aunque no los únicos (Almeida y Cordero Ulate, 2010).

En este sentido, el momento histórico entrañaba grandes posibilidades, pero también hondas contradicciones. Pérez Liñán (2008) explica que, tras la “tercera ola democratizadora” en América Latina, el subcontinente había experimentado de modo creciente la paradoja de democracias estables con gobiernos inestables. La inestabilidad política ya no estaba asociada, como antes, a la oscilación entre regímenes democráticos y autoritarios: desde fines de los años 80 comenzaron a caer presidentes de modo sucesivo, sin que los regímenes democráticos se fueran tras ellos. Según la información recopilada por el autor, si se sumaban las caídas de los presidentes y de sus respectivos sucesores, la cifra de gobernantes removidos o forzados a renunciar, ascendía a 20 para el período 1985-2005.²⁷

²⁷ Presidentes: Hernán Siles Zuazo (Bolivia, 1985), Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Fernando Collor de Mello (Brasil, 1992), Jorge Serrano (Guatemala, 1993), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Abdalá Bucaram Ortiz (Ecuador, 1997), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999), Jamil Mahuad (Ecuador, 2000), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003), Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005) y Jean Bertrand (Haití, 1994 y 2004). Vicepresidentes o sucesores de los presidentes derrocados: Valentín Paniagua (Perú, 2001), Alberto Rodríguez Saá (Argentina, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Carlos Mesa (Bolivia, 2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (Bolivia, 2006).

Con este telón de fondo y con la promesa de responder a tales problemas (inestabilidad política, deudas del programa democratizador y fracasos de las reformas de mercado) aparecieron en escena los llamados gobiernos progresistas del “giro a la izquierda”. No sin dificultades tales gobiernos tuvieron un éxito relativo, al menos en la primera década, sobre todo en los indicadores ligados a la inclusión y el bienestar social. Estos resultados estuvieron relacionados con un ciclo económico internacional favorable que supuso una evolución positiva y extraordinaria de los términos de intercambio: *el súper ciclo de las materias primas o boom de los commodities* (Arditi, 2009; Torrico, 2017).

Dentro de los años siguientes, comenzó el fenómeno de los llamados “golpes blandos” (institucionales, legislativos, judiciales, parlamentarios) y fueron derrocados cuatro presidentes más: Manuel Zelaya de Honduras (2009), Fernando Lugo de Paraguay (2012), Dilma Rousseau de Brasil (2015) y Evo Morales de Bolivia (2019).²⁸ A su vez, fueron intentados, al menos, dos golpes de Estado, uno contra Rafael Correa de Ecuador en el año 2010 y otro contra Nicolás Maduro de Venezuela en el 2019. Tales hechos han coincidido con un giro ideológico en los gobiernos de la región, que ha sido definido como un “giro a la derecha”, pues las nuevas posiciones de gobierno han sido tomadas por líderes políticos defensores de programas neoliberales alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Estos líderes han sido, en unos casos más conservadores y en otros más liberales, pero en todo caso críticos de los gobiernos progresistas y ortodoxos en su comprensión de la política económica y social.²⁹

Esta historia, como fue planteado, comenzó con sendos procesos de acción colectiva que, además, dieron lugar a lo que Santos (2010) denominó “la refundación del Estado en América Latina”: nuevas instituciones y constituciones como las de Ecuador y Bolivia que reinventaron, con base en los horizontes cognitivos de los movimientos sociales, las nociones de Estado-nación, ciudadanía, democracia, o derechos. De esta manera buena parte del movimiento telúrico que

²⁸ Por fuera de este período, en el año 2018, renunció el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por el escándalo de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. A diferencia de los tres casos mencionados, en este caso no se trató de una remoción o destitución propiamente dicha. Sin embargo, debe considerarse que su renuncia fue una consecuencia obligada de la presión judicial, política, mediática y social desatada por la indignación del pueblo peruano.

²⁹ Como se puede leer en el párrafo, estos fenómenos son fundamentales para comprender los nuevos problemas políticos latinoamericanos, y también son coincidentes en el tiempo. Sin embargo, al tener cada uno especificidades complejas, somos cuidadosos al no plantear relaciones de causalidad entre, por ejemplo, los “golpes blandos” y “el giro a la derecha”.

inauguró este ciclo se integró a un experimentalismo institucional en medio de un contexto en el que las más crudas facetas del proyecto de apertura económica parecían haber quedado atrás.

Sin embargo, América Latina parece experimentar un reflujo, las experiencias progresistas van quedando atrás y los actuales gobiernos enfrentan renovados procesos de acción colectiva que persisten en agendas antineoliberales, campesinas o indígenas, y que al mismo tiempo potencian proyectos que recientemente han adquirido dimensiones planetarias, como el feminismo o la lucha ambiental. Adicionalmente, las movilizaciones contra el extractivismo, los conflictos socio-ambientales y las luchas en defensa del territorio ocupan un rol protagónico en la región. En este sentido, para el caso latinoamericano, Svampa (2019) se ha referido a un *giro ecoterritorial con nuevos lenguajes de valoración* y Zibechi (2017) a “*una nueva fase de los movimientos que coincide [y responde] a la hegemonía extractivista*” (p. 22).

En un contexto tal, situar el problema de la democracia y la movilización social en Colombia supone precisar los principales rasgos que la convierten en un caso atípico dentro de las tendencias socio-políticas predominantes del contexto latinoamericano. A continuación, enunciaremos siete características diferenciales que nos ayudarán a entender la cuestión de la democratización en este país y, consecuentemente, aquello que está en juego dentro del ciclo político estudiado.

Se trata de un país que, en el desarrollo del siglo XX: i) no tuvo dictaduras militares desde el año 1957 hasta el día de hoy ii) no atravesó, en consecuencia, por un proceso de transición a la democracia desde un Estado burocrático-autoritario iii) no experimentó la llegada al poder de ninguna experiencia democrático-popular que desafiara a las élites bipartidistas iv) tuvo una experiencia limitada de Estado desarrollista (industrialización por la vía de sustitución de importaciones acompañada de política social expansiva).

Por otro lado, ostenta particularidades en que han marcado su trayectoria dentro del siglo XXI: v) No alcanzó el poder político ningún proyecto que confrontara las políticas de libre mercado en función de la redistribución del ingreso y la riqueza social, un proyecto, en tal sentido, análogo al denominado “progresismo latinoamericano” vi) Ha gozado de una relación privilegiada con Estados Unidos, constituyéndose en aliado clave para el desarrollo de su política internacional en América Latina y en receptor de su intervención ideológica, económica y militar a través de

programas como *El Plan Colombia*³⁰ vii) Soportó la existencia de dos ejércitos insurgentes de alcance nacional, el ELN y las FARC-EP, hasta 16 años después de iniciado el siglo y, por tanto, pervivió dentro de la gramática política de la guerra fría, aún 25 años después de terminada.

Con estas consideraciones en mente, a continuación, revisaremos la cuestión de la democratización en Colombia para después examinar, dentro de este marco, el cambio de la estructura de oportunidades políticas en el período 2010-2018. Así, en la segunda parte del capítulo, podremos entender mejor las condiciones del conflicto político que se acompañan, de un lado, de transformaciones económicas orientadas a la ampliación de la frontera extractiva y, de otro lado, del auge de la movilización social en general, y de la movilización-socio-territorial en particular.

2.1.2. El problema de la democratización en Colombia

En su trabajo clásico sobre las transiciones a la democracia en América Latina, Guillermo O'Donnell (1989) plantea que los casos de Venezuela y Colombia “son excepcionales en un aspecto significativo (...): son los únicos casos latinoamericanos de democratización política cuidadosamente pactada” (p. 18). Sin embargo, más allá de tímidas referencias como esta y de un capítulo dedicado a la cuestión venezolana, su trabajo y el de los investigadores de la llamada “transitología”, carece de una mirada profunda acerca de la cuestión democrática en dos de los países más grandes y mayormente poblados de América del sur. Esta consideración, desde luego, conecta muy bien con las críticas que se hicieron a tal enfoque por la “surconización” a partir de la cual se extendían, sin mucha precaución, los análisis sobre la democratización en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil al resto del continente (Orjuela, 2003).

Efectivamente, utilizando la metáfora de Huntington (1996), la venezolana y la colombiana, así como la costarricense, son democracias que no llegaron con la *ola* que conmovió los estudios politológicos en América Latina: la tercera (1974-1991). Estas democracias, reconocidas como las más antiguas y estables del continente, en el esquema de Huntington (1996), hacen parte de la *segunda ola* (1945-1960). Esta condición histórica, además de haber restado interés para su estudio en medio de la efervescencia “transitológica”, ha tenido dos efectos importantes: i) La suposición

³⁰ El Plan Colombia fue un programa de ayuda militar de Estado Unidos, que se consolidó bajo la figura de acuerdo bilateral en el año 1999, convirtiendo a Colombia en el tercer país del mundo depositario de este tipo de cooperación bélica (después de Egipto e Israel). El propósito fue fortalecer la guerra contra las drogas, primero, y la guerra contra el terrorismo, después mediante un apoyo de más de nueve mil millones de dólares (Vega Cantor, 2015).

de que la antigüedad es sinónimo de estabilidad y consolidación y, en consecuencia, ii) El análisis insuficiente de una de las más paradójicas experiencias democráticas de la región: una que, de un lado nace a través de un pacto oligárquico y que, de otro lado, quizá como fenómeno inédito en el mundo occidental, convivió durante más de cincuenta años con la guerra civil.

En este orden de ideas, la ausencia de dictaduras militares prolongadas, la tradición santanderista –legalista³¹ de sus élites e importantes innovaciones institucionales como la Constitución de 1991, han convivido con tres realidades inobjtables: i) Colombia, históricamente, es uno de los países más violentos del mundo occidental, de suerte que el conflicto armado y el narcotráfico le han legado, a) el mayor número de desplazados internos del planeta tierra (ACNUR, 2017) b) más desaparecidos que la suma de todos los desaparecidos de las distintas dictaduras del cono sur (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), c) un genocidio político por medio del cual se exterminó físicamente un partido político de oposición (Cepeda, 2006)³²; ii) Colombia es uno de los países más desiguales del planeta³³; iii) Vastos territorios del país se han desarrollado bajo la jurisdicción de actores ilegales tales como guerrillas y paramilitares, o de actores no estatales como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Se trata, pues, según el conocido trabajo de Santos y García (2001), de una realidad “caleidoscópica”, definida como “el revés del contrato social de la modernidad” (p. 11).

2.1.3. La democratización del régimen político colombiano en cuatro etapas.

Un escenario tal, definido por la alta concentración del poder político y económico, en un contexto de violencia insurgente, estatal y paraestatal, dio lugar a la configuración de un régimen híbrido marcado por cuatro etapas en el proceso de democratización que pueden visualizarse en la Figura 3: i) El pacto del *Frente Nacional*, con el que se cierra el período de *La Violencia* ii) La

³¹ Francisco de Paula Santander (1772-1840) fue uno de los generales de la guerra de independencia de Colombia, así como uno de sus primeros presidentes. Se le conoce como “El Hombre de las Leyes” por haber sido férreo defensor de un modelo republicano en el que el respeto a la ley fuera la primera garantía de la libertad y la justicia. Así lo plasmó en el famoso aforismo que decora la fachada del edificio de la Corte Suprema de Justicia colombiana: “colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. En este sentido, el adjetivo “santanderista” se utiliza para calificar a alguien como “legalista”, “formalista” o “apegado a la ley”.

³² Los datos al respecto pueden consultarse en: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Área de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica.

³³ Véanse los datos sobre desigualdad del Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/income-distribution>

reforma política de 1968, que se hace efectiva en 1974 y que clausura formalmente el Frente Nacional, permitiendo que partidos políticos diferentes al liberal y al conservador ingresaran a la contienda electoral iii) Los procesos de paz de comienzos de los 90 y la Constitución Política de 1991, que bajo la fórmula jurídico-política del “Estado social de derecho”, consagró nuevos principios, derechos y garantías ciudadanas al lado de mecanismos democráticos encaminados al establecimiento de una democracia participativa, iv) El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Veamos.

En 1958, tras la guerra civil bipartidista conocida como *La Violencia* y después de una dictadura militar erigida para conjurar tal crisis, se instauró el *Frente Nacional*. Con él nació, según la historiografía oficial, la democracia colombiana. Se trató de un pacto entre las élites de los partidos conservador y liberal mediante el cual, con el propósito de terminar la dictadura militar y de conjurar la violencia que ensangrentaba al mundo rural, acordaron turnarse durante dieciséis años la presidencia de la república y repartirse, de modo paritario, los cargos públicos y la representación en los organismos de elección popular.³⁴ Para legitimar el pacto fue convocado el primer plebiscito de la historia del país que, a pesar de la complejidad jurídica y política de la boleta, así como de las altas tasas de analfabetismo de la época, fue aprobado por una aplastante mayoría (Melo, 2017).³⁵

En 1974 terminó la etapa formal del *Frente Nacional* y el sistema político se abrió a otras fuerzas políticas que habían sido excluidas de la competencia por el pacto bipartidista. Sin embargo, los legados autoritarios del *Frente* y las restricciones institucionalizadas para la competencia electoral en condiciones de transparencia y equidad, seguían operando como lastres del régimen político. Aun así, el sistema político se abrió un tanto más, y se impulsaron durante

³⁴ Durante este pacto, el desarrollo de sus formas jurídicas estuvo acompañado por acuerdos políticos garantizaban poder y estabilidad a los militares que habían gobernado durante la dictadura. Al comienzo del Frente Nacional se dio una división del trabajo estatal entre el gobierno y los militares: aquellos no intervenían en asuntos militares y estos no participaban en política. Por otro lado, el constante abuso de los estados de excepción (figura jurídica que permitía suspender la normalidad constitucional), permitió a los militares ejercer funciones administrativas y judiciales sin la necesidad de tomar el poder (García, 2000).

³⁵ En total fueron 4'169.294 votos en favor del ‘Sí’, contra 206.654 en favor del ‘No’ y 20.738 votos en blanco. Véase el sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde para explicar el plebiscito se establece: “Se votó una reforma constitucional contenida en catorce (14) artículos establecidos en el Decreto Legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957, entre ellas el reconocimiento de derechos políticos a las mujeres (artículo 1º) y la instauración del Frente Nacional. ‘En las elecciones populares que se efectúen para elegir corporaciones públicas hasta el año de 1968 inclusive, los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral se adjudicarán por mitad a los partidos tradicionales, el conservador y el liberal (...)’ (Artículo 2º) y la restricción de la posibilidad de que la Constitución fuera reformada por un órgano diferente al Congreso de la República (artículo 13), entre otros importantes temas”.

este período reformas democráticas, como, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores (Duque Daza, 2017).³⁶

Hasta este momento, las dos reformas enunciadas habían significado procesos de *transición con democratización frustrada en un contexto de violencia* (Duque Daza, 2017). En consecuencia, posteriormente vendrían dos grandes esfuerzos de reforma que, además de reformas institucionales profundas, estarían acompañados de procesos de paz. Con esto se buscaba no sólo optimizar las condiciones normativas en las que se desarrollaba la disputa y el ejercicio del poder político, sino también, establecer las condiciones normativas que hicieran esto posible dentro de un marco democrático: la paz.

Primero tuvo lugar el proceso constituyente de 1990-1991, en medio de un contexto en el que se adelantaron, entre 1990 y 1994 procesos de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).³⁷ Con este telón de fondo, más un fuerte proceso de movilización ciudadana de sectores urbanos, nació la Constitución de 1991. Se trató de una Constitución de inspiración progresista en términos del reconocimiento de una amplia gama de derechos (fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos) y de mecanismos para su protección (acciones judiciales y tribunales especiales como la Corte Constitucional). Adicionalmente, dentro de las grandes innovaciones que la nueva Carta trajo en materia de régimen político se encuentran: i) La definición del país como una República democrática y *participativa* (Art 1º) ii) El principio de que la soberanía *reside exclusivamente en el pueblo* (Art 3º) iii) La consagración de mecanismos de participación popular como *el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato* (Art 103).

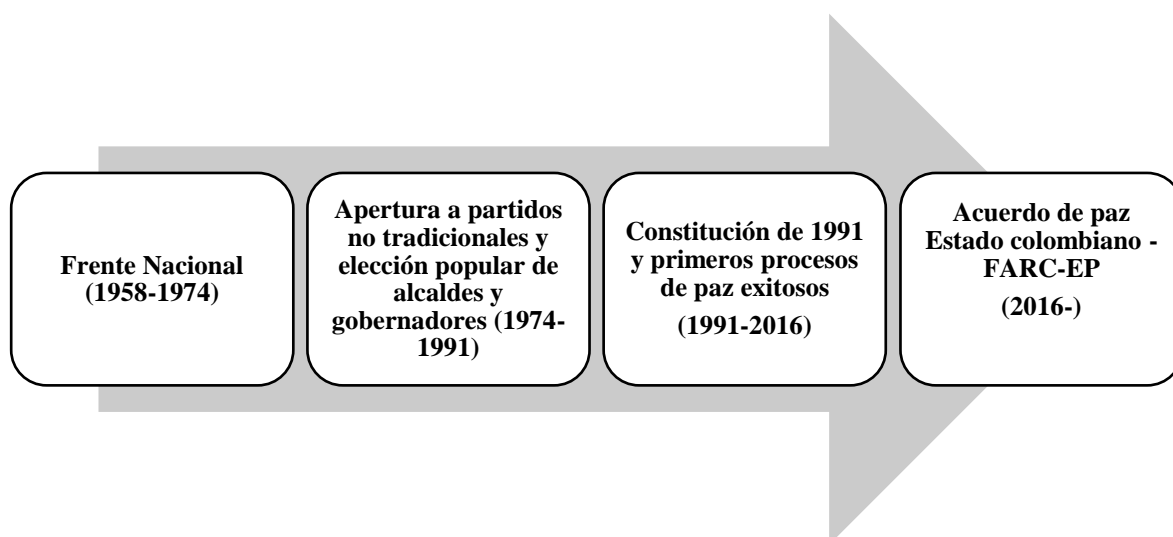
Tres décadas después, y tras tres intentos fallidos, vino el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP de los años 2012-2016, que culminó con un Acuerdo de más de 300 páginas integrado por sendas reformas institucionales, además de planes, programas y proyectos

³⁶ Los gobernadores y alcaldes son los jefes de gobierno, respectivamente, de los departamentos y las ciudades en Colombia. Antes de la reforma que se comenta de 1986, tales funcionarios eran electos por el Presidente de la República.

³⁷ Se trataba de guerrillas que, por una parte, se inspiraban en la tradición de las poderosas insurgencias mencionadas el comienzo de este capítulo, o que, por otra parte, representaban proyectos y naturalezas divergentes, como el M-19 inscrito en una matriz nacional-popular, y el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame de tipo indígena.

para consolidar la paz en los territorios. El segundo capítulo de tal documento se tituló “*Participación política: Apertura democrática para construir la paz*” y tuvo un apartado dedicado al fortalecimiento de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. En el siguiente apartado nos detendremos en el examen de esta última etapa.

Figura 3. Etapas de la democratización del régimen político colombiano



Fuente: Elaboración propia.

La paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP como impulso democratizador

Para una mejor comprensión del significado que ha tenido la cuestión de la paz en este ciclo político, y para delimitar categorías analíticas que será importante diferenciar a la hora de comprender la experiencia política del Movete y el COA, a continuación, vamos a precisar a qué nos referimos cuando hablamos de *transición a la paz*, *acuerdo de paz*, *proceso de paz* y *paz*, dentro de la más amplia trayectoria descrita de la democratización del régimen político colombiano.

La *transición a la paz* en Colombia es un proceso histórico que se remonta, al menos, a la tercera etapa de la democratización del régimen político colombiano anteriormente aludida. Es

decir, al período en que se adelantaron los primeros procesos de paz exitosos con el M-19, la CRS, el PRT, el MAQUL y el EPL, y un proceso constituyente liberal-progresista que culminó con la Constitución Política de 1991. La *transición a la paz* así entendida, supone que el *Acuerdo de Paz* entre el Estado y las FARC-EP, constituye un eslabón más que actualiza un proceso histórico que aún sigue su curso.

El *Acuerdo de paz* entre el Estado y las FARC-EP, conocido oficialmente como el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el producto de un *proceso de paz* adelantado entre estos dos actores que, a su vez tiene al menos tres fases: i) Una *etapa clandestina* en la cual se adelantaron los primeros acercamientos entre las partes durante los años 2010-2012 ii) Una *etapa pública*, en la cual se instaló y funcionó una Mesa de negociaciones en Oslo y la Habana encargada de desarrollar una agenda de negociaciones previamente pactada entre los años 2012-2016 iii) Una *etapa de implementación* de tipo normativo y socio-territorial que consiste en llevar los acuerdos alcanzados, del mundo de lo programático, al mundo de la eficacia institucional y socio-territorial. En esta última fase nos encontramos.

La *paz* es una meta social en disputa y, por tanto, un concepto problemático en el contexto de los procesos de paz en Colombia. Al respecto existen diversas representaciones sociales y políticas que, como veremos en el capítulo 4, corresponden a horizontes ético-políticos diversos y, en todo caso, esenciales para comprender el sentido de la acción social en los procesos de acción colectiva. En este sentido, en Colombia se ha dado un profuso debate que dio lugar a un fenómeno similar al que se produjo con los debates acerca de los procesos de democratización en América Latina. En este caso se trató, no de la *democracia con adjetivos* sino de la *paz con adjetivos*: positiva, negativa, imperfecta, completa, extractiva, ambiental, con justicia social, para la vida digna, con legalidad, sin impunidad, total, transformadora, participativa, jurídico-social, territorial, entre otros.³⁸

³⁸ Estos diferentes adjetivos provienen del debate público y académico que se ha dado alrededor del proceso de paz en Colombia. Las conceptualizaciones han aparecido en columnas de opinión, foros universitarios, debates públicos, conferencias y artículos académicos. Tale conceptos, sin embargo, no son privativos de la discusión colombiana, muchos de ellos provienen de la tradición de estudios internacionales de paz. Por ejemplo, las nociones de *paz positiva*, *negativa e imperfecta* son estudiadas, bajo esta perspectiva, por Harto de Vera (2016). En la discusión colombiana, fue central el concepto de *paz territorial* postulado inicialmente Sergio Jaramillo (2014) -Comisionado de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos- y apropiado después por diversos movimientos sociales como veremos en el capítulo 4. Diversas organizaciones sociales y políticas colombianas de orientación progresista reivindicaron una idea recurrente en el debate nacional sobre la paz, la de la *paz con justicia social* (Marcha Patriótica, 2019). Otras organizaciones sociales y actores académicos han definido la idea de la *paz ambiental* (Rodríguez, Franco y Crane, 2017), la *paz*

Por ahora, para ofrecer una primera aproximación con base en las nociones referidas (ver nota al pie número 14), proponemos la siguiente clasificación para ubicar al lector: i) La paz consiste en la estabilidad institucional acompañada de la ausencia de confrontación armada a nivel macro-político (*noción procedimental*) ii) La paz y la justicia social con conceptos inescindibles (*noción sustantiva*) iii) La paz supone la articulación prevalente de consensos para el desarrollo económico, político y social del país (*noción funcional*) iv) La paz consiste en el reverdecimiento de los conflictos sociales que, o bien fueron negados por el conflicto armado, o bien fueron canalizados por vías violentas (*noción conflictual*).

De cualquier manera, la *paz* refiere a un estadio histórico en potencia, que es la meta última del proceso histórico de *transición a la paz* y que se fortalece, en tanto potencia y proyecto, con el *acuerdo de paz*. Esta conceptualización permite entender por qué son problemáticas aquellas posiciones, absorbidas por el razonamiento coyuntural, que pretenden desvirtuar el *acuerdo de paz*, por considerar que la *paz* no existe como fenómeno actual, o que diversos fenómenos violentos persisten (asesinato de líderes sociales, exclusión socio-económica, carteles del narcotráfico, corrupción, etc.).

El acuerdo de paz y la democratización

El conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC-EP ha condicionado de modo definitivo el rumbo de la vida pública colombiana durante la última mitad de siglo XX y lo que va del XXI: la estructuración de la economía y del presupuesto nacional, la formación de alianzas y coaliciones políticas, la relación entre el Estado y los movimientos sociales, los marcos narrativos que dan forma a la opinión pública, la garantía de los derechos humanos, la estructura productiva del campo, entre otras variables esenciales en la configuración social, política, económica y cultural del país, que han sido impactadas de modo determinante por la lógica de la guerra (Melo 2017).

Las consecuencias fueron catastróficas y sumamente paradójicas respecto de la prédica de la estabilidad democrática en Colombia: la convivencia de la democracia con la guerra civil. De

transformadora (Quintana, 2016) y *participativa* (Ramos, 2016), la *paz jurídico-social* (Quintana, 2016) o denunciado la propuesta de una *pax extractiva* (De los Ríos, 2016). Al mismo tiempo, líderes de opinión, abrevando de lo que se ha planteado por diversos actores sociales y territoriales, propusieron la idea de una *paz para la vida digna* (Sandoval, 2013), *paz total y definitiva* (Cepeda, 2019) o una *paz completa* (Ramírez, 2017). Por su parte, los actores políticos que ejercieron oposición activa al proceso de paz, han planteado la defensa de una *paz sin impunidad* (Gómez, 2017), según los discursos públicos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o una *paz con legalidad*, según la propuesta institucional del presidente Iván Duque Márquez (2018).

acuerdo a cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013), la suma de todos los desaparecidos en Colombia por efectos del conflicto es superior a la suma de todos los desaparecidos dejados por las distintas dictaduras del cono sur; y según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (2017) –ACNUR-, con 7,4 millones de seres humanos, en su inmensa mayoría campesinos pobres, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del planeta tierra.

En este orden de ideas, además de los efectos inmediatamente vinculados a la guerra (homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas, violaciones, masacres, etc.), el conflicto ha frustrado las aspiraciones de *democratización* de la sociedad colombiana en, al menos, dos sentidos: i) la violencia ha acentuado la exclusión social, militarizando el debate público y bloqueado reformas sociales fundamentales, como por ejemplo, la relativa a la democratización de la tierra, ii) de modo complementario, la violencia ha perpetuado la exclusión política, impidiendo la participación y el acceso a la instancias de decisión y representación a los actores sociales subalternos, hasta el punto de haberse producido un genocidio político: el exterminio físico de la Unión Patriótica.³⁹

En consecuencia, la desaparición progresiva del conflicto armado, abre nuevas posibilidades históricas para el desencadenamiento de procesos sociales e institucionales que contribuyan a la profundización del proceso democrático. De esta manera, el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” alcanzado por el Estado colombiano y las FARC-EP al término del período de negociaciones en la Habana, es un documento de 310 páginas organizado en torno a 6 puntos: i) Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral ii) Participación política: Apertura democrática para construir la paz iii) Fin del Conflicto iv) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos vi) Implementación, verificación y refrendación.

³⁹ Sobre las causas del conflicto, las razones de su persistencia y sus efectos, véase el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), conformada por expertos en el estudio de la violencia en Colombia en el contexto de la mesa de diálogos de la Habana. Aunque allí convergen miradas plurales, unas más cercanas al estructuralismo, otras al constructivismo y otras al individualismo metodológico, existe un consenso razonable sobre lo aquí defendido acerca de los efectos del conflicto.

Tales puntos obedecen a una agenda previamente pactada que se construyó con el propósito de llegar a acuerdos, no solamente sobre el estatus y las garantías de los actores en conflicto (cómo desarmarse, en dónde concentrarse, bajo qué sistema ser juzgados, con qué beneficios y garantías, etc.); adicionalmente, era una agenda que tenía como objetivo desestructurar las causas sociopolíticas de la guerra o los factores sociopolíticos que determinaron su persistencia.⁴⁰ Y estos, procediendo a través de una simplificación excesiva, pueden resumirse en dos:

i) *Causas políticas*: exclusión de múltiples actores sociales subalternos de las posibilidades efectivas de participar en el sistema político, tomando parte en las decisiones que los afectan. Esto es, existencia de un sistema político cerrado, con déficits democráticos expresados en problemas de representatividad, centralismo y persecución a la disidencia política ii) *Causas socio-económicas*: exclusión social y económica de las comunidades rurales a partir de la consolidación del gran latifundio, de la desestructuración de la economía campesina, de la ausencia de política social y de bienestar en el mundo rural, y con ello, de la marginación de pequeños y medianos campesinos obligados a sobrevivir mediante el cultivo de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilegal.

En otras palabras, el *Acuerdo de paz no* es uno de tipo liberal limitado al desarme, la designación de un tribunal especial y la elección de una comisión de la verdad (Franzki & Olarte, 2013). Se trata de un Acuerdo (2016) que promete, “la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia” (p. 6), “la transformación estructural del campo colombiano de modo que se garanticen condiciones de bienestar y buen vivir para las comunidades campesinas” (p. 7) y “ampliación y profundización de la democracia” (p. 7), entre otras transformaciones profundas. Y para ello pone el foco en los campesinos (punto 1 sobre reforma rural integral), en las comunidades étnicas (capítulo étnico), en las víctimas (punto 5 sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición), en las mujeres (enfoque de género) y, en la sociedad civil en general, por medio de un ingente programa normativo de reformas, planes, programas y proyectos.

En síntesis, a la luz de los anteriores argumentos, el *Acuerdo de paz* puede ser entendido como un proyecto de *democratización* de la sociedad colombiana que persigue el objetivo

⁴⁰ Nos referimos, de modo específico, al “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (2012), firmado por las partes en febrero de 2012 en medio de la fase exploratoria del proceso de paz, en el que se comprometen a: “i) Iniciar una mesa de diálogo, ii) Desarrollar una agenda en torno a los temas que aquí se comentan y iii) Hacer esto en el marco de unas determinadas reglas de funcionamiento de la mesa”.

fundamental de que las diferencias políticas sean tramitadas i) institucional o extra-institucionalmente, pero, en todo caso, al margen de las armas ii) en condiciones de equidad y bienestar para los más excluidos. A la luz de las anteriores consideraciones, en Colombia, la transición a la paz y la democratización son dos convergentes.

2.2. El cambio de la estructura de oportunidades políticas a nivel nacional

Como fue argumentado con Tilly (1998) en el capítulo 1, las oportunidades políticas y la democratización son dos dimensiones de un mismo problema. Por esta razón la trayectoria de evolución democrática, previamente descrita, está sostenida en las variables de la EOP: procesos de apertura del sistema político formal, rupturas y realineamientos al interior de las élites, cambios en la estructura de alianzas y alteraciones en los niveles de represión a la disidencia política y social. Ahora bien, como nuestro trabajo se ocupa del ciclo 2010-2018, es en este período en el que vamos a analizar tales factores de manera más específica.

En la introducción a este trabajo habíamos argumentado que la *dimensión política* de este ciclo podría ser comprendida a partir del cambio en la EOP y del proceso de paz. Este último, decíamos, es consecuencia del cambio en la EOP y, además, profundiza sus implicaciones. A continuación, nos proponemos esclarecer en qué consistió dicho cambio, y para ello nos moveremos en los dos niveles de la EOP propuestos estudiados en nuestro capítulo teórico: el estructural y el coyuntural.

Así, en primer lugar, en el nivel *estructural*, revisaremos los ejes estables y permanentes del régimen político colombiano, utilizando las dimensiones analíticas propuestas por Favela (2002). En segundo lugar, en el plano *coyuntural*, examinaremos los cambios de las variables propuestas por McAdam (1999) durante el ciclo político 2010-2018. Así, nos encontraremos con una realidad móvil y contradictoria. Se trata de un contraste muy bien explicado por García Villegas (2014) y Valencia Villa (1987) para el contexto colombiano: el de un mundo del *deber ser* normativo republicano, y un mundo del *ser* social turbulento. El producto de ello, como se argumentará, es la existencia de una *estructura de oportunidades políticas relativamente abierta*.

2.2.1. Las oportunidades políticas a nivel estructural

El más drástico cambio que vivió Colombia en este nivel fue el determinado por la tercera etapa del proceso de democratización. La Constitución de 1991 representó un gran avance en el propósito de alcanzar mayores niveles de descentralización política, sustituyendo la Constitución de 1886, que llevaba más de cien años de vigencia, y que reflejaba una concepción conservadora y autoritaria del Estado. En este sentido, veremos que las dos variables de tipo constitucional-formal propuestas por Favella (2002) en este nivel son, según su modelo, favorables a la acción contenciosa de los movimientos sociales. Entretanto, las dos variables de tipo constitucional-real arrojan resultados más problemáticos.

Distribución institucional del poder entre las ramas y niveles de gobierno (centralización vs descentralización)

La estructuración de la relación Estado/ territorio: La Constitución de 1886 definía al Estado como República unitaria (artículo 1°), mientras que la Constitución de 1991, tras sentenciar que el Estado colombiano se organiza en forma de “República unitaria”, agrega que esta debe ser “descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”.

La estructuración de la relación entre el Estado y sus componentes -división de poderes, pesos y contrapesos y accountability horizontal-: La Constitución de 1991 incorpora una serie de innovaciones institucionales sobre las cuales se venían adelantando desarrollos importantes en el campo del derecho constitucional y de la ciencia política: la existencia de una división de poderes clásica combinada con mecanismos de rendición de cuentas o de *accountability horizontal*. Dentro de estos se destaca el protagonismo de una Corte Constitucional que ejerce un control constitucional fuerte sobre las decisiones del ejecutivo y del legislativo.

La estructuración de la relación Estado/sociedad -participación ciudadana y accountability societal-: Adicionalmente, la Constitución Nacional consagra una serie de mecanismos de participación ciudadana (referendo, consulta popular, plebiscito, cabildo abierto, iniciativa popular legislativa, revocatoria del mandato) y de protección de derechos (acción de

tutela, acción popular, acción de grupo) que abren paso al *accountability societal* y a otras formas de agregación de preferencias que derivan en diversos *inputs* dentro del Estado.

Sistema electoral y de partidos (proporcional vs mayoritario)

En Colombia, el Congreso de la República es de tipo bicameral. Está conformado por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes. El Senado se integra por cien miembros elegidos en circunscripción nacional (más dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas).⁴¹ La Cámara se elige en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales⁴². De acuerdo al artículo 176 de la Constitución Política, cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conforma una circunscripción territorial. Se eligen “dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000”.⁴³ Como resultado en Colombia hay distritos pequeños (mayores a dos pero menores a cinco), medianos (de cinco a diez) y grandes (mayores a diez). El umbral electoral es de tres por ciento de votos válidos para el caso del Senado y cincuenta por ciento del cociente electoral para el caso de la Cámara de Representantes.

Se trata entonces de un sistema de representación proporcional para distritos electorales plurinominales (en el Senado existe un único distrito, el nacional; y en la Cámara existen, en esencia, tantos distritos como departamentos hay en el país). Esto permite una influencia predominante de los partidos mayoritarios acompañada, en todo caso, de una representación razonable de partidos minoritarios, pero con apoyo electoral.

Sistema de representación de los intereses (corporativo vs pluralista)

En el ámbito de los intereses sociales relacionados con los sectores ciudadanos, comunitarios y productivos que protagonizan los procesos de acción colectiva en Colombia, la representación de

⁴¹ Artículo 171 de la Constitución Política.

⁴² Al inciso cuarto del artículo 176 de la Constitución Política prescribe: “Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior”.

⁴³ Artículo 176 de la Constitución Política.

intereses agenciada por grandes plataformas con capacidad de interlocución con el Estado es plural, pero también deficitaria. A diferencia de los casos clásicos de corporativismo en América Latina, como México durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (Favela, 2002), en Colombia no han existido, en tanto fenómeno generalizado, estructuras de agregación altamente comprehensivas que se arroguen la representación oficial de un amplio conjunto de sectores sociales.⁴⁴

En este sentido, no existe un “sistema monopolizado y centralizado de representación de los intereses” (Favela, 2002). Más bien, se da el caso de un *pluralismo infrarrepresentado* combinado con la presencia de algunas plataformas sociales, sindicales o gremiales que intentan suplir este déficit. En el mundo sindical, por ejemplo, son relevantes la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Nacional de Educadores de Colombia (FECODE). Muchas de estas plataformas aparecieron en un contexto en el que los intereses de trabajadores y campesinos eran cooptados por los partidos tradicionales.

Dentro de sectores ciudadanos y comunitarios, se presenta una estructura mucho más inestable y cambiante. Las plataformas, movimientos, organizaciones, cumbres, frentes, entre otras formas de agregación política de la sociedad civil, no han tenido la estabilidad o permanencia en el tiempo que, por ejemplo, sí han tenido las centrales obreras previamente mencionadas. En el ciclo político 2010-2018, por ejemplo, se han destacado nuevos sujetos y formas de movilización, dentro de los cuales resaltan la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Dignidad Agropecuaria, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica. Sobre esto volveremos más adelante al analizar *la dimensión social* de este ciclo.

⁴⁴ Para el caso de los intereses relacionados con la acumulación de capital la reflexión sería distinta. Allí existe un esquema mucho más comprehensivo, cohesionado y estable de organizaciones gremiales y empresariales dispuestas para la negociación política. Dentro de las primeras son paradigmáticos los casos de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO) o la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (FEDEGAN). Dentro de las segundas son determinantes, en la vida nacional, el Grupo Ardila-Lule, el Grupo Aval o el Grupo Empresarial Antioqueño.

Leyes e instituciones relacionadas con la vigilancia y el control de las protestas (facilitadoras vs represivas)

Como lo enfatiza Kriesi (1995, p. 173), “la relación de las autoridades con respecto a la protesta es determinada, no sólo por la estructura institucional formal, sino también por los procedimientos informales y las estrategias típicamente empleadas”. Para el caso colombiano esta diferenciación es especialmente sensible, pues el país se enfrenta a la existencia de una Constitución garantista, regionalmente reconocida por sus avances en materia de conceptualización y protección de derechos fundamentales (la libertad de expresión, de asociación y manifestación dentro de ellos); y al mismo, tiempo a la presencia de una predisposición represiva que es sucedánea de la lógica que orientó la doctrina militar estatal en el combate a las insurgencias armadas, la del enemigo interno (Vega Cantor, 2015).

Una expresión de esto es la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa y la existencia, dentro de ella, de un cuerpo armado como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) teniendo, dentro de sus principales funciones, “Aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, multitudes, desbloques de vías y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, con la materialización de hechos terroristas”.⁴⁵

Se trata de un “Escuadrón” que ha sido protagonista en la discusión pública relacionada con la protesta social, siendo acusado de sendas violaciones a los derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra el asesinato de decenas de manifestantes según organizaciones no gubernamentales como la ONG Temblores (2019) o Cerosetenta (2019) de la Universidad de los Andes. De esta manera, ha funcionado como un dispositivo represivo que ha complementado diversas estrategias de negación, división e integración de las élites gubernamentales en el marco de sus interacciones con los movimientos sociales.

Dentro de esta misma lógica, en el país el problema de la violencia paraestatal perpetuada contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, opositores, periodistas independientes y líderes sociales es alarmante. En tal violencia, según diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, han estado implicados organismos de inteligencia como el Departamento Administrativo

⁴⁵ Consúltase al respecto la página web de la Policía Nacional de Colombia: <https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios/funciones>

de Seguridad (DAS), así como generales y divisiones del ejército que en alianza con grupos paramilitares perpetuaron masacres y ejecuciones extrajudiciales contra actores sociales “sospechosos de pertenecer a la guerrilla” (Martínez, 2016).

2.2.2. Las oportunidades políticas a nivel coyuntural en el ciclo 2010-2018

El ciclo político que a continuación revisaremos condensa procesos históricos relacionados con la lucha por la paz en sus diferentes modalidades, y revela el agotamiento definitivo de un esquema de confrontación político-militar que mantuvo a Colombia presa de la gramática contenciosa de la guerra fría. Para Eric Hobsbawm, la clausura de la cartografía política del mundo bipolar marcó el fin del siglo XX. Con este ciclo político 2010-2018, Colombia estaría enfrentando, en el ámbito nacional, una transición histórica de tales dimensiones.

Élites

Una de las metáforas más útiles para orientar la interpretación del cambio político dentro de este ciclo ha sido la de la ruptura entre dos figuras centrales de la vida pública nacional, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. La definimos como metáfora porque la transición a la que hacemos referencia excede las acciones de agentes individuales, para enmarcarse en procesos signados por fuerzas históricas. Sin embargo, si es correcta aquella idea según la cual “los individuos son estructuras concentradas”, esta fractura constituye un acontecimiento, relacionado con una de las variables de la EOP, que nos permite abrir un relevante marco heurístico sobre los problemas abordados en esta investigación.

Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en el año 2002 tras el resonado fracaso del proceso de paz intentado por su antecesor, Andrés Pastrana Arango, con las FARC-EP. Fue un proceso que implicó el “despeje” de amplias zonas del territorio nacional para la concentración de las tropas insurgentes, y que terminó en medio de escándalos de trascendencia internacional, como el secuestro de la congresista colombo-francesa Ingrid Betancur, que estuvo en cautiverio durante más de seis años en la selva colombiana. Uribe Vélez canalizó la frustración de la sociedad colombiana proponiendo una guerra sin cuartel en contra de las FARC-EP, que encontró un marco privilegiado en la llamada guerra internacional contra el terrorismo, a su vez detonada por los atentados del 11 de septiembre en el *World Trade Center* y el Pentágono.

Respaldado por Estados Unidos a través de los recursos del *Plan Colombia*, Uribe Vélez consolidó la política “seguridad democrática”, uno de los pilares en que enmarcaría su proyecto para Colombia, al lado de “la confianza inversionista” y “la cohesión social”. Así, lideró un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de Colombia que derivó en una ofensiva militar que terminaría por darle una victoria estratégica al Estado sobre las FARC-EP (González Muñoz, 2015). Con altos índices de popularidad logró la reelección en medio de graves denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos asociadas con vínculos con el paramilitarismo. Su segunda reelección fue impedida por un fallo de la Corte Constitucional que consideró que el cambio constitucional que ella implicaba, alteraba el orden constitucional colombiano hasta desnaturalizarlo (Corte Constitucional, 2010).

Así fue que Uribe Vélez eligió a su sucesor, Santos Calderón, quien había sido ministro de defensa estrella de su último período de gobierno. Como ministro, Santos Calderón lideró las operaciones a través de las cuales se propinaron los más duros golpes militares a las FARC, como la *Operación Jaque* que daría la libertad a Ingrid Betancur, y otros 14 secuestrados, dentro de los cuales se encontraban tres contratistas estadounidenses; y la *Operación Fénix*, una invasión a territorio ecuatoriano que terminó con el abatimiento de alias Raúl Reyes -miembro del secretariado de las FARC- y con una crisis regional por la violación al derecho internacional que implicaría tal invasión.

Tras declarar que Uribe Vélez era “el mejor presidente que ha tenido Colombia” y que cuidaría su legado, Santos Calderón fue electo presidente de Colombia para el período 2010-2014. Pero rápidamente comenzó a marcar distancias con su antecesor: ejecutó una política diplomática más amigable con los vecinos del eje progresista (Venezuela y Ecuador, liderados respectivamente por Hugo Chávez Frías y Rafal Correa Delgado), construyó alianzas políticas con sectores adversos al proyecto uribista y, ante todo, se propuso adelantar un proceso de paz con un actor político-militar respecto al cual, en la lógica uribista, no cabía estrategia distinta que la de propinar una derrota militar que terminara con un proceso de sometimiento a la justicia (González Muñoz, 2015).

La fractura fue agria y fundante de un nuevo período de la historia nacional. Uribe Vélez es un hombre nacido en la provincia, oriundo del suroeste antioqueño y miembro de una familia poseedora de grandes extensiones de tierra, ganadera y caballista, denunciada, y en algunos casos condenada por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es un líder conservador que

representa sectores de la élite nacional ligados a estructuras productivas de tipo feudal: grandes poseedores de tierra improductiva, utilizada para la ganadería extensiva o emprendimientos de tipo agroindustrial. Se trata sector económico brutalmente asediado por unas FARC-EP que, en uno de sus embates, terminó con la vida de Alberto Uribe Sierra, el padre del expresidente Uribe. Este, en suma, es un líder político de un carisma extraordinario, que cultivó una carrera en la que avanzó desde lo local a lo nacional, para terminar representando el proyecto conservador histórico, hoy a través de su posición de senador de la república.

Santos Calderón es un hombre nacido en la capital, Bogotá. Sobrino-nieto de Eduardo Santos Montejó, expresidente de Colombia y miembro, por tanto, de la familia Santos, una de las más poderosas del país, anteriormente propietaria de *El Tiempo* -uno de los dos más importantes periódicos de circulación nacional-. Es un líder del liberalismo oligárquico colombiano, el mismo que, en su momento, se alió con el conservadurismo durante el Frente Nacional, así como Santos se alió con Uribe Vélez durante sus ocho años de gobierno. Representa sectores de la élite nacional de tipo cosmopolita, ligadas al capital financiero: comerciantes, banqueros e inversionistas para quienes las FARC-EP han representado un obstáculo en su propósito de desarrollar un capitalismo moderno y global. Santos, en fin, es un hombre de la más distinguida aristocracia criolla, educado para gobernar, nobel de paz, representante del proyecto liberal-oligárquico histórico, hoy profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

La escisión entre estos dos arquetipos de la política nacional derivó en la formación de dos bloques dentro de la élite, de un lado, el de *La Unidad Nacional*, liderado por Santos Calderón e integrado por sectores tradicionales y liberales comprometidos con la paz y con una cierta apertura política. De otro lado, el que fundara un nuevo partido, *El Centro Democrático*, liderado por Uribe Vélez e integrado por sectores conservadores, cristianos y terratenientes que se opusieron fervorosamente al proceso de paz y a una cierta apertura política por ellos interpretada como “el camino hacia el castro-chavismo”.⁴⁶

En adelante, los procesos electorales estuvieron ordenados por esa díada, siendo arbitrados, en algunos casos, como en las elecciones presidenciales del 2014, por sectores ciudadanos,

⁴⁶ La noción de “castro-chavismo” fue acuñada por los sectores conservadores, seguidores de la figura de Álvaro Uribe Vélez, y opositores al proceso de paz. Con ella han calificado a los actores, iniciativas y procesos que, según su criterio, persiguen objetivos políticos cercanos a las ideas de Hugo Chávez y Fidel Castro: límites a la iniciativa privada, fortalecimiento del rol del Estado en la economía, subsidio de necesidades básicas, políticas sociales expansivas, visión anti-oligárquica de la política, lectura de la sociedad basada en la idea de conflicto o lucha de clases, entre otras.

independientes y de izquierda, que inclinaron la balanza a favor de quien había prometido llevar a buen término el proceso de paz⁴⁷. Sin embargo, en el Plebiscito del 2016⁴⁸ y en las elecciones presidenciales del 2018 se impuso el *Centro Democrático*, demostrando la enorme fuerza que, aún en un ciclo de apertura, tiene el proyecto conservador colombiano, hegemónico durante el siglo XXI. No obstante, como veremos, la fractura dio mucho juego a sectores sociales movilizados, que se encontraron, gracias a ella y a su propia actividad, con aperturas, alianzas y niveles de represión que favorecieron su quehacer.

Aperturas del sistema político formal

Teniendo como trasfondo esta ruptura, durante este ciclo se adelantan una serie de reformas normativas (legales y constitucionales) que han abierto puntos de acceso al Estado a actores anteriormente excluidos: víctimas, insurgentes o sociedad civil. Por otro lado, se activaron instituciones de democracia participativa y acciones legales para la contención del poder económico y la defensa del territorio.

La ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, conocida como “ley de víctimas y restitución de tierras”, fue un primer paso en esta dirección. Se trató de una ambiciosa reforma legal que abrió el camino para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno, y dispuso una serie de mecanismos e instituciones para garantizar su reparación a través de medidas económicas, simbólicas o de restitución de tierras. Así es que se crearon instituciones como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) o el Registro Único de Víctimas (RUV), entre otras, que conformarían el Sistema Nacional de Atención

⁴⁷ Según los resultados oficiales proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2014, Oscar Iván Zuluaga, el candidato del *Centro Democrático* -partido liderado por el expresidente Uribe Vélez- se impuso sobre Santos Calderón, ocupando ambos el primer y segundo lugar, respectivamente, con el 29.25% y el 25.69% de los votos. En la segunda vuelta, se invirtió el resultado, terminando electo Santos Calderón con el 50.98% de los votos contra el 44.98% de Zuluaga. Para ello fue determinante el llamado de sectores independientes y progresistas a respaldar a Santos Calderón por su agenda en torno a la paz. Estos sectores, electoralmente, habían logrado un 23.51% de votos en primera vuelta, a través de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Alianza Verde.

⁴⁸ El Plebiscito del 02 de octubre de 2016 fue un evento electoral crucial dentro del ciclo político de la paz, que absorbió la atención de las agendas sociales y ciudadanas del país. Finalmente, aunque por estrecho margen, se impuso la opción del “NO”, liderada por el expresidente Uribe Vélez. Más adelante, dentro de este mismo apartado, profundizaremos en esto.

y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV. Se trató, pues, de un avance fundamental en la perspectiva de las disputas por la verdad, la justicia y la reparación que movimientos y organizaciones de víctimas habían protagonizado desde comienzos de siglo (Gómez, 2014).

Esta ley se inscribía en el más amplio propósito de desestructurar el conflicto armado interno, así que tras ella llegaría el proceso de paz con las FARC-EP y el *Acuerdo de Paz* al que ya hemos hecho referencia. Dentro de los múltiples acuerdos y cambios institucionales en él contemplados, han sido muy importante, en perspectiva de apertura política, los puestos de representación que se otorgaron al Partido FARC.⁴⁹ Gracias a los Acuerdos firmados en el año 2016, en los dos cuatrenios siguientes este partido tiene, con independencia de sus resultados electorales, cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco escaños en el Senado de la República.

El mismo espíritu de apertura hacia los actores marginados del sistema político, lo tenían las llamadas *Circunscripciones Especiales de Paz*, que fueron pactadas en el marco del proceso de paz, con la finalidad de otorgar representación política especial a aquellas zonas especialmente golpeadas y abandonadas por efectos de la guerra, a través de organizaciones sociales o movimientos de víctimas que no podrían pertenecer a ningún partido político, incluyendo el de la FARC. Tales circunscripciones, sin embargo, no han podido implementarse debido a la oposición de los sectores conservadores dentro del Congreso de la República (El Espectador, 2018).

Como resultado de este mismo proceso se consiguió aprobar en el Congreso de la República, mediante la ley estatutaria 1909 de 2018, el *Estatuto de la Oposición*. Se trata de una figura contemplada hacía más de 25 años en la Constitución de 1991, que ordenaba la regulación de los derechos y garantías de la oposición política. Con el nuevo estatuto se reguló por primera vez esta promesa constitucional y se consagraron 10 derechos⁵⁰ para todas aquellas organizaciones políticas que se declarasen como opositoras las coaliciones de gobierno en los niveles nacional,

⁴⁹ Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común fue la denominación que las antiguas FARC-EP eligieron para el nuevo partido político que surgiría de su tránsito a la vida civil.

⁵⁰ Según el artículo 11 de la ley: “a) Financiación adicional para el ejercicio de la oposición b) Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético c) Acceso a la información y documentación oficial d) Derecho de réplica e) Participación en mesas directivas de plenarios de las corporaciones públicas de elección popular f) Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas g) Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos h) Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores i) Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular j) Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto”.

departamental, municipal y local. Gracias a este mismo Estatuto, los candidatos a la presidencia, alcaldía o gobernación que obtengan el segundo lugar en la votación obtendrán de manera automática una curul en la corporación pública respectiva.⁵¹

Asimismo, dentro de este mismo período, el gobierno de Santos Calderón abrió una mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, la segunda organización guerrillera más importante de Colombia. Esta mesa fue instaurada bajo el propósito de alcanzar una paz “completa” con un impacto de mayor proyección política y territorial. Posteriormente, con el cambio de gobierno, tal proceso entró en una fase de crisis y suspensión. No obstante, en su momento contribuyó a un clima de apertura general, en donde la subversión armada estaba llamada a integrarse al sistema democrático convencional y la sociedad civil a participar en ese debate.

Adicionalmente, en el año 2015 se promulgó la Ley Estatutaria 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Con esta ley se pretendía dar un impulso renovado a los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución de 1991. Además de los mecanismos de participación clásicos (voto, plebiscito, consulta popular, revocatoria del mandato, cabildo abierto y referendo) fueron objeto de regulación diversos mecanismos de rendición de cuentas, de control social a lo público, veedurías ciudadanas, acuerdos participativos, incentivos para la participación ciudadana e instituciones como el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Al tiempo que se adelantaban estas reformas, movimientos sociales y grupos ciudadanos adelantaron una importante agenda de movilización legal e institucional, poniendo en funcionamiento diversos mecanismos para la defensa del territorio y de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Ejemplo de ello fueron la oleada de consultar populares “antimineras”, impulsadas a nivel local por organizaciones sociales para detener diversos emprendimientos extractivos en los territorios (Hincapié, 2017). Se trató de un fenómeno de movilización institucional exitoso logró votaciones positivas en más de diez municipios del país, desatando una fuerte controversia a nivel nacional acerca de las competencias de las entidades

⁵¹ Candidato(a) a la presidencia, Curul en el senado. Candidato(a) a la vicepresidencia, curul en la Cámara de Representantes. Candidato(a) a una gobernación, curul en la Asamblea Departamental respectiva. Candidato(a) a una Alcaldía, curul en el Concejo Municipal respectivo.

territoriales subnacionales para decidir sobre el uso de su suelo y, particularmente, sobre la incursión de actividades extractivas de interés nacional (González Gil, 2019).

En el marco de esta misma controversia, también en el ámbito local, actores sociales e institucionales innovaron utilizando la figura de los “acuerdos municipales” para ordenar el uso del suelo en los municipios de manera tal que las actividades extractivas estuvieran restringidas. Como veremos más adelante, en el desarrollo de esta estrategia, la movilización del suroeste antioqueño, dentro de la cual participó el COA, tuvo un especial protagonismo en la escena nacional.

Finalmente, como signos de esta apertura del sistema político formal, cabe destacar los dos eventos de participación directa institucional más significativos dentro de este ciclo. Primero, un año después de la promulgación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se ejecutó el Plebiscito por la paz, un intento de refrendación popular del Acuerdo de Paz. Se trató de una convocatoria impulsada por el presidente Santos Calderón, a través de la cual buscaba una refrendación popular del *Acuerdo de Paz*. Desató un intenso debate y una agitada campaña electoral dividida entre los partidarios del “SI” y los partidarios del “NO” para responder a la pregunta que constaría en la boleta: «¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?». El sector opositor al proceso de paz, liderado por el expresidente Uribe Vélez, logró articular una efectiva campaña comunicacional que le daría la victoria con un 50.21% de los votos, en contra del 49.78% obtenido por los partidarios del “SI”. Este resultado forzó la renegociación de determinados aspectos del *Acuerdo de Paz*, que volvería a ser aprobado el 24 de noviembre del año 2016 tras su ratificación por parte del Senado y de la Cámara de Representantes (New York Times, 2016).

Dos años más tarde se llevó a cabo la Consulta Popular con la votación más alta en la historia del país: la llamada “Consulta Popular Anticorrupción”, a través de la cual la ciudadanía se convocó a sí misma para aprobar una serie de medidas que pusieran fin a la corrupción administrativa. Aunque la votación no superó el umbral exigido del 33% del censo electoral, la votación fue altamente significativa, pues cada una de las siete preguntas logró una aprobación de más de 11 millones doscientos mil votos, aproximadamente un millón de votos más de los que obtuvo el presidente electo Iván Duque en las elecciones presidenciales del mismo año (El País, 2018).

Alianzas

El contexto de escisiones y reformas previamente descrito, dio lugar a dos tipos de fenómenos relacionados con la disponibilidad de aliados dentro del sistema político para los movimientos sociales. De un lado, sus aliados históricos, fundamentalmente miembros de la izquierda o sectores políticos alternativos, adquirieron mayor notoriedad y relevancia en el ámbito de la política nacional. De otro lado, los sectores de las élites que apostaron por la paz y que habían sido tradicionalmente indiferentes ante la protesta social, tuvieron gestos de acercamiento.

Esto tiene que ver con algo que ya mencionábamos: en un contexto en el que el sector de la Unidad Nacional (Partido de la U, Partido Liberal, Partido Cambio Radical y Partido Opción Ciudadana) se había empeñado en adelantar con éxito el proceso de paz, mientras el Partido Centro Democrático se había ensañado en revertir ese proceso, los sectores “no alineados” pero históricamente movilizados por la paz y la justicia social en Colombia, arbitraron en múltiples disputas, como en las elecciones presidenciales del 2014 o el Plebiscito por la Paz de 2016.⁵²

Al mismo tiempo, estos sectores fueron ocupando posiciones relevantes dentro del sistema político, como la alcaldía de Bogotá en el año 2012. Además, en el año 2018, en las elecciones legislativas lograrían la “bancada alternativa” más importante de la historia reciente de la política colombiana, integrada por el Partido Alianza Verde, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el Movimiento Colombia Humana, el Partido Unión Patriótica (UP), el Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Polo Democrático Alternativo (PDA). Meses después, en las elecciones presidenciales, el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, lograría la votación más alta para un movimiento progresista en la historia nacional, llegando a la segunda vuelta frente a Iván Duque Márquez -candidato del uribismo- y obteniendo 8.034.189 de votos.⁵³

Represión

Por las razones expresadas en el análisis de la EOP estructural, aunque hubo un avance significativo en términos de garantías para la movilización social durante este período, los elementos represivos

⁵² Para un análisis sobre el Plebiscito y sus dimensiones político-electorales, puede consultarse en Botero (2017). En el mismo sentido, una mirada a la Consulta Popular Anticorrupción puede leerse en Haman (2019).

⁵³ Resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pueden consultarse en su página web: <https://www.registraduria.gov.co/>

del régimen político colombiano no dejaron de estar presentes, expresándose con gran crudeza en el proceso de movilización social de mayor envergadura de este período.

En este sentido, aún en medio de un ciclo dentro del cual el gobierno de turno se propuso adelantar un proceso de paz con la principal organización guerrillera del país, fue promulgada la ley 1453 de 2011 o “ley de seguridad ciudadana” que tipificó el delito de “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”, entre otros que han servido para intimidar y judicializar a quienes participan en eventos de protesta social.

En efecto, tres días antes de la hora cero del “Paro Nacional Agrario”, la más dura jornada de protestas que tuvo que enfrentar el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro del interior emitió la Circular 001 de 2013, dirigida a alcaldes, gobernadores y secretarios de gobierno, anunciándoles:

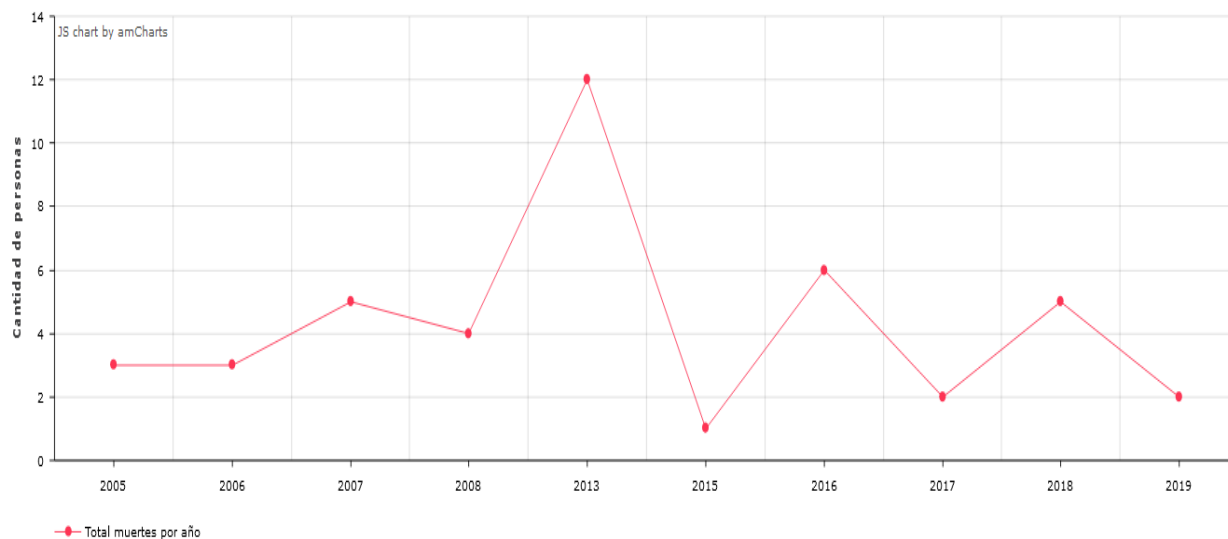
Con ocasión de las actividades de protesta social relacionadas con el Paro Nacional previsto a partir del 19 de agosto le solicitamos adoptar todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para el mantenimiento y restablecimiento del orden público [...] Para tal efecto, se solicita coordinar con las autoridades de policía judicial la aplicación de la disposición contenida en la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 353 literal a, que al respecto señala (...) (Citada por Galindo Delgado, 2017, p. 66).

Así, como lo relatamos en otro trabajo, “En medio del paro [...] varios manifestantes fueron forzados a afrontar procesos penales por la obstrucción a vías públicas. Por las mismas fechas de la Circular 001, el presidente de la República alertó a los cuerpos de seguridad del Estado y anunció que sería “implacable” con los manifestantes que bloquearan vías” (Galindo Delgado, 2017, p. 66). Pocas semanas después se anunciaría una reforma para endurecer la Ley de Seguridad Ciudadana, y otra para duplicar los efectivos del ESMAD. Adicionalmente, en el año 2016 sería aprobada la ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expediría el Nuevo Código de Policía, en el cual se faculta a las autoridades de policía para disolver “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia” (artículo 53).

Si bien esto era cierto con relación a la “estrategia dominante” en los procedimientos para el tratamiento de la protesta social (Kriesi, 1995), también era cierto que el país estaba afrontando cambios dramáticos en los patrones estructurales de la violencia contra la disidencia política. De en esta manera, en el Gráfico 1, que retrata la violencia homicida del ESMAD en los últimos 15

años, podemos identificar un pico represivo en el año 2013, cuando se produjo el Paro Nacional Agrario.

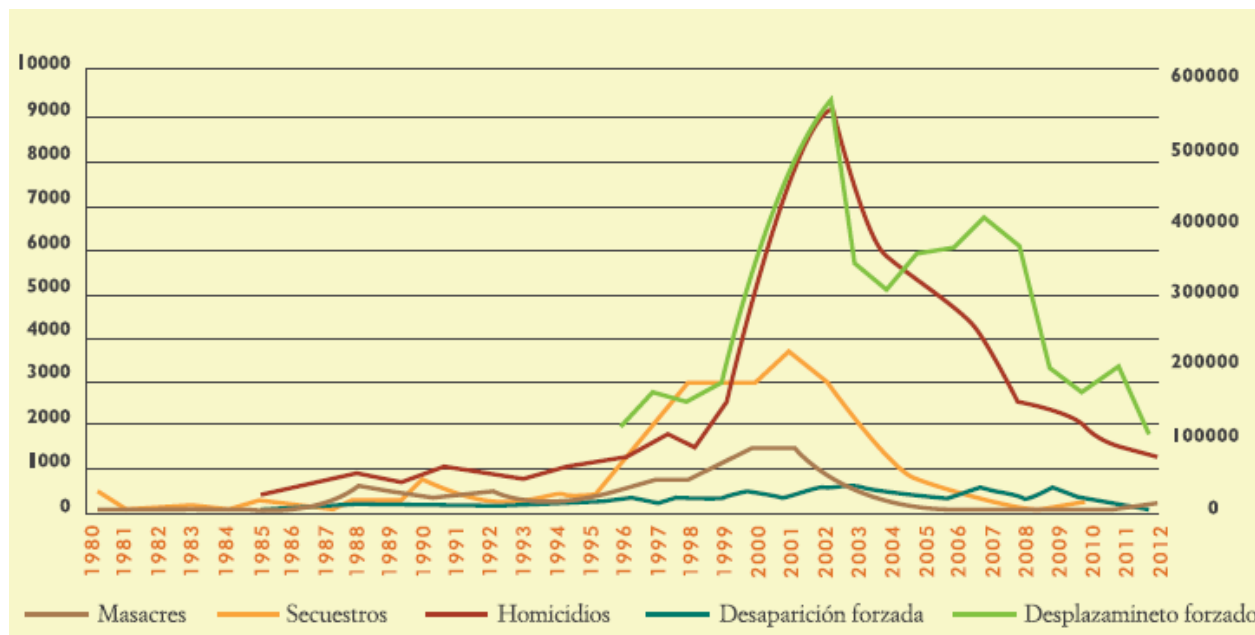
Gráfico 1. Histórico de ejecuciones extrajudiciales que involucran al ESMAD



Fuente: Tomado de La Liga Contra el Silencio (2019), que a su vez se basa en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Sin embargo, de otro lado, como lo podemos observar en el siguiente gráfico del Centro Nacional de Memoria Histórica acerca de la violencia asociada al conflicto armado interno, para esa misma época, en los inicios del ciclo político 2010-2018, las masacres, secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados alcanzan los niveles más bajos del siglo, lo cual constituyó un alivio para organizaciones sociales y de víctimas que se movilizaban en medio del conflicto.

Gráfico 2. Evolución de los índices de victimización en el marco del conflicto armado interno (1980-2012)



Fuente: Tomado de Centro Nacional de Memoria Histórica (2013)

Finalmente, es importante considerar que, tras la firma del Acuerdo de Paz, se ha disparado el asesinato sistemático en contra de líderes sociales y excombatientes, lo cual nos enfrenta a un balance ambivalente en relación a los niveles de represión contra la movilización social en el ciclo bajo análisis. Según el informe interinstitucional de la Universidad Nacional, el CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras organizaciones, centros de investigación y movimientos sociales, *¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo* (2018), entre el 24 de noviembre -fecha de la firma del Acuerdo de Paz- y el 31 de julio de 2018 -una semana antes posesionarse el nuevo presidente Iván Duque Márquez- fueron asesinados al menos 344 líderes sociales. En este mismo período, según la Misión de verificación de la ONU, la cifra de excombatientes de las FARC-EP asesinados se aproximaba a los 100 (Misión de Verificación de la ONU, 2019).

En suma, en relación al cambio de la EOP durante el ciclo 2010-2018 tenemos:

Tabla 4. Estructura de oportunidades políticas a nivel nacional en el ciclo 2010-2018

Nivel	Variable	Medida	EOP
Estructural	Distribución institucional del poder	Tendencialmente equilibrada y predominantemente centralizada	Apertura relativa
	Sistema electoral y de partidos	Proporcional y tendencialmente abierto	
	Sistema de representación de los intereses	Pluralista infrarrepresentado	
	Leyes e instituciones relacionadas con la vigilancia y control de las protestas	Tendencialmente represivas	
Coyuntural	Élites	Fracturadas	
	Aperturas del sistema político formal	Tendencialmente abierto	
	Alianzas	Tendencialmente disponibles	
	Represión	Tendencialmente represivo	

Fuente: Elaboración propia

2.3.El territorio y la ampliación de la frontera extractiva

Al lado de las transformaciones sufridas dentro de la *dimensión política* del ciclo 2010-2018, corría un proceso situado en la *dimensión económica*, que es analíticamente diferenciable para efectos expositivos, pero que es consustancial a las lógicas del proceso político. Las variables del cambio en la EOP nacional estuvieron acompañadas por una constante: el consenso inter-élites en torno al modelo económico y el régimen de acumulación. La explotación intensiva de materias primas destinada a la exportación ha sido un *desiderátum* que, o bien se integraría en la lógica de una *paz corporativa*⁵⁴ (ante el triunfo del proyecto de paz en los términos del presidente Santos Calderón), o bien, ante la ausencia de ella, continuaría bajo modalidades más crudas de despojo (ante el fracaso

⁵⁴ La paz corporativa o extractiva, se relaciona con la noción de *pax extractiva* previamente referida con De los Ríos (2016): se trata de la consolidación de un orden político en el que los actores insurgentes se integran a la normalidad civil y se garantizan de esta manera condiciones de orden público y seguridad jurídica para el desarrollo de la economía extractiva y, en general, de la economía de libre mercado. En el capítulo 4 profundizaremos sobre esto a la luz de las experiencias del Movete y el COA.

del proceso de paz en la visión planteada por el expresidente Uribe Vélez). A continuación, examinaremos esta dimensión, insertando de nuevo el problema en el contexto latinoamericano.

2.3.1. América Latina: del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities

De la década perdida al Consenso de Washington

Tras el mejor momento del paradigma de la “industrialización dirigida por el Estado” y en los albores de la “tercera ola democratizadora”, las economías latinoamericanas ingresaron a uno de los períodos más críticos de su historia. Agobiadas por una deuda agudizada por el aumento repentino de las tasas de interés, y en medio de un desorden inflacionario que volvía inciertas la inversión y el consumo, su desempeño produjo lo que se conoció como “la década perdida”. De acuerdo a los cálculos de Ocampo (2008) con base en datos de la CEPAL, sólo hasta el año 2005 América Latina pudo retornar a los niveles de pobreza que tenía para el año 1980, tras dispararse a su pico más alto en el transcurso de la década en cuestión. Aunque en otro trabajo Bértola y Ocampo (2013) denuncian la construcción de una “leyenda negra” alrededor de la época de la industrialización dirigida por el Estado, lo cierto es que diferentes factores endógenos (alto endeudamiento e incapacidad de crear una base tecnológica sólida) como exógenos (fluctuación de las tasas de interés e inestabilidad del mercado financiero internacional) condujeron a una crisis para cuya solución se impuso una receta que lucía bastante sensata: *la disciplina macroeconómica*.

Esta noción, no exenta de debate, se concretó en un conjunto de reformas que partían del supuesto de que los deudores debían “poner sus casas en orden”, expresión a la cual John Williamson (1990) buscó dar contenido, sistematizando los consensos que, en materia de política económica, existían en Washington. En este sentido, el afamado *Consenso de Washington* fue una ordenación de prácticas económicas ya existentes, respaldadas por las élites empresariales, financieras y políticas de Estados Unidos⁵⁵, y orientadas a: i) Sanear las finanzas de economías deudoras en estado crítico (reducción del déficit, priorización del gasto público, inversión extranjera, reforma fiscal) y ii) Instaurar una economía de mercado (liberalización de los tipos de

⁵⁵ Aunque en su trabajo Williamson (1990) distingue entre un “Washington político” y un “Washington tecnocrático”, más allá de algunos matices, entre ambos existía lo que, precisamente, se denominó como *Consenso*.

cambio y de las tasas de interés, privatizaciones, protección de los derechos de propiedad, apertura comercial, desregulación).

Aunque después de las reformas de mercado la región atravesó por un lustro de crecimiento, en la segunda mitad de la década de los años 90, en especial a partir del año 1997, hubo estancamiento, recesión y depresión (Stiglitz, 2003). Esto fue especialmente cierto en Colombia, que en dicho periodo sufrió altas tasas de inflación, interés y desempleo en medio de una crisis que, para el año de 1999, supuso un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de 4.2 % (Bonilla, 2011).

Del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities

Ciertamente, como lo demuestra el trabajo adelantado por Lora (2012) para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las reformas tuvieron efectos diferenciados en función de las particularidades de cada país. Los indicadores sobre el desmonte arancelario, las privatizaciones, la flexibilización del mercado de trabajo y el esquema tributario así lo demuestran. Tales variaciones se relacionan, por otro lado, con la diferencia entre modelos de desarrollo y de regímenes de acumulación en la región. En otras palabras, son explicadas por las “variedades o tipos de capitalismo”, pues según Bizberg (2014) “aunque durante el período de la ISI se podía hablar de una América Latina en general, ahora es imposible encontrar un modelo de desarrollo único en el continente” (p. 20).

Sin embargo, como lo señalábamos para el caso de Colombia, a comienzos del siglo XX el balance de las reformas era negativo, algunos incluso hablaron de fracaso (Stiglitz, 2003) (Correa, 2002). Precisamente Stiglitz (2003) muestra, a través de datos agregados⁵⁶, que las tasas de crecimiento fueron inferiores a aquellas de la época que se pretendía superar (ISI), y que en lugar de haberse conseguido convergencia con relación al crecimiento de países desarrollados se dio el fenómeno contrario, con el aumento de la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad económica.

Como lo señalamos *supra*, esta situación precipitó una crisis política regional que derivó en el ascenso de líderes y proyectos político de nuevo tipo, caracterizados a la postre como “progresistas”, que marcaron un período conocido como “giro a la izquierda”. Y tal giro contó con

⁵⁶ En este caso es importante, además, consultar los datos “desagregados”, pues la media, como se sabe, puede ocultar variaciones significativas en un conjunto de datos que, como está dicho para el caso latinoamericano, es altamente heterogéneo. Por razones de extensión no podemos adelantar una revisión de esa naturaleza en este escrito.

la fortuna de que los precios internacionales de las materias primas tendieron al alza impactando de manera positiva en los términos de intercambio, en muy buena medida gracias a la demanda asiática.

Gráfico 3:

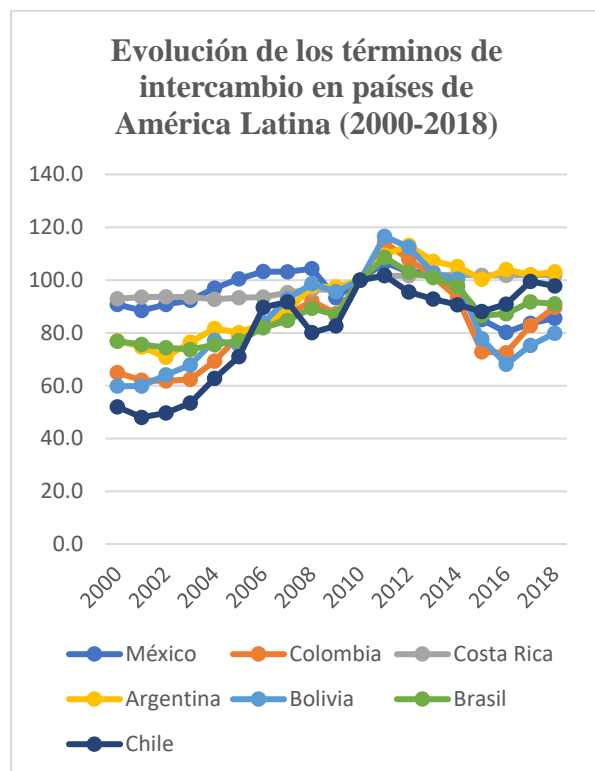
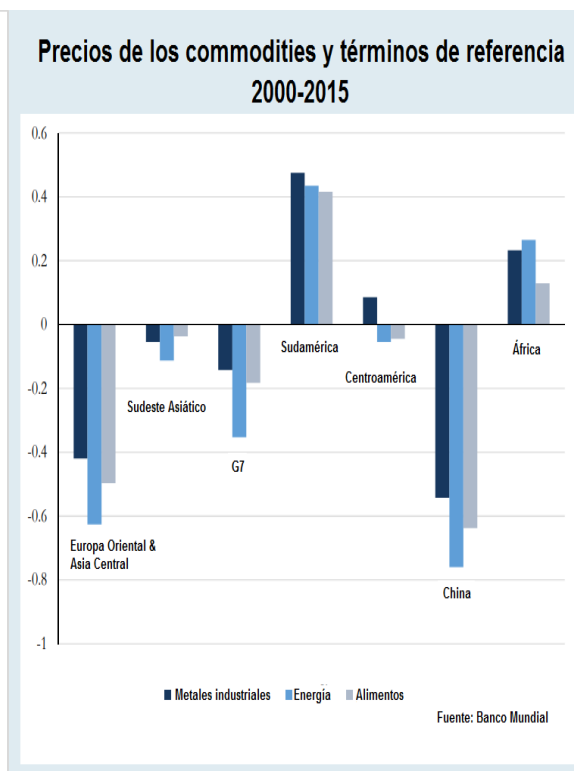


Gráfico 4:



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial/ **Fuente:** Tomado de Banco Mundial (2016)

Como puede verse en el gráfico 3 la evolución positiva de los términos de intercambio comienza a insinuarse en los primeros tres años del siglo para marcar un ascenso pronunciado en el año 2004 con una pendiente que definió un incremento sostenido. Posteriormente, esta tendencia fue interrumpida en los años de la crisis financiera global, para después subir de manera drástica a su punto más alto en el año 2011, en el cual comienza un descenso que en el año 2014 se precipita con una inclinación pronunciada.

Si esta trayectoria se analiza en perspectiva comparada, su importancia adquiere dimensiones planetarias como puede verse en el gráfico 4: Sudamérica fue la región del mundo que más se benefició del alza de precios de los commodities en metales industriales, energía y alimentos, mientras que las demás, con excepción de África, sufrieron un drástico deterioro de sus términos de intercambio.

Este *boom* tuvo consecuencias múltiples a nivel regional, impactando las estructuras productivas, la política económica y social, así como la conflictividad interna de cada país. En este sentido, una de las investigadoras más estudiosas de este fenómeno, la profesora Maristella Svampa (2013) ha planteado que, en América Latina, tras el *Consenso de Washington*, vino el *Consenso de los Commodities*, de modo que este:

Subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el *boom* de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (p. 31).

Los resultados económicos de este ciclo, definido por un *Consenso* en el que han sido protagonistas los gobiernos de signo progresista, fueron valorados de manera positiva por el Banco Mundial. En el informe del año 2016 acerca del “*Commodity Cycle in Latin America*” se argumenta que la región tuvo un cambio fundamental de tipo positivo en los últimos 15 años: buen funcionamiento macroeconómico, grandes avances en materia social e inversión en infraestructura, educación y capacidad productiva (Banco Mundial, 2016).

Sin embargo, es importante no perder de vista que, de un lado, tales avances tuvieron unos costos: ante todo, la conflictividad socio-ambiental creciente, con sus consecuencias políticas, culturales y climáticas; y, adicionalmente la consolidación de las economías latinoamericanas como economías primarias dependientes de los ciclos del mercado internacional. De otro lado, tanto los beneficios, como los costos, se expresaron de manera diferenciada. A continuación, daremos una mirada a las particularidades del caso colombiano.

2.3.2. Colombia: del modelo agro-exportador al modelo minero-exportador

Colombia en los tipos de extractivismo del *Commodity Boom*

Tanto Svampa (2013) como Gudynas (2011) reconocen que al interior del *Consenso de los Commodities* existen dos enfoques que se diferencian por el signo político de los gobiernos y sus respectivas implicaciones en el equilibrio Estado-Mercado-Sociedad-Naturaleza. La primera establece diferencias entre un *neodesarrollismo liberal* y un *neodesarrollismo progresista*. El

segundo contrasta el *extractivismo convencional* y el *neo-extractivismo progresista*. No ahondaremos en los matices y diferencias entre ambas tipologías, más bien señalaremos sus coincidencias para entender la posición de Colombia en relación a los demás países del arco progresista.

En este sentido, de un lado, ambos modelos socio-económicos coinciden en una misma concepción del desarrollo (crecimiento económico sustentado en una intensa apropiación de los recursos naturales) que da lugar a un proceso económico-político que adolece de los siguientes problemas: i) La acentuación de las lógicas de la globalización y, por tanto, de la dependencia de los países latinoamericanos del ciclo económico internacional –en calidad de precio aceptantes–, con las consecuencias que esto tiene respecto a la estabilidad económica y la política interna ii) Las externalidades negativas de tipo ambiental, en un contexto de crisis energética y climática que pone límites infranqueables a las posibilidades de la reproducción humana futura iii) La incursión autoritaria sobre territorios de comunidades y minorías étnico-raciales que rechazan lo que ellas entienden como desposesión o despojo iv) La escasa diversificación de la estructura económica, con escasos encadenamientos del proceso productivo y, en consecuencia, escasas oportunidades de empleo estable.

De otro lado, sin embargo, también es cierto que los dos modelos enunciados expresan diferencias significativas en el modo de concebir la relación Estado-Mercado y en la forma de ordenar el proceso socio-político en torno a las rentas, excedentes y tasas de ganancia derivados de los emprendimientos extractivos. Tales diferencias se expresan de modo sintético en la Tabla 5:

Tabla 5. Tipos de extractivismo durante el *Commodity Boom*⁵⁷

Neodesarrollismo liberal/ Extractivismo convencional	Neodesarrollismo progresista/ Neo-extractivismo progresista
Ejemplos: Colombia, Perú, México	Ejemplos: Venezuela, Bolivia, Ecuador
El papel dominante lo ejercen las empresas privadas, casi siempre transnacionales	El papel dominante lo ejerce el Estado
Asume que el extractivismo generará crecimiento económico y ciertos niveles de empleo, desencadenando efectos de “derrame” que mejorarían el bienestar y servirían para combatir la pobreza Busca crecimiento económico y “derrame”	Asume que el extractivismo generará un excedente capturado a través de rentas estatales, contratos con privados y esquemas tributarios que se invertirían de forma directa en política social
El excedente migra al mercado financiero internacional	El excedente es capturado por el Estado con fines redistributivos
Regulaciones y controles acotados (en materia tributaria y de regalías)	Regulaciones y controles rígidos

Fuente: Elaboración propia con base en Gudynas (2011, 2012) y Svampa (2013)

La ampliación de la frontera extractiva en Colombia

Después de Brasil, México y Argentina, durante la etapa de la *industrialización dirigida por el Estado*, Colombia fue uno de los países que dio pasos firmes en el proyecto de articular una base tecnológica e industrial propia que le imprimiera una dinámica autónoma a la economía interna, garantizando altos niveles de empleo y bienestar. Sin embargo, tales esfuerzos demostraron ser insuficientes y, aunque la década perdida no tuvo el impacto devastador de otros países, la desindustrialización sufrió un fuerte impulso con el *Consenso de Washington* y terminó por consolidarse con el *Consenso de los Commodities*.

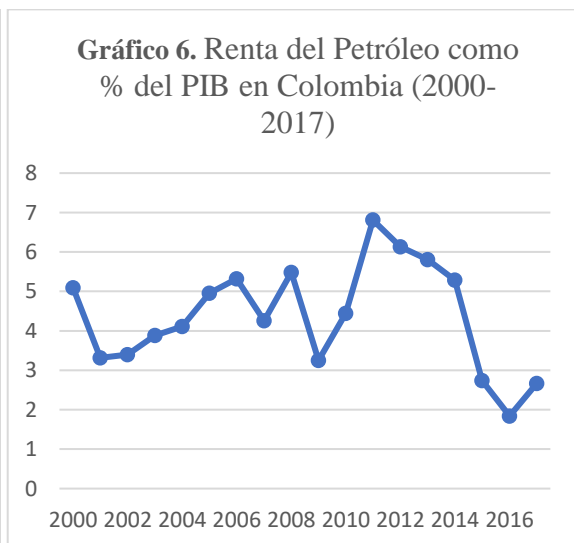
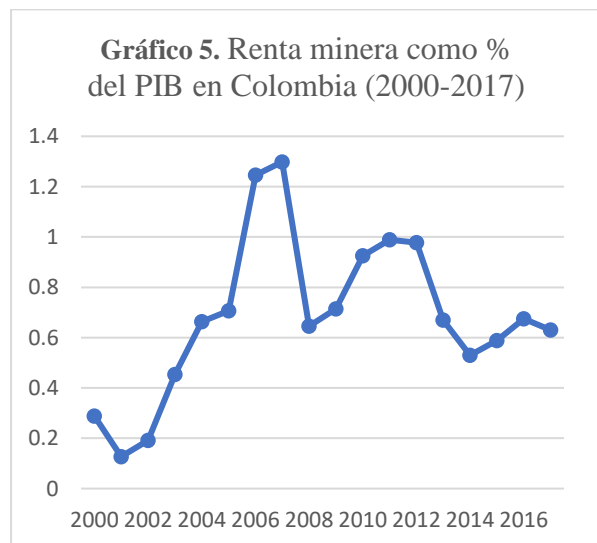
Colombia pasó de ser un país agro-exportador que en buena parte del siglo XX sostuvo su economía en la exportación de café, a ser un país minero-exportador, especializándose en la exportación de materias primas para la producción de combustibles fósiles y, de modo creciente, en recursos no renovables de otros sectores de la minería. En este sentido, desde el punto de vista comercial, la economía colombiana avanzó en un desmonte arancelario en el que las ventajas

⁵⁷ En la lectura de este cuadro es importante considerar que se trata de “tipos” que no se presentan de manera pura en la realidad y que, en consecuencia, sirven para situar los procesos económicos de cada país dentro de un continuum en el que las dicotomías no son tan rígidas como allí se presentan. En síntesis, su valor más que descriptivo es heurístico y nos sirve para comprender tendencias.

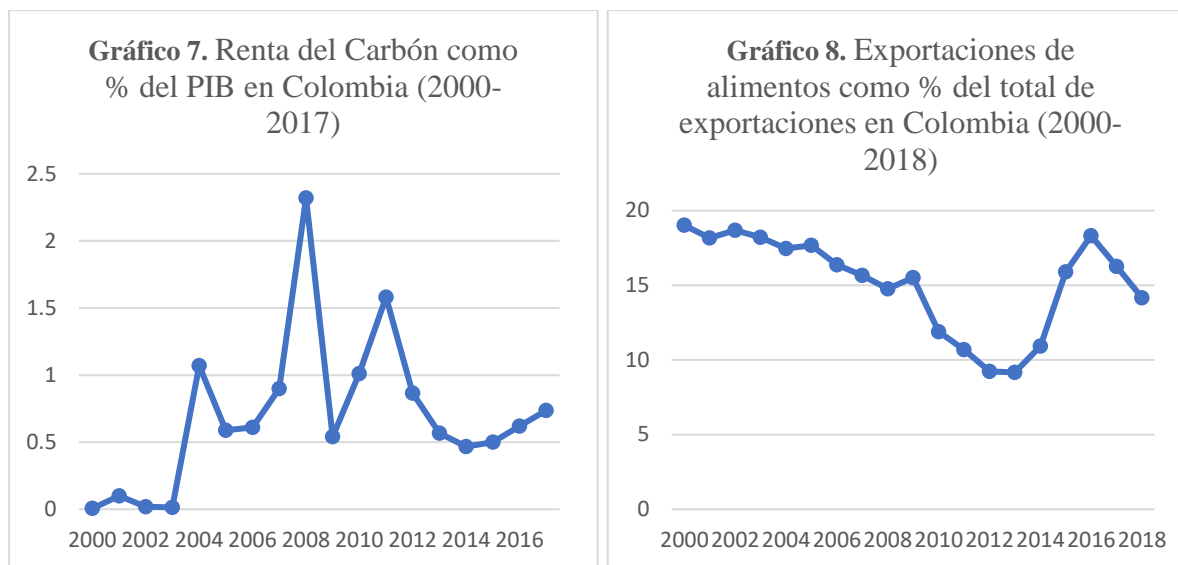
comparativas brindadas por el carbón, el petróleo y sus derivados y el ferróníquel han desplazado de manera progresiva productos como el café y otros bienes agrícolas.

Según el catastro del sector minero adelantado por la Agencia Nacional Minera, para el año 2015, de las 114'218.901,09 hectáreas del territorio colombiano, 5'084.084,91 estaban siendo utilizadas para la actividad minera, existiendo 9.594 títulos mineros vigentes (4,5% del territorio nacional).⁵⁸ Tal ha sido la expansión de dicho sector durante los últimos años que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la superficie de hectáreas con título minero se multiplicó casi ocho veces, pasando de 1.13 a 8.53 millones. Dentro de esta misma lógica, al arribar al poder, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) declaró en su Plan Nacional de Desarrollo que la minero-energética sería una de las cinco “locomotoras” del desarrollo.

Justamente a comienzos del siglo XXI, coincidiendo con el inicio del ciclo de los commodities, el Estado colombiano inició un programa de reformas institucionales para cimentar una infraestructura normativa y económica que potenciara las ventajas derivadas de la inversión y exportación relacionada con minerales e hidrocarburos. Se promulgó un nuevo Código de Minas (ley 685 de 2001), se crearon nuevas instituciones de regulación ambiental, se avanzó en la apertura comercial y crecieron, entre 1995 y 2010, en más de un 800%, las concesiones y títulos mineros, así como la producción de carbón (Garay, 2013).



⁵⁸ Véase: <https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-numeros-de-mineria-el-pais-articulo-557084>



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

En los anteriores gráficos puede verse que la renta de minerales y los hidrocarburos como porcentaje del PIB sigue una trayectoria similar a la de la evolución de los términos de intercambio (Gráfico 3): despegan al alza en el 2004, caen en el año de la crisis mundial y vuelven a subir para precipitarse a la baja después del año 2013. Tras consultar datos, gráficos y tendencias en la base de datos del banco mundial⁵⁹, al comparar a Colombia con todos los países de Sudamérica más México, se comprueba el protagonismo que en su economía tienen los minerales (después de Perú, Bolivia, Brasil y México), el petróleo (después de Venezuela y Ecuador) y el carbón (siendo líder regional indiscutido).

Así mismo, el Gráfico 8 evidencia que el aumento de la participación de esos sectores en la economía nacional, parece estar correlacionado con una disminución sostenida de la proporción de alimentos exportados, pues esta cae cuando las rentas del carbón, petróleo y minerales suben, y cuando estas últimas se precipitan en el cierre del *commoditie boom*, la proporción de alimentos exportados vuelve a subir, alcanzando en el año 2016 unos niveles que no se lograban desde principios de siglo. Adicionalmente, los datos del Banco Mundial indican que Colombia es uno de los países, con Venezuela y México, que peor se encuentra en materia de proporción de alimentos

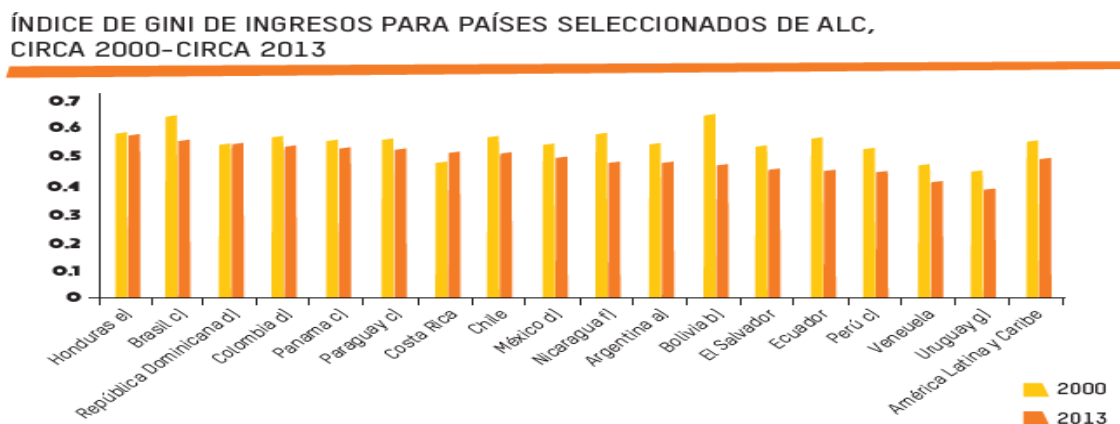
⁵⁹ No pueden plasmarse aquí por razones de espacio.

importados.⁶⁰ Este hallazgo refuerza los planteamientos de Bonilla (2011), quien argumenta que tras el *Consenso de Washington* y con el *Commoditie Boom*, Colombia abandona el modelo agro-exportador para inscribirse en un modelo minero-exportador.

Esta dinámica económica ha estado acompañada de un comportamiento positivo, aunque no extraordinario, de los principales indicadores macroeconómicos del país (dentro de ellos el déficit fiscal, el balance en cuenta corriente, la inflación y la tasa de interés): Bonilla (2011) afirma que durante el *boom* la economía colombiana se encontraba en crecimiento a una “velocidad media”. Sin embargo, desde el punto de vista del bienestar social, ha tenido efectos diferenciales a buena parte de los países progresistas, relacionados con el carácter excluyente del modelo.

Históricamente Colombia ha sido uno de los países más desiguales del mundo y, en consecuencia, uno de los más desiguales de América Latina. A pesar de esto, las rentas derivadas el *boom* no tuvieron un impacto decisivo en la reducción de las desigualdades. Como puede verse en el Gráfico 9, de los países beneficiados, Colombia fue el que menos distribuyó la riqueza en tiempos de bonanza:

Gráfico 9. Índice de GINI de ingresos para países seleccionados de ALC, CIRCA 2000-CIRCA 2013



Fuente: Tomado de Oxfam (2016)

⁶⁰ Los últimos datos, del año 2018, sitúan de penúltimo a México con 8% y de ante-penúltimo a Colombia con 14%. El último es Venezuela, del que no se tienen datos sobre esta cuestión desde el año 2013 (este “ranking” no considera a los países de Centroamérica).

Es así que, al cierre del ciclo del *boom*, en medio del ciclo político que ha concentrado nuestra atención, en el año 2014, Colombia era el país más desigual del continente con un Índice Gini de 52,7 (Banco Mundial). Posteriormente, con el giro a la derecha en Brasil, este país tomó la delantera, situándose como el más desigual del continente en la actualidad. Con el desempleo sucedió algo muy similar. Durante el boom Colombia se mantuvo como el país más desempleado de Sudamérica. Después de llegar a una cifra de 20% tras las reformas de mercado en el año 1999, no logró reducir su desempleo en la proporción en que lo hicieron los demás países del *boom*, de suerte que al final de este era el país más desempleado del continente. Después Brasil tomó la delantera haciéndose, al día de hoy, al primer lugar (Banco Mundial).

La ampliación de la frontera extractiva en la disputa por la paz

En este contexto de caída de los precios internacionales de las materias primas continuó el proyecto de ampliación de la frontera extractiva, como se hará evidente en los casos estudiados en los siguientes capítulos. Colombia asistió al aumento de conflictos socio-ambientales en los que las luchas por la defensa del territorio adquirieron relevancia en el contexto de la movilización social.

El proceso de paz, en este sentido, se articuló a diferentes horizontes socio-territoriales. Uno de ellos estuvo vinculado al concepto de *paz corporativa*, que asumía que la desestructuración de la guerra constituía una oportunidad para la inversión en territorios anteriormente vedados por el conflicto armado. En este sentido, la paz fue comprendida como una oportunidad para el desarrollo y la prosperidad dentro de la racionalidad que, como vimos anteriormente, venía orientando la política económica desde comienzos de siglo.

De esta manera, los nuevos conflictos-socioambientales, implicaron una disputa por el sentido de la paz, en el que múltiples movimientos sociales y procesos comunitarios se apropiaron de la noción de *paz territorial*, para oponer una agenda socio-ambiental alternativa en la que la idea de la terminación del conflicto armado estaba asociada a la construcción participativa de territorios libres de guerra y de emprendimientos extractivos. Sobre esto profundizaremos en el capítulo 4 al explorar las experiencias concretas del Movete y el COA.

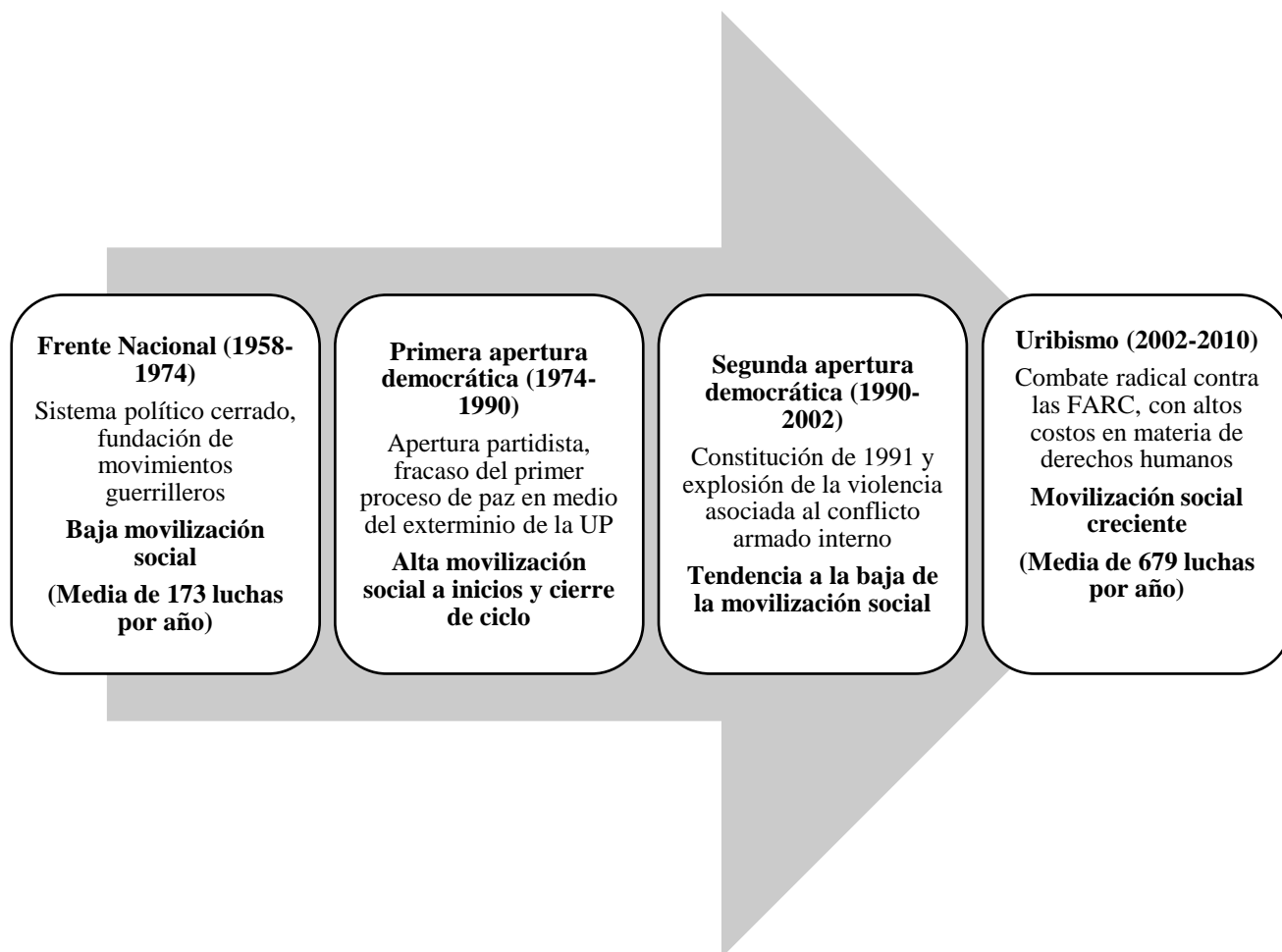
2.4. Las luchas sociales

Las *dimensiones política y económica* del nuevo ciclo están asociadas al aumento insospechado de las acciones de protesta y movilización social, esto es, a una *dimensión social*. Los recurrentes procesos de acción colectiva y las renovadas modalidades de la acción política han dado un nuevo aire a la vida pública colombiana: movimientos estudiantiles, de víctimas, campesinos, indígenas, ambientales, de educadores, entre otros, han irrumpido en la esfera pública y se han integrado de manera activa al proceso político. Los ocho años del ciclo 2010-2018, que han sido los años del cierre del conflicto histórico entre el Estado colombiano y las FARC-EP, han sido al mismo tiempo los años de mayor movilización social en toda la historia del país, al menos, después de la primera mitad del siglo XX.⁶¹

Según el trabajo clásico de Archila (2018), desde el comienzo del *Frente Nacional* hasta el término del período presidencial de Uribe Vélez (2002-2010), son identificables cuatro grandes etapas de la movilización social en Colombia, como se ilustra en la Figura 4:

⁶¹ Es el momento desde el cual se tiene un registro sistemático de los eventos de protesta social en Colombia. La fuente más importante en esta materia es la *Base de datos de Luchas Sociales en Colombia. Cinep / PPP*, descrita así por el Cinep (2016, p. 10): “La base de datos se alimenta de la revisión de 9 periódicos nacionales y regionales, y un semanario nacional, procesados en el Archivo de Prensa de Cinep; más 12 periódicos regionales que son leídos directamente por los miembros del equipo de Movimientos Sociales, encargados de alimentar la base de datos, lo que amplía la cobertura geográfica de las fuentes de prensa. También se registran protestas reseñadas en noticieros radiales y televisivos, páginas web de organizaciones sociales y de prensa alternativa, testimonios directos y documentación de los actores”.

Figura 4. Etapas de la movilización social en Colombia (1958-2010)



Fuente: Elaboración propia con base en Archila (2018).

Aunque la construcción de estas etapas debe leerse a la luz del cambio demográfico en Colombia, la movilización social ha evolucionado a través de interacciones complejas con el régimen político. De acuerdo a la Figura 4, durante el Frente Nacional, el cierre del sistema político incidió en una expresión armada de la inconformidad social que inhibió acciones recurrentes y masivas de protesta. Tras la primera apertura, hubo un incremento de la movilización social, con momentos cumbre como el Paro Cívico de 1977 o el Movimiento de la Séptima Papeleta que impulsó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Después de la promulgación de la Constitución de 1991, con la explosión de la fase más cruda del conflicto armado, menguó la protesta social. Finalmente, en el esquema de Archila (2018), durante el gobierno de Álvaro Uribe

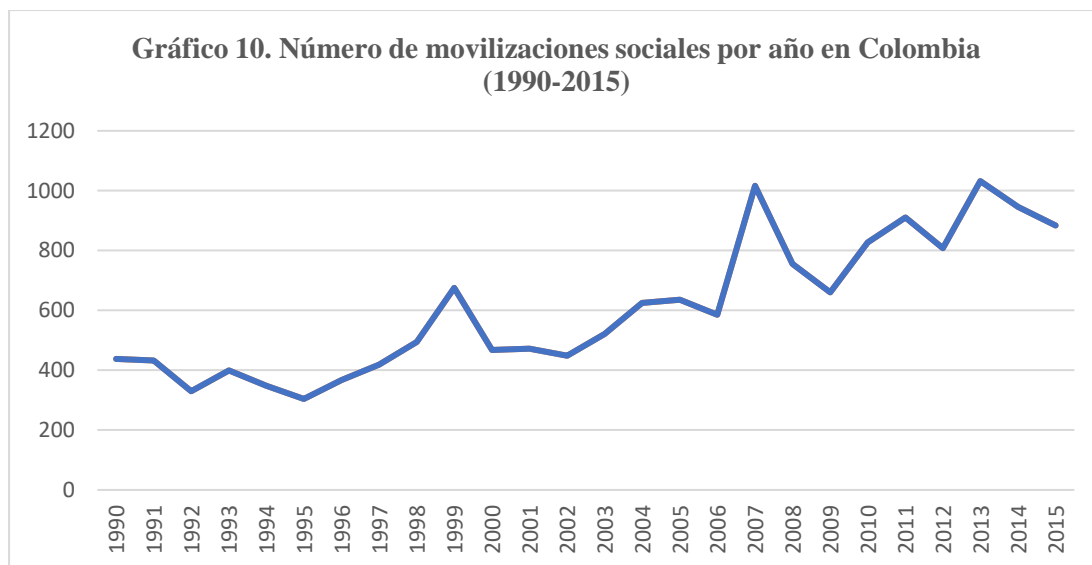
vuelve a crecer la acción colectiva, sobre todo en el campo de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las víctimas (Gómez, 2014).

Esta evolución no sólo estuvo acompañada de variaciones de magnitud según los cierres y aperturas del sistema político. Se trató de una dinámica que también estuvo definida por transformaciones cualitativas asociadas al tipo de actores y demandas, que se relacionan, en tal sentido, con la aparición de nuevos movimientos sociales. Así, según Archila (2010), desde los años noventa los actores con identidad de clase van perdiendo protagonismo en favor de actores multiclasistas. Por otra parte, el cierre del siglo XX también vino con un giro hacia demandas más políticas y culturales que materiales, de suerte que:

Todo ello se traduce en lo que hemos designado como una politización creciente de las luchas sociales por dos vías: porque los movimientos sociales trascienden sus luchas particulares en pos de asuntos más universales, y porque formulan sus demandas cada vez más en términos de derechos exigibles al Estado, especialmente después de la Constitución de 1991 (Archila, p. 129).

Al mismo tiempo, la movilización social comenzó a crecer al interior de sectores urbanos, en donde se percibe una alta concentración de recursos socio-económicos en el marco de una alta desigualdad social. En el ámbito rural, y en particular en los sectores golpeados por la violencia, la protesta dejó de tener el protagonismo que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Archila (2010) explica que esto puede estar relacionado con el control social ejercido por el paramilitarismo, pero que, sin embargo, “en esas zonas, la gente, a pesar de duras condiciones de hegemonía de los grupos irregulares, no se agacha y resiste de variadas formas a dicho control” (p. 137).

Los cambios relatados se fueron decantando durante la primera década del siglo XXI para dar paso a un nuevo ciclo de la protesta social, inscrito a su vez en el ciclo político 2010-2018. El Gráfico 10 ilustra que, a partir del año 1995, en el cual la movilización social alcanzó su nivel más bajo en los últimos 30 años, la protesta social ha venido creciendo en Colombia, sufriendo ascensos pronunciados en el 2007 (comienzo del segundo período presidencial de Álvaro Uribe) y en el 2010 (comienzo del primer período presidencial de Juan Manuel Santos. Tales ascensos han tenido altibajos, pero en términos absolutos han sido sostenidos, al punto de consolidarse en el ciclo de movilización social más efervescente en la historia de Colombia, después de la primera mitad del siglo XX.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Luchas Sociales del CINEP (2016, 2016a)

Tras la sucesión presidencial en el año 2010 Colombia continuó en un ciclo de movilización social ascendente. De acuerdo a centros de pensamiento como el CINEP (2016, 2016a) o la Fundación Ideas para la Paz (2017), en este período se produjo el mayor número de movilizaciones medias por año en la historia del país. Se adelantaron procesos de movilización colectiva de alcance nacional que involucraron a actores campesinos, étnicos y urbanos. Ejemplos paradigmáticos de ello fueron el Paro Nacional Agrario (2013), la Cumbre Campesina, Agraria, Étnica y Popular (2014) y el Paro Nacional Universitario (2011 y 2018). Además, el país asistió al despliegue de nuevas luchas socio-territoriales, agenciadas por movimientos sociales que, enraizados en las regiones del país, se organizaron para resistir a grandes proyectos de desarrollo (Cruz Rodríguez, 2017). Al decir de Cruz Rodríguez (2017, p. 18):

El ciclo de protesta entre 2010 y 2016 ha puesto en evidencia la recomposición de los movimientos sociales en Colombia, la cual puede constatare por la renovada capacidad de producir protestas de gran magnitud, estructuras de movilización unificadas a nivel nacional y marcos de acción colectiva capaces de articular diversos actores en torno a sus distintas reivindicaciones [...] las grandes movilizaciones han sido posibles, primero, porque cuentan con infraestructuras organizativas y discursos capaces de articular actores diversos que se han desarrollado en los últimos años y, segundo, porque las negociaciones de paz motivan una ampliación de la agenda pública hacia problemas sociales sistemáticamente bloqueados, de manera que los beneficios potenciales del posicionamiento de las reivindicaciones de los movimientos es mayor que los costos que acarrea la acción colectiva en términos de represión.

En este último sentido, el CINEP (2016) ha planteado que en el contexto del proceso de paz y del “posacuerdo”, la movilización social puede seguir la tendencia al alza que se ha evidenciado dentro de este ciclo:

Primero, porque la firma de la paz podría desencadenar altos niveles de frustración, resultado de lo que en la literatura especializada se conoce como *privación aspiracional*; esto es, un aumento exponencial de las expectativas ciudadanas en condiciones en las que las capacidades de respuesta se mantendrían relativamente estables (Gurr, 1974, p.43). Segundo, porque la desactivación del aparato coercitivo de las Farc podría derivar en la configuración de nuevas estructuras de oportunidad para la movilización social y la emergencia de viejos conflictos y demandas represadas que han permanecido invisibles en razón del conflicto armado (CINEP, 2016, p. 14).

Estas consideraciones nos servirán de marco general para explorar los casos del Movete y del COA, analizando en sus territorios y conflictos específicos, de un lado, el modo como este ciclo ha sido experimentado y, de otro lado, lo plausible que pueden llegar a ser las ideas que relacionan positivamente el contexto de la paz con la protesta y la movilización social.

2.5. Recapitulación

En el presente capítulo hemos dado respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué consiste el ciclo político 2010-2018 en Colombia y qué cambios en la estructura de oportunidad política nacional se produjeron para la acción contenciosa de los movimientos sociales?

Para ello exploramos en ciclo político 2010-2018 en tres dimensiones: la política, económica y social. En este sentido, en la primera parte del capítulo nos centramos en la *dimensión política*, para lo cual contextualizamos la cuestión de la democratización colombiana en el más amplio contexto de los problemas políticos latinoamericanos. Posteriormente propusimos una lectura del proceso de paz como un impulso adicional en la trayectoria de la democratización del régimen político colombiano. Finalmente, estudiamos la configuración de la EOP estructural y coyuntural dentro del ciclo propuesto, identificando las variaciones que se produjeron en relación a la cohesión de las élites, las aperturas del sistema político formal, la estructura de alianzas para actores alternativos de la sociedad civil y los niveles de represión hacia la movilización social. Esto

nos permitió concluir que dentro del ciclo político 2010-2018 se configuró una EOP relativamente abierta.

En la segunda parte del capítulo complementamos el análisis precedente al esclarecer los rasgos principales de las transformaciones presentadas en la *dimensión económica* y la *dimensión social*. Con relación a la primera, propusimos una mirada de largo plazo contextualizada en la perspectiva de América Latina, que nos permitió comprender las transformaciones económicas que condujeron a Colombia a transitar de un modelo agro-exportador a un modelo minero-exportador mediante la ampliación de su frontera extractiva. En el análisis de la segunda dimensión ilustramos la fase ascendente de la movilización social dentro del ciclo bajo estudio, precisando los principales ciclos de la protesta social en Colombia e identificando los procesos de acción colectiva más significativos de tal período.

Con este contexto socio-político descrito y organizado en torno a las categorías centrales de esta investigación, en el próximo capítulo daremos el giro hacia una mirada micro para comprender la naturaleza y las trayectorias del Movete y del COA. Identificaremos el contexto socio-territorial que determinó su nacimiento dentro de este ciclo, las amenazas extractivas frente a las cuales resisten y el conflicto político en el que se hallan implicados. De esta manera podremos entender dos experiencias de movilización socio-territorial concretas en el marco de los cambios estructurales retratados en este capítulo.

Capítulo 3. La lucha en defensa del territorio antioqueño: los casos del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) y El Cinturón Occidental Ambiental (COA)

En el presente capítulo nos hemos propuesto contextualizar los casos de estudio a fin de sentar un panorama sólido que otorgue fundamentación y sentido al capítulo analítico. Para ello, en la exposición de cada uno de los mismos, adoptamos la siguiente estrategia expositiva. Primero, adelantamos una descripción de tipo territorial en la que se esclarecen, de un lado, las principales características geográficas, económicas y socio-ambientales del territorio en disputa y, de otro lado, la incidencia del conflicto armado y del extractivismo en su configuración socio-histórica. En segundo lugar, caracterizamos al movimiento que surge de esa conflictividad socio-territorial, exploramos sus aspectos organizacionales y las lógicas de agregación local-regional. Finalmente, retratamos los elementos básicos del conflicto político en el que se encuentran implicados los movimientos, es decir, el objeto de disputa, los adversarios y los repertorios de movilización.

3.1. El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio -Movete

“Por el agua, la vida y el territorio, ¡MOVETE pues!”⁶²

3.1.1. El territorio oriental: región estratégica

El Oriente antioqueño es una región de fundamental importancia socio-económica para el desarrollo departamental y nacional. Se posa sobre la cordillera central en una suerte de equilibrio entre los dos ríos más prominentes de Colombia, el Cauca y el Magdalena, y entre dos de los más significativos valles de Antioquia, el Valle de Aburrá y el Valle del Magdalena Medio. Se trata de un extenso altiplano, con elevaciones importantes que alcanzan el nivel de páramo, gozando así de pisos térmicos cálidos, medios y fríos. Agrupa 23 municipios que se ordenan en torno a un poderoso complejo hidrográfico delineado por caudalosos afluentes como los ríos Nare, Rio Negro, Buey, Arma, Calderas, Río Claro, Samaná Norte y Samaná Sur.

⁶² Consigna del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio.

Mapa 1. Mapa del Oriente antioqueño en el departamento de Antioquia y Colombia



Fuente: Tomado de Wikipedia.

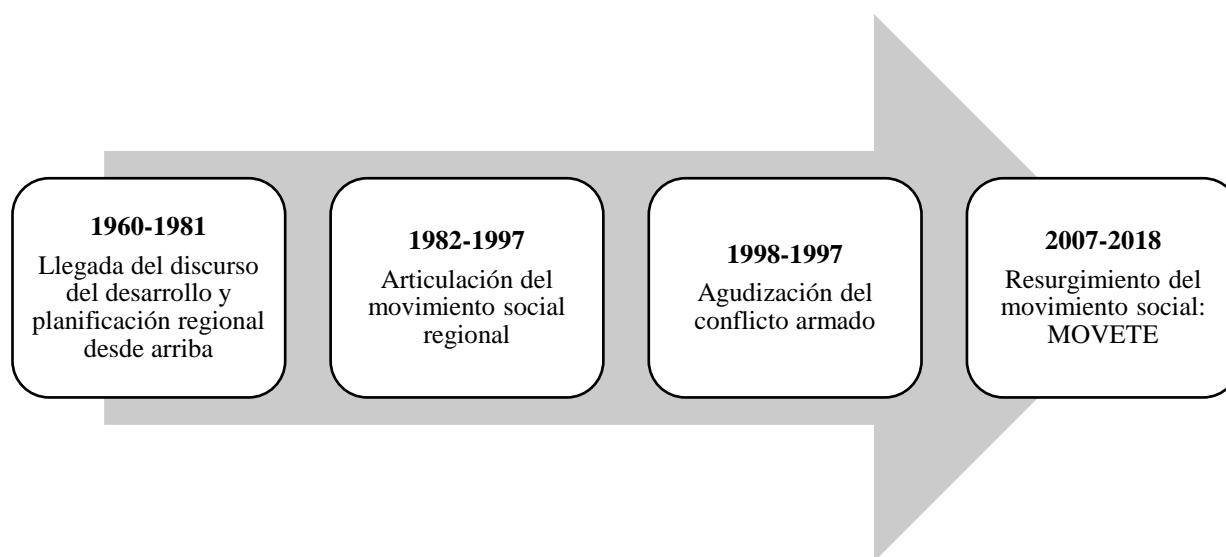
Planificadores, empresarios, políticos, actores armados, investigadores y líderes sociales coinciden en una idea que es fundamental para entender el pasado, presente y futuro del Oriente: se trata de una región estratégica. Es un territorio de inmensas riquezas naturales que sin aglomerar a más del 0.01% de la población del país, produce alrededor de una tercera parte de su energía eléctrica. Comunica a Medellín, la capital del departamento, con Bogotá, la capital del país. Alberga al principal aeropuerto de Medellín⁶³, que es al mismo tiempo el segundo aeropuerto internacional del país. Y es, dentro de Antioquia, por su proximidad al Valle de Aburrá, una zona privilegiada para la expansión urbana, industrial y financiera (Ávila y Montenegro, 2017).

Pero esto no siempre fue así. Hasta hace poco más de medio siglo el Oriente carecía de todos estos atributos. Su importancia no residía en ser un polo de desarrollo sino en ser una “despensa agrícola” departamental y nacional, reconocida por su alta producción de maíz, hortalizas, frijol, tubérculos, frutas y café (Iner, 2003). La segunda mitad del siglo XX, no obstante,

⁶³ Aunque no se encuentra, desde el punto de vista geográfico, en la ciudad de Medellín -que hace parte de la región “Valle de Aburrá- sino en la ciudad de Rionegro -región “Oriente”-.

tenía reservado otro *ethos* para el territorio oriental. Bajo esta mirada, Higuita y Rupp (2018) ofrecen una periodización estructurada en torno a la relación movilización-territorio-conflicto que nos permitirá situar nuestro relato y ubicar al lector en el mismo:

Figura 5. Etapas de la relación entre movilización, territorio y conflicto en el Oriente antioqueño (1960-2018)



Fuente: Elaboración propia con base en Higuita y Rupp (2018)

En este orden de ideas, en la década de 1960 se cierne sobre el Oriente un ambicioso proyecto de desarrollo regional que es “pensado y planeado desde afuera y desde arriba” en un contexto en el que, además, la Alianza para el Progreso desplegaba un mandato de modernización y desarrollo para los países de América Latina. En el Oriente han sido cinco los emprendimientos que articularon dicho proyecto y que terminaron por consolidar el carácter estratégico de la región: i) El complejo hidroeléctrico que llegó a producir alrededor del 60% de la energía eléctrica de todo el país mediante la construcción de los principales embalses hidrográficos del territorio nacional (Peñol-Guatapé, Playas, Punchiná, Riogrande II, Miraflores, Porce II y las represas de La Fe y Piedras Blancas) ii) La autopista Medellín-Bogotá iii) El Aeropuerto Internacional José María Córdova vi) La urbanización e industrialización del Oriente cercano v) La implementación del Programa de Desarrollo Integral Rural en el Oriente antioqueño, que apuntaba a industrializar el proceso agrícola estimulando el monocultivo, el latifundio y el uso de agro-tóxicos (Higuita y Rupp, 2018).

Tal empresa estuvo acompañada por una particular planeación del territorio que agrupó a los municipios del Oriente en cuatro subregiones diferenciadas por sus características geográficas, ecosistémicas y económicas. *El Altiplano* es la zona que ha sufrido de forma más acelerada el proceso de modernización urbano-industrial, gozando de alta densidad vial y de servicios.⁶⁴ *Embalses* se caracteriza por ser la subregión que sufrió los más acelerados procesos de transformación productiva ante la construcción, precisamente, de embalses que implicaron la inundación de tierras y el menoscabo de la economía campesina.⁶⁵ *Páramo* es la zona menos integrada al esquema de desarrollo regional, también se le conoce, en tal sentido, como “Oriente lejano”, y se caracteriza por su riqueza natural y su economía predominantemente agrícola-rural.⁶⁶ Finalmente, *Bosques* es una región, también privilegiada desde el punto de vista ambiental, que combina actividades campesinas y extractivas con el comercio informal entorno a la autopista Medellín-Bogotá (Iner, 2003).

En suma, el Estado colombiano, en alianza con organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se comprometió activamente con la transformación de la región, desplegando sobre sus ríos y montañas gigantescos proyectos de infraestructura y desarrollo que implicaron una intervención sin precedentes sobre el territorio. Las dinámicas sociales, económicas y culturales en que transcurría la vida de pobladores y campesinos de la región fueron drásticamente alteradas. Implosionó un conflicto social al que se sumó la violencia armada y se abrió uno de los capítulos más sombríos en la historia de Antioquia (Ávila y Montenegro, 2017).

De la estrategia del desarrollo a la estrategia de la guerra

Como veremos en los siguientes apartados, los proyectos de desarrollo detonaron procesos de movilización y resistencia que echaron hondas raíces en una conflictividad social y política que se prolonga hasta hoy. Sin embargo, tras esos proyectos no solamente llegó la organización popular, también arribó la guerra como parte de una lógica histórica más amplia: la del conflicto armado interno que se inauguró en Colombia tras la primera mitad del siglo XX. Con todo, los ciclos de la

⁶⁴ Municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente.

⁶⁵ Municipios de El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Granada, Concepción y Alejandría.

⁶⁶ Municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño.

violencia en el Oriente suelen ser comprendidos a partir de un antes y un después signado por el año 1997, que marca el inicio de una tragedia humanitaria sin precedentes en la región.

El antes: 1960-1997. La estructuración de la guerra en el territorio y el exterminio del movimiento cívico

Hacia fines de los años 60 se tuvo noticia de la presencia de pequeños grupos guerrilleros posicionados en torno al Magdalena Medio. Poco a poco, colectivos armados de las FARC-EP y del ELN fueron tomando posiciones en la región, consolidando una presencia sostenida en los años 80.⁶⁷ Después llegaron organizaciones paramilitares como el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) que, articulados con sectores del poder político y empresarial de la región, exterminaron al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño en el segundo lustro de los 80, y reprimieron al Movimiento Oriente Unido, consiguiendo su desaparición hacia mediados de los años 90 (Ávila y Montenegro, 2017).

De este modo, la violencia recayó de manera especial sobre líderes sociales, organizaciones cívicas y movimientos sociales que habían interpelado los grandes proyectos de desarrollo y, sobre todo, el injusto reparto de costos y beneficios, que descargaba sobre los hombros de las comunidades orientales el peso de inundaciones, desplazamientos y desfiguraciones de la vida socio-comunitaria, sin aliviar sus condiciones materiales de existencia. Además, en la gramática del conflicto armado interno colombiano, la protesta y la movilización social fueron invariablemente asociados, por parte del paramilitarismo y de amplios sectores del Estado, a una subversión armada que amenazaba los intereses del latifundio y del capital financiero, comercial e industrial (Higuera y Rupp, 2018).

El después: 1997-2007. La consolidación del proyecto paramilitar y la tragedia humanitaria

Colombia entera supo de la existencia de los pueblos del Oriente Antioqueño por los actos de terror que aparecieron en las noticias televisadas, y que daban cuenta de la destrucción física y moral de pueblos como Granada o San Carlos. Fue el período en el que la violencia alcanzó sus más altas dimensiones y sus más crudas modalidades. Un período que estuvo determinado, primero, por la unificación de los ejércitos paramilitares de todo el país bajo la denominación de Autodefensas

⁶⁷ Frentes 9 y 47 de las FARC-EP, Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN.

Unidas de Colombia (AUC), y después, por la cuantiosa inyección de capital de Estados Unidos para los asuntos de defensa mediante el llamado *Plan Colombia*.

Estos, entre otros factores, crearon las condiciones para el despliegue de una violenta iniciativa político-militar que tenía como objetivo “limpiar al país de guerrilla”. Iniciativa orientada por la conocida metáfora del “pez en el agua”: a la insurgencia había que sofocarla, drenando el agua que le garantizaba su existencia y, en consecuencia, había que combatirla en los campos de guerra, pero también en las universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, centros de periodismo independiente y, desde luego, al interior de comunidades y movimientos sociales.⁶⁸ Así fue que el conflicto armado medró en el Oriente, un territorio en el que, como se ha explicado, existían posiciones estratégicas fundamentales, desde el punto de vista geo-económico y, en consecuencia, político-militar. Higuita y Rupp (2018) lo describen así:

El paramilitarismo en alianza con la Fuerza Pública (Ejército y Policía) se posicionó en distintas zonas de la región y estableció un control acérrimo y brutal sobre los municipios y la población buscando arrasar con las bases sociales de las insurgencias, a su vez que disputar los corredores estratégicos. Por su parte, las guerrillas del ELN y las FARC radicalizaron mucho más sus acciones armadas con los bloqueos a la autopista Medellín-Bogotá, los atentados a la infraestructura de los complejos hidroeléctricos, las tomas a los cascos urbanos y el secuestro de sectores políticos y adinerados de la región [...] Arreciaron los desplazamientos forzados de grandes capas de la población oriental en los diferentes municipios, se generalizaron las masacres (sobre todo en las zonas rurales), continuaron las limpiezas sociales, las torturas y los asesinatos selectivos, se utilizaron violaciones sexuales como método de guerra y control sobre el cuerpo de las mujeres, y se impusieron toques de queda por parte de los armados, prohibiendo la libre circulación de las comunidades (p. 56).

Fue de esta manera que se impuso el terror sobre la población oriental, dejando un saldo humanitario trágico que, como veremos más adelante, desencadenó un proceso de movilización social e institucional clamando la paz para la región. Pero el costo social que tuvo que pagarse antes de dicho clamor general fue muy alto. Pueblos destruidos y abandonados por habitantes de

⁶⁸ “Por tener un discurso en contra de las políticas de los partidos tradicionales en la región, por hablar de la resistencia frente a estas políticas y promover marchas y paros cívicos, el movimiento cívico empezó a ser tildado por estos mismos partidos como una plataforma de la insurgencia, eso lo expuso ante la arremetida paramilitar de la organización de Ramón Isaza que se había fortalecido en el Magdalena Medio y ya había construido un corredor permanente hacia los pueblos del oriente, avanzando desde San Luis” (Rubén Darío Zapata citado por Higuita y Rupp, 2018, p. 54).

antaoño, organizaciones sociales desestructuradas, disolución de lazos sociales y tejidos comunitarios, afectaciones psicosociales que aún perduran y un miedo a la participación y el liderazgo que ha sido difícil de superar.

Pacificación, extractivismo y reconfiguración regional en el S.XXI

La finalización del ciclo del terror en el Oriente estuvo determinada por la derrota militar de las guerrillas, por la consolidación del paramilitarismo y de sus aliados en el territorio, y por el Proceso de Justicia y Paz, a través del cual el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia adelantaron un proceso de desarme, desmovilización y reintegración entre los años 2003 y 2005. Así es que en el año 2008 el Oriente se declaró como “territorio militarmente consolidado” (Higuita y Rupp, 2018). Uno de los líderes e investigadores del Movete nos lo ilustró así:

La guerra en el Oriente dura hasta entrados [los años] 2008-2009. Los últimos hombres de FARC que estaban por allá por los lados de Abejorral, hicieron presencia en 2009. El ELN a pesar de que era el actor hegemónico en el Oriente antioqueño por medio del frente guerrillero Carlos Alirio Buitrago, frente guerrillero Bernardo López Arroyave, compañía José María Carbonell y compañía José María Córdova, [y que] aglutinaba más o menos unos 1.300 hombres; [...] sale a mediados del 2006. Las FARC resisten, un pequeño grupo de 9-10 hombres en Abejorral hasta el 2009. Pero sí hubo una consolidación de estructuras paramilitares (Entrevista a RV).

Con estos acontecimientos se consuma lo que investigadores y activistas de la región denominan como el proceso de “pacificación”: el silenciamiento de los fusiles sobre la base de una estrategia militar que mantuvo inmodificadas las estructuras de dominación económica y política en el territorio. Una pacificación que, como veremos, tuvo como telón de fondo la movilización de la sociedad civil y la acción institucional a través de programas como los laboratorios de paz, proceso que, en todo caso, alivió la situación humanitaria de la región (García, 2007).

Con ello se abre un nuevo escenario histórico definido por una paradoja aparente: los fantasmas que estuvieron en el origen de la violencia volvieron a aparecer con fuerza. Así, de un lado, grandes proyectos de desarrollo, principalmente vinculados a la producción masiva de energía hidráulica -pero también a la explotación de minerales-, reaparecieron con vigor bajo la forma de centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas. Y de otro lado, campesinos, estudiantes,

ambientalistas y pobladores del Oriente, se articularon de nuevo para oponerse a esa visión del desarrollo regional mediante una concepción sustantiva del territorio.

En efecto la pacificación alivió la experiencia social y comunitaria de la región, permitiendo, de un lado, el reencuentro de líderes y organizaciones, y de otro lado, procesos de retorno por parte de aquellos que fueron expulsados por la guerra. Sin embargo, el “retorno” estuvo marcado por una iteración histórica que ha tensionado y dado forma al proceso de reconfiguración regional del Oriente en el siglo XXI. Con la normalización de la vida socio-económica en la región aumentaron, de modo intempestivo i) Las solicitudes, estudios y construcciones de hidroeléctricas: grandes, pequeñas, micro, mini y picocentrales; y ii) Las solicitudes y títulos para la explotación de minerales y materiales para la construcción (Ávila y Montenegro, 2017).

El territorio oriental comenzó a enfrentar una nueva oleada de proyectos de desarrollo más diversificados y complejos que los enfrentados por los movimientos cívicos del siglo pasado. En relación a la cuestión hidroeléctrica un líder de la Unión ilustra el contraste así:

En este momento pueden haber alrededor de unas cien concesiones o más de agua para construcción de microcentrales. Entonces, estamos hablando para esa época, [la de los primeros movimientos cívicos y proyectos de desarrollo], de cinco grandes centrales eléctricas ¡aquí estamos hablando de más de cien! (Entrevista a BJ).

En este sentido, la explotación de ríos y quebradas sufrió un proceso de descentralización estratégica: en lugar de construir grandes embalses y presas con notables afectaciones sociales, culturales y ambientales sobre el territorio, ahora se están multiplicando emprendimientos a menor escala, de menor impacto y visibilidad. Sin embargo, con ello, se ha expandido la frontera de explotación hidroeléctrica, con graves afectaciones para la vida de las comunidades: destrucción de caminos veredales y distritos de riego, represamiento de ríos y ecosistemas de invaluable significado cultural, afectación de la economía campesina y de las relaciones de propiedad.

Los líderes y activistas del Movete han ayudado a clarificar la dimensión de las nuevas problemáticas socio-ambientales en el Oriente. Aunque las incursiones hidroeléctricas y mineras se encuentran dentro de las principales fuentes de conflictividad, no son las únicas. Ellas se insertan en un panorama más amplio de ordenación del territorio en el que otras problemáticas emergen con fuerza. Villada y Jiménez (2018) destacan, además, los conflictos asociados con políticas

conservacionistas que, mediante procesos de zonificación ambiental, delimitan espacios de especial protección en detrimento de la economía campesina y de los mismos procesos de retorno (reservas forestales, páramos, zonas de conservación, reservas naturales, distritos de manejo integrado).

Asimismo, ponen de relieve la cuestión de la privatización del agua que, por la vía de la mercantilización y “empresarización” de su distribución, está arrinconando los procesos de gestión comunitaria del líquido vital. Dentro de esta misma orientación general de tipo desarrollista, el crecimiento de la agroindustria y del uso indiscriminado de agrotóxicos, ha sido destacado como un elemento crítico adicional. En suma, las hidroeléctricas, la minería, las políticas conservacionistas, la privatización del agua y la agroindustria han complejizado la conflictividad socio-ambiental, apuntalada tras el proceso de pacificación del territorio.

Este ambicioso programa de ordenación del territorio en función de la extracción y acumulación de valor, ha sido leído bajo una perspectiva diferente a la que orientó la comprensión de los conflictos por grandes obras civiles del siglo pasado. De un desarrollismo aceitado por el proceso de modernización de la segunda mitad del siglo XX, se pasó a la estructuración de un modelo extractivista tributario de las oportunidades que la pacificación ofreció a los grandes proyectos de inversión en el territorio oriental.

Desde el punto de vista de los activistas del Movete los hilos de esta historia territorial, los del capital, la guerra y el movimiento, están anudados:

Entendimos que la guerra no era para sacar a la guerrilla [...] Si uno metodológicamente pone un mapa donde se presentaron las 8 operaciones militares entre 1998-2006 –Lusitana, Audaz, Meteoro, Marcial, Espartaco, Ejemplar, Falange 1 y Fantasma 1, qué son las 8 operaciones militares que desarrolla la Cuarta Brigada– encima coloca un mapa de presencia de las estructuras paramilitares, si uno coloca encima un mapa de repertorios de violencia sobre desaparición, homicidios selectivos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento, y encima pone un mapa de hoy por hoy dónde están los proyectos hidroeléctricos, en su mayoría coinciden ¡en su mayoría coinciden! Hoy entendimos para qué fue la guerra (Entrevista a RV).

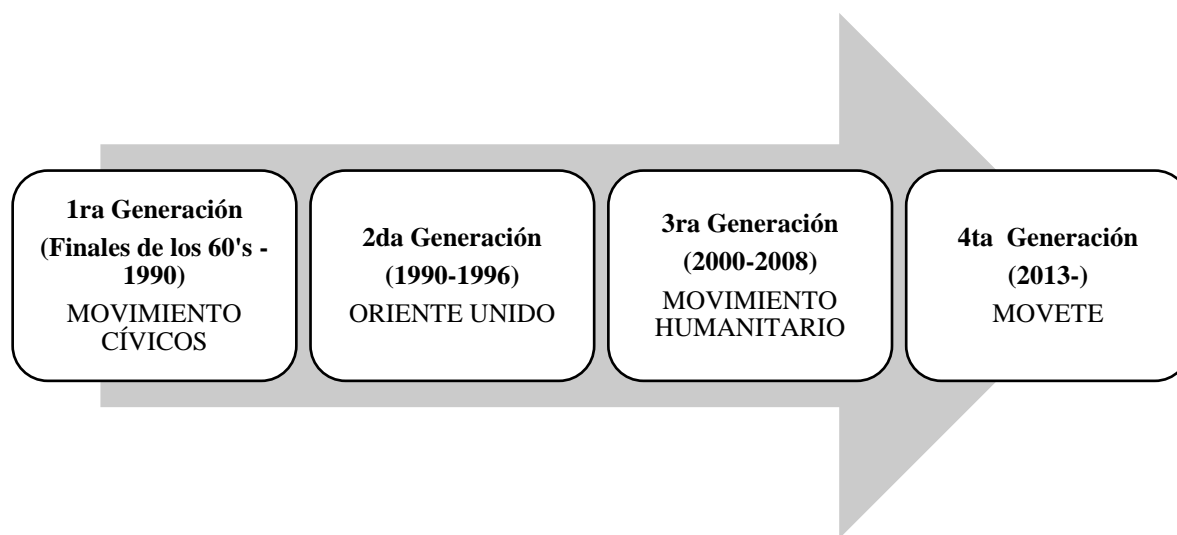
De acuerdo a su misma lectura, desatar estos nudos históricos y consolidar un proyecto de paz territorial en la región, implica la confrontación de un modelo extractivo que, con sus diversos

proyectos, amenaza los procesos de retorno, como deuda del pasado, y ensombrece los sueños comunitarios, campesinos y populares acerca del territorio, como promesa del futuro. Así es que los proyectos del nuevo extractivismo son leídos, de un lado, como procesos de “revictimización” y, de otro lado, como amenazas a una paz estable y duradera en la región (Entrevista a DJ). Para enfrentar esta realidad y proponer alternativas acerca del territorio, su vocación, su geografía, sus valores y relaciones, nace el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño, a cuyo estudio dedicaremos el próximo apartado.

3.1.2. La cuarta generación del movimiento social en el Oriente: El Movete

“Hay una cosa indiscutible: el Oriente antioqueño ha sido una cantera de dirigencia popular; nosotros como Movete somos la cuarta generación del movimiento social” (Entrevista a RV). Con esta categórica frase uno de los líderes entrevistados definió para nosotros el lugar del Movete en la historia de la movilización social oriental. En esta genealogía se encuentran, primero, los movimientos cívicos gestados entre fines de los 60 hasta la década del 80, segundo, el Movimiento Oriente Unido durante la década del 90 hasta antes del período de agudización del conflicto, después, dentro de este ciclo violento, los movimientos por la paz y, finalmente, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio.

Figura 6. Las cuatro generaciones de la movilización social oriental



Fuente: Elaboración propia con base en Ávila y Montenegro (2018)

Los padres fundadores de la movilización oriental

Como fue relatado previamente, la llegada del discurso del desarrollo y de la planificación regional desde arriba en los años 60's del siglo pasado, desencadenó un proceso de movilización regional que definió para siempre la memoria social y política del Oriente antioqueño. Era una época en la que el Frente Nacional mostraba claras señales de agotamiento, el bipartidismo se resquebrajaba y entre sus fisuras se incorporaban a la historia nacional las insurgencias y los movimientos cívicos.

Fueron estos los que reaccionaron en el Oriente en contra de dos agravios determinantes: el alza en la tarifa de la energía eléctrica y los proyectos de infraestructura que derruían los cimientos de la vida social y comunitaria tal y como era experimentada hasta entonces.⁶⁹ Ramón Emilio Arcila, el gran referente del Movimiento Cívico lo sintetizó así: “Estas dos problemáticas, la de servicios públicos [...] y las obras de infraestructura, hicieron que se fuera desarrollando el movimiento cívico y que se fuera presentando una serie de paros - aproximadamente 20 en la región” (Arcila, 1990, p. 13).⁷⁰

Primero fueron juntas cívicas de carácter local: organizaciones sociales independientes de la institucionalidad y de los partidos, compuestas por comunidades, pobladores, estudiantes, intelectuales, campesinos y sectores sociales de la iglesia. Estas juntas fueron brotando en los diferentes municipios a medida que los proyectos hidroeléctricos iban llegando y que otros problemas asociados despertaban el inconformismo social (servicios públicos u obras de infraestructura como la carretera Medellín-Bogotá, por ejemplo).

Poco a poco, a fuerza de paros y protestas en los diferentes municipios, se fue estructurando una conciencia política regional en torno al hilo conductor de los diferentes problemas que golpeaban a las localidades: la planeación desde arriba y desde afuera. Así fue que nació el

⁶⁹ Para dimensionar el nivel de afectación de estas obras a la vida social oriental, piénsese que una de las organizaciones cívicas pioneras, en el municipio del Peñol, resistió férreamente porque su pueblo, su cabecera municipal, sería inundada por completo para construir el Embalse Peñol-Guatapé. Esto efectivamente sucedió. El viejo Peñol yace sobre el fondo de una represa, así como el 56% del territorio municipal de su pueblo aledaño, Guatapé (Higuita y Rupp, 2018, p. 31).

⁷⁰ En otro lugar, el mismo Arcila (1986, p. 53) describe el agravio de esta manera: “En la región oriental del departamento de Antioquia se concentran los embalses que generan el mayor porcentaje de energía eléctrica del departamento (57.82% en 1982). Su población, cercana a los 500.000 habitantes, no puede disfrutar, sin embargo, de este privilegio. Por extraña paradoja, la energía generada en la zona se hace más costosa para los pueblos que han sufrido el impacto ecológico y social de la implantación de centrales hidroeléctricas, y menos costosa para los habitantes de la capital departamental”.

Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, un movimiento social que hacía parte del auge de movimientos cívicos en Colombia. En el Oriente, tal Movimiento consistió, como en el caso de sus homólogos, en una organización de carácter policlasista, no partidista y civil.⁷¹ En palabras de su máximo líder, se trataba de una “genuina expresión de poder popular” (Arcila, 1986, p. 58).

El Movimiento Cívico representó un tránsito de “la protesta a la propuesta”. Expresaba la consolidación de un movimiento regional que adquiría cada vez mayor ascendencia sobre la población oriental, lideró los paros cívicos más importantes en la historia de la región y desafió la hegemonía de las élites orientales. Comenzó a incursionar en la política institucional con resultados importantes para postular una alternativa política a la visión corporativista del desarrollo que se imponía en la región.⁷² De este modo, se convirtió en una amenaza intolerable para las estructuras de poder regional. Sus líderes fueron amenazados, desplazados, torturados y asesinados por actores paraestatales. Ramón Emilio Arcila fue baleado en Marinilla, su tierra natal, un 30 de diciembre del año 1989. El Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño fue exterminado.

La década de los 90 se abrió con un panorama promisorio para los procesos de movilización social en Colombia y en el Oriente antioqueño. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y se promulgó una nueva Carta Magna en el año 1991. El programa jurídico-político allí consagrado anunciaba aperturas que no fueron ignoradas por los movimientos sociales del país. Se consagraron nuevos derechos y libertades, mecanismos de protección de los mismos e importantes límites al poder político, que había gobernado bajo la figura del “Estado de sitio” durante buena parte del siglo precedente. Dentro este conjunto de reformas, además, se estableció el principio de la descentralización administrativa que brindaba una cierta autonomía a las entidades territoriales para disponer del presupuesto y las destinaciones del gasto público.

Esta autonomía suponía la apertura de espacios de participación a nivel regional y municipal para que las comunidades organizadas influyeran en el presupuesto y, con ello, en la planeación, ordenación y construcción del territorio. El Movimiento Oriente Unido nace intentando aprovechar

⁷¹ Este atributo, la naturaleza “no armada” de tales movimientos, era especialmente enfatizado y daba el nombre a los mismos: cívicos (Ávila y Montenegro, 2017, p. 232).

⁷² “Encontramos que después de las grandes movilizaciones obtenida la conquista o, por lo menos, firmado un documento, la gente se desmovilizaba, no había continuidad, nos movíamos al son de la coyuntura. Estas reflexiones nos hicieron pensar que debíamos pasar a una etapa diferente. Nos planteamos una cosa muy simple: debemos pasar de la protesta a la propuesta, es decir, el movimiento cívico debía plantearse como alternativa política en la organización de la comunidad. Esta es la etapa en la que nos encontramos actualmente” (Arcila, 1990, p. 13).

esta estructura de oportunidad para retomar las banderas del Movimiento Cívico. Consigue emprender proyectos de participación comunitaria, logrando el apoyo de las administraciones locales y alcanzando triunfos electorales en municipios como Granada, San Carlos y el Peñol (Higuita y Rupp, 2018).

Sin embargo, pasó poco tiempo antes de que las promesas de las reformas jurídicas y políticas de comienzos de los años 90, fueran crudamente disipadas por la confrontación armada. De nuevo las amenazas, los asesinatos selectivos y la persecución en contra del movimiento oriental obligó a sus agentes a una rápida retirada para proteger sus vidas. Justamente al año siguiente de la desaparición de Oriente Unido la violencia escaló, alcanzando un paroxismo tal que, como fue relatado previamente, definió un antes y un después en la historia regional (García, 2007).

La violencia, el miedo y el terror infligido en la población civil alcanzó niveles intolerables. No obstante, de manera sorpresiva, esta reaccionó al estilo oriental: movilizándose. Asociaciones de mujeres, juntas de acción comunal, asambleas comunitarias, grupos de jóvenes y la iglesia comenzaron a buscar soluciones para aliviar la crisis humanitaria de la región. Ya no se trataba de una movilización contestataria con horizontes políticos definidos, como en el caso de las dos generaciones precedentes. Ahora la acción colectiva respondía a una urgencia vital, buscando construir diálogos con las instituciones y los actores armados para aliviar las condiciones de vida de las comunidades avasalladas por la confrontación armada.⁷³

De esta manera se abrieron canales de diálogo y espacios para la acción colectiva que consiguieron vincular a los actores institucionales en torno a diversas propuestas de diálogo con actores como el ELN, con quienes se lograron treguas y acuerdos parciales de tipo humanitario. Así fue creciendo la acción social e institucional que procuraba desestructurar la violencia, pero también atender a sus víctimas mediante diversos programas de atención y acompañamiento (Ávila y Montenegro, 2017).

El movimiento por la paz logró poner los reflectores sobre la crisis humanitaria de la región, concitando la solidaridad de actores de la comunidad internacional, del mundo empresarial y del

⁷³ García (2007) lo ilustra de la siguiente manera: “Si hasta el período anterior el proceso que dinamizaba las transformaciones regionales se dio a partir de una polaridad –movimiento cívico regional/Estado– ahora, los grupos armados –guerrillas y paramilitares– en su disputa por el territorio, colocan a los más diversos grupos y actores sociales en el mismo lado de la acción: la resistencia organizada a los efectos de la guerra” (p. 141).

sistema político. Esto derivó en el nacimiento del *Laboratorio de Paz*, un ambicioso programa auspiciado por la Unión Europea y Prodepaz en el que se integraron organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y otros actores de la sociedad civil con la finalidad de ejecutar diversos proyectos para reconstruir el tejido social y comunitario (García, 2007).⁷⁴

Desde el punto de vista de la movilización social y la organización popular en el Oriente, el Laboratorio de Paz ha sido valorado de maneras diversas. Incluso, al interior de Movete, como lo evidenció nuestro trabajo de campo, existen visiones encontradas. Las mismas oscilan entre la crítica al “intervencionismo estatal y de las ONG’s” que institucionalizó y generó dependencias en los procesos de acción colectiva; hasta el reconocimiento de que los programas y recursos desde allí inyectados a la organización social fueron fundamentales para revitalizar la vida pública y preparar el terreno para lo que más tarde sería el Movete.

El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño

Entender lo que es y lo que significa el Movete en términos históricos implica tener presente las complejas trayectorias que de manera resumida se han ilustrado hasta acá. Desde el primer momento de nuestro diálogo uno de los líderes de la Unión lo expresó así:

Yo creo que una de las cosas que uno debe valorarle a este Movimiento es que no es uno de los movimientos que se siente como fundador de algo, sino que es un movimiento que ha logrado recoger de una u otra manera unas luchas históricas que ha tenido la región y articularse a eso, y saber, pues, que no se están inventando el mundo desde acá sino que ha habido unas luchas, unos procesos, unos líderes previos que han logrado algunos avances (Entrevista, BJ).

Con el silencio de los fusiles y las diferentes intervenciones institucionales que buscaban revitalizar la vida social en la región, fueron creadas las condiciones para que comenzaran a adelantarse procesos de retorno y reencuentro entre viejos y nuevos actores sociales que querían trascender la agenda humanitaria para construir un horizonte socio-territorial de nuevo tipo. Las

⁷⁴ Dentro de ellos la Asamblea Provincial Constituyente, el Consejo de Alcaldes del Oriente antioqueño, la Gobernación de Antioquia, la Diócesis de Sonsón-Rionegro, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comunidad Internacional, las entidades regionales y nacionales públicas y privadas, los Ministerios, la Dirección Nacional de Planeación y el Congreso de la República.

trayectorias personales de los líderes sirven para ilustrar este proceso social. En este sentido nos fue relatada la experiencia política y vital de uno de los líderes históricos de San Carlos:

Había salido [desplazado por la violencia] en los 80s, volví a finales de los 80s principios de los 90s, en el 98 volvimos a salir [desplazados] –perdimos como 8 años de trabajo comunitario ahí–. En el 2007 volvimos a regresar con la acción social y política ... la gente regresa a empoderarse nuevamente en el territorio y uno como parte, pues, de esa iniciativa de volver a recuperar los espacios. Empezamos a interactuar varios municipios, a hacer el Festival del Agua, hacer algunos eventos [...] otra vez tejiendo, retejiendo la organización social, y ya [...] en el 2012, nos integramos en Movete. Movete como un movimiento con una propuesta de defensa del territorio, del agua, de la vida: defensa de la vida, el agua y el territorio, muy ligada a la resistencia comunitaria, [es decir] a la gente que retornó, la gente que se mantuvo en resistencia, [que no iba] a dejarse desplazar nuevamente, [estos actores se alertaron por] los proyectos de desarrollo que llegaron [...] solicitudes de hidroeléctricas, el tema de la minería de materiales de construcción, la presión por la arcilla, el tinte, el caolín, los mármoles, materiales que las empresas del grupo Argos las utilizan para sus industrias: el cemento, los hornos, las arcillas, todo eso (Entrevista, OC).

En este orden de ideas, a partir del año 2007 comienzan a desarrollarse una serie de foros y escenarios de encuentro e interlocución, centrados en la discusión del problema energético y de los servicios públicos en la región, en el contexto de la reconstrucción de la vida social oriental: El Foro Energético del Oriente antioqueño en el 2007, la Mesa Energética del Oriente Antioqueño y el Primer Foro de Servicios Públicos en el 2009. En este mismo año se organizó en el municipio de El Peñol el “Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza” como parte del “Foro Social por la Vida, la Dignidad y la Identidad Popular” que se adelantó en el Oriente antioqueño y en Medellín del 3 al 11 de octubre. En este encuentro organizaciones sociales y comunitarias abordaron discusiones centradas en la calidad y las altas tarifas de los servicios públicos, la pobreza, la explotación de los bienes comunes y la privatización del agua en la región. Con ello pudieron dar un salto cualitativo en la lectura y la propuesta para la conflictividad regional: arribaron a la crítica del “modelo de desarrollo” para proponer la elaboración de una “gran agenda regional” centrada en la defensa de los bienes comunes, el territorio y los derechos humanos (Higuita y Rupp, 2018).⁷⁵

⁷⁵ En el documento producto del encuentro, “Transferencias, Equidad y Desarrollo Regional” se planteó: “Nos enfrentamos a dos formas de ver el desarrollo. Una, aquella donde las comunidades deciden cómo quieren vivir

Uno de los resultados de este proceso fue la creación del Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza que se encargó de promover y organizar encuentros anuales que posteriormente serían rebautizados por el Movete con el nombre de “Festivales del Agua”. En estos festivales confluyen una serie de iniciativas lúdicas y culturales junto a la protesta, la organización y la discusión en torno a los temas críticos de la región: hidro-energía, minería, monocultivos, seguridad/soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria).

Tras el 5to Festival del Agua celebrado en el Carmen de Viboral en el año 2013, las distintas organizaciones sociales que se cohesionaban al calor de la renovada actividad social, política y comunitaria impulsada por el Foro energético de 2007, decidieron fundar el Movete. Es así como, después del complejo proceso histórico de violencia y lucha social descrito en los apartados precedentes, en la segunda década del siglo XXI nace el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, definido por sus integrantes como “Una articulación de comunidades, procesos locales, organizaciones sociales y activistas, quienes formamos un movimiento regional desde la participación popular, a partir del empoderamiento comunitario para la construcción colectiva de los territorios” (Movete, 2018).

En síntesis, El Movete es un movimiento social que simboliza un renacimiento y le da forma a la cuarta generación de la movilización social en el Oriente antioqueño. Sus antecedentes se remontan al proceso de organización cívica de las comunidades que, hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, comenzaron a sufrir las consecuencias directas de grandes proyectos hidroeléctricos y de infraestructura. Siendo de interés estratégico nacional, tales iniciativas no consultaron ni las experiencias ni las opiniones locales. Se impusieron y desencadenaron un proceso de organización social articulado en el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, que expresó una toma de conciencia de parte de pobladores, campesinos y activistas en torno a los daños sociales, económicos y culturales de los emprendimientos hidroeléctricos en sus territorios. Casi medio siglo después, el Movete emerge con una nueva agenda signada por el contexto político y

encuentran del Estado las facilidades para hacerlo. La otra es donde el desarrollo es entendido como la capacidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura, hacer embalses, hidroeléctricas con las que se diversifican las formas de ingresos para un país, pero en el caso nuestro, en el país son como cinco familias y cientos de multinacionales que disfrutan del desarrollo, a los demás nos arrojan las migajas que quedan en el banquete”. Citado por Higueta y Rupp (2018, p. 69).

socioeconómico nacional, en el que la cuestión de la paz, la democracia y el extractivismo desempeñan un papel crucial:

Buscamos la paz territorial con justicia social y ambiental, fundamentada en: la comprensión de los seres humanos como parte de la naturaleza, lo cual demanda una relación armónica y equilibrada; la dignificación y el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos; la garantía de los derechos y la auto-determinación de las comunidades; lo cual asegura su permanencia con condiciones de vida digna en el territorio del Oriente Antioqueño (Movete, 2018).

El Movete integra organizaciones y procesos socio-comunitarios de 12 municipios del Oriente: San Francisco, Cocorná, San Luis, La Unión, Sonsón, Nariño, Argelia, San Carlos, Granada, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla y Alejandría. Tiene una composición plural de la que participan medios alternativos y actores de la sociedad civil. Descansa sobre los hombros y la historia de organizaciones de campesinos, jóvenes, ambientalistas y pobladores de la región⁷⁶ que se han propuesto defender el territorio del proyecto regional-corporativo-extractivista, para construir participativamente un horizonte socio-comunitario en donde la vida se ponga en el centro.

3.1.3. El conflicto político, “demasiados frentes de lucha”

Como ha sido evidenciado, tanto el Movete como la configuración del orden extractivo en el Oriente son fenómenos complejos desde el punto de vista histórico y territorial. Los espacios de actuación son diversos e involucran múltiples ecosistemas, actores institucionales, políticos, sociales y empresariales. El carácter descentralizado y *regional* de la lucha le imprime un dinamismo al conflicto político que dificulta su abordaje, desde una perspectiva cognitiva, pero también desde la perspectiva estratégica del movimiento mismo:

Desde Movete hemos construido un proceso organizativo frente a los diferentes conflictos socioecológicos que han emergido debido a la implantación de un modelo extractivo sobre nuestros

⁷⁶ ACA, Asoproa, CEAM, Colectivo Antorcha, Conciudadanía, Periferia, Vigías del Río Dormilón de San Luis, Corporación Jurídica Libertad, Kavilando, Corporación Ambiental Naturaleza y Bosque NATYBOS de San Carlos, Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Carlos, Red de Acción Frente al Extractivismo (RAFE), Tulpa Comunitaria, Veeduría Ciudadana Ambiental de Sonsón, CTP de Sonsón, Cocorná Consciente, Manos de Sol, Colectivo Utopía y Corpoguama.

territorios. Como sabemos, cada uno de estos conflictos es un ‘mundo’, con sus historias, actores e intereses, por lo que sabemos que nuestras luchas son diversas, y las estrategias dependen del contexto y de los caminos que el propio proceso organizativo va mostrando, y de la respuesta de los demás actores (institucionalidad estatal local, ambiental y regional, las empresas, etc.) (Villada y Jiménez, 2018, p. 93).

3.2. El Cinturón Occidental Ambiental -COA-

Los habitantes en general queremos mucho el territorio,
somos muy apegados a la montaña y al agua, ¡muy apegados!

Y eso lo tenemos claro y por eso no nos hemos ido de aquí,
y por eso no nos iremos si no es para el cementerio.

Líder COA⁷⁷

3.2.1. El suroeste y el *Territorio COA*

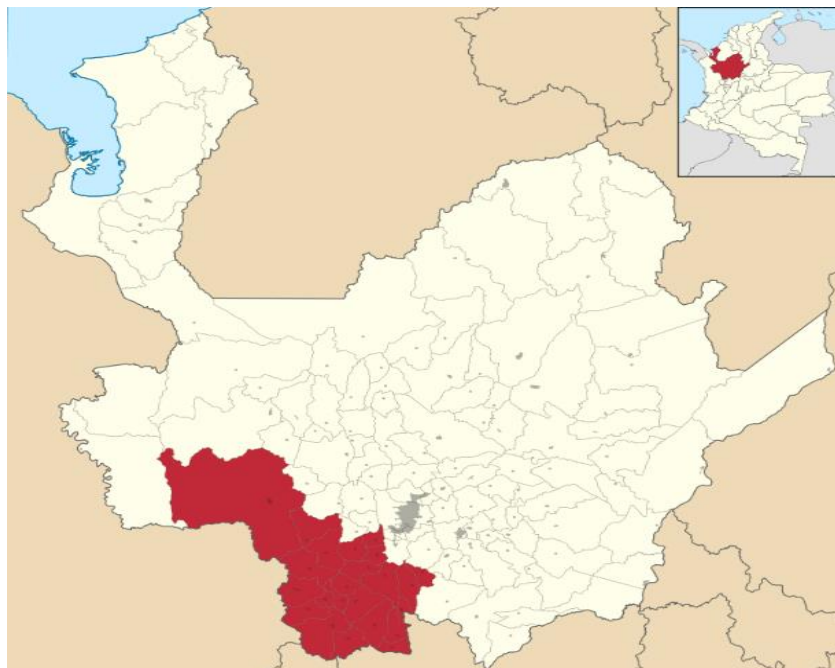
El suroeste antioqueño es una de las 9 regiones en las que se divide el departamento de Antioquia. Se trata de un territorio de alta complejidad geográfica por ubicarse entre las vertientes de las cordilleras central y occidental, dos de las tres cadenas montañosas más prominentes del país, y por formarse a la vera, de un lado, del cañón del río Cauca, la segunda arteria fluvial del territorio nacional, y del otro, de la cuenca del río San Juan. Al mismo tiempo, es una región especialmente sensible por integrarse con el margen norte del *Eje cafetero* de Colombia, una región interdepartamental caracterizada por ser el corazón de la producción de la materia prima más determinante de la economía nacional durante el siglo XX. El suroeste comunica a Antioquia con el sur del país y con el pacífico colombiano.

Desde el punto de vista poblacional y administrativo, se destaca en la escena departamental por ser, al lado del Oriente, con 23 municipios cada una, la región que mayor número de municipios

⁷⁷ Entrevista a AL.

concentra de un total de 125. Al mismo tiempo, dejando de lado el Valle de Aburrá⁷⁸, junto al Oriente y el Urabá, se encuentra dentro de las regiones más densamente pobladas de Antioquia.

Mapa 2. Mapa del suroeste antioqueño en el departamento de Antioquia y Colombia



Fuente: Tomado de Wikipedia.

Las características biofísicas de esta región le confieren una heterogeneidad paisajística, ecosistémica y productiva que se encuentra en la base de su riqueza simbólica y material. En este sentido, el suroeste está dividido en cuatro cuencas hidrográficas con una amplia variación de pisos térmicos que van desde el clima cálido a nivel de río hasta el clima frío de páramo: la cuenca del río Cauca, la cuenca del río San Juan, la cuenca carbonífera de Sinifaná y la cuenca del río Atrato, le dan forma al horizonte hidro-social del suroeste (Iner, 2003a).

De este modo, en las vertientes cálidas de los ríos Cauca y San Juan, correspondientes a tierras de cotas de altura bajas y medias, se combinan la mediana y la gran propiedad dedicadas a

⁷⁸ La región central del departamento, en donde se encuentra la capital, Medellín, y un Área Metropolitana que reúne la mayor parte de la población, siendo epicentro de las actividades económicas, políticas y administrativas de toda Antioquia.

la producción agroindustrial y a la ganadería doble propósito (leche y carne). Por otra parte, en las tierras de cotas de altura medias y altas, en franjas altitudinales entre los 1000 y los 2000 m.s.n.m., se expande la pequeña propiedad de la población campesina, consagrada a la producción del producto principal de la región, el café, y a otros productos agrícolas como la caña panelera, el plátano, el frijol y las siembras frutales (Perdomo, 2016). Adicionalmente, en la cuenca de Sinifaná, existen importantes explotaciones de carbón que, como se verá más adelante, abarcan municipios externos al *Territorio COA* (Angelópolis, Amagá, Tibiribí, Venecia y Fredonia) (Iner, 2003a).

De acuerdo al *Instituto de Estudios Regionales* de la Universidad de Antioquia (Iner, 2003a), el suroeste, al lado del Oriente antioqueño, es visto como una de las regiones del departamento más compactas y plenamente diferenciables desde el punto de vista cultural. En su caso, han sido la colonización antioqueña⁷⁹ y la economía cafetera las dimensiones socio-históricas que en mayor medida han dado forma a una cultura regional, que es determinante dentro de los referentes identitarios de la antioqueñidad:

La colonización antioqueña ha sido un elemento esencial para construir y explicar la cultura de la región del Suroeste: cobra allí significado la imagen del “paisa”, es decir, el antioqueño mestizo. La idea de una aparente unidad cultural en Antioquia dio pie para que se hablase de una “cultura regional antioqueña” y de una “raza antioqueña” o “paisa”; pero además de un listado amplio de atributos exacerbados de su carácter y de su espíritu. El Suroeste antioqueño se constituye como el referente para la autopercepción y autodefinición de los antioqueños, es decir, la idea de “lo paisa” unida a la imagen del poblador cafetero, asumida y apropiada por una colectividad que se siente identificada con dichas construcciones ideológicas y mantenidas hasta hoy, o por lo menos defendidas y aprovechadas, por las elites regionales (p. 38).

En este paisaje interandino de tonalidades verdes y riquezas hidrográficas, definido por la cultura campesina y cohabitado por comunidades ancestrales, ha estimulado el imaginario acerca de una cierta “vocación” del territorio ligada a la producción de alimentos y a la protección de sus riquezas naturales y paisajísticas. En efecto, varios de sus pueblos se destacan en la escena cultural del departamento, haciendo parte de la *Red de Pueblos Patrimonio de Colombia* y siendo altamente

⁷⁹ De acuerdo al Iner (2003a) la colonización antioqueña es un proceso que “imprimió a la región unas características que en la actualidad se constituyen en elementos que la identifican como la zona ‘paisa’ donde colonos fueron tumbando monte y fundando pueblos. En esta época la región enfrentó un gran movimiento de población mestiza, mulata y negra libre en busca de tierra” (p. 36).

valorados por su tradición y su belleza, de modo que el turismo también se ha vuelto importante en el circuito económico regional.

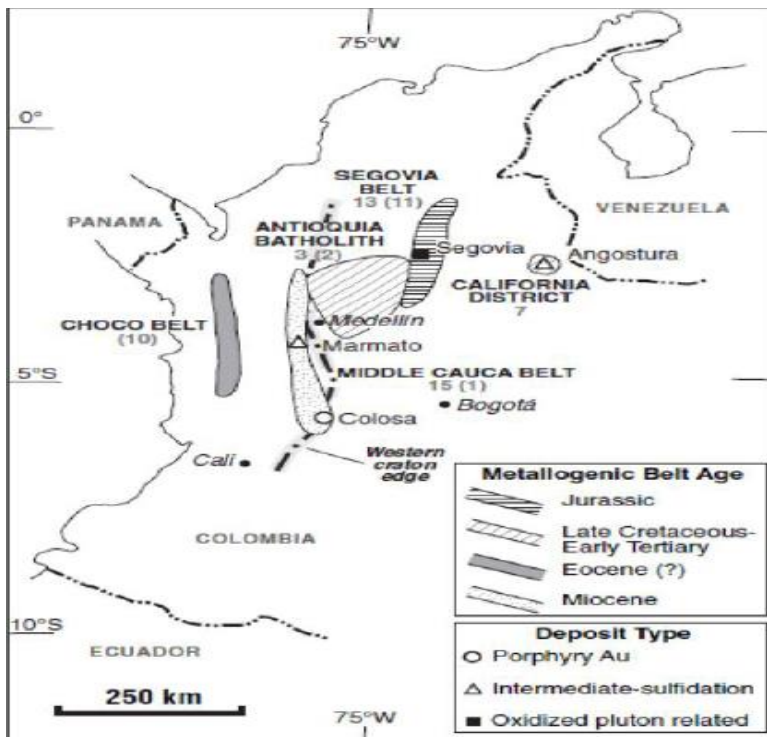
Aunque el suroeste está conformado por 23 municipios, el *Cinturón Occidental Ambiental* se articula en torno a aquellos que de manera más directa enfrentan la amenaza del *Cinturón de Oro de Colombia*⁸⁰ (Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín) y a cinco resguardos indígenas⁸¹ que habitan el mismo territorio: Karmata Rua del municipio de Jardín, Marcelino Tascón de Valparaíso, Bernardino Panchí de Pueblorrico, Miguel Cértiga Tascón de Támesis y Hermeregildo Chakiamá de Ciudad Bolívar. Estos espacios socio-territoriales se insertan, a su vez, en el circuito del *Middle Cauca Belt* (Cinturón Medio del Cauca), una unidad espacial de miles de kilómetros de longitud identificada como uno de los principales distritos de oro en el norte de la cordillera americana según el trabajo pionero del geólogo Richard Sillitoe (Perdomo, 2016). En conjunto, configuran lo que ha sido denominado por los integrantes del COA como *Territorio COA*:

El Territorio COA es un espacio de construcción colectiva, Sagrado para la Vida, en el cual se tejen relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales, dando origen a identidades compartidas, construyendo el patrimonio ambiental, social y cultural en el suroeste antioqueño mediante estrategias de acción regional encaminadas a la autonomía popular. El amor a nuestras culturas, fuentes hídricas, paisajes, alimentos y formas de vida, ayudarán a iniciar procesos de autorreconocimiento y crear conciencia de lo que somos cultural y socialmente, fortaleciendo nuestras potencialidades y confrontando las amenazas que recaen en el territorio (COA, 2016, p. 2).

⁸⁰ En próximos apartados ampliaremos la exposición sobre las que son concebidas como “amenazas” para el territorio. Por lo pronto, téngase en cuenta lo siguiente: “En el suroeste de Antioquia ha surgido el Cinturón de Oro de Colombia, zona geológica que hace parte de un ramal de la cordillera Occidental y nace en Marmato (Caldas), localidad que tiene más de 500 años de historia minera, comprendiendo los municipios de Riosucio y Supía (Caldas) y continúa su extensión en Valparaíso, Jardín, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Hispania, Caramanta y Andas (Suroeste de Antioquia)” (COA, 2016, p. 6).

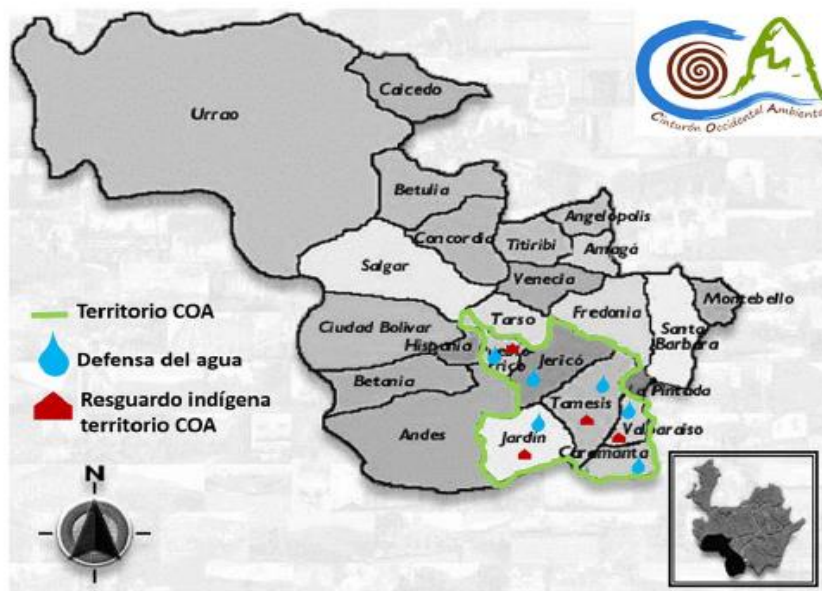
⁸¹ “Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio”, Artículo 21, Decreto 2164 de 1995.

Mapa 3. Mapa del Middle Cauca Belt



Fuente: Tomado de González (2018).

Mapa 4. Mapa del Territorio COA



Fuente: Tomado de Palacio (2016).

De acuerdo a la descripción de Castro Velásquez (2014),

Este territorio lo configuran nueve pequeños poblados que se iniciaron desde finales del siglo XVIII con la colonización antioqueña, de topografías quebradas y muy montañosas, con vertientes húmedas, cálidas y frías, con áreas de bosques secundarios, subandinos y alto andinos, de alta biodiversidad y exuberantes paisajes, que dan origen a una importante estrella hidrográfica. Y con actividades socioeconómicas similares, sustentadas principalmente por una economía de subsistencia o campesina, ligada a la producción cafetera.

Una población principalmente mestiza de aproximadamente 123.542 habitantes (Censo Dane 2009), en una extensión de 1.578 Km², donde también cohabitan cinco (5) asentamientos de la etnia emberá-chamí, que se establecieron desde mediados del siglo XVI, provenientes del Chocó y Risaralda, por la persistente presión colonizadora y por sus características de sobrevivencia (caza y pesca).

Los elementos previamente descritos constituyen los basamentos que soportan las representaciones simbólicas y los lenguajes de valoración que emergen en los procesos de enmarcamiento del COA. Estos expresan emociones, tradiciones, recuerdos y proyectos anclados al sustantivo *territorio* y desbordan, en consecuencia, la relación instrumental con la tierra, concebida como factor de producción y reproducción de la vida social y familiar. Un líder campesino, fundador del COA lo enseña así:

Hay un alto sentido de identidad y de pertenencia con la región [...] es el sentido de identidad y de pertenencia que existe de parte de la gente y los campesinos con la región. De querer... es una región que la gente la quiere mucho. De hecho, la mayoría de los habitantes, sobre todo los campesinos, son propietarios de una parcela de tierra, entonces esa parcela les da arraigo y asiento en la tierra. Y eso hace que no sea solamente el tema económico, sino lo cultural y otros factores que intervienen para que el campesino diga: “es que la tierra yo la quiero mucho, es muy bonita, es donde crecieron mis abuelos, mis hijos [...] entonces yo tengo que defenderla, no puedo permitir que vengan actores al territorio que nos van a nosotros a desplazar” (Entrevista a VH).

El suroeste, un conflicto “graneadito”⁸²

El suroeste, a diferencia de otras regiones del departamento como el Oriente, el Urabá o el Bajo Cauca, no figuró como epicentro del conflicto armado interno en el ámbito regional, aunque varios de sus municipios sufrieron las consecuencias de la guerra. Primero, en el marco de la violencia liberal-conservadora y, después, dentro del conflicto de la segunda mitad del siglo XX entre las insurgencias revolucionarias, el paramilitarismo y el Estado colombiano. Sin embargo, al no padecer eventos de violencia masiva y generalizada, ni la región globalmente considerada, ni alguno de sus municipios, fueron seleccionados como zonas priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC-EP bajo figuras como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.⁸³

El Territorio COA refleja esta dinámica general del conflicto en la más amplia región del suroeste. En razón de hechos victimizantes como amenazas, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, principalmente protagonizados por el paramilitarismo, algunos actores y pueblos vivieron una experiencia de tipo traumático. Esto se refleja, por ejemplo, en el relato y la experiencia de uno de los intelectuales orgánicos del Movimiento acerca del municipio de Pueblorrico, que da cuenta de hechos trágicos a nivel personal y comunitario ante la violencia desplegada por actores paraestatales (González, 2018). En este sentido, uno de los líderes entrevistados expresó:

Indudablemente la intensidad del conflicto en el Suroeste no ha sido la misma que en otras regiones del departamento, aquí la intensidad ha sido diferente. Sin embargo, no podemos decir que es una región ausente de conflicto, no. En el Suroeste han habido [sic] amagos de conflictos y partamos por ejemplo de la década de los 50s, cuando la famosa Violencia, muchos municipios del Suroeste fueron bastante aporreados por el fenómeno de La Violencia, caso por ejemplo de Salgar, Concordia, Urrao, muchos municipios sufrieron el estigma de La Violencia, muy marcado (Entrevista a VH).

⁸² Quiere decir “por granos”, esto es, de a poco y en pequeñas cantidades.

⁸³ En el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se dispuso que la aplicación de los distintos programas, planes y proyectos allí contenidos, sería priorizada en las regiones más afectadas por la guerra, el abandono estatal y las economías ilícitas. Para ello se diseñaron figuras jurídicas, políticas y administrativas mediante las cuales se buscaba adelantar programas de desarrollo integrales, acompañados de la sustitución de cultivos de uso ilícito en donde tuvieran lugar. Dentro de estas figuras se destacan, precisamente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PISDA).

Con todo, lo cierto es que en este territorio la dinámica de la violencia no desencadenó procesos masivos de desplazamiento forzado, acciones abiertas de guerra en contra de la población civil, masacres públicas y sistemáticas o fenómenos de exterminio de actores colectivos específicos. Según los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el suroeste, la media de eventos de victimización relacionados con el conflicto armado interno, por municipio, es de 6710. Si sólo se consideran los municipios que comprende el *Territorio COA*, dicha media desciende a 2725. En contraste, la media en regiones consideradas como críticas en esta materia, por ejemplo, el Oriente antioqueño, es más de seis veces superior, alcanzando los 18256 eventos.⁸⁴

El conflicto armado adoptó otra modalidad, en términos de una de las lideresas entrevistadas, los hechos de victimización “fueron graneaditos, fue otro tipo de conflicto” (Entrevista a HD). Otro líder ambiental de Jericó manifestó:

La gente si bien no fue víctima directa de los hechos de violencia que generaron las últimas décadas, sí hubo pues alguna presencia durante un tiempo de paramilitares que vacunaba a la población: las gentes con un pequeño negocio tenían que ir a otro municipio, o algún corregimiento, a llevar la cuota que le asignaban. Pero no hubo, repito, hechos de violencia directos contra la población. Eso, tal vez, marginó a Jericó de entender la magnitud de la violencia que se estaba viviendo en el país (Entrevista a JF).

Esto explica que, en nuestro trabajo de campo, varios líderes relativizaran el rol del conflicto dentro de los problemas sociales regionales en general y, en particular, en los procesos de movilización social. Un activista de Támesis, en esta línea, expresó: “Nosotros aquí no fuimos muy afectados por el conflicto armado [...] y por eso no estamos en las zonas priorizadas del proceso de paz, no quedamos [...] porque el problema del conflicto armado no fue muy relevante en la zona” (Entrevista a CG).

El suroeste en el circuito extractivo transnacional: Cinturón de Oro de Colombia y Middle Cauca Belt

Durante la primera década del siglo XXI el suroeste antioqueño sufrió un proceso inédito de incorporación al régimen extractivo nacional. Este modo de acumulación se amplió sobre

⁸⁴ Datos calculados con base en los reportes estadísticos del Registro Único de Víctimas: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

territorios de vocación agrícola, de reconocida riqueza paisajística y natural, que habían permanecido al margen de las más agresivas dinámicas de la economía extractiva. Un conjunto de élites políticas, económicas y técnicas consolidó un proceso de planeación territorial llamado a modificar de manera definitiva el horizonte socio-económico y cultural de esta región (Perdomo, 2016).

Los estudiosos de este proceso suelen destacar dos hitos clave para entender la cronología y el sentido de las disputas contemporáneas por el territorio en el suroeste antioqueño: i) La inclusión de un conjunto de municipios de la región, sin tradición minera, dentro del plan “Colombia País Minero. Visión 2019”, que a su vez hace parte del “Plan Nacional para el Desarrollo Minero”, promulgado en el año 2006 cuando comenzaba el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez ii) La definición hecha en ese mismo documento, del territorio referido, como *Cinturón de Oro de Colombia* (Palacio, 2016).

La consagración pública y oficial de la visión concebida para el desarrollo del suroeste de Antioquia estuvo precedida por un proceso poco visible de estructuración técnica, política y económica del proyecto socio-territorial de tipo minero. Sin embargo, su consolidación lo fue haciendo más visible, al estar acompañada de incursiones en el territorio, con fines de exploración, que activaron las alarmas de campesinos, indígenas y pobladores de las veredas y pueblos potencialmente afectados. Tales alarmas se fueron transformando en procesos de organización social y comunitaria que le dieron un sentido muy específico a la incorporación de su territorio dentro del régimen extractivo nacional: se trataba de una *agresión*.⁸⁵ Así es que nace el COA:

Es una respuesta alterna al llamado COC (Cinturón de Oro de Colombia) el cual establece que los Municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín, constituyen una zona geológicamente homogénea con altas similitudes para la explotación minera y geográficamente corresponde a un flanco o cinturón que se desprende de la Cordillera Occidental, en un área que abarca la confluencia del Río San Juan y el Cauca (COA, 2014).

⁸⁵ “[...] ya para principios y mediados de la década del 2000, como respuesta a la ‘agresión’ que el Estado realizaba sobre los territorios a través del ‘Plan Nacional para el Desarrollo Minero. Colombia País Minero, visión al año 2019’, gran parte del proceso político organizativo se centra en el tema minero” (González, 2018, p. 109).

Mapa 5. Mapa del Cinturón de Oro de Colombia



Mucha preocupación es lo que sienten los habitantes y dirigentes del Suroeste antioqueño con los proyectos mineros que se vienen desarrollando en esta subregión antioqueña.

Fuente: Tomado de COA (2014).

3.2.2. La Articulación *COA*: vertientes y raíces de la acción colectiva regional

De acuerdo a González (2018), el COA puede ser comprendido en dos sentidos: como territorio y como articulación.⁸⁶ El primero de ellos fue retratado en el anterior apartado. El segundo está muy bien ilustrado en el relato de uno los líderes fundadores del COA:

Se empiezan articular organizaciones, empezamos a ver que era importante que nos pensáramos más en términos de subregión y cómo podríamos articular todas las organizaciones sociales y ambientales que había en la región. Por eso nosotros no nos denominamos organización estrictamente, sino que podríamos decir que es más una articulación. No tenemos personería jurídica, ni ha sido la pretensión, ni nos ha interesado hasta el momento tener personería jurídica, consideramos que la articulación es suficiente para realizar el trabajo (Entrevista a VH).

⁸⁶ “Es un nodo de relaciones entre campesinos, indígenas, jóvenes, hombres y mujeres, que, desde diferentes prácticas espaciales, historias particulares y articulaciones sociales, se han reafirmado en medio de diversas tensiones, contradicciones, consensos y disensos, como un conglomerado de muchos conjuntos sorprendentes de agencias (Latour, 2008) que tiene capacidad de acción y transformación” (González, 2018 p. 131).

En la historia social y política antioqueña el suroeste no ha sido un territorio destacado por la articulación regional de movimientos campesinos, indígenas o comunitarios de amplia base social. Existieron, no obstante, durante la segunda mitad del siglo XX, valiosas iniciativas sociales de tipo reivindicativo ligadas a la labor social de la iglesia, así como a procesos campesinos, profesoraes y estudiantiles. Estos son, en tal sentido, los que pudieran denominarse como antecedentes lejanos del COA (González, 2018).

Los antecedentes y raíces inmediatas del COA se remontan al último lustro del siglo XX, a partir del cual, de forma sucesiva, fueron brotando procesos locales de base campesina, ambiental e indígena, que siguieron fortaleciéndose y cohesionándose al calor de las tensiones crecientes que diferentes emprendimientos de planeación y exploración minera produjeron en el territorio. Así, para mencionar algunos de los más relevantes, en ese último quinquenio se formaron la Asociación de Productores Agropecuarios de Caramanta (ASAP) (1995) y la Corporación Cerrotusa (1997). En la primera mitad de la década siguiente cristalizaron: la Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta (2001), la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Riosucio (ASPROINCA), la Asociación de Familias Campesinas Biabuma de Támesis (2003) y los Resguardos Indígenas del suroeste de Antioquia. En la segunda mitad, concretamente en el año 2008, nacen el Comité Cívico de Támesis, y los Grupos Culture y Caminantes Huellas de Pueblorrico.

Terminada la primera década del siglo XXI y ante la conciencia plena, al interior de todos estos procesos locales, del proyecto de desarrollo regional contemplado para el *Cinturón de Oro de Colombia* y el *Middle Cauca Belt*, en el año 2011 se consolida la regionalización de la resistencia social y política, con el propósito de articular/coordinar la acción colectiva del suroeste para defender el territorio, así como promover las economías y culturas campesinas e indígenas. Así nace el *Cinturón Occidental Ambiental* junto a otras iniciativas comunicacionales, de economía solidaria campesina y de acción cívica local que se integrarían a él: Periódico La Calle 30, Circuito Económico y Solidario de Támesis (CESTA) y Comité por la defensa Ambiental del Territorio de Támesis (CODÉATE).

En los años posteriores siguió floreciendo la acción pública subregional en torno al COA con procesos como el de Jóvenes en Defensa del Territorio (JODETE), el Comité Futuro por Jericó y el Comité de Concertación Social de Pueblorrico (CoCoSop). En muchos casos, como el de este

último, cada nodo, grupo, colectivo, circuito o comité local tiene otros encadenamientos organizacionales complejos. En relación al CoCoSop, por ejemplo, González (2018), explica:

Es la articulación de procesos en los que se vincula la Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, Asociación Campesina Comunidad en Acción (ACCA), Escuelas Campesinas, Consejo de Cultura, Cabildo del Adulto Mayor, Mesa Ambiental, Periódico La Calle 30, Comité de Cafeteros, Resguardo Indígena Bernardino Panchí, Asociación de Mujeres, Canal Telepueblorrico, Grupos Caminantes Huellas, Centro de Historia, Cinturón Occidental Ambiental COA, profesores y personas naturales (p. 131).

De acuerdo al inventario presentado por González (2018), las organizaciones, procesos hermanos, aliados y espacios de articulación regional y nacional en los que participa el COA son:

Organizaciones del COA. En Caramanta: Asociación Agropecuaria de Productores de Caramanta ASAP, Defensores de la Madre Tierra, Asociación de Mujeres de Caramanta AMUCAR, Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta. *En Támesis:* Comité por la Defensa Ambiental del Territorio CODEATE, Circuito Económico y Solidario de Támesis CESTA, Asociación Caminantes de Támesis ACATA, Acueducto comunitario ACUATÁMESIS, Juntas de Acción Comunal, docentes, Comité ambiental de San Pablo, Comité Ambiental de Palermo. Resguardo Indígena La Mirla. *En Pueblorrico:* Comité de Concertación Social CCS: Asocomunal, Asociación Campesina Comunidad en Acción, Escuelas Campesinas, Consejo de Cultura, Periódico la Calle 30, Asociación de Mujeres, Cabildo del Adulto Mayor, Telepueblorrico, Grupos Caminantes Huellas, Docentes, Estudiantes. Resguardo indígena Bernardino Panchí. *En Valparaíso:* Corporación Valle del Paraíso y Resguardo Indígena Marcelino Tascón. *En Ciudad Bolívar:* Mesa Ambiental de Farallones y Resguardo Indígena Hemenegildo Chakiamá. *En Jardín:* Resguardo indígena Karmata Rúa y Mesa Ambiental. *En el ámbito subregional:* Jóvenes por la Defensa del Territorio (JODETE): Colectivo de jóvenes que articula a jóvenes de diferentes organizaciones locales, urbanas y rurales, campo y ciudad.

Procesos hermanos: Asociación Campesina de Antioquia en Betulia; Asociación Subregional de Mujeres ASUBMUS; Colectivo de Nuevas Identidades Masculinas (NIM); Comité Futuro por Jericó; Comité por la Defensa Ambiental del Territorio de Santa Bárbara;

Colectivo de Estudio de Tarso; Mesa Ambiental de Salgar; Mesa Ambiental Ciudad Bolívar; Mesa Ambiental de Andes; Colectivo Ambiental de Abejorral.

Espacios de articulación nacional y departamental: Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – Antioquia.

Aliados: Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colectivo de abogados José Alvear Restrepo CAJAR, Confiar Cooperativa Financiera, Swissaid, Centro Taller Recreo, Manada Libre, Corporación Vamos Mujer, Organización Indígena de Antioquia, Red de Acción frente al Extractivismo, Periferia Prensa Alternativa, Periódico El Colectivo, CIER, Corporación LA CEIBA, Pensamiento Acción Social PAS, La Iglesia, Canal Comunitario Tv Támesis.

3.2.3. ¿El Cinturón de oro, *middle* o ambiental? La disputa y el conflicto político

La conflictividad socio-ambiental en la que está implicado el COA tiene múltiples derivas territoriales y políticas. La complejidad organizacional ilustrada previamente tiene correlatos en la ductilidad de los adversarios y los múltiples objetos de disputa. Ciertamente, algunos de ellos, por su envergadura, ejercen una cierta fuerza gravitacional en la agenda de movilización, no obstante, las iniciativas extractivas son múltiples y diversificadas, así como sus regentes públicos y privados.

El proceso de desterritorialización protagonizado por los mismos ha sido progresivo. Las empresas, adversarios por excelencia de las organizaciones articuladas en el COA, se han sucedido unas tras otras, cambiando de razón social, y haciendo presencia en el territorio con diferentes grados de intensidad: algunas sólo realizando estudios y adelantando solicitudes de exploración ante las autoridades competentes, otras instalando oficinas en las cabeceras urbanas e incidiendo en el tejido social y la autoridad pública local, y otras más desplegando acciones directas de intervención en el territorio en el marco de procesos de exploración (desviación de cauces, perforaciones, instalación de maquinaria y plataformas, despliegue de personal profesional y técnico, etc.).

Al principio, por ejemplo, la Corporación Cerrotusa enfrentaba en 1997 las pretensiones de empresas canadienses como la Corona Goldfield y la Anaconda Gold Mines. Después, hacia el año 2008, en Támesis diversas organizaciones desafiaron la presencia de la Sociedad Kedahda S.A., hoy Anglo Gold Ashanti, que contaba con varios títulos para la exploración de oro. Posteriormente, señalan Palacio (2016) y González (2013), “aparecen” otras empresas: Solvista Gold (Támesis,

Valparaíso y Caramanta), Júpiter SOM (Jardín), Continental Gold (Caramanta), I'm Gold (Caramanta), Sociedad Minera de Colombia (Caramanta) y, finalmente, AngloGold Ashanti (Jericó) con el proyecto Quebradona, que por su alto impacto y por la inminencia de su desarrollo en el territorio, ha desatado un agudo conflicto que ha concitado la atención de la opinión pública nacional.

Esta conflictividad variada y multimodal agenciada por multinacionales de la industria extractiva ha tenido un abanico colorido de respuestas de las organizaciones ambientales, campesinas e indígenas del COA. Este movimiento se ha caracterizado por una amplia versatilidad en el uso de repertorios, que se encuentran incardinados en un proyecto cultural y territorial que excede los *outputs* inmediatos del sistema político y económico (cancelación de proyectos extractivos, mitigación de impactos ambientales, emisión de compensaciones, expedición de normas, implementación de políticas públicas, concesión de espacios de representación política). Así, en su estudio de los discursos y prácticas del COA, Palacio (2016) enfatiza una “visión a largo plazo” del movimiento que “no termina con la prohibición de la actividad minera”, que además expresa la siguiente especificidad:

La distinción del enfoque de esta articulación social frente a otros movimientos ambientalistas que luchan en función de los conflictos socioambientales existentes, ya que el COA no le apuesta a la búsqueda de una forma de compensación ecoeficientista, el COA le apuesta a replantear las reglas prestablecidas a partir de un modelo de desarrollo monocultural y destructivo, enfatizando en un discurso y práctica en términos de derechos inherentes a la naturaleza y de defensa a la dignidad de la vida (p. 176).

Tal “distinción” contribuye en la comprensión del tipo de mecanismos, tácticas y acciones desplegadas por el COA en el decurso de su lucha por la defensa del territorio. En primer lugar, es importante considerar que la *Articulación COA* es producto de un conjunto de acciones de movilización, institucionales y no institucionales al nivel local, sucedidas por una serie de encuentros que permitieron la construcción de un “marco” regional bajo el cual podían comprenderse de mejor manera los elementos comunes a los problemas de cada comunidad y la necesidad de una respuesta articulada/coordinada.

En este sentido se destacan el Foro social minero de Támesis en el año 2008, el Foro minero de Jericó en el 2011 y el Foro “¿Agua o minería?” realizado en el corregimiento de San Pablo, del

municipio de Támesis en el mismo año. Encuentros de tipo regional signados por el conflicto con el Proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti, en los que participaron actores sociales, institucionales y empresariales de la región y el país para compartir visiones acerca de tal coyuntura. Entre los primeros se encontraban Organizaciones de base, procesos comunitarios, ciudadanos inquietos, Organizaciones no gubernamentales y profesionales. De parte del Estado participaron autoridades tan relevantes como alcaldes, concejales, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Y del lado empresarial, hizo presencia la multinacional AngloGold Ashanti.

Uno de los líderes campesinos del núcleo central del COA destaca la importancia del último foro como un hito importante en el nacimiento de la articulación:

Al día siguiente de esta actividad, de este foro, que fue muy nutrido, bastante nutrido, nos encontramos un grupo de personas inquietas, nos encontramos aquí en el municipio de Támesis [...] para responder una pregunta que ya nos habíamos hecho antes, y era: ¿qué hacer en un caso de esos? ¿Qué hacer? [...] Eso hizo que entonces ese día nos reuniéramos, en julio, si la memoria no me falla el 24 de julio del año 2011. Entonces ese día empezamos, dimos una discusión y de ahí constituimos lo que denominamos el Cinturón Occidental Ambiental –COA– (Entrevista a VH).

Durante sus casi nueve años de existencia el COA ha desarrollado repertorios e iniciativas que pueden agruparse en torno a varias áreas estratégicas: i) Educación ambiental y popular, principalmente a través de las Escuelas de Sustentabilidad impulsadas por CENSAT Agua Viva. ii) Acción comunicacional a través de periódicos, radio, redes sociales y producción documental. iii) Marchas, caminatas y acciones de reconocimiento territorial dentro de las cuales se destacan las Travesías conocidas como “Abrazo a la montaña”, que consisten en un recorrido de una semana a lo largo del *Territorio COA*, realizando foros, debates, actos culturales, marchas y caminatas en los que avanza en la cohesión, la difusión y la protesta. iv) Incidencia política por medio de encuentros de concejales, cabildos abiertos, impulso a acuerdos municipales, cabildeo, promoción de debates entre candidatos a cargos de elección popular v) Movilización legal por medio acciones de tutela, derechos de petición y acciones administrativas

3.3. Recapitulación

En el presente capítulo hemos dado respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los elementos del conflicto político y socio-territorial que nos permiten entender al Movete y al COA como luchas en defensa del territorio enmarcadas en el ciclo 2010-2018?

Para ello, en primer lugar, estudiamos la experiencia del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete. Caracterizamos al Oriente antioqueño, territorio en donde su lucha tiene lugar, e ilustramos su trayectoria en relación a las cuestiones de los proyectos del desarrollo y del conflicto armado interno. Posteriormente, examinamos las amenazas contemporáneas vinculadas a la reconfiguración regional de tipo extractivo. Después, describimos al actor, revisando la historización, las organizaciones y los conflictos en los que está implicado el Movete. En segundo lugar, nos aproximamos a la experiencia del Cinturón Occidental Ambiental. Identificamos las características de su territorio, el Suroeste antioqueño y el *Territorio COA*, estudiando sus relaciones con el conflicto armado interno y con la ampliación de la frontera extractiva en el siglo XXI. Finalmente, examinamos la naturaleza, la organización y los conflictos agenciados por la *Articulación COA*.

Los contextos subnacionales específicos, descritos en este capítulo, y el contexto nacional general, descrito en el anterior, nos permiten ahora, en el próximo capítulo, avanzar en la comprensión de los sentidos implicados en la acción social de los movimientos bajo estudio. Para ello, desarrollaremos una argumentación que nos permitirá entender su experiencia en relación a las *dimensiones políticas* del ciclo 2010-2018, es decir, a las cuestiones de la paz y el cambio en la estructura de oportunidades políticas. Con esto daremos respuesta a la pregunta y objetivo central de la presente investigación.

Capítulo 4. Paz, territorio y oportunidades políticas en las luchas del Movete y el COA

Las discusiones teóricas y contextuales precedentes nos permiten ahora una aproximación más directa al objetivo principal de nuestra investigación: *comprender el modo en que procesos de movilización socio-territorial específicos (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio.*

Los conceptos, el contexto espacio-temporal del problema y los datos obtenidos durante el trabajo de campo nos enfrentan a una primera consideración: *los actores bajo estudio han proyectado su experiencia de modo ambivalente.* Si bien es cierto que, por un lado, sus campos de conflictividad política se han reconfigurado en torno a la emergencia de nuevos procesos de movilización, nuevos lenguajes y nuevos repertorios que han estimulado la acción colectiva. Por otro lado, sus territorios padecen proyectos estructurados sobre visiones restrictivas de la paz y la democracia, a su vez determinadas por el proceso de acumulación extractivista.

En otras palabras, la movilización del Movete y del COA ha puesto en tensión el proceso político que se ha descrito en este trabajo, a través del desarrollo de una visión de la paz, la democracia y el territorio *desde abajo.* Es decir, agenciada por actores sociales y comunitarios desprovistos de poder político y económico, sin posiciones ni capacidad decisoria al interior del Estado o del mercado. Pero tal proceso político, aunque desarrollado en medio de un ciclo de apuestas por la democratización, también ha sido disputado por un conjunto de actores políticos y económicos con posiciones determinantes dentro del Estado y con una alta capacidad para diseñar el territorio en función de su propia comprensión de la paz y la democracia, una visión que en tal sentido se organiza *desde arriba.*

Esta tensión irresuelta da lugar a una vivencia contradictoria de *la paz* y de *las oportunidades políticas.* Pero también desencadena *modalidades de lucha política* que no han sido posibles en otros períodos de la vida pública en el Oriente y en el Suroeste, y que al mismo tiempo prefiguran las modalidades del conflicto político posible tras la firma del Acuerdo de Paz. Su novedad, entonces, expresa la tensión inherente al proceso político estudiado, y señala el rumbo de la acción colectiva de tipo contencioso en otros escenarios de lucha socio-territorial en el espacio nacional.

En este orden de ideas, este capítulo analítico se estructura en torno a estos tres grandes universos reflexivos -paz, oportunidades políticas/democracia, nuevos repertorios-, afectados por las tensiones expresadas, y constitutivos del *modo en que el COA y el Movete experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio*.

Por tanto, en primer lugar, analizaremos los significados políticos de la paz, ahondando en los imaginarios sociales compartidos dentro de cada uno de los movimientos acerca de este proceso. En segundo lugar, profundizaremos en la experiencia contenciosa de los movimientos, explorando, a través de la voz de los actores sociales, la vivencia de las oportunidades políticas en el nivel regional o subnacional. Finalmente, revisaremos la dimensión práctica de esta experiencia social y política: las nuevas modalidades de la lucha política que, dadas las tensiones en torno a la paz y la democracia, iluminan la contienda socio-territorial.

4.1. Los significados políticos de la paz

La perspectiva cierta de un proceso de paz que terminara un conflicto armado de más de medio siglo, detonó múltiples debates al interior de la opinión pública y activó renovados procesos reflexivos dentro de los movimientos sociales. A través de estos se alcanzaron posicionamientos concretos, no solamente en relación al proceso de paz, concebido como una negociación política entre dos enemigos históricos, sino también, y de modo más trascendental, acerca de lo que significaba la paz o la *construcción de paz* en el horizonte social, económico y político de los territorios de Colombia.

De esta manera, actores políticos y movimientos sociales asumieron tempranamente la distinción que fue abordada en el capítulo 2 de este trabajo: una cosa era el proceso de paz, expresado en una mesa de negociación en la que los protagonistas del conflicto armado se habían propuesto firmar una serie de compromisos para terminarlo; y otra cosa era la paz como horizonte ético-político, es decir, como proceso que excedía la negociación y que tendría que nacer de los territorios, de abajo hacia arriba, para transformar las condiciones sustantivas que operaron como gérmenes de la violencia política.

Las posiciones de los movimientos sociales acerca del proceso de paz fueron forjadas al calor de dos imágenes: la que operaba en los movimientos respecto de la mesa de negociaciones y la que operaba en la mesa de negociaciones respecto de los movimientos. Con relación a la primera, Quintana (2016, p. 215) afirma que el proceso de negociación fue entendido, al menos, de tres maneras distintas: i) En la posición del gobierno, “como un proceso puntal más formal y expedito, que [llevara] a la reinserción de las FARC a la institucionalidad establecida y, en general a la vida civil” ii) En la visión de las FARC, “como una negociación más de fondo sobre el proyecto de sociedad definido por cada una de las partes, que condujera a la transformación de los marcos institucionales y de las estructuras sociales y económicas ya existentes” iii) Y en la lectura de varios movimientos sociales:

Como un proceso que no [había] de limitarse a los actores que han protagonizado activamente el conflicto armado, sino que también tendría que incluir a sectores representativos de la llamada sociedad civil, que de una u otra manera han sido afectados por el conflicto violento o han hecho parta de este (Quintana, 2016, p. 215).

Con respecto a la segunda imagen, este cruce de representaciones acerca del sentido y la función del proceso de paz derivó en lo que Manrique (2016) denominó como una “tendencia a la *invisibilización* de los movimientos sociales como actores políticos” (p. 190). Con esto el filósofo colombiano defiende la idea de que, durante el proceso, las prácticas de resistencia y construcción de paz de organizaciones sociales y comunitarias no fueron incorporadas al debate público, siendo relegadas por el protagonismo de los negociadores. Así, mientras que, durante el conflicto, la estridencia de las balas anuló la voz de los movimientos populares, durante la negociación, la metodología restringida de los diálogos redundó en su invisibilización.

Todo esto derivó en una actitud de los movimientos sociales hacia el proceso definida como “tensa y compleja, en virtud de un doble gesto”:

Por un lado, un apoyo incondicional a la mesa con miras a la firma exitosa de un acuerdo para la terminación del conflicto armado entre las partes; por otra parte, una distancia crítica frente a la mesa que se expresa en un mensaje disidente que resalta que la “verdadera paz” no la construyen *solamente* los representantes del Gobierno y de las FARC-EP, en la encumbrada mesa de negociación bajo el brillo de tantas luces y cámaras. Desde su perspectiva, *la verdadera paz* se viene trabajando y construyendo pacientemente desde hace años a través de diversas formas de organización y acción política autónoma de las comunidades de campesinos, indígenas, afros,

estudiantes, obreros, que se han movilizado en defensa de una “vida digna”, de un “buen vivir”, en contra no solamente de los diversos actores armados del conflicto (legales e ilegales), sino también en contra de lo que ellos llaman la “economía del despojo” que se viene promoviendo desde las políticas públicas del gobierno de turno, uno tras otro, sin mayores diferencias en este sentido, por ejemplo, entre la “seguridad democrática” del gobierno Uribe, y las cinco locomotoras de la “prosperidad democrática” del gobierno Santos (cursivas dentro del texto) (Manrique, 2016, p. 191).

En los discursos de los activistas del MOVETE y el COA también existe este “doble gesto”. Como veremos a continuación, esta comprensión política del proceso de paz interactúa de modo conflictivo con la visión promovida por élites políticas y empresariales. Así, evidenciaremos la ambivalencia de tal significación, los modos en que ella se organiza y las razones por las cuales tal ambivalencia constituye una *oportunidad para la contención*.

4.1.1. El Movete, la paz territorial desde abajo y desde las comunidades

El Proceso y el Acuerdo de Paz

La cuestión de la guerra y la paz ha sido nuclear en la historia del Oriente antioqueño y de sus luchas. Recordemos que la *tercera generación* del movimiento social oriental adoptó la forma de un movimiento humanitario que buscaba aliviar las consecuencias del conflicto en la población civil, promoviendo diálogos con las instituciones y los actores armados. Sin embargo, tras el proceso de *pacificación* la experiencia del conflicto comenzó a ser cada vez más lejana, de modo que, cuando se anunció *el proceso de paz* entre el Estado y las FARC-EP, los actores sociales de la región no se sintieron especialmente interpelados:

Las FARC había salido, como el ELN y EPL, de esa zona, entonces no hay ni siquiera interés de la gente allá de plantearse el Acuerdo⁸⁷, de pronto algunos grupos muy especializados y que tuvieron ciertos vínculos y relacionamientos con las FARC plantean ahora esa reivindicación, pero... En Granada se hicieron algunos eventos para el proceso de paz con algunos sectores pequeños que quedan ahí, pero no es una vaina que pegue socialmente⁸⁸ (Entrevista OC).

De acuerdo a los activistas del Movete, esta predisposición fue reforzada por el contexto político-cultural de la región. La disputa ideológica en el Oriente antioqueño, definida por la

⁸⁷ De abordarlo, de discutirlo, de reflexionar en torno a él.

⁸⁸ No es un problema que despierte el interés de la sociedad.

hegemonía conservadora-uribista y el discurso de la "negación"⁸⁹, ayudaba a inhibir la discusión sobre el proceso de paz, los acuerdos y su aplicación. En este sentido, por ejemplo, las élites políticas y la iglesia católica llamaron a votar "No" en el plebiscito (Entrevista a RE).

Adicionalmente, en los testimonios de los líderes del Movete aparecen otras explicaciones acerca de la lejanía con la que se experimentó *el proceso*, relacionadas con la escala en la que este era relevante (era un debate primordialmente *nacional*)⁹⁰, el nivel de participación que admitía (fue percibido como un proceso cerrado)⁹¹ o la agenda que lo orientaba (no incluía una discusión acerca del modelo minero-energético y el extractivismo).⁹²

Por otra parte, se insiste por parte de los entrevistados que *el Acuerdo de Paz* y su implementación no ha tenido incidencia en el Oriente⁹³, esencialmente por dos razones. Primero, en esta región, las guerrillas y, concretamente, las FARC-EP ya estaban derrotadas, así que no se percibieron, por ejemplo, mejoras sustanciales en términos humanitarios, como sí se sintieron en otros territorios del país en los que cesaron las actividades violentas. En segundo término, el Oriente no fue una región priorizada para la implementación de los acuerdos bajo figuras como los PDET⁹⁴ o los PISDA.⁹⁵ Aunque desde el punto de vista histórico la región reunía las condiciones para ser priorizada (por ser uno de los epicentros de la guerra), es probable que se haya considerado

⁸⁹ Discurso en virtud del cual Colombia no atravesaba por un conflicto social y armado, sino por una amenaza terrorista de una narco-guerrilla que atentaba en contra del Estado de Derecho. Esta narrativa, adoptada por el uribismo, negaba de esta manera la condición política de las FARC-EP, así como las causas socio-económicas del conflicto histórico.

⁹⁰ "Cuando a nivel nacional muchas organizaciones o movimientos ya estaban, ya estaban ... su principal punto en la agenda era la paz, cierto –en distintas reivindicaciones: el tema de memoria, el tema de búsqueda de desaparecidos, también el tema pues de la apertura democrática– Movete tal vez por su condición de ser un movimiento más territorial, con unas reivindicaciones como un poco más concretas con el tema extractivista no se involucró tanto en ese debate" (Entrevista a CS).

⁹¹ "El escenario [...] que se creó también fue muy cerrado, una discusión donde no llegó gran parte de la gente" (Entrevista a CS).

⁹² "No tocó tan fuerte la región porque el escenario de paz construido entre las FARC y el gobierno, eliminó y dejó de lado de plano el tema extractivista y el modelo minero energético [...] desde gran parte de actores de Movete sentimos cómo la discusión se cerró, es decir, si nosotros venimos cuestionando el modelo, y sentimos que eso fue clave en la guerra, que está afectando y poniendo en vilo la paz territorial [...] ¿cómo es que cierran el espacio?" (Entrevista a CS).

⁹³ Como excepciones a esta premisa, algunos de los entrevistados sugieren que podría plantearse que la negociación contribuyó a la paz de zonas en las que aún había remanentes de la guerrilla: Nariño y Argelia. También, los actos de perdón en Santa Ana-Granada y un par de reuniones más en ese sentido en San Carlos y San Francisco. Además, un proyecto de vivienda en San Carlos (40 casas para ex-combatientes o ex-milicianos).

⁹⁴ Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

⁹⁵ Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.

que, dado el proceso de pacificación y el programa de inversión de los *Laboratorios de Paz*, la atención al Oriente no hacía parte de las urgencias en materia de implementación.

Dicho esto acerca de la lejanía y el escepticismo con los que se vivió el *proceso de paz* desde Movete, es fundamental considerar que sus líderes reconocen la existencia de efectos positivos, al menos en dos dimensiones: en el clima de la discusión política regional y en la dinámica de la acción política del movimiento. Uno de los líderes de Marinilla nos lo explicó así:

Yo creo que gracias [...] al proceso de paz y [sobre] eso se ha venido también fortaleciendo una discusión... o sea *que la gente pueda volver a hablar de política* que es algo muy difícil en el Oriente, porque es una sociedad que culturalmente es muy difícil, porque es muy católica, conservadora, [de] una ruralidad muy tradicional, y [donde] hablar de política en otros términos que no sean los términos autoritarios es muy difícil; o sea, hablar de política en términos más democráticos, alternativos, es difícil. Pero *que la gente haya sido capaz de visibilizarse de nuevo, que el Movete sea un movimiento que puede hablar en la plaza pública, que los líderes sean gente reconocida en sus municipios* [...] Pero *eso solamente ha sido posible por el proceso de paz* (Entrevista a DJ).

En este sentido, el proceso de paz y los procesos de deliberación colectiva a él ligados, como el del Plebiscito, politizaron la vida pública del Oriente antioqueño.⁹⁶ En efecto, como lo señalan algunos de los activistas del Movete, al interior del movimiento se discutió profundamente sobre el tema y buena parte de sus integrantes hicieron parte de la campaña a favor del "SI".⁹⁷

En síntesis, aún dentro de una perspectiva escéptica para el Movete, la paz constituía una "*posibilidad política*" que debía ser construida, trabajada y luchada (Entrevista a DJ). Se trataba de la posibilidad de que la gente reflexionara acerca del país y del territorio más allá del marco de la guerra, esto es, de pensar y soñar un territorio en post-conflicto. Era una posibilidad para el cambio

⁹⁶En el mismo sentido, por ejemplo, los entrevistados señalaron que la creación de espacios como la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, dio un mensaje a nivel nacional sobre la importancia de la memoria, y eso tuvo repercusiones a nivel local. Las investigaciones de los actores sociales sobre la memoria y el conflicto armado gozaron de una cierta "amplificación" en el marco de este "clima" y de las discusiones en torno a la paz y al proceso mismo. El trabajo historiográfico de Carlos Olaya, líder de San Carlos y miembro del Movete es un buen ejemplo de ello.

⁹⁷En algunos casos, como en Cocorná, esto supuso una aproximación de tipo persuasivo hacia las autoridades locales, en especial las que eran parte de la Unidad Nacional. En otros, algunos de sus integrantes ofrecieron talleres formativos en torno a los acuerdos y la paz territorial. Esto en medio de un escenario en el que se percibía una cierta apertura discursiva, por ejemplo, dentro de algunas administraciones adscritas al Proyecto de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos.

de agendas que despertaba, en consecuencia, cierta esperanza sobre la posibilidad de hacer política e incidir en las instituciones. He aquí la diferencia fundamental entre la movilización oriental post-*Justicia y Paz*⁹⁸, y la movilización oriental en el contexto del proceso de la Habana. Durante la primera la gente se empieza a organizar "pero muy incipientemente y con mucho miedo todavía" (Entrevista a DJ). Durante la segunda se produce un giro sobre el cual profundizaremos a continuación.

La paz en la encrucijada territorial

El movimiento humanitario del Oriente abanderaba una causa circunscrita al conflicto armado, de modo que su propuesta de paz no excedía las consecuencias inmediatas de la violencia y no se proponía transformaciones ambiciosas desde el punto de vista socio-económico. La intervención humanitaria que resultó como consecuencia de ello tuvo un énfasis en *asistir* a las víctimas en materia psicosocial, legal o económica. Se trató de una labor de especial importancia que buscaba reconstruir, restituir, aliviar y sanar. Con todo, la búsqueda de la paz, en ese momento, no se inscribía en un horizonte político o socio-territorial de largo alcance.

A esto se sumaba el hecho de que el *Proceso de Justicia y Paz* y, en general, el proceso de pacificación, se inspiraba en una conciencia contrainsurgente que repelía cualquier aspiración de transformación social, y promovía la consolidación del *statu quo* económico, político y social. Un líder del Movete en la Unión lo planteó así:

La desmovilización⁹⁹ nos deja, en términos conceptuales, en un estado de *paz negativa* [...] una paz donde no hay una confrontación armada pero realmente no hay un cambio en las condiciones materiales que conllevaron al conflicto [...] incluso, como te decía anteriormente, los mismos proyectos que de una u otra manera generaron ese conflicto son los proyectos que vuelven y nacen [...] En este momento se reviven licencias de los ochentas, o sea, se empezaron a revivir licencias que ya estaban en estudios en los años ochenta, [que correspondían a proyectos] que hubieran seguido si esa confrontación armada no se hubiese dado.

⁹⁸ Recordemos que el proceso de Justicia y Paz fue el adelantado entre el gobierno de Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia, entre los años 2003 y 2005, con el propósito de su desmovilización, desarme y reintegración. Este proceso hizo parte, en el contexto oriental de lo que caracterizamos en el anterior capítulo como *Proceso de pacificación*.

⁹⁹ Se refiere al proceso de desmovilización y desarme de los paramilitares derivado del Proceso de Justicia y Paz.

Como lo explicábamos en el Capítulo 3, en el Oriente los vínculos entre conflicto, movilización y desarrollo, han sido una constante en el devenir regional desde la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, es natural que la evaluación que desde el Movete se hace acerca de los procesos de *paz y pacificación* pase por el tamiz de sus implicaciones en materia de desarrollo y extractivismo. Una lideresa del Movete en Marinilla lo analizó así:

Estamos en posconflicto¹⁰⁰, pero yo diría que el conflicto lo que ha hecho es cambiar y pasar a otra transición, ya el conflicto armado en esta región no se ve mucho, pero ya el conflicto se deriva más es por el territorio, por los recursos y las riquezas que tenemos en él y que cambian de actores, pero que la población que está en medio de estos territorios, y las más vulnerable que es la población campesina, sigue sufriendo desplazamiento, sigue sufriendo inequidades y también termina siendo vulnerada por estos macro-proyectos y por todas estas hidroeléctricas que han venido a empoderarse de los recursos naturales y de nuestro recurso hídrico, pero que a la hora de implementarse y de verse son pocos los que le retribuyen a la población afectada, a sus municipios y realmente sentimos que son más los efectos que las cosas buenas que vea (Entrevista a TY).

El contexto de estas reflexiones sobre los significados de la paz, entendida como pacificación durante la primera década del S. XXI -negociaciones Estado/AUC¹⁰¹-, explica la transición hacia los nuevos sentidos políticos de la paz implicados en el proceso de la segunda década del mismo siglo – negociaciones Estado/FARC-EP-.

La paz desde abajo: territorial y desde las comunidades

Buena parte de los jóvenes que lideran y animan la movilización del Movete se formaron políticamente en este contexto de transición entre el post-conflicto Oriental y las discusiones sobre el naciente proceso de paz de la Habana.¹⁰² Esta era una época en la cual, además, las discusiones ambientales tomaban fuerza en el mundo, y en América Latina se producía un “giro eco-territorial” en las luchas de los movimientos sociales (Svampa, 2019).

Como lo veremos más adelante, al igual que en el caso del COA, este contexto fue profundamente influido por la movilización social que crecía en el país, así como por las

¹⁰⁰ Se refiere al post-conflicto específicamente oriental, el que nace tras el proceso de pacificación.

¹⁰¹ Autodefensas Unidas de Colombia.

¹⁰² “Hay una camada de jóvenes muy pelados, eso me faltó [decirlo] cuando vos [me preguntabas] el porqué del resurgir [de la movilización social en el Oriente], pues precisamente una generación que políticamente se formó desde el 2010, o sea en escenario de paz, yo creo que eso también es importante” (Entrevista a CS).

discusiones que tenían lugar en su seno. Uno de los jóvenes e investigadores líderes del Movete lo describió así:

La movilización en el país no era tan fuerte como a partir del 2012: en el Oriente antioqueño eso fue muy marcado. A partir del 2012 hay unos procesos de movilización más fuertes, por ejemplo: la movilización de la Cumbre Agraria del año 2013¹⁰³, eso fue una cosa que en *el Oriente nunca se había visto*, o sea, las plazas públicas llenas de gente en Rionegro, en La Ceja, en Marinilla, en Guarne, en El Santuario, todos esos municipios llenaron las plazas públicas; porque es una zona muy conservadora y que se llenen [las plazas] en medio de un proceso de movilización social por la defensa del campesinado *era una cosa que nunca se había visto*, ya no en términos de la movilización del Movete, sino de la movilización en general de la sociedad, de un movimiento amplio de ciudadanos, de un movimiento ciudadano amplio, que se planteara una cuestión política... eso fue algo muy importante (Entrevista DJ).¹⁰⁴

El entrevistado enfatiza que lo relatado “*solamente es posible por el proceso de paz*. Esa serie de demandas que se le empezaron hacer en ese momento al gobierno de Santos, solamente fueron posibles por el proceso de paz”.¹⁰⁵ Es dentro de este marco que en el Oriente se transita *de la paz humanitaria y la “incidencia sin exponerse”¹⁰⁶ a la construcción abierta de la paz territorial*.

Así es que dentro del Movete comienza la reflexión en torno a la paz territorial. Varios de sus líderes suscriben la idea de que tal concepto es un “artefacto discursivo”, para precisar el hecho

¹⁰³ En realidad, se refiera al Paro Nacional Agrario. La Cumbre Agraria, como lo explicaremos en el apartado de los significados de la paz en el COA, nace en el año siguiente (2014) como resultado del proceso de movilización al que alude el entrevistado.

¹⁰⁴ En el libro en el que Movete relata su propia historia también se otorga fundamental importancia a este evento: “En agosto del 2013, dos meses antes del Festival del Agua en el Carmen de Viboral, se dio el Paro Nacional Agrario (además minero y camionero), que también se vivió en el Oriente antioqueño. Movete aún no se había creado y la participación de las organizaciones de la región se dio de manera más bien espontánea y no planificada, pero se creó un ambiente de movilización, y la experiencia y la oportunidad de reivindicar las formas de protesta incentivó la posterior articulación y la continuidad de la lucha social en la región. También se hizo notar la necesidad de un actor organizado, de una confluencia y de debates sobre los temas tratados” (Higuita y Rupp, 2018, p. 72).

¹⁰⁵ Continúa: “[De no existir el proceso de paz], hubiera sido señalado ese movimiento rápidamente de insurgentes y se hubiera exterminado o lo hubieran reprimido y la gente no hubiera salido a la calle, pero la gente salió con unas ganas impresionantes de protestar por la situación de los campesinos. Entonces me parece que eso, que eso ha tenido esa posibilidad, *la paz ha dado esa posibilidad: de reconstruir tejido social para la organización política*” (Entrevista DJ).

¹⁰⁶ Expresión utilizada por uno de los líderes para describir el tipo de acción a la que se vio compelido el movimiento social en el contexto post-pacificación: “[El movimiento social logra adecuar] los repertorios de acción colectiva [de] tal manera que le permitan hacer la incidencia sin exponerse, sin exponerse en diferentes cosas...”. Tales “cosas”, implícitas en el relato, se refieren a la persecución, estigmatización y violencia.

de que está lejos de reflejar una realidad positivamente transformada por el proceso o los acuerdos de paz. Sin embargo, como se ha visto hasta acá, tal “artefacto” animó, dinamizó y proyectó la praxis política del movimiento. En este sentido, dentro del Movete se plantea que la “defensa del territorio”, su *leitmotiv* es, en última instancia “una estrategia de construcción de paz territorial”, en la medida en que, por su naturaleza, se opone a las lógicas de la guerra: pérdida de arraigo, desplazamiento y conflicto:

La defensa del territorio, por su forma, es una estrategia de construcción de paz territorial, yo la llamaría una estrategia de construcción de paz territorial ¿por qué? Porque los proyectos de desarrollo han generado desplazamiento, han generado conflictos, han generado pérdida de arraigo, han generado unas problemáticas: las problemáticas con la tierra están asociadas a el conflicto armado en cualquier rincón de este país. Entonces digamos que esa construcción desde lo local de unos elementos que permitan defender el territorio tienen que estar obligatoriamente asociados a elementos de la construcción de paz territorial, la planeación del territorio es un elemento de la paz territorial, esa planeación desde lo local, esa capacidad de la gente de entender, de comprender su territorio, sus dinámicas, qué es lo que quieren y cómo se sueñan su territorio, eso es construcción de paz territorial; juntarse como organizaciones sociales, como individuos con intereses particulares para defender unos intereses comunes, eso es construcción de paz territorial. Entonces yo diría que la defensa del territorio por las dos, por estos dos elementos que te enunció, está completamente relacionada con la paz (entrevista BJ).¹⁰⁷

En este orden de ideas, al año siguiente de la firma del Acuerdo de Paz, se abre un proceso reflexivo al interior del Movete sobre el quehacer del movimiento, encomendado a una comisión y refrendado en procesos assemblearios, que desemboca en el documento *Plan estratégico, balances y proyecciones*. Allí se plantea que uno de los elementos de la misión y visión del movimiento, a su vez característico del Movete en cuanto movimiento, es el problema de la *paz territorial*, pues:

No es posible hablar de paz cuando las comunidades -en el caso del Oriente antioqueño- han sido victimizadas no solo por parte de los actores armados, estatales e ilegales, sino que también ha habido un proceso de revictimización por parte de las empresas extractivistas, las corporaciones

¹⁰⁷ En el curso del trabajo de campo y en el proceso de análisis de la información encontramos que la idea de paz territorial está asociada a estas ideas: Planeación del territorio Planeación desde lo local. Reconocimiento del territorio. Proyección y sueños acerca del territorio. Organización colectiva. Que los Acuerdos "bajen" a los territorios. Conflictos tramitados por vías no violentas. Apuesta por la vida y la defensa del territorio. Ampliación de la democracia y la participación. La concepción de la *paz positiva*: la erradicación de las causas del conflicto más allá del silencio de los fusiles.

autónomas y las casas comerciales de agrotóxicos, quienes con el desconocimiento de unas prácticas culturales propias del campesinado del Oriente, más que desarrollo, han consolidado un modelo al servicio de la economía capitalista y de los grandes empresarios, en contra del bienestar y la vida digna de las comunidades (Bernal y Osorio, 2018, p. 211).

Partiendo de este diagnóstico se propone una idea de paz territorial que, en primer lugar, se inscriba en el marco de la justicia social y ambiental¹⁰⁸; y, en segundo lugar, se comprenda como posibilidad de planificar un futuro común inspirado en los modelos, planes de vida y definiciones propias. En suma, la reelaboración conceptual y política descrita en este apartado es concretada por el Movete a través de la idea de que “el trabajo de defensa del territorio, aunado a los elementos de justicia social y ambiental, es un gran aporte para la construcción de esa *paz desde abajo y desde las comunidades*” (Bernal y Osorio, 2018, p. 211).

La paz desde arriba: desarrollo, pacificación y extractivismo

Al exponer la conflictividad social de la región oriental hemos advertido que el ideal de una sociedad sin conflictos y dispuesta a soportar con estoicismo las consecuencias de grandes proyectos de inversión, corresponde a un proyecto inscrito en el *ethos* de la planificación territorial *desde afuera y desde arriba* padecida desde los años 60 del siglo pasado. La conflictividad social y armada interrumpió este proyecto durante décadas, pero la represión del movimiento social, la derrota de la insurgencia y la desmovilización de los ejércitos paramilitares vía *pacificación*, le dio un nuevo aire. En este sentido, el contenido del significativo *paz corporativa* o *paz desde arriba* viene operando en el proyecto regional hegemónico, al menos, desde el año 2005 en que se promulga la Ley de Justicia y Paz.

A partir de allí, como ha sido denunciado sistemáticamente por el Movete, vuelven, bajo distintas modalidades, las estrategias de acumulación por desposesión en el territorio oriental: principalmente a través de proyectos para la producción de energía mediante hidroeléctricas centrales, pequeñas, micro y pico; y proyectos mineros de diferentes escalas y en sectores primordialmente relacionados con la construcción. En suma, el proceso de paz termina sirviendo para agitar este debate dentro del movimiento socio-ambiental y campesino del Oriente y para

¹⁰⁸ Habida cuenta de que “para nuestro proceso las aguas, los bosques y montañas hacen parte de la vida, por lo que la apuesta de paz sería en condiciones de habitar el territorio en armonía con la naturaleza” (Bernal y Osorio, 2018, p. 211).

definir la propia concepción de la paz, por oposición a la paz *desde arriba*, inscrita históricamente en la relación desarrollo, pacificación y extractivismo.

4.1.2. El COA, la paz territorial con justicia social y ambiental

El Proceso y el Acuerdo de Paz

El carácter “graneadito” del conflicto en el Suroeste, expresado en una baja incidencia de los hechos de violencia generalizada en la región y, de modo particular, en el *Territorio COA*, fortaleció la percepción de que *el proceso de paz* era un proceso lejano, sin consecuencias tangibles para la conflictividad social y política del territorio. Un líder fundador del COA lo ilustró así:

Yo me atrevería a decir que [...] para la población en general del Suroeste el tema de los Acuerdos de paz no los tocó mucho [...] no nos tocó mucho porque al fin y al cabo no se estaba viviendo muy de lleno el problema de la violencia. Y entonces la gente [no tuvo] muy claro [el] sentido de lo que eran los Acuerdos de paz (Entrevista a VH).

Según uno de los líderes de una organización aliada en Jericó, a esto se sumaba, al igual que en el caso del Oriente, una cierta idiosincrasia regional de tipo conservador que fortalecía la distancia simbólica de la población hacia el proceso, haciéndola proclive a posturas escépticas o negacionistas del mismo conflicto armado interno:

Este ha sido, como todo el Suroeste antioqueño, un territorio uribista, políticamente uribista y la gente si bien no fue víctima directa de los hechos de violencia que generaron las últimas décadas, sí hubo alguna presencia durante un tiempo de paramilitares que vacunaban a la población: las gentes con un pequeño negocio tenían que ir a otro municipio, o algún corregimiento, a llevar la cuota que les asignaban. Pero no hubo, repito, hechos de violencia directos contra la población. Eso, tal vez, marginó a Jericó de entender la magnitud de la violencia que se estaba viviendo en el país; y cimentó esa visión uribista de que “pues aquí no pasa nada, que hay actores con intereses foráneos que quieren crear terrorismo en el territorio”. Era un terreno abonado para todo el discurso uribista (Entrevista a JF).

De hecho, este mismo clima, explican los líderes del movimiento, llevó a que se produjeran, de un lado, hechos de estigmatización hacia quienes públicamente expresaban su respaldo al proceso y, de otro, acciones de las administraciones públicas locales que, de manera vedada,

fortalecían la oposición al mismo, por ejemplo, incentivando el voto negativo en el Plebiscito del año 2016 (Entrevista a VH).

En este orden de ideas, el resultado del proceso, *el Acuerdo de Paz*, no tuvo un significado especial para los activistas del COA: el fenómeno de la violencia no se inscribía ni en el orden de los hechos ni en el orden de las representaciones acerca de los problemas públicos, en la época en que se dio el *Proceso*. Adicionalmente, como fue explicado en el capítulo 3, el suroeste no fue un territorio priorizado para la implementación de los planes, programas y proyectos definidos en el *Acuerdo*, de suerte que las consecuencias instrumentales del mismo para la región, fueron percibidas como nulas.

Ahora bien, estas percepciones acerca del proceso de paz y los acuerdos, se inscriben dentro de la metáfora del “doble gesto” con la que abrimos este apartado, de modo que, al mismo tiempo, contrastan con un apoyo decidido a la mesa de negociaciones y con la certidumbre en torno a su importancia para el país, en general, y para el suroeste, en particular. Por esto en nuestro trabajo de campo fue común encontrarnos con expresiones como las siguientes, de líderes de Jericó y Támeisis, respectivamente: “Ese proceso lo celebramos nosotros con mucho beneplácito porque pensábamos: por fin cesa la violencia, el derramamiento de sangre, por fin (Entrevista a RJ)”;

“Nosotros [lo] vemos como un gran logro, somos plenamente conscientes del logro que significó haber firmado acuerdos con las FARC” (Entrevista a PG).

En el discurso del COA, sin embargo, este tipo de manifestaciones suelen estar acompañadas de cláusulas que problematizan el proceso y proyectan una idea de paz que lo excede. Así, construyen un puente entre el respaldo al proceso y las comprensiones que conectan la noción abstracta de la paz con los conflictos territoriales específicos. En este sentido un líder de Caramanta señaló el apoyo del movimiento al proceso, *pero* advirtió que:

Nosotros hemos dicho muchas veces que la paz [...] completa no la hay, no la hubo en ese momento y será muy difícil que la haya [...] porque la paz no solamente se compone de unas personas, o digamos [de] llegar al acuerdo con algunas personas armadas, sino que la paz es un conjunto de cosas que aquí no se ha dado [...] [lo que se dio fue] el acuerdo con unas personas que estaban armadas [pero] para la paz falta mucha cosa (Entrevista a AL).

Dando un paso más allá en la relación entre la paz abstracta y las luchas del COA, un líder de Támeisis anotó:

Nos parece que en la defensa de la paz está también mucha de la paz que podemos tener en el territorio, y hay también aspectos muy importantes que tienen que ver con lo que nosotros defendemos desde el COA y desde el CODEATE, que tienen que ver digamos con el aspecto ambiental y con los recursos naturales (Entrevista a CG).

Así es que se abre la reflexión sobre el proceso de paz a una discusión política más profunda acerca del horizonte ético y territorial en el que se inscribe la paz como práctica: un horizonte en el que entran en disputa las perspectivas de la paz *desde abajo* y *desde arriba*, una encrucijada a ser resuelta en el escenario concreto de los conflictos socio-ambientales del COA.

La paz en la encrucijada territorial

Entrevistador: ¿Al interior del COA fue importante [el proceso de paz]?

Lideresa COA: Para nosotros mucho.

Entrevistador: ¿Cómo? ¿De qué manera se vivió? ¿Qué se hizo a partir de allí?

Lideresa COA: ¡Empezaron los Mandatos!

Entrevista a HD

Es llamativo que, incluso en territorios en donde la cuestión de la guerra y la paz no era un tema prioritario al interior de las agendas de los movimientos sociales, el proceso de paz desatara, a su vez, un proceso reflexivo que implicase la apropiación simbólica de la noción de *paz* y, en consecuencia, la reinterpretación de las propias luchas dentro de tal horizonte. Fue este el caso del COA:

Internamente para nosotros el proceso de paz fue bien interesante porque tuvimos unas reflexiones alrededor del tema, [...] la necesidad de ahondar un poco más esos Acuerdos de paz. Y de hecho la Segunda Travesía la denominamos así: [...] Construyendo paz con justicia social, era más o menos [...] la consigna de la Segunda Travesía; porque [...] nos interesaba mucho lo que era la agenda de los Acuerdos de paz en ese momento, incorporando al tema de la Segunda Travesía... Y de hecho sacamos algunas reflexiones sobre el tema (Entrevista a VH).

Efectivamente, la “Segunda travesía por el suroeste: un abrazo a la montaña” -repertorio de movilización nuclear del COA- llevada a cabo entre el 8 y 14 de agosto de 2016, tuvo como eje la consigna de “Justicia social y ambiental para la construcción de paz territorial”. En medio de la misma se realizaron diversas caminatas, conversatorios, manifestaciones, actos culturales y eventos como el “Foro por la paz territorial con justicia ambiental” desarrollado el 11 de agosto en el municipio de Jericó.



Imagen oficial de la Segunda Travesía por el Suroeste. Tomada de: <https://censat.org/es/actividades/ii-travesia-por-el-suroeste-un-abrazo-a-la-montana>

De acuerdo a Natalie López, integrante de Jóvenes por la Defensa del Territorio (JODETE)¹⁰⁹, dicha travesía tenía tres objetivos principales: “posicionar el proceso de resistencia que se ha llevado en el suroeste por varios años, fortalecer la movilización social y hacer un acto político por la paz territorial con justicia social y ambiental” (Radio Mundo Real, 2016). Este acto político era a su vez un acto reflexivo en el que, de un lado, se descartaba una idea de paz que venía entretejiéndose durante años por parte de movimientos y plataformas sociales más amplias; y, de otro lado, se proyectaba la idea de paz territorial con justicia social y ambiental, como horizonte de lucha dinamizado a través de los *mandatos*.

¹⁰⁹ Organización de jóvenes articulada al COA.

La paz desde abajo: territorial, con justicia social y ambiental

En efecto, tras el anuncio de la fase pública y la instalación de la mesa de negociaciones entre el gobierno Santos y las FARC-EP, importantes movimientos sociales y espacios de interlocución de la sociedad civil de trascendencia nacional comenzaron a posicionar miradas alternativas. Dos meses después de la instalación de los diálogos en Oslo, Noruega, el movimiento *Congreso de los Pueblos* anunciaba públicamente que “la paz no es un asunto solamente entre el gobierno y la insurgencia, ni tampoco se reduce a la negociación política al conflicto armado”, pues “la guerra y la paz son asuntos estructurales en nuestro país”.¹¹⁰ En consecuencia, exigía “garantizar un diálogo horizontal [...] que tome en cuenta las propuestas de los movimientos sociales populares y que no se reduzca a una simple consulta sin efectos vinculantes”; y señalaba como contribución a tal diálogo la realización de un *Congreso Nacional para la Paz* en Bogotá entre el 19 y 22 de abril de 2013.

En tal *Congreso* se reunieron cerca de 20.000 personas para *mandatar* una agenda en búsqueda de “una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo”. En la declaración final del Congreso se insistió en dos elementos centrales: i) La paz va más allá del silenciamiento de los fusiles e implica cambios estructurales¹¹¹ ii) No es posible construir la paz sin la participación social popular.¹¹² Bajo estas consideraciones generales se esbozaba un ambicioso programa que se estructuraba en torno a “un nuevo modelo económico” y “la reinención de la política” (Enlazando Alternativas, 2013).

Al año siguiente, tras un intenso período de movilización social en medio del cual se produjo el Paro Nacional Agrario y la realización de una serie de “Pre-cumbres”, se formó la *Cumbre Campesina, Étnica y Popular*, una plataforma que reunía diversos movimientos y

¹¹⁰ Con ello adherían a la idea de que el conflicto tenía unas causas objetivas o unos factores estructurales que lo explicaban y que debían abordarse en la negociación: “En la base estructural del conflicto se encuentran las desigualdades sociales, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de garantías para la organización y movilización social, las continuas violaciones a los derechos humanos y un régimen antidemocrático que ha favorecido el saqueo, el despojo, la corrupción y el asesinato”.

¹¹¹ “Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos” (Enlazando Alternativas, 2013).

¹¹² “No podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra [...] sin el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz” (Enlazando Alternativas, 2013).

organizaciones sociales del país con el objetivo de actuar unitariamente en las demandas que desde el mundo rural se venían haciendo al gobierno.¹¹³ El Congreso de los Pueblos, al lado de los movimientos que participaron del Congreso Nacional para la Paz y del mismo COA se integraron en ella, emitiendo tras su constitución el “Mandato agrario para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social” (Vallejo Cruz, 2017).

Así, en el año 2014, medio del segundo año de las negociaciones de paz, el gobierno recibió este *mandato* que consistía en un pliego de exigencias en torno a ocho áreas temáticas¹¹⁴, la última de las cuales era “Paz, justicia social y solución política”. Alrededor de esta cuestión se elevaron varios mandatos, dentro de ellos se expresaba el respaldo al proceso de paz, pero al mismo tiempo se exigía su ampliación para que del diálogo participaran, de un lado, otras insurgencias (en concreto el ELN y el EPL), y de otro lado, la sociedad civil y los movimientos sociales. Asimismo, se enfatizaba que la paz tendría que ser construida con “justicia social” y con “vida digna en los territorios”.

Es así que, en la *Segunda Travesía*, el COA incorpora las discusiones que venían proponiéndose en el campo de la movilización social a nivel nacional, y las regionaliza, primero a través del manifiesto con el que se dio cierre a la travesía, y después a través de los *Mandatos populares COA*. El manifiesto, producto de las reflexiones del COA antes y durante la travesía, se caracterizó por territorializar y situar la discusión acerca de la paz con justicia social en el contexto de los conflictos socio-ambientales. En este sentido, además de respaldar el proceso de negociación y declararse a favor del “SI” en el plebiscito, el COA manifestó que:

El SÍ a la Vida, al Agua y al Territorio define la apuesta por un SÍ A LA PAZ en el que la Justicia Social y Ambiental debe ser la matriz para su construcción, debe partir del reconocimiento y el respeto a la Vida en sus múltiples expresiones [...] los conflictos socioambientales son una

¹¹³ Así se concibió la Cumbre al momento de su fundación: “La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular se proyecta como el punto de encuentro de los distintos sectores agrarios y populares para la cualificación de nuestros debates y la construcción de un programa unitario con el que mandataremos nuestra agenda de acción política y social con espíritu de unidad. Buscamos establecer los lineamientos, mecanismos, rutas de diálogo y negociación conjuntos que ofrezcan posibilidades, garantías y permanencia a nuestros procesos sociales, y el conjunto de la ruralidad colombiana” (Agencia Prensa Rural, 2014).

¹¹⁴ 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. 2. La economía propia contra el modelo de despojo. 3. Minería, energía y ruralidad. 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola. 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. 6. Derechos sociales. 7. Relación campo-ciudad. 8. Paz, justicia social y solución política.

amenaza [para la] Paz Territorial latente ya que la naturaleza no sólo ha sido víctima del conflicto armado sino de un modelo de desarrollo que pretende destruirla a partir de megaproyectos mineros, energéticos, petroleros, agroindustriales y privatizarla mediante políticas conservacionistas de economía verde (COA, 2016a).

La conclusión fue que *la paz territorial*: i) “nace del principio de que la vida es sagrada”, de modo que “en el Suroeste de Antioquia **EXIGIMOS UNA PAZ TERRITORIAL SAGRADA PARA LA VIDA, UNA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL SAGRADA PARA LA VIDA**, con la cual se nos pueda garantizar el reconocimiento de sentidos y prácticas de vida que definen la autodeterminación territorial”; y ii) “debe partir de nuestros sueños, sentimientos y expectativas para el buen vivir, en un Territorio Sagrado para la Vida que se construye en las majestuosas montañas del Territorio COA – Cinturón Occidental Ambiental” (negrillas en el texto original) (COA, 2016a).

Tras esta declaración, en el mismo manifiesto, el COA emite un conjunto de *mandatos* en tres áreas: i) Aguas, ii) Economías indígenas y campesinas, y iii) Organizaciones y participación comunitaria. Se trata del primer momento, claramente identificable, en el que se evidencia una conexión directa entre la reflexión acerca de la paz y la estrategia de formular *mandatos populares* a ser obedecidos por las autoridades públicas. Aquí nos parece importante retomar el diálogo con una líder campesina de Támesis:

Entrevistador: ¿Al interior del COA fue importante [el proceso de paz]?

Lideresa COA: Para nosotros mucho.

Entrevistador: ¿Cómo? ¿De qué manera se vivió? ¿Qué se hizo a partir de allí?

Lideresa COA: ¡Empezaron los Mandatos! Empezaron los Mandatos: cómo era que íbamos a recibir eso, cómo era que íbamos a estar al día para todos esos acuerdos, más que todo el 1 y el 2 que eran los que nos trabajaban¹¹⁵... porque los otros eran muy buenos muy interesantes, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestra gente es campesina. Entonces nosotros los empezamos a trabajar y ahí fue donde empezaron a salir los Mandatos (Entrevista a HD).

Los mandatos se convirtieron así en uno de los principales instrumentos de la acción política del COA. A través de ellos se ha buscado construir una política territorial que nazca de *abajo* a través de procesos de legitimación comunitaria y que se consolide hacia *arriba* mediante la

¹¹⁵ Quiere decir “los que nos preocupaban”, “los que nos interesaban”.

institucionalización decidida por las autoridades públicas. Los *Mandatos populares COA* tienen naturaleza regional y local, de suerte que, por ejemplo, para el caso del municipio de Pueblorrico se han emitido mandatos específicos que, incluso, han llegado a ser acogidos por la alcaldía municipal.

Precisamente, en uno de los *Mandatos populares COA* referido a la cuestión de la “Participación y Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial”, los *mandatos* son conceptualizados como como parte de la “participación social efectiva y afectiva”:

Los Mandatos Populares *se constituyen en leyes populares, en acciones prioritarias y acuerdos fundamentales de organizaciones sociales* que le apuestan a la re-significación de pensamientos, lenguajes y prácticas cotidianas en la definición de procesos políticos, diversos, contruidos por campesinos, indígenas, mujeres, hombres, jóvenes y niños, *definiendo agendas políticas para el relacionamiento armónico con la naturaleza*. Su efectividad se define en el poder de legitimarlo, construirlo, implementarlo y defenderlo como proyecto de vida (cursivas en el texto original) (COA, 2018).

La paz desde arriba: corporativa

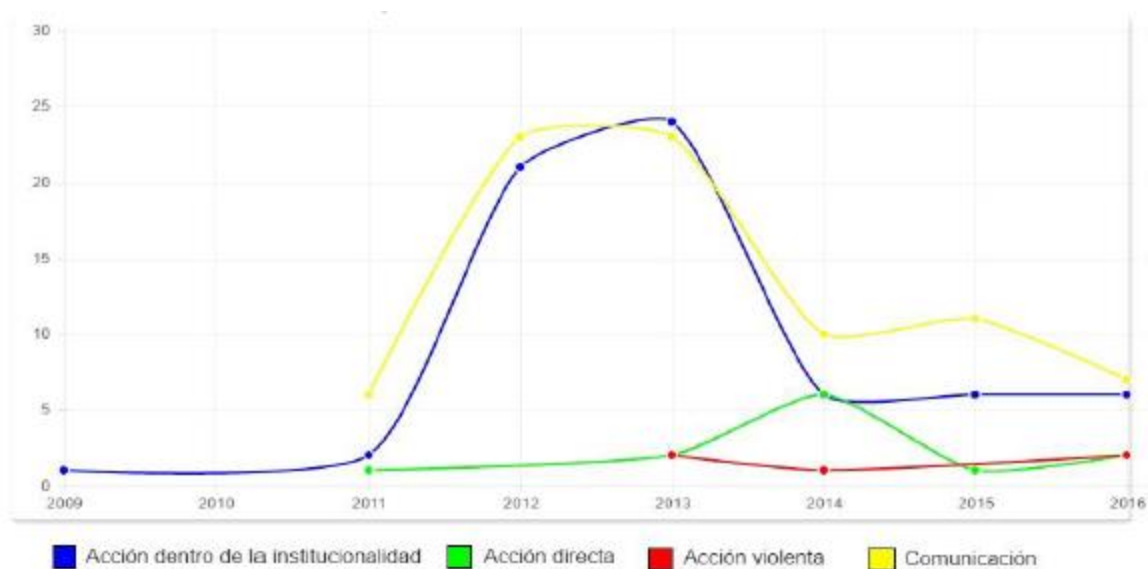
A diferencia del Oriente antioqueño y del contexto conflictivo del Movete, en el caso del Suroeste y el COA no existe una relación directa entre conflicto, paz y extractivismo. La presencia de grandes proyectos de explotación de materias primas, no estuvo acompañada, como en el primer caso, de procesos abiertos de violencia en contra de la sociedad civil. Tampoco la paz o la *pacificación*, como en el Oriente, aparece como un factor detonante de los emprendimientos extractivos. Sin embargo, mientras en el orden nacional se adelantaba el proceso de paz, y en el regional el COA formulaba reflexiones y mandatos para la paz territorial, el suroeste padeció la inminencia de uno de los proyectos insignes dentro del *Cinturón de Oro de Colombia*: el proyecto Quebradona, regentado por AngloGold Ashanti, la tercera compañía minera de oro en el mundo, en el municipio de Jericó.

Esta paradoja expresaba en el nivel territorial, lo que para los movimientos sociales resultaba contradictorio, pero al mismo tiempo revelador en el plano nacional: el desarrollo paralelo de las dos políticas con las que el Presidente Santos Calderón deseaba pasar a la historia: *la política de paz* en el plano político y las *locomotoras del desarrollo* -siendo una la minero-energética-, en

el plano económico. Una contradicción que, para el COA como para buena parte de los movimientos socio-ambientales en el país, se resolvía en un concepto: *la paz corporativa*.

En el Manifiesto de la *Segunda Travesía*, el COA la definía como “el intento del ejecutivo colombiano por pacificar al país para entregar amplias zonas del territorio nacional a las corporaciones transnacionales” (COA, 2016a). Se trataba de una definición coherente con la experiencia social y política del movimiento, que teniendo como telón de fondo la discusión pública en torno al proceso de negociación en la Habana, atravesaba por una de las fases más intensas del conflicto socio-territorial, definido en ese momento por la incursión acelerada de la multinacional AngloGold Ashanti.

Gráfico 11. Evolución de la intensidad del Conflicto del COA (2009-2016)



Fuente: Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional (2017)

El Gráfico 11 contrasta el número de acciones de movilización del COA durante los primeros seis años del gobierno de Juan Manuel Santos, dos de los cuales (2012-2014) fueron los primeros años del proceso de paz. Lo que allí confirma el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional es que, primero, la acción contenciosa del COA crece exponencialmente tras su constitución en el año 2011, al calor de las circunstancias analizadas en el capítulo 3 de este trabajo; y segundo, para el COA, la aparición de los diálogos de paz, sus primeros años de desarrollo, y las urgencias de un álgido conflicto en contra de la minería en su territorio, son hechos coetáneos. Se trata, pues, de una encrucijada dentro del hecho total de la

coyuntura histórica de Colombia: la paz. Dentro de ella, las modalidades sociales, políticas y económicas posibles en el Suroeste antioqueño adquirirían dos perfiles, los de la *paz territorial* y la *paz corporativa*. Es así que, para el caso del COA, se comprenden con mayor claridad los fundamentos del llamado *doble gesto*.

4.2. Oportunidades políticas y democratización

Como fue demostrado en el capítulo 2 de este trabajo, la estructura de oportunidad política a nivel nacional cambió durante el ciclo bajo estudio. En este sentido, observamos que mientras los indicadores de violencia asociados al conflicto armado caían a niveles históricos con el proceso de paz, la movilización social ascendía en dimensiones semejantes. Argumentamos que esto fue posible, en muy buena medida, gracias a la fractura de la élite uribista-conservadora y a la subsecuente disponibilidad de aliados dentro del sistema político para aquellos actores sociales que agenciaban proyectos de paz, democratización y movilización social. Todo esto, a su vez, se expresó en una serie de reformas de apertura del sistema político dentro de las cuales se encuentra el Acuerdo de Paz.

Sin embargo, en este apartado argumentamos que la desagregación socio-territorial de tal análisis, nos obliga a problematizar la relación entre política contenciosa y conflictos socioambientales durante el ciclo 2010-2018. De esta manera, la perspectiva subnacional o regional, contribuye a esclarecer el hecho de que, en el contexto de los casos bajo estudio, se experimentaron tres tipos de tensiones. Primero, la que ya ha sido insinuada: la tensión entre la dinámica del cambio político nacional y la estabilidad del régimen político subnacional. Segundo, la tensión entre factores de cierre y factores de apertura dentro del mismo conflicto político regional. Finalmente, como resultados de esto, la tensión entre una concepción hegemónica de la democracia de tipo elitista y una concepción no hegemónica de la democracia, de carácter popular y socio-comunitario (Santos, 2004).

A continuación, exploramos la manera en que estas tensiones se experimentaron en el Movete y el COA. Para ello, echaremos mano de las herramientas analíticas estudiadas en el capítulo uno, en particular, aquellas referidas a las variables explicativas de las oportunidades políticas en el nivel coyuntural.

4.2.1. El Movete: forzando la apertura en un oriente conservador

Con la revisión de la trayectoria histórica de la movilización oriental del Capítulo 3, ha debido quedar claro que el proceso de pacificación implicó la aparición de una oportunidad política, determinada por una caída drástica de la violencia en el Oriente, en particular aquella ejercida en contra de organizaciones sociales. Asimismo, el proceso de intervención institucional conquistado por el movimiento humanitario, y concretado en los programas del *Laboratorio de Paz* derivó en una inyección masiva de recursos orientados a la reconstrucción del tejido social oriental. Como lo estudiamos en tal capítulo, en este contexto se produjeron una serie de foros y encuentros entre actores sociales e institucionales que constituirían los antecedentes del Movete. En este sentido, la estructura de oportunidades políticas asociada al período de latencia del movimiento radicaba en la terminación de la guerra y en el esfuerzo económico, social e institucional para la reconstrucción del territorio.

Ahora nos corresponde adelantar una lectura más detallada del modo como los activistas del Movete experimentaron la configuración de oportunidades políticas a nivel subnacional al interior del ciclo 2010-2018, que es uno de los objetivos principales propuestos en el desarrollo de esta investigación.

Élites

Las élites políticas del Oriente se inscriben históricamente en una tradición bipartidista, de orientación conservadora, estrechos vínculos con la iglesia católica, y cercanía con el proyecto modernizador/extractivista consolidado después de la primera mitad del siglo XX. Asimismo, de acuerdo al Iner (2003, p. 54) las prácticas políticas dominantes de la región se han caracterizado por el clientelismo, el cacicazgo y el patrimonialismo.

Las percepciones del Movete acerca del carácter y naturaleza de estos actores políticos hegemónicos, coinciden en señalar tales rasgos, agregando un factor importante: transformadas como todos los actores regionales por las dinámicas del conflicto, las élites del Oriente adoptaron una visión de la sociedad, de la movilización y de la participación comunitaria, que se enmarca en una concepción contrainsurgente, semejante a la promovida por el proyecto paramilitar. Esta circunstancia, ausente en el caso del COA, define un tipo de relación muy particular, mediada por

unos marcos de interpretación muy escépticos en relación a las instituciones y a las élites que mayoritariamente las regentan. Una profesional de una ONG aliada del Movete fue especialmente ilustrativa:

El Oriente es otro contexto. Y eso [...] pasa desapercibido: el hecho de que los paramilitares hubieran ganado la guerra en el Oriente, eso tiene un significado, o sea, posiciona un punto de vista que ya venía, pero se posiciona más toda la derecha. Por ejemplo, recién empezó este periodo de gobierno [...] todos los alcaldes del Oriente, de cualquier línea, de cualquiera, liberal, conservador... [...] toda esa camada que hay ahorita, recién posicionados, [aparecen en] tremenda foto con el doctor Uribe en su finca [...] Claro, tremenda foto, y cuando el movimiento social veía esta foto: [Expresión de sorpresa] - *¿Qué hace mi alcalde allá? -Ahí está sentado con el doctor Uribe. Ese es el Oriente* (entrevista a AG).

De acuerdo con uno de los juristas orgánicos del Movete, esta condición política se expresó de manera cruda en el contexto de la paz:

Esas élites políticas, de la mano con la iglesia, han hecho un daño muy grande para la construcción de la paz en el Oriente antioqueño. Los curas desde sus púlpitos, muchos de ellos, una gran mayoría, llamó a votar en contra del plebiscito, en contra de la aprobación del Acuerdo de Paz. La dirigencia política predominante en el Oriente antioqueño pertenece al Partido Conservador, sobre todo al Centro Democrático, al partido del expresidente Uribe. Tiene también representación del Partido Liberal y Cambio Radical. Estos partidos que tienen predominancia a nivel nacional, tienen presencia en el Oriente antioqueño y sobre todo algunos de ellos hicieron una fuerte campaña para que la población del Oriente votara en contra del Acuerdo de Paz (Entrevista a RE).

Una vez planteada esta concepción general, que corresponde a una lectura estructural sobre el signo político de la dirigencia política oriental, en las entrevistas aparecen matices interesantes, que complejizan la mirada en relación a dos dimensiones del conflicto regional: la relación entre el poder político y las iniciativas extractivas, de un lado, y la relación entre el poder político y el movimiento social, del otro lado.

Con relación al primer punto, se plantea que, a pesar su carácter estructuralmente conservador y excluyente, “*hay de gobierno a gobierno*”, esto es, los hay más cerrados, pero también los hay más abiertos. Mientras hay gobiernos locales que adhieren con fervor a la causa de los emprendimientos extractivos, hay otros más escépticos y, en consecuencia, sensibles a las reflexiones promovidas por el Movete. Aunque no es concluyente la razón que explica esta

variación dentro de las fracciones de una élite cohesionada en torno a una visión conservadora de la sociedad y de la política, algunos líderes la atribuyen a intereses, ora privados (en el caso de mandatarios afectados o beneficiados patrimonialmente por los proyectos extractivos) ora administrativos (en el caso de mandatarios que, en el contexto de municipios pobres, reciben recursos institucionales, derivados de los proyectos, para adelantar políticas públicas de otra manera impensables) (Entrevista a BJ).

En conexión con esto, aparece un segundo matiz: las transformaciones del ciclo bajo estudio no lograron, por sí solas, generar una mayor o menor disposición de las élites para abrirse al diálogo con los movimientos sociales. Pero en la medida en que ha habido un fortalecimiento organizativo del Movete, en muy buena proporción gracias a esas transformaciones, las élites se han visto obligadas a tener gestos de apertura. Así lo expresó un joven investigador y activista del Movete, planteando una relación entre proceso de paz, élites/institucionalidad y oportunidades para el diálogo/incidencia:

Yo creo que [el proceso de paz] sí ha tenido un impacto positivo en términos del fortalecimiento organizativo, y [a través de] ese fortalecimiento organizativo, en la capacidad de interlocución con las instituciones. No tanto [por] una predisposición de las instituciones a dialogar más con las comunidades [...] al Movete nunca lo han invitado a una reunión, el Movete *se ha metido* a CORNARE¹¹⁶ a hablar. [...] Entonces yo creo que la paz [...] ha colaborado de cierta manera en crear un clima [...] de una cierta esperanza sobre [el hecho de] que hacer política e incidir en las instituciones sí es posible: no tanto porque las instituciones hayan cambiado -porque cuando las instituciones se presionan siempre están obligadas a hablar- sino porque la gente tiene ya mayor capacidad de incidir sobre esa institucionalidad (Entrevista a DJ).

Aperturas del sistema político formal

La complejidad socio-territorial y, en consecuencia, institucional, del conflicto político agenciado por el Movete se expresa muy bien en la cantidad de *inputs* que sus organizaciones sociales y comunitarias han identificado dentro del sistema político local. Con todo, esa telaraña institucional no ha sido decisiva para la implementación de la agenda socio-territorial construida desde abajo: aunque los activistas reconocen la importancia de muchos de esos puntos de acceso, al mismo

¹¹⁶ Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.

tiempo expresan escepticismo, sugiriendo en algunos casos que tales aperturas hacen parte de una estrategia de legitimación y no de una oportunidad efectiva para la participación política.¹¹⁷

Los espacios de participación. Dentro de nuestro trabajo de campo, los líderes entrevistados destacaron la existencia de, al menos, 19 espacios de participación importantes para el Movete. Una parte de estos son espacios institucionales estables y ordenados por la legislación. La otra parte corresponde a espacios circunstanciales, impulsados bien por la iniciativa de actores sociales, o bien por la iniciativa de actores institucionales.

Dentro del primer grupo se destacan, de un lado, las principales instituciones del poder ejecutivo local, en las que el Movete ha adelantado tareas de lobby e incidencia: alcaldías y concejos municipales. De otro lado, adquieren relevancia espacios de planeación participativa local (Consejos Territoriales de Planeación y Consejos Municipales de Desarrollo Rural) y escenarios de participación comunitaria (Juntas de Acción Comunal, Juntas Municipales de Educación, Veedurías).

Del segundo grupo hacen parte distintos tipos de foros, reuniones, encuentros o mesas de interlocución entre instituciones y actores comunitarios. Recordemos que los escenarios de acción colectiva dentro de los que emerge el proceso social que deriva en Movete tenían este carácter (Foro energético del Oriente Antioqueño, 2007 y 1er Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, 2009). Más recientemente los líderes destacan la trascendencia de escenarios como el conquistado bajo la denominación de “Mesa de Interlocución” con COORNARE:

La última victoria, el último acto político, la última contienda política fue hace mes y medio que logramos movilizar 500 personas a la sede de CORNARE en Santuario, sobre todo desde el municipio de San Luis, del proceso organizativo Vigías del Río Dormilón, y logramos que CORNARE se comprometiera en la instalación de una mesa de interlocución con las comunidades frente a los proyectos hidroeléctricos derivados del Porvenir II (Entrevista a RV).

¹¹⁷ “Y lo otro es que instituciones o grupos de poder están utilizando eso, están suplantando a la gente utilizando esos mecanismos de participación para hablar en nombre de la gente, eso es lo que hacen las ONGs, o eso es lo que hacen instituciones ambientales como CORNARE por ejemplo, simula la participación: les hace una convocatoria –o sea, la formalidad la cumplen– hacen la convocatoria, hacen la reunión, llegan las personas, firman unas planillas, se toman la fotografía, y queda el registro: hubo participación. Pero la participación no tuvo ninguna incidencia, no hubo posibilidad de decidir, incluso de deliberar abiertamente sobre el tema” (Entrevista a OC).

En suma, estos espacios institucionales de participación han sido campos de disputa, con resultados que no alcanzan a ser plenamente satisfactorios para el Movete, pues en el balance global no han permitido detener la avanzada de los proyectos hidroeléctricos y mineros que se ciernen sobre el territorio. Sin embargo, desde la perspectiva de la construcción del movimiento, la formación de liderazgos y el posicionamiento de visiones alternativas en la agenda pública, han sido esenciales. Así lo expresaron los activistas entrevistados al explicar que los espacios de participación han servido para discutir y concretar: planes de vida, agendas ciudadanas, planes veredales, planes de turismo, acuerdos municipales, entre otras políticas públicas.

Los mecanismos de participación. El uso de mecanismos de participación también ha arrojado resultados ambivalentes para el Movete. Algunos de ellos, como el voto (a cargos de representación en Alcaldías y Concejos) y el plebiscito, implican un despliegue de recursos en el marco de campañas electorales, que está por fuera del alcance de los movimientos sociales y comunitarios. Otros, como las consultas o las iniciativas legislativas suponen una carga logística y financiera que también suele operar como una barrera para su uso por parte de la sociedad civil. No obstante, algunos de estos mecanismos, por ejemplo los cabildos abiertos, han servido como plataformas fundamentales para el activismo social y la discusión pública del Movete. Un líder de Marinilla lo explicó así:

Eso es muy importante y creo que hemos avanzado un poco con eso a nivel local y a nivel regional. Por ejemplo, en algunos municipios venimos realizando actividades que nos permiten discutir temas como la extranjerización de la tierra, el tema de la imposición de los monocultivos del aguacate y de la hortensia, el tema de la entrega de licencias para la construcción de microcentrales, el fenómeno minero en el territorio... y lo estamos hablando en cabildos abiertos con el Concejo, en foros que estamos haciendo con el Concejo [...] Creo que hemos avanzado en esos aspectos y puede que ellos no estén de acuerdo con nosotros pero están dialogando y están entendiendo que esos problemas que se identifican como afectaciones socioambientales por parte de las organizaciones, de los líderes y de la población tienen que ser atendidos y tenemos un criterio” (Entrevista a RE).

Las acciones legales. La movilización legal y el litigio estratégico han jugado un rol importante en los repertorios de movilización del Movete, en particular, en aquellos que se aprovechan de las aperturas del sistema político formal. En esta dimensión del quehacer del

movimiento, ha sido importante la existencia de una *estructura de sostén*¹¹⁸, en la cual la Corporación Jurídica Libertad cumple un papel nuclear. De este modo, el Movete ha avanzado en la instauración de derechos de petición, acciones de tutela, acciones populares, solicitudes de revocatorias de licencias, fiscalización de los procedimientos de licenciamiento ambiental, demandas administrativas, consecución de coadyuvancias, solicitud de medidas cautelares y presentación de casos ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Dentro de este conjunto de dispositivos legales, de acuerdo a uno de los líderes de la Unión, el derecho de petición ha tenido una importancia decisiva:

El derecho de petición ha sido *muy clave, muy clave, muy clave*, para ponerle el palo en la rueda a muchas de las licencias, a muchas licencias se le ha puesto el palo en la rueda, se les ha hecho devolver procesos, y eso de alguna manera va constituyendo algunos de los avances, [...] porque da tiempo de que las comunidades se organicen mejor [...] Las empresas llegan muy organizadas con sus técnicos [...] y a veces no da tiempo de hacer la acción comunitaria, de juntar la gente, de reunirla, de entender a qué se está enfrentando, y *a veces con estos derechos de petición que logran ponerle el palo en la rueda y retrasar los procesos de licenciamiento se logra el proceso de organización comunitaria que se necesita específicamente para poder defender* (Entrevista a BJ).

De este modo, esta modalidad de la acción contenciosa ha significado conquistas, en algunos casos decisivas, en la agenda del Movete. Ahora bien, según sus propios integrantes, es un tipo de movilización costosa desde el punto de vista técnico y difícil en términos de capacidad de respuesta, dada la multiplicidad de “frentes de lucha” del movimiento. Con todo, constituye un tipo de praxis irrenunciable que, dadas sus posibilidades estratégicas, lleva a los líderes a concluir: “nos volvemos hasta expertos en leyes, toca así no seamos abogados estudiar el tema” (entrevista a OC).

Alianzas

De acuerdo a los líderes del Movete, la disponibilidad de alianzas al interior del sistema político se encuentra significativamente condicionada por dos dinámicas. La primera, como lo vimos anteriormente, tiene que ver con el carácter cerrado y excluyente de los actores políticos

¹¹⁸ Concepto desarrollado por Chales Epp (2013) que alude a las organizaciones y redes que apoyan, en el ámbito del trabajo legal, la acción política de los movimientos sociales, operando de esa manera como un “sostén” de las diferentes formas de movilización legal.

hegemónicos de la institucionalidad oriental. La segunda implica una diferenciación entre la disponibilidad política de actores alternativos en el orden nacional, y la manera como esto funciona en el nivel local, que es el nivel de actuación del movimiento.

Al respecto, los líderes entrevistados reconocen que, si bien en el campo político nacional han emergido actores disidentes con votaciones significativas y con acceso a cargos de representación en corporaciones públicas, en el campo político local tales plataformas y organizaciones partidistas han sido utilizadas para el camuflaje a través de transfuguismo político:

Son los mismos políticos camuflados en otros partidos que por lo general tienen una fuerza de circunscripción nacional que les permite hacer eso. Es más, la mayoría de candidatos que buscaron los avales por firmas¹¹⁹ son candidatos tradicionales con afiliaciones partidistas que hoy terminan presentándose con el tema de firmas y en sus vallas hay logos de partidos tradicionales. Entonces, yo no siento que eso realmente tenga una apertura política, democrática, que cambie las cosas, y que las cambie para bien, porque realmente no hay un cambio ahí, por lo menos es la lectura que yo alcanzo hacer (Entrevista a BJ).

Estos dos factores, el de la exclusión y el gatopardismo político, han dado lugar al vaciamiento programático de los partidos en el nivel local. En lugar de representar intereses y nociones diversas acerca del bien común, han ocupado el lugar de instrumentos por medio de los cuales, a través del “aval”, se consigue ocupar posiciones de poder en el campo político local. Así es que puede entenderse el tránsito de “candidatos tradicionales” hacia plataformas alternativas, pero también, como lo explica una de las líderes entrevistadas, el tránsito de actores sociales alternativos a plataformas tradicionales, un camino que ha sido recorrido por algunos líderes sociales dentro de una lógica pragmática que busca asegurar la presencia de políticas alternativas en los cargos de dirección de la institucionalidad local:

En el Oriente ganan los del Centro Democrático, los uribistas y unos conservadores, [así como los] liberales [en su versión] tradicional. Entonces es muy difícil. Incluso los líderes sociales, cuando llegan [a cargos de representación], *tienen que sumarse a un partido como sea y algunos se les olvida también que vienen de abajo, del movimiento social, no todos*” (Entrevista a AG).

Paradójicamente el fenómeno descrito ha terminado convirtiéndose en una nueva oportunidad política. La desideologización e instrumentalización de los partidos políticos ha

¹¹⁹ Se refiere candidatos independientes a los partidos y postulados por grupos significativos de ciudadanos.

abierto la posibilidad de influir y posicionar en la agenda pública temas que, en otras circunstancias, se habrían opuesto a ejes doctrinarios sostenidos con disciplina ideológica. El pragmatismo, en diversas ocasiones, ha hecho de las élites locales actores sensibles a la presión política de la sociedad civil:

Como ahorita no es un tema de partidos por convicción ideológica sino porque como son plataformas que le permiten a usted llegar al poder, usted puede posicionar temas [...] voy a ser crudo: si uno como movimiento social mantiene ese tema vigente, el alcalde por mantenerse bien y generarle gobernabilidad y generarle votos, va a seguir trabajando contra ese tema, *en lo local, en lo regional; en lo departamental y nacional es otra vuelta*¹²⁰, pero en lo local uno puede exigir porque uno es más cercano (Entrevista a AS).

Dentro de esta misma lógica, aunque no es posible hablar de alianzas estables y formales, el Movete sí ha conseguido granjear simpatías gubernamentales para la causa de la defensa del territorio. En particular, los entrevistados se refirieron procesos de toma de decisiones como la promulgación de acuerdos municipales, o eventos de diálogo público como foros y talleres, en los que diversos concejales “han entendido el valor de las propuestas [y] se ven reflejados con ciertas preocupaciones, independientemente de la filiación política que tengan” (Entrevista a RE).

Represión

Nadie discute que hoy, en comparación con la época del exterminio del Movimiento Cívico o de la crisis humanitaria en el Oriente, los niveles de represión hacia las organizaciones sociales y comunitarias son mínimos. Sin embargo, una aproximación que se detenga en esta contrastación cuantitativa, puede ocultar el hecho de que dentro de esos “mínimos” navegan complejidades subjetivas e históricas que actúan con fuerza sobre la acción social del Movete. Nuestro proceso de sistematización arrojó un primer indicio en esta dirección: el código “represión” fue uno de los más densos dentro de aquellos que buscaban identificar los fragmentos asociados a las variables de la EOP subnacional.

La historia de la violencia regional y, en particular, aquella padecida por los movimientos cívicos, dejó huellas en los sujetos de la acción colectiva. El modo de interpretar los procesos de estigmatización, las amenazas, los señalamientos por parte de autoridades políticas y el futuro

¹²⁰ Quiere decir que en lo departamental y nacional la lógica de funcionamiento es otra, es distinta.

mismo del Movete, está relacionado con el pasado violento, y es definido por un tono de desconfianza, precaución y temor.

En este sentido, aunque los entrevistados reportaron casos incidentales -o no sistemáticos- de amenazas, un falso positivo judicial y la sospecha de un asesinato por razones políticas, también expresaron serias preocupaciones en torno a dos antecedentes del conflicto oriental que podrían reeditarse. En primer lugar, la correlación entre la fuerza de los proyectos extractivos y la intensidad de la violencia contra los líderes sociales. Una líder de Rionegro nos lo comunicó así:

Yo no quisiera vivir [...] lo que pasó con el Movimiento Cívico [...] Yo no quisiera que eso pasara con Movete: que la entrada de empresas a Oriente sea tan agresiva que acabe con el movimiento; y no lo acaba mandándolos para la casa, los elimina [...]. Nosotros lo menos queremos es que le pase algo a una persona del movimiento porque eso sí acaba con lo que sea (Entrevista a AG).

Y uno de los líderes de Marinilla, al reflexionar sobre los riesgos y amenazas que afronta el Movete, lo resumió de esta manera:

Yo diría que los riesgos y amenazas podrían resumirse en los siguientes: el primero es el temor de que resurja el conflicto a raíz de los intereses económicos que se ciernen sobre el territorio. Sobre todo, frente al tema minero, por ejemplo, en la zona de páramos. La zona de páramos tiene títulos mineros casi que en todo su territorio y esto genera mucho temor en la población [...] tienen miedo de que a raíz de estos intereses nuevamente se fortalezca la presencia de las organizaciones criminales que hay en el territorio, algunas sucesoras del paramilitarismo (Entrevista a RE).

En segundo lugar, los activistas expresan preocupación sobre el modo como los procesos de estigmatización y etiquetamiento podrían desencadenar eventos de violencia directa contra los movimientos sociales. Es lo que uno de los investigadores y líderes del Movete denominó “factores exógenos”, es decir, los temores que, en lugar de nacer de adentro de la organización, nacen de la acción directa de sus adversarios políticos:

La gente tiene miedo, los líderes, en un país donde después de la firma de los Acuerdos de Paz llevamos más de 400 líderes asesinados, en el Oriente Antioqueño, que tiene una relativa tranquilidad, a la gente le da mucho miedo cuando un Alcalde como el de Sonsón hace señalamientos en contra de los líderes que pertenecen a Movete, en contra de los líderes que hacen parte del Consejo Territorial de Planeación municipal, en contra de los líderes que pertenecen a

organizaciones locales que defienden los recursos naturales o los bienes comunes, eso es muy grave (Entrevista a RV).

En suma, aunque las amenazas que se ciernen sobre los procesos de movilización oriental han bajado a niveles históricos, y su vez, han sido controladas por el buen desempeño de instituciones nacidas de la propia sociedad civil, como la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño; dentro del Movete no existe ingenuidad en relación a un contexto de relativa tranquilidad, que termina siendo interpretado como frágil. De acuerdo a los entrevistados, diversas autoridades políticas han puesto en circulación etiquetas como “ambientalistas de escritorio”, “riquitos”, “continuadores de la guerrilla”, “guerrilleros” o “terroristas”; y en sus propias palabras *la violencia no nace de la noche a la mañana, sino que se va gestando* (Entrevista a CS).

4.2.2. EL COA: ires y venires dentro de una apertura relativa

Como veremos a continuación para el caso del suroeste antioqueño, el peso distinto que tuvo la violencia en la estructuración de la vida social regional durante la segunda parte del siglo XX, influye en una experiencia diferenciada de la política contenciosa local. Para empezar, la gran inflexión histórica que vivió el Oriente con la crisis humanitaria, el proceso de pacificación y la reconstrucción del territorio, no tuvo lugar en el Suroeste. Recordemos que esto no implica, como lo planteamos en el capítulo 3, la ausencia del conflicto armado en la región, pero sí nos obliga a reconocer que las dimensiones del mismo en las regiones bajo estudio son incomparables. De hecho, en Caramanta, municipio del *Territorio COA*, uno de sus líderes históricos relató un proceso de apertura relativa similar al que se vivió en el Oriente con la Ley de Justicia y Paz (Entrevista a AL). Con todo, no se trató de un acontecimiento generalizado que haya marcado la historia regional.

De acuerdo a nuestros hallazgos, los rasgos específicos de la experiencia contenciosa en el Suroeste, en contraste con aquellos del Oriente, están asociados a dos características del conflicto político regional: primero, la existencia de una institucionalidad menos rígida y más receptiva a la agenda de defensa del territorio, y segundo, la construcción de un adversario predominantemente empresarial-privado y no administrativo-estatal. Uno de los líderes fundadores del COA nos ilustró así:

Yo me atrevería a decir que en el Suroeste es un poco diferente a lo que se presentan en otras zonas. Aquí se ha presentado un fenómeno y es que hemos logrado mantener una cierta relación con autoridades locales. Y no solamente con las autoridades locales, sino en términos generales con los actores, con las fuerzas vivas de los municipios, llámese: autoridad civil, autoridades eclesiásticas, la Policía... bueno, como ese tipo de autoridades que se dan en cada uno de los municipios (Entrevista a HV)

Ahora bien, como veremos a continuación, el COA sigue enfrentando importantes factores de cierre y, en consecuencia, su experiencia contenciosa se inscribe en una tensión constante.

Élites

Como se ha venido argumentando, las élites políticas suroccidentales han dejado ver rasgos de apertura que resultan llamativos no sólo en el contexto de la política subnacional antioqueña, sino también en el ámbito de la política nacional. Esta disposición, sin embargo, no obedece tanto a una adhesión general a la agenda del movimiento socio-ambiental, como a procesos de división internos, en los que fracciones importantes de las élites, sin importar el color político, se han mostrado sensibles a las consecuencias de la minería en la región.

Así ha sido en el referido caso de Jericó, uno de los epicentros del conflicto, con un Alcalde y un Concejo Municipal mayoritariamente a favor de la agenda ambiental en el pasado período de gobierno; y así ha sido en los otros municipios en los que se han adoptado decisiones normativas para defender el territorio del extractivismo. Otro ejemplo significativo fue relatado por una líder de Támesis, en relación a la discusión de un proyecto de acuerdo municipal que coartaba la gestión comunitaria del agua:

Eso aquí movió todo [...] Y no fue que todos fueran del MAIS¹²¹, no, había de todo: habían de Cambio Radical, habían de Alianza Verde, yo no sé si había uno del Polo, había otro independiente, bueno no sé, pero ellos dijeron: no se vende el patrimonio y la riqueza de Támesis que es el agua. *Entonces eso quedó un desequilibrio. Y ese desequilibrio es el que nosotros estamos aprovechando, esa es la coyuntura especial que nunca más se va a volver a dar en Támesis*, porque ellos van a ser muy prudentes en los pasos que van a dar y van a estudiar mucho los pasos a seguir, y esa ventanita no nos las van a volver a dejar abierta (Entrevista a HD).

¹²¹ Partido político considerado alternativo: Movimiento Alternativo Indígena y Social.

El hecho de que la apertura dentro de ciertas élites regionales corresponda a procesos de “desequilibrio” o división en medio de “coyunturas especiales”, ha tenido una implicación: una parte de esas élites se ha resistido, ha estrechado vínculos con las empresas multinacionales y ha promovido relaciones de desconfianza y exclusión frente a los procesos de resistencia comunitaria. Esto explica que, así como los entrevistados reconocieron en muchos casos procesos de acercamiento y trabajo fluido con las autoridades locales, en otros casos reprocharon su hostilidad:

El gobierno municipal no tolera que nosotros le hagamos ni veedurías ni que nosotros estemos en contra, o que pidamos que las cosas se socialicen como son, porque siempre está diciendo que nosotros no queremos el desarrollo como ellos lo pretenden, como ellos lo visionan, y como ellos lo quieren hacer. Entonces ha sido muy dificultoso (Entrevista a CG).

De acuerdo a las percepciones de los activistas, esta falta de sintonía con las élites locales también se debe a que, aun cuando en determinadas coyunturas ambos han caminado en una misma dirección, los caminos han sido paralelos y no concurrentes. El caso paradigmático fue el de la “operación dominó” de los acuerdos municipales, en el que también estuvieron involucradas élites económicas de Jericó. Según el relato de líderes ambientales de ese municipio, los activistas de la causa ambiental consiguieron convencer a importantes hacendados de la región de que la minería terminaría por afectar sus intereses, paisajes y propiedades. Esto desencadenó un flujo de recursos de estas élites, canalizado en consultorías jurídicas orientadas a la estructuración de los acuerdos municipales (estrategias jurídicas para blindar al territorio contra la minería). Así, el proceso de construcción y aprobación de los mismos, aunque coincidía con la causa de la defensa del territorio de los movimientos sociales, se hizo desde arriba, conllevando balances críticos por parte del COA.:

Fueron acuerdos muy bien contruidos, obviamente desde el punto de vista jurídico, hubo un avance significativo con relación a la primera oleada [de acuerdos] que se había dado; pero igual se falla porque se hicieron a espaldas de las organizaciones sociales. O sea, no fueron suficientemente socializados, no se discutieron en los municipios, con las organizaciones de base o las organizaciones sociales (Entrevista a VH).

Aperturas del sistema político formal

Espacios de participación. Los líderes del COA han considerado de vital importancia los espacios de participación institucional. Como en el caso del Movete, dentro de ellos se destacan unos que

son de carácter permanente y están previstos en la organización institucional del poder ejecutivo, y otros de carácter coyuntural, que han sido activados en diversos momentos por el movimiento social o por las autoridades públicas.

Dentro del primer grupo sobresalen los concejos municipales del Suroeste, que fueron nacionalmente conocidos por la “operación dominó” a la que hacíamos referencia, esto es, la aprobación coordinada de una serie de acuerdos municipales que, en los distintos pueblos de la región, buscaban vedar o imponer límites a las actividades extractivas. La oleada de acuerdos municipales impuso serios desafíos económicos, jurídicos y políticos a las autoridades institucionales que tuvieron que enfrentar el hecho de que, respaldados en procedimientos legítimos, y además legales, las autoridades del suroeste habían declarado soberanamente que ni las empresas multinacionales ni el poder central del Estado, podrían intervenir su territorio en contra de su voluntad.

Aunque esta iniciativa fue frustrada por autoridades del poder judicial en el orden departamental y nacional, evidenció una predisposición política general, inédita en el contexto nacional, que ha sido aprovechada en el proceso contencioso territorial del que participa el COA:

Hemos podido intervenir [...] en muchos espacios del concejo, donde se nos invita para a que les llevemos la propuesta y se la socialicemos. Yo diría que [en] casi todos los concejos municipales del Suroeste [...] hemos tenido la posibilidad de ir a socializarles nuestras propuestas. Entonces eso tiene un valor muy grande, porque es lograr incidir ahí para que muchas de las propuestas que tengamos se puedan materializar (Entrevista a VH).

Además de estos escenarios, importantes para la discusión de acuerdos municipales, políticas públicas y proyectos como los planes o esquemas de desarrollo territorial, para el COA han sido importantes otros espacios de interlocución con menor grado de formalización: reuniones multisectoriales, foros con candidatos a cargos de representación o foros con instituciones y actores sociales. De hecho, al igual que en el caso del Movete, fue en este tipo de espacios que los distintos liderazgos regionales se fueron encontrando para cultivar interpretaciones compartidas acerca de los conflictos socio-ambientales que acechaban al territorio. Así nacieron organizaciones importantes para la lucha en defensa del territorio, como el COA mismo y la Mesa Ambiental de Jericó. Así nos lo enseñó uno de los fundadores del COA:

Al día siguiente de esta actividad, de este foro, que fue muy nutrido, bastante nutrido, nos encontramos un grupo de personas inquietas, nos encontramos aquí en el municipio de Támesis [...] Entonces ese día empezamos, dimos una discusión y de ahí constituimos lo que denominamos el Cinturón Occidental Ambiental –COA– (Entrevista a VH).

Mecanismos de participación. El principal mecanismo de participación vinculado a la participación político-electoral, el voto, ha sido relevante en el posicionamiento de la agenda socio-territorial dentro de las administraciones municipales. Sin embargo, el COA ha sido especialmente cuidadoso en separar su carácter de movimiento social de la participación electoral a la que pudiesen aspirar sus activistas y simpatizantes. Aunque esto ha sido así, liderazgos provenientes del COA o de sus procesos hermanos, han incursionado con mayor o menor éxito en contiendas electorales. El caso más emblemático ha sido el del alcalde de Jericó para el período 2016-2020, destacado por uno de los líderes de la Mesa Ambiental:

Hay un hecho muy significativo: el alcalde actual fue durante varios años miembro de la Mesa Ambiental, uno de los hombres más participativos [...] Después cuando él decidió lanzarse a su campaña política para buscar la elección [...] nosotros veíamos, tanto él como nosotros, que era necesario independizarse de la Mesa en su accionar político, y esa independencia que comenzó allí continuó durante su administración municipal; en algunos momentos tuvimos discrepancias [...] Pero a través de él hemos demostrado una visión diferente de la política tradicional, o una posición en contra de la minería, ha podido tener una gestión administrativa adecuada, aceptable. Nos ha permitido a nosotros estar cerca de la Administración municipal, de colaborar en algunos asuntos, por ejemplo, en la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo Municipal, y ser parte integrante del Consejo Territorial de Planeación (Entrevista a JF).

Otros mecanismos de participación ciudadana, por su naturaleza más idóneos para la participación abierta y comprometida del movimiento, han sido experimentados en el proceso del COA, pero al mismo tiempo descubiertos como mecanismos rígidos y plagados de obstáculos. Así, de un lado se les define como “propuestas con muchas dificultades, que tratan de encasillar en cierto modo la participación” (Entrevista a VH), y de otro lado, se les observa con escepticismo por las frustraciones reiteradas en el uso de los mismos:

Yo pienso que hay ciertos mecanismos jurídicos que inclusive desde el COA se dice que no nos interesan, pero que de pronto ahí se quisieron implementar, como los mecanismos de participación que nos entregó la Constitución del 91: en el caso de la consulta, alguna una vez se

quiso hacer esa consulta popular, o se hizo esa consulta, 2 consultas populares en Pueblorrico y el Tribunal Administrativo inmediatamente invalidó la pregunta [...] A veces se le ha jugado a eso (Entrevista a CG)

Acciones legales. Distintas vertientes de la movilización legal han demostrado ser relevantes en el quehacer del COA. En particular, sus líderes se refirieron a la formación jurídica básica, acciones de tutela, acciones de cumplimiento y derechos de petición. Al igual que en el caso del Movete, estos últimos han sido fundamentales, sobre todo para acceder a información sobre diferentes proyectos de exploración y extracción minera que deliberadamente es ocultada a los actores de la sociedad civil:

Nos dimos a la tarea de hacer una cantidad de actividades para darnos cuenta, porque realmente desde las administraciones locales no apoyaban en nada, no decían qué estaba pasando, desde las empresas mineras mucho menos... *o sea, ninguno nos decía nada, entonces nos dimos a la tarea de averiguar, de hacer derechos de petición, y de averiguar pues qué estaba pasando y nos dimos cuenta que estábamos invadidos de empresas mineras* (Entrevista a AL)

Alianzas

De conformidad con el relato precedente, el juego político local ha permitido al COA encontrar aliados dentro del sistema político regional, aunque no en un sentido formal ni partidista. Se trata de relaciones que, como lo relató un líder de Acuatámesis¹²², obedecen a las dinámicas de la política contenciosa territorial, no siempre comprensible bajo una mirada convencional, centralista o “desde afuera” de la política:

Pienso que hemos logrado hacer manifestaciones en Támesis y en Jericó donde hemos involucrado a alcaldes, a concejales y a diputados. Y eso es algo muy valioso, políticamente interesante. Y es algo que tenemos a nuestro haber y es parte de nuestro trabajo. *Y desde afuera se puede ver raro, pero en los territorios es otra cosa* (Entrevista a PG).

Profundizando más en el caso del alcalde de Jericó un líder ambiental nos explicó:

Para nosotros fue un aliado. Yo desconocía [...] esa faceta de él y entonces hablando con el coordinador [de la Mesa Ambiental], él me decía: *-Él nos ha acompañado siempre, a la Mesa nos ha acompañado en varios bloqueos, en esto y lo otro; ha defendido el campo y el medio ambiente.*

¹²² Organización de Acueductos Comunitarios integrada al COA.

O sea, él fue consecuente con esa causa y siguió la línea, aun contra viento y marea (Entrevista a RJ).

Estas relaciones se han tejido, sin embargo, con actores de la política local que, en general, no se inscriben en la oleada de actores políticos alternativos que irrumpieron en la escena nacional durante el período 2010-2018. Estos actores emergentes siguen siendo leídos por parte del COA, al igual que en el caso del Movete, como agentes de una vida pública nacional que se muestra más dinámica en comparación con una cierta parsimonia sociopolítica de la estructura de poder local. Cuando fue indagado por esta variación en la composición de los órganos de representación del orden nacional, un líder campesino reflexionaba así:

Yo a nivel local no lo sentí... no sé si a nivel subregional algún caso se hubiera dado, pero no sentí... entre otras cosas porque en una zona -yo hablo por ejemplo del municipio de Támesis- un municipio tan conservadurista como éste, cuando hay fuerzas alternativas, los poderes locales se timbran. Entonces no no no... aquí algo distinto al Partido Conservador como que no cabe (Entrevista a HV).

Represión

Al margen de eventos de intimidación que los mismos líderes valoraron como incidentales, esto es, no encuadrables dentro de una estrategia sistemática de represión contra el COA; lo reportado como grave en materia de tratamiento hostil o represivo hacia el movimiento, son los procesos de estigmatización y de división/cooptación agenciados por el Estado y las multinacionales, en concreto, la AngloGold Ashanti. Esta relación Estado/Mercado es vista con desesperanza: “Da tristeza ver que por ejemplo cuando llega una empresa minera, cuando llega un señor minero al pueblo, primero llega el Ejército, se llena el pueblo de Policía para cuidarlos a ellos, pero a nosotros como habitantes de un pueblo pues nunca nos irán a cuidar así” (Entrevista a AL).

Adicionalmente, el contexto socio-político nacional imprime temores sobre las posibles consecuencias del liderazgo social y la oposición a grandes proyectos extractivos. Como en el caso del Movete, se teme que la relevancia de los proyectos y la fuerza del movimiento en defensa del territorio traiga consigo procesos de violencia experimentados en otros momentos de la historia y en otros territorios del país:

Yo pienso que en la medida en que estos procesos de base vayan volviéndose efectivos a la hora de detener estas injusticias [...] Esas fuerzas oscuras de las que tanto se habla, que todavía no

han tocado los líderes sociales de esta zona, empezarán... porque no debemos desconocer que después de una inversión de 82 millones de dólares que es lo que ha invertido AngloGold Ashanti [...] ellos no van a tirar eso por la borda. Y en la medida en que esto, la movilización, no solamente de las organizaciones sino de los campesinos de allá de Jericó y de los campesinos de aquí abajo y otros actores que entraron a hacer presión para que no les entreguen no solo la licencia de explotación, sino para que no revienten la montaña [...] en esa medida, podíamos tener aquí unos elementos armados y unos elementos que podrían entrar –como en otras zonas– a hacer alianzas con ellos, para que empiecen de alguna forma amenazar, a desplazar, y por último a ultimar los actores y los líderes sociales de la zona (Entrevista a CG).

Al mismo tiempo, los procesos de estigmatización que, a diferencia del anterior panorama, no son potenciales, sino actuales, generan temores y desalientan la participación comunitaria. En las entrevistas los activistas afirman haber sido calificados por autoridades estatales y funcionarios de la multinacional como: “ignorantes”, “enemigos del progreso”, “cercanos a los grupos armados”, “guerrilleros peludos ambientalistas”, “ecoterroristas” y “yihadistas ambientales”.

Tabla 6. Estructura de oportunidades políticas a nivel subnacional para el Movete y COA

EOP subnacional	Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente Antioqueño - Movete-	Cinturón Occidental Ambiental -COA-
<i>Élites</i>	<i>Cierre relativo</i> Cohesión relativa en torno a una visión contrainsurgente de la sociedad y la política	<i>Apertura relativa</i> Fracturas con procesos y discursos de defensa del territorio desde arriba
<i>Aperturas del sistema político formal</i>	<i>Tensiones ambivalentes</i> Aperturas relativas con resultados simbólicos e instrumentales ambivalentes en espacios de participación, mecanismos de participación y acciones legales.	<i>Tensiones ambivalentes</i> Aperturas relativas con resultados simbólicos e instrumentales ambivalentes en espacios de participación, mecanismos de participación y acciones legales.
<i>Alianzas</i>	<i>Poca disponibilidad</i> Sistema político excluyente	<i>Disponibilidad relativa</i> Actores políticos sensibles a la lucha socio-ambiental

Represión	Apertura relativa Sin procesos sistemáticos de violencia Temor/ Estigmatización	Apertura relativa Sin procesos sistemáticos de violencia Temor/ Estigmatización
------------------	--	--

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Las nuevas modalidades de la lucha socio-territorial, “aquello que nunca se había visto”

Este panorama de tensiones dio lugar a nuevas modalidades de la lucha política. Como lo estudiamos en el capítulo 2, los teóricos del paradigma del proceso político ya habían anunciado la idea de que la movilización social florece en escenarios contradictorios: no puede crecer en contextos de extremo autoritarismo y no tiene mucho sentido en contextos de total receptividad y apertura democrática. Si *la paz corporativa* se hubiese impuesto sin ningún tipo de resistencia y con el respaldo unívoco de los estamentos armados y burocráticos del Estado, los procesos de organización social serían aventuras épicas de carácter excepcional. Si, al contrario, *la paz territorial* se hubiese instalado en las regiones de Colombia mediante procesos abiertos de planeación participativa desde abajo promovidos por el Estado, sería esperable que la sinergia política de comunidades y movimientos se canalizara en torno a la construcción institucional de un futuro alternativo.

En este mismo sentido, un escenario nacional y subnacional de élites cohesionadas en medio de un sistema cerrado, excluyente, sin actores alternativos y autoritario, coartaría la movilización social a niveles intolerables, imponiendo costos difíciles de asumir por actores desprovistos de poder político y económico. Por el contrario, un escenario, también en ambos niveles, de élites fracturadas, disponibilidad de actores políticos alternativos, facilidades para la participación institucional y tratamiento democrático de la protesta, permitiría a las organizaciones sociales construir, en el marco de la normalidad institucional, proyectos socio-territoriales alternativos al interior del Estado.

Lo que hasta ahora hemos demostrado es que la experiencia del Movete y el COA contrasta con estos supuestos, mostrándose ambivalente, tensa y contradictoria. Del encuentro entre las

fuerzas de la *paz territorial de los movimientos*, la *paz política de las partes* y la *paz extractiva de las corporaciones* en un contexto de oportunidades políticas definidas por factores de cierre y apertura en los niveles nacional y subnacional, nace aquello que los líderes caracterizan como cosas “que nunca se habían visto”, esto es, nuevas modalidades de la lucha política.

4.3.1. Las tensiones de la paz

En los dos casos estudiados pudimos identificar tres tipos de experiencias en relación a la paz. En primer lugar, una experiencia lejana con relación a la *paz política de las partes*. Aunque existen diferencias fundamentales entre la experiencia previa del conflicto y, en consecuencia, entre los modos de valorar y experimentar el *Acuerdo de Paz* entre el Estado y las FARC-EP, en ambos movimientos las consecuencias instrumentales de ese acuerdo se perciben como lejanas y poco determinantes para las experiencias de movilización local. El proceso de negociación se observó en la distancia, sin que este involucrara la participación de los actores sociales regionales, ni contemplara, dentro de la agenda de diálogos, discusiones acerca del extractivismo, preocupación medular del Movete y el COA. Por otra parte, ninguna de estas regiones fue elegida para ser priorizada mediante la ejecución de los diferentes recursos y políticas públicas derivadas del acuerdo.

Sin embargo, en segundo lugar, la paz tuvo una dimensión performativa, por lo cual existió una experiencia cercana con la noción de la *paz territorial de los movimientos*. Con escepticismo, uno de los activistas entrevistados expresaba que la paz fue “el bombón de trapo que nos pusieron a comer por unos años, y mucha gente se comió el cuento y el movimiento social nos creímos el cuento de que ¡se había generado una gran ventana de oportunidad!” (Entrevista a CS). Sin embargo, como pudimos evidenciarlo, el hecho de que los movimientos se “hayan comido el cuento” se tradujo en procesos de reflexión y movilización a través de los cuales la *paz territorial* terminó convertida, al mismo tiempo, en un *master frame*, y en un elemento identitario que expresaba un horizonte programático compartido por el Movete y el COA.

Así, en tercer lugar, los procesos de construcción de paz desde abajo definieron su ámbito por su oposición a la *paz extractiva de las corporaciones*, con la cual hubo una experiencia antagónica. Ambos movimientos asistieron al desarrollo simultáneo de dos procesos contradictorios: de un lado, un proceso de paz que copaba las agendas públicas, desencadenando

procesos utópicos de imaginación política; y, de otro lado, una disputa socio-territorial intensa en el Oriente y el Suroeste antioqueños, que era afrontada con tenacidad y urgencia por parte de los movimientos. Esto dio lugar a la conciencia de que aquello que, para ellos, como para otros movimientos sociales, resultaba contradictorio, podía ser, en realidad, un proyecto político y socio-territorial coherente, explicado por el deseo de las élites económicas de reemplazar la presencia de ejércitos por corporaciones en los territorios del país.

4.3.2. Las tensiones de la EOP

Para los dos movimientos la experiencia sobre la EOP nacional y subnacional fue diversa. En el primer nivel había cambios y discusiones aceleradas que contrastaban con la quietud de los ordenamientos socio-políticos regionales. Sin embargo, el balance general entre niveles es coherente, hay elementos de cierre y de apertura en medio de los cuales se han formado fisuras para la acción contenciosa de las luchas socio-territoriales. Veamos.

En primer lugar, la fractura arquetípica de las élites nacionales (uribismo-santismo) no tuvo una traducción directa en la experiencia política local, en donde factores culturales (conservadurismo, tradicionalismo) y organizacionales (clientelismo, cacicazgo) operaron como factores cohesivos de la élite local. El Oriente, predominantemente uribista no sufrió procesos de ruptura entre actores políticos hegemónicos. En el Suroeste sí se dieron procesos divisivos en torno a la cuestión ambiental, aunque no relacionados con el clivaje ideológico nacional: la adhesión a la causa de la defensa del territorio por parte de alcaldes y concejales se produjo con independencia del color político.

En segundo lugar, las aperturas del sistema político formal en el nivel nacional tuvieron un correlato en el ámbito regional. Para el caso del Movete y el COA, no obstante, demostró ser importante la distinción entre *input*, proceso y resultado. Aunque los puntos de acceso fueron múltiples, las conquistas por esa vía perseguidas fueron limitadas y, en todo caso, insuficientes para revertir los emprendimientos extractivos. Con todo, esas aperturas han sido fundamentales en el horizonte de la acción pública de los movimientos: allí se posicionan agendas, se entretejen alianzas, se fortalecen liderazgos y se articulan actores en torno a propósitos comunes.

En tercer término, la disponibilidad de alianzas representadas por actores políticos alternativos, resultó ser divergente, aunque no necesariamente contradictoria entre los niveles nacional y local. Los grandes cambios que en esta materia se dieron durante el ciclo 2010-2018 en el plano de la política estatal-nacional, tuvieron repercusiones poco significativas en el Oriente y el Suroeste. En este sentido, las alianzas o redes de apoyo que eventualmente han fortalecido la acción colectiva del Movete y el COA están relacionadas con clivajes alternativos al progresista/conservador o sí-a la-paz/no-a -la-paz de la escena nacional. En el caso del Oriente la disponibilidad de alianzas, por la misma estructura de las élites, ha sido menor. Para el COA ha sido diferente pues actores relevantes, potencialmente afectadas por los proyectos o sensibles a la causa ambiental, han respaldado la agenda del movimiento.

En cuarto lugar, el contexto tendencialmente represivo que expresan los indicadores agregados del orden nacional (asesinatos a líderes sociales, utilización de fuerzas policiales especiales para el control de las protestas e índices de victimización en razón del conflicto armado) se concreta de otra manera en las experiencias bajo análisis. Si bien se identifican incidentes eventualmente asociados a razones de persecución política, no hay violencia sistemática en contra de los actores sociales. De hecho, en el caso del Oriente, esta circunstancia es excepcional a la luz de su historia reciente. Sin embargo, en ambos casos, se evidencian procesos de estigmatización, cooptación o división protagonizados por empresas o autoridades públicas, en una suerte de represión blanda que despierta temores entre los líderes del Movete y el COA.

En suma, las tensiones descritas dan forma a las intersecciones en las que las oportunidades políticas emergen en el nivel nacional y regional. Aunque existen procesos diferenciados, en algunos casos contrapuestos, y en otros complementarios, existen escenarios de apertura relativa. Como también lo pudimos descubrir en los relatos de los activistas, se trata de escenarios más abiertos en el caso del Suroeste que en el del Oriente. La historia del conflicto armado, en este último caso, legó una institucionalidad más rígida y menos receptiva a la protesta social, a su vez dirigida por élites que encarnan una visión contrainsurgente de la sociedad y la política.

4.3.3. El producto de las tensiones: lo nunca antes visto y las veces primeras

Las contradicciones macro-políticas exploradas en el capítulo 2 y las tensiones emergentes del orden micro-político analizadas en este capítulo, se conjugan en procesos de movilización en

defensa del territorio en los que sus protagonistas dan cuenta de rupturas y marcas históricas inéditas. En medio de entrevistas que, dados los agravios sufridos en los territorios, no siempre suscitaban visiones optimistas, solían aparecer, sin embargo, formas de definir la experiencia política que develaban aquello que, en último término, surgía como *nuevo* en los conflictos políticos socio-territoriales.

En algunos casos se definía con el concepto “nunca”: “en el Oriente nunca se había visto ” “tumbamos dos proyectos hidroeléctricos, algo que nunca había pasado en la historia”, “en Támesis hay una coyuntura especial que nunca antes se había dado”, “Nunca antes había oído de una manifestación pública que no fueran procesiones de religión o encuentros con el gobernador, jamás había oído una marcha de la gente protestando contra algo que era una imposición al municipio”. En otros casos mediante la noción de “primera vez”: “era la primera vez en la historia de Cocorná que hubo una marca en contra de algo”, “era la primera vez que ellos sentían que en el Concejo no cabía la gente”, “yo me quedé muy contenta... a nosotros nos ha pasado muchas cosas, a nosotros nos han insultado, todas esas cosas... y nosotros ver lo que vimos ese sábado allá en esa marcha ¡por Dios! [sorpresa]”.

La naturaleza de esta novedad, como se ha visto a lo largo de este trabajo, guarda una estrecha relación con el carácter multivariado de los repertorios y del proyecto estratégico integrado en las nociones de la paz y democracia de movimientos populares como el Movete y el COA. Se trata, en palabras de Quintana (2016, p. 225), de una modalidad de praxis política que va más allá del “reformismo consensualista” y del “radicalismo revolucionario”:

No pretende oponerse dicotómicamente a todo ordenamiento estatal, y mucho menos a un Estado social de derecho, aunque sí confrontar sus dinámicas de gestión vertical y servirse polémicamente de los derechos que este reconoce y pretende garantizar. [Se trata de una praxis que] emerge de manifestaciones políticas que muchas veces exceden los canales institucionales dados, pero que también se pueden servir de ellos y de los mecanismos de representación para hacer valer sus reivindicaciones.

Es una praxis en defensa del territorio que, como se ha visto, entraña un alto nivel de heterogeneidad, integrando la acción legal, la acción política y la movilización social en el marco de lo que Cohen y Arato (2000) conceptualizan como una lucha “autocontenida”, esto es, una lucha

que no pretende subvertir el orden institucional ni apela al uso de la violencia, pero avanza decididamente en la disputa por la ampliación del campo democrático.

En este orden de ideas, si bien es cierto que las luchas por la defensa del territorio como las del Movete y el COA han estado acompañadas de “nuevos lenguajes de valoración” y de una gramática política en la que las apuestas comunitarias, autonomistas y “desde abajo” cobran una fuerza renovada en medio del descentramiento del gran relato institucional; también es cierto que la cuestión de la política estatal sigue siendo una preocupación central en la vida de estos movimientos, desde el punto de vista pasivo (lo que se padece) y desde el punto de vista activo (lo que debe ser apropiado). Esto explica el carácter de la novedad a la que venimos haciendo referencia, sintetizada por uno de los líderes fundadores del COA, con la noción de la “política de las cuatro patas de la mesa”:

Tratamos de construir una especie de mesa –esto es una forma muy metafórica como para lograr entender un poquito todo el tema la movilización social–. Y es que la mesa hay un eje central que la sostiene, pero es una mesa que tiene... podemos ponerle 4: que es lo político, lo jurídico, la parte de lo que es la visibilización a través de los medios de comunicación social y la parte de acción. Hablemos como de esas cuatro patas, cierto. Y en el centro está la movilización social. Pero lo que hacen las otras patas es sostenerla, ayudarle a darle coherencia a la mesa a que se sostenga mejor, a que pueda moverse mejor, a que tenga más consistencia (Entrevista a VH).

4.4. Recapitulación

En este capítulo final, después de haber construido nuestra propuesta analítica y de haber examinado las condiciones contextuales de nuestro problema de investigación a nivel nacional y subnacional, hemos dado respuesta a nuestra pregunta de investigación: *¿De qué manera procesos de movilización socio-territorial específicos (Movete y COA), experimentaron la configuración de oportunidades políticas en el ciclo político 2010-2018, definido por la cuestión de la paz, la democracia y el territorio?*

Para ello, en una primera parte, examinamos las tensiones que el Movete y el COA experimentaron en relación a la paz y a la EOP. En el primer caso, verificamos un proceso de construcción de sentidos vinculados a la noción de una *paz desde abajo*, entendida como una *paz territorial de los movimientos*, contrapuesta a la *paz política de las partes*, percibida como lejana

y restringida, y a la *paz extractiva de las corporaciones*, interpretada como una nueva amenaza basada e la acumulación por despojo. En el segundo caso, estudiamos el modo como el Movete y el COA percibieron la dinámica política asociada a las cuatro variables de la EOP coyuntural, pudiendo contrastar ambas experiencias y el modo como los niveles de apertura variaban en función de los legados ideológicos e institucionales del conflicto armado.

En una segunda parte, realizamos una síntesis y balance de estos hallazgos para señalar que las tensiones exploradas dieron lugar al nacimiento de nuevas modalidades de lucha política. Estas emergieron como sucesos nunca antes vistos en los territorios del Movete y el COA, relacionándose, de un lado, con las oportunidades discursivas proporcionadas por el proceso de paz y, de otro lado, con las oportunidades institucionales proporcionadas por la EOP. En síntesis, la dimensión política del ciclo 2010-2018 enfrentó a estos movimientos con escenarios ambivalentes, que fueron aprovechados en la construcción de una agenda post-extractiva enmarcada en la defensa de los territorios del Oriente y el Suroeste antioqueños.

Conclusiones

Entre los años 2010-2018 Colombia vivió una serie de cambios profundos en los campos de la política, la economía extractiva y la movilización social. En este trabajo nos concentramos en el primero de ellos, caracterizándolo a partir de dos cambios de naturaleza estructural e histórica. Primero, el cambio en la estructura de oportunidades políticas a nivel nacional, que estuvo dado por cuatro transformaciones del régimen político: i) la ruptura en el seno del bloque de poder hegemónico que facilitó el compromiso de un sector de las élites con una política de paz ii) el desarrollo de reformas que abrieron espacios institucionales para la participación democrática iii) el avance progresivo de fuerzas alternativas dentro del sistema político y iv) la disminución de la violencia asociada al conflicto dentro de un estilo autoritario de tratamiento de la protesta social, que se mantuvo, y el asesinato a líderes sociales y excombatientes, que se perpetuó.

Segundo, el proceso de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, que siendo consecuencia del cambio en la EOP nacional, sirvió al mismo tiempo para reforzar sus dinámicas dentro de una amplia trayectoria histórica de democratización del régimen político colombiano. Ahora bien, este proceso, según nuestro argumento, estuvo acompañado por la ampliación de la frontera extractiva a través de grandes emprendimientos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales. La consecuencia fue la aparición de múltiples experiencias de resistencia socio-territorial que hicieron parte de un ciclo inédito de movilización social ascendente, en el que los diversos procesos de acción colectiva posicionaron la idea de una paz territorial, democrática y con justicia social.

Tras la caracterización de este ciclo político, mostramos que tal conjunto de transformaciones políticas fue experimentado de manera diferenciada en el ámbito subnacional o regional, de modo que la EOP nacional, en sus niveles estructural y coyuntural, no tuvo una traducción directa en las realidades territoriales. Esto fue comprobado en los casos del Movete y el COA, en los cuales, tras un ejercicio de análisis comparado, identificamos experiencias definidas por dos conjuntos de tensiones: en primer lugar, las tensiones entre la *paz política de las partes*, la *paz extractiva de las corporaciones* y la *paz territorial de los movimientos*, que expresan sentidos subjetivos de la acción política que se contraponen, y en segundo lugar las tensiones relacionadas

con factores de cierre y apertura en el marco de oportunidades políticas contrastantes en los niveles regional y nacional.

En torno a las primeras se encuentran las visiones de las partes negociantes, reunidas en una mesa de negociación ajena para el Movete y el COA, en su desarrollo, en sus propósitos políticos (la terminación del conflicto con una agenda y metodología limitadas) y en sus consecuencias instrumentales. De otro lado, las perspectivas de los inversores y corporaciones, interesados en la consolidación de un orden político que brindara seguridad jurídica a los emprendimientos extractivos en el marco de una economía de mercado. Finalmente, las agendas de movimientos como el Movete y el COA, que a través de la apropiación del concepto de *paz territorial* construyeron visiones *desde abajo* según las cuales la paz consistía en la posibilidad de definir el futuro de su propia comunidad política sobre la base del amor, el respeto y la convivencia con los territorios habitados.

En relación al segundo conjunto de tensiones, en el contexto nacional y regional señalamos la existencia de una EOP *relativamente abierta*, aunque con variaciones relevantes. En el caso del Movete, encontramos que, para sus líderes, la trayectoria de un territorio marcado por una interacción compleja entre el desarrollo, el extractivismo y la violencia, está relacionada con la existencia de unas élites más cohesionadas en torno a una visión contrainsurgente, conservadora y empresarial del orden social. Esta misma circunstancia, según los entrevistados, inhibió la disponibilidad de alianzas dentro del sistema político local.

En el caso del COA, los líderes y activistas expresaron precepciones diferentes. En relación a las élites, relataron la existencia de sectores que se han mostrado sensibles a las reivindicaciones territoriales, al punto de que autoridades locales como concejales y alcaldes se han opuesto, a través de foros públicos y acciones institucionales, al extractivismo minero. Aunque esto no desencadenó alianzas permanentes, sí permitió la construcción de canales de comunicación entre las organizaciones del COA y las autoridades gubernamentales, llegando a presentarse acciones conjuntas en circunstancias específicas.

Al lado de estas diferencias, encontramos semejanzas relacionadas con las variables de la apertura del sistema político formal y los niveles de represión. En relación a las primeras, diversos líderes expresaron la importancia de tener acceso a espacios y mecanismos de participación, así como a dispositivos de movilización legal. Aunque estos instrumentos no han conseguido inclinar

la balanza a su favor, sí han permitido impactar en la esfera pública a través de debates e iniciativas que les han permitido triunfos parciales, o bien, les han permitido incidir en el debate político local. En cuanto a la represión, por otro lado, los activistas dan cuenta de un ambiente muy diferente al de las peores épocas del conflicto. Los ataques directos contra los líderes son mínimos, sin embargo, pesa sobre sus hombros la estigmatización y el ataque verbal de autoridades y agentes empresariales, que deja una estela de temor en el quehacer del Movete y el COA.

En el contexto de estas tensiones surgieron modalidades de praxis política en defensa del territorio que se aprovecharon de los espacios discursivos proporcionados por el proceso de paz y los espacios institucionales proporcionados por las oportunidades políticas, excediéndolos en el marco de agendas emancipatorias post-extractivistas. En este sentido, en territorios en donde el proceso de paz no tuvo consecuencias instrumentales directas, bien por su fracaso, o bien por sus pocas implicaciones en materia de implementación (casos del Movete y el COA), la cuestión de la paz tuvo una dimensión performativa: abrió procesos de deliberación pública en torno a problemas que habían sido postergados o que fueron interpretados como urgentes en el horizonte de la construcción de *paz territorial*.

De este modo, tales procesos coadyuvaron al llamado “giro ecoterritorial” de luchas sociales que diez años antes eran embrionarias (COA/ Organizaciones ambientales del suroeste) o que estaban limitadas a la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Movete/Movimiento Social del Oriente). En este orden de ideas, para los movimientos sociales estudiados la paz ha sido estrategia (master frame), un “artefacto discursivo” según la expresión de uno de los líderes, que fue utilizado para promover la agenda socio-territorial; pero también y también identidad (horizonte ético-político), el producto de consensos alrededor de un conjunto de valores y propósitos de la acción colectiva.

Las experiencias del Movete y el COA dan cuenta de que, para el caso de procesos de resistencia al extractivismo en el contexto latinoamericano, el modelo del proceso político debe integrar reflexiones de economía política dentro de sus variables dependientes e independientes. La reconstrucción de la trayectoria de estos movimientos nos permitió comprender un proceso de movilización que encontró su origen en los agravios infligidos por el régimen de expropiación territorial y que aprovechó para su desarrollo las aperturas relativas del régimen político. En este sentido, para nuestro caso, las tesis de Inclán (2018a) (a mayor modernización democrática, mayor

EOP y mayor movilización social) y Almeida (2014) (a mayor modernización neoliberal, mayores agravios y mayor movilización social) no son excluyentes y, en su lugar, se relacionan de manera complementaria con dos dimensiones del proceso de paz exploradas en este trabajo: la modernizadora democrática y la modernizadora neoliberal/extractivista.

En este sentido, la relación entre territorio y política leída a través de las experiencias del Movete y del COA enseña que, como lo plantea el paradigma del proceso político, el Estado es un factor constitutivo de los procesos de acción colectiva de tipo contencioso (Tilly y Tarrow, 2015), pero también, como lo ha enfatizado la literatura latinoamericana, los procesos de acción colectiva en la región expresan *movimientos otros* (Zibechi, 2017) que disputan grandes patrones del orden cultural (Touraine, 1985). Se trata de movimientos que libran batallas al interior del Estado, pero que van más allá de él, de manera que expresan concepciones no hegemónicas de democracia (Santos, 2004), que en el nivel regional, social y comprensivo (Basset, Tahar-Chaouch y Aguilar, 2014) interpelan el gran relato de la democratización liberal latinoamericana.

Finalmente, este trabajo deja algunos aportes, así como rutas posibles para la investigación futura. En primer lugar, la estrategia comparada, poco frecuente en el ámbito de la literatura académica colombiana, demuestra ser una alternativa metodológica interesante para el análisis de experiencias de movilización socio-territorial, al permitir extender los horizontes de comprensión e inteligibilidad entre conflictos semejantes. En segundo lugar, la aproximación a la EOP a nivel subnacional y, de modo más específico, a las percepciones de los actores acerca de la misma, revela la importancia de profundizar en la territorialización de la política contenciosa a través de análisis más detallados de la institucionalidad política local. En tercer lugar, este trabajo fortalece una mirada compleja de la incidencia política e histórica de la paz, que va más allá de los análisis centrados en las consecuencias instrumentales, para abrir paso a las preguntas por las estrategias y proyectos socio-territoriales que construyen los actores en torno a la misma. Finalmente, la pregunta por la experiencia política local de movimientos socio-territoriales, invita a desarrollar miradas críticas de los procesos de democratización, en los que son importantes las variables institucionales, pero también los sentidos subjetivos implicados en la acción de los actores, y las dimensiones económicas que operan en las estructuras de acumulación extractiva.

Referencias

- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016). Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/N01.pdf
- Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2012). Recuperado de: <https://pazfarc-ep.org/images/Extras/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf>
- Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) (2017). Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2016. Recuperado de: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152>
- Agencia Prensa Rural (2014). Cumbre Nacional Agraria: campesina, étnica y popular. Recuperado de: <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260>
- Agudelo, S. (2018). *Cocorná: entre la energía y el campo* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín.
- _____. (2014). “Las afectaciones de las represas, Centrales Hidroeléctricas (CH) y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) en el Oriente Antioqueño, un pequeño recuento”. Recuperado de: <http://www.ipc.org.co/agenciaprensa/wp-content/uploads/2017/12/Afectaciones-de-las-represas-centrales-hidroel%C3%A9ctricas-CH-y-peque%C3%B1as-centrales-hidroel%C3%A9ctricas-PCH-en-el-oriente-antioque%C3%B1o.-Un-peque%C3%B1o-recuento.pdf>
- Alexander, J., B. Giessen, R. Münch y N. Smelser (Comp.). (1994). *El vínculo micro-macro*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara - Gamma Editorial.
- Almeida P. (2014). *Mobilizing Democracy: Globalization and Citizen Protest*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Univ.Press.
- Almeida P. y Cordero, A. (Eds.) (2017). *Movimientos sociales en América Latina: perspectivas, tendencias y casos*. Buenos Aires: CLACSO.
- Arditi, B. (2009). Argumentos acerca del giro a la izquierda en América Latina ¿Una política post-liberal?. *Latin American Research Review*, 43(3), 59-81.
- Archila, M. (2018). *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia 1958-1990*. Bogotá: CINEP.
- _____. M. (2010). Protestas, movimientos sociales y democracia en Colombia (1975-2007). En M. López, C. Figueroa y B. Rajland (Eds.), *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina* (pp. 119-146). Santiago de Chile: CLACSO.
- Arcila, R. E. (1990). De la protesta a la propuesta. *Opción*, 19, 12-15.
- _____. (1986). El Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño 1981-1985. En: CINEP (Ed.), *Los Movimientos Cívicos* (pp. 53-62). Bogotá: Editorial CINEP.



- Arias, J. D. (2018). La defensa del Samaná Norte: el último río “libre” de Antioquia. En Movete (Ed.), *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño* (pp. 175-206). Medellín: Editorial Periferia.
- Auyero, J. (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Ávila, N. (2017). *La naturaleza se cuida y se defiende: conflictos por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia-Colombia* (Tesis de maestría). Universidad Federal de Paraná, Paraná. Recuperado de: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/47167/R%20-%20D%20-%20NATHALIA%20AVILA%20ESCOBAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ávila, N., y Montenegro, J. (2018). Movilización social, procesos educativos y autonomías relativas: el caso de la región del oriente departamento de Antioquia-Colombia. *Revista Pegada*, 19(2), 378-409.
- _____. (2017). Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia. *Controversia*, 208, 225-278.
- Basset, Y., Tahar-Chaouch, M. & Aguilar Sánchez, M. (2015). *Procesos democráticos en contextos de violencia: México y Colombia*. Bogotá, Xalapa: Editorial Universidad del Rosario, Universidad Veracruzana.
- Benford, R. (1997). An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective. *Sociological Inquiry*, 67, 409-430.
- Benford, R., y Snow, D. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639.
- Bernal, J. y Osorio, O. A. (2018). Plan estratégico, balances y proyecciones del Movete. En Movete (Ed.), *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño* (pp. 207-232). Medellín: Editorial Periferia.
- Bértola L. y Ocampo J. A. (2013). *El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bizberg, I. (2014). Tipos de Capitalismo en América Latina. En I. Bizberg (Coord.), *Variedades de Capitalismo en América Latina: los casos de México, Brasil, Argentina y Chile* (pp. 41-94). México: El Colegio de México.
- Bonilla, R. (2011). Apertura y reprimarización de la economía colombiana. Un paraíso de corto plazo. *Nueva Sociedad*, 231, 47-65.
- Botero, S. (2017). El plebiscito y los desafíos políticos de consolidar la paz negociada en Colombia. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 37(2), 369-388.
- Carothers, T. (2002). El fin del paradigma de la Transición. *Este País*, 135, 22-34.
- Castro, J. C. (2014). Plan para el desarrollo minero y política del despojo. Recuperado de: <https://www.semillas.org.co/es/plan-para-el-desarrollo-minero-y-pol>
- Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (2016). *Tendencias de la movilización social en municipios críticos para el posconflicto*. Bogotá: CINEP/PPP.

- _____. (2016a). *Movilización por la Paz en Colombia: una infraestructura social clave para el posacuerdo*. Bogotá: CINEP/PPP.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Cepeda, I. (2019). La paz total y definitiva. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/la-paz-total-y-definitiva-columna-871427/>
- _____. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista Cetil*, 1(2), 101-112.
- Cerosetenta (2019). *Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD*. Recuperado de: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/manual-contra-esmad/>
- Cinturón Occidental Ambiental (COA) (2018). MANDATO POPULAR COA: Participación y Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial. Recuperado de: <http://coaterritoriosagrado.org/mandato-popular-coa-participacion-y-autonomia-para-resignificar-el-ordenamiento-territorial/>
- _____. (2016). Territorio sagrado para la vida. Recuperado de: <https://censat.org/es/publicaciones/territorio-sagrado-para-la-vida>
- _____. (2016a). Manifiesto Segunda Travesía por el Suroeste: Un abrazo a la montaña. *Justicia social y ambiental para la construcción de paz territorial*. Recuperado de: <http://coaterritoriosagrado.org/499-2/>
- _____. (2014). Página web oficial. Recuperado de: <http://coaterritoriosagrado.org/cinturon-occidental-ambiental-coa/>
- Cohen, J. (1985). Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements. *Social Research*, 52, 663-716.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (2000). *Sociedad civil y teoría política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015). *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%20%20Febrero%20de%202015.pdf
- Conda, O., Puerta, P. y Martínez, J. (2018). *Ser del campo: por los caminos de la soberanía alimentaria en San Francisco Antioquia. Prácticas socioculturales para la soberanía alimentaria de campesinos y campesinas en las veredas El Pajuí y San Isidro del municipio de San Francisco (Ant)* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15292/1/CondaOscar_2018_SerCamp oCaminos.pdf
- Correa, R. (2002). Reformas estructurales y crecimiento en América Latina: un análisis de sensibilidad. *Revista de la Cepal*, 76, 89-107.

- Corte Constitucional (2010). Sentencia C-141 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Recuperada de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm>
- Cruz E. (2017). *Caminando la palabra. Movilizaciones sociales en Colombia (2010-2016)*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Das, V. y Poole, D. (2008). El estado y sus márgenes: Etnografías comparadas. *Relaciones Internacionales*, 8, 1-39.
- De Los Ríos, S. (2016). La pax extractiva y el conflicto socioambiental en Colombia. *Conexión*, 6, 8-27.
- Duque, J. (2017). Colombia 1958-1990: dos transiciones con democratización frustrada en un contexto de violencia. *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, 12, 103-141.
- Duque, I. (2018). Paz con legalidad. Recuperado de: <http://www.posconflicto.gov.co/Documents/politica-estabilizacion-Paz-con-legalidad.pdf>
- Echeverry, A. (2018). *Oriente antioqueño: un caso de diseño corporativo del territorio* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15096/1/EcheverriAndrea_2018_OrienteAntioque%c3%b1oCaso.pdf
- Echeverry, J. A. (2018). *Acción colectiva, procesos de resistencia y posibles impactos por proyectos hidroenergéticos sobre el Río Dormilón del municipio de San Luis – Antioquia*. (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12562/1/EcheverryOcampo_2018_Acci%C3%B3nColectiva.pdf
- Epp, Ch. R. (2013). *La revolución de los derechos. Abogados, activistas y cortes supremas en perspectiva comparada*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- El Espectador (2018). Las circunscripciones de paz que no fueron. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/editorial/las-circunscripciones-de-paz-que-no-fueron-articulo-824654/>
- El País (2018). La consulta anticorrupción en Colombia no supera (por poco) el umbral para ser aprobada. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/08/26/colombia/1535315276_191058.html
- Einsinger, P. (1973). The Conditions of Protest Behavior in American Cities. *American Political Science Review*, 67,11-28.
- Enlazando Alternativas (2013). Declaración final del Congreso Nacional para la Paz en Colombia. Recuperado de: <http://www.enlazandoalternativas.org/spipe030.html?article1144>
- Favela, D. (2002). La estructura de oportunidades políticas de los Movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano. *Estudios sociológicos XX*, 50, 91-121.
- Franzki, H., & Olarte, M. C. (2013). Understanding the political economy of transitional justice. En S. Buckley-Zistel, T. Koloma, C. Braun y F. Mieth (Eds.), *Transitional justice theories* (pp. 201-221). New York: Routledge.

- Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2017). *¿Dónde, cómo, quiénes y por qué se movilizan los colombianos?* Recuperado de:
<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/59d5018760e75.pdf>
- Garay, L. J. (2013). *Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista*. Bogotá: Contraloría General de la República.
- García, C. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Controversia no. 189*, 129-146.
- García, M. (2014). *La eficacia simbólica del derecho. Sociología política del campo jurídico en América Latina*. Bogotá: IEPRI.
- _____. (2000). Estado, derecho y crisis en Colombia. *Estudios Políticos*, 17, 11-44.
- García, C. y Aramburo, C. (2011) (Eds.). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. Medellín: Editorial Códice Ltda.
- García, M., y Santos, B. (2001). *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Gómez, G. I. (2017). Entre el castigo y la reconciliación. Análisis sociojurídico del proceso de paz y la negociación del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. *Estudios Políticos*, 50, 236-256.
- _____. (2014). *Justicia transicional en disputa. Una perspectiva constructivista sobre las luchas por la verdad, la justicia y la reparación en Colombia, 2002-2012*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- González, Y. (2013). *Ambua Kurisiadayu: Organizaciones Conflictos y Resistencias. (Pueblorrico-Antioquia)* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín.
- _____. (2018). *Ambua Kurisiadayu: Poder Popular, Contraespacios y Justicia Espacial en Pueblorrico, Antioquia* (Tesis Maestría). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de:
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12747/1/GonzalezYamid_2018_AmbuJusticiaPueblorrico.pdf
- González Gil, A. (2019). Minería y movilizaciones sociales en Colombia: consultas populares y derecho al territorio. *Política y Sociedad*, 56(1), 87-105.
- González, F. (2015). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Cinep.
- González Muñoz, C. (2015). Diálogos de paz Gobierno-FARC-EP y las oportunidades para la paz en Colombia. *Estudios políticos*, (46), 243-261.
- Gudynas, E. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. *Nueva Sociedad*, 237, 128-146.
- _____. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley (Coord.), *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*. (pp. 379-410). La Paz: Oxfam y CIDES UMSA.

- Haman, M. (2019). The Colombian anti-corruption referendum: Why it failed?. *Colombia Internacional*, 100, 175-199.
- Harto de Vera, F. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de estrategia*, 183, 119-146.
- Higuita, J. A. y Rupp, L. (2018). Del Movimiento Cívico del oriente antioqueño al Movete. En Movete (Ed.), *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño* (pp. 21-90). Medellín: Editorial Periferia.
- Hincapié, E. (2015). ‘Nuestro oro es la vida’: Imaginarios sociales del desarrollo en el Municipio de Támesis y la amenaza minera (2002-2014) (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín.
- Hincapié, S. (2017). Extractivismo, consultas populares y derechos políticos ¿El renacimiento de la democracia local en Colombia?. *Reflexión política*, 19(37), 86-99.
- Hobsbawm, E. J. (1963). The revolutionary situation in Colombia. *The World Today*, 19(6), 248-258.
- Inclán, M. (2018). *The Zapatista Movement and Mexico’s Democratic Transition: Mobilization, Success, and Survival*. New York: Oxford University Press.
- _____. (2018a). Latin America, a Continent in Movement but Where To? A Review of Social Movement Studies in the Region. *Annual Review of Sociology*, 44, 12-1-12.17
- Instituto de Estudios Regionales (Iner) (2003). *Oriente: desarrollo regional una tarea común universidad-región*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- _____. (2003a). *Suroeste: desarrollo regional una tarea común universidad-región*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Jaramillo, S. (2014). La paz territorial. *Presentación en la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, Estados Unidos*, 13.
- Jiménez, A. (2017). *Criando la montaña, el agua y la vida: procesos hidrocomunitarios campesinos y acumulación por despojo hídrico en el Complejo de Páramos de Sonsón en Antioquia*. (Tesis de maestría). El Colegio de San Luis, San Luis Potosí. Recuperado de: <http://waterlat.org/Thesis/JimenezGomez.pdf>
- Kitschelt, H. (1986). Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. *British Journal of Political Science*, 16, 57-85.
- Kriesi, H. (1995). The Political Opportunity Structure of New Social Movements: Its Impact on Their Mobilization. En J. C. Jenkins y B. Klandermans (Eds.), *The Politics of Social Protest* (pp. 167-198). Minnesota: University of Minnesota Press.
- La Liga Contra el Silencio (2019). Las 43 muertes que involucran al ESMAD antes del #21N. Recuperado de: <https://ligacontraelsilencio.com/2019/12/03/las-43-muertes-que-involucran-al-esmad-antes-del-21n/>
- Levitsky, S., & Way, L. (2011). El aumento del autoritarismo competitivo. *Journal of Democracy en español*, 3, 5-21.

- López Toro, Y. (2018). *Drwa Warrara. Hijos de la tierra defendiendo un Territorio Sagrado para la Vida. Construcción de Buen Vivir en el Cinturón Occidental Ambiental como una expresión de Decolonialidad* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/15123/1/LopezLeidy_2018_DrwaWarraraHijos.pdf
- Lora, E. (2012). *Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo*. Documento de trabajo del BID # IDB-WP-346. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-Reformas-Estructurales-en-Am%C3%A9rica-Latina-Qu%C3%A9-Se-Ha-Reformado-y-C%C3%B3mo-Medirlo.pdf>
- Manrique, C. A. (2016). La guerra y la paz pensadas desde la acción política de los movimientos populares. En A. Fjeld, C. Manrique, D. Paredes y L. Quintana (Comps.), *Intervenciones filosóficas en medio del conflicto: debates sobre la construcción de paz en Colombia hoy*, (pp. 189-206). Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia.
- Marcha Patriótica (2019). Nuestra lucha es por la Paz con Justicia Social. Recuperado de: <https://www.marchapatriotica.org/nuestra-lucha-es-por-la-paz-con-justicia-social/>
- Martínez, J. F. (2016). *ChuzaDAS: Ocho años de espionaje y barbarie*. Bogotá: Ediciones B Colombia SA.
- McAdam, D. (1999). Oportunidades políticas: Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación. En D. McAdam, J. McCarthy y Z. Mayer (Eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (pp. 49-70). Madrid: Istmo.
- McCarthy, J y Mayer, Z. (2002). The enduring vitality of the resource mobilization theory of social movements. En J.H. Turner (Ed.), *Handbook of Sociological Theory* (pp. 533-565). New York: Kluwer Academic/Plenum.
- _____. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology* 82, 1212- 1242.
- Melo, J. O. (2017). *Historia mínima de Colombia*. México: El Colegio de Mexico AC.
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: Colegio de México.
- _____. (1995). The Process of Collective Identity. En H. Johnston y B. Klandermans (Eds.), *Social Movements and Culture* (pp. 41-63). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Meyer, D. S., & Minkoff, D. C. (2004). Conceptualizing political opportunity. *Social forces*, 82(4), 1457-1492.
- Misión de Verificación de la ONU en Colombia (2019). Nota de prensa: Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Recuperado de: <https://colombia.unmissions.org/nota-de-prensa-informe-del-secretario-general-de-las-naciones-unidas-sobre-la-misi%C3%B3n-de-2>
- Molano, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33246.pdf>

- Montaño, J. y R. Hernández. (2013). *A desmundializar el estómago: resistencia alimentaria en el suroeste de Antioquia* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/4711/MontanoVasquez-JairoEsteban-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio - Movete (2018). Quiénes somos. Recuperado de: <http://www.movete.org/index.php/acciones>
- _____. (2018a). *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño*. Medellín: Editorial Periferia.
- Munck, G. (2011). Los estándares de la democracia: hacia una formulación de la cuestión democrática en América Latina. *Journal of Democracy en español*, 3(19), 22-41.
- New York Times (2016). Colombia rechaza el acuerdo de paz con las Farc y entra en un momento de incertidumbre. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2016/10/02/espanol/america-latina/colombia-acuerdo-de-paz-farc-no.html>.
- Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (2017). Minería de Oro – Cinturón Occidental Ambiental – Suroeste Antioqueño. Análisis Dinámica de Actores y Acciones. Disponible en: http://oca.unal.edu.co/investigacion/docs/Suroeste_Antioq/1%20ActAcc%20Suroeste%2011%2001%202017.pdf
- Ocampo, J. A. (2008). Los paradigmas del desarrollo en la historia latinoamericana. En O. Altimir, E. V. Iglesias y J. L. Machinea (Eds.), *Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina* (pp. 19-57). Santiago de Chile: CEPAL.
- O'Donnell, G. (1993). Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva Latinoamericana con referencias a países poscomunistas. *Desarrollo Económico*. 33(130), 163-184.
- O'Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (coords.) (1989). *Transiciones desde un Gobierno Autoritario*. Buenos Aires: Paidós.
- Offe, C. (1985). New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics. *Social Research*, 52, 817-868.
- Olson, M. (1992). *La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos*. México: Limusa.
- Osorio, I. (2017). *Impactos ambientales, sociales y económicos de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en Antioquia* (Tesis de maestría). Universidad EAFIT, Medellín. Recuperado de: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11732/OsorioLondo%C3%B1o_Ive_rson_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Osorio, O. A. (2018). La lucha es por la vida. En Movete (Ed.), *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño* (pp. 233-234). Medellín: Editorial Periferia.

- Oxfam (2016). *Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe*. Lima: Oxfam.
- Palacio, L. (2016). *Suroeste antioqueño: territorio sagrado para la vida. Discurso y prácticas del cinturón ambiental Occidental COA por la defensa del agua frente a la minería (2006-2015)*. (Tesis de maestría). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Recuperado de: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4258/Suroeste%20antioque%20c3%b1o.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Perdomo, J. (2016). *Cauca, río de oro: espacios extractivos en el suroeste de Antioquia*. (Tesis de maestría). Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/5652/1/MontoyaVladimir_2016_CaucaRioOro.pdf
- Pérez, A. (2008). Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. *América Latina Hoy*, 49, 105-126.
- Piven, F., y Cloward, R. (1991). Collective Protest: A Critique of Resource Mobilization Theory. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 4, 435-458.
- Polletta, F y Jasper, M. (2001). Collective Identity and Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 27, 283-305.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO.
- Quintana, L. (2016). Construcción de paz, participación política y movimientos sociales. En A. Fjeld, C. Manrique, D. Paredes y L. Quintana (comps.), *Intervenciones filosóficas en medio del conflicto: debates sobre la construcción de paz en Colombia hoy* (pp. 213-228). Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia.
- Radio Mundo Real (2016). Travesía por la paz: Jóvenes en defensa del territorio. Con Natalie López y María José Andrade desde Colombia. Recuperado de: <http://www.radiomundoreal.fm/9257-travesia-por-la-paz>
- Ragin, C. C. (2007). *La Construcción de la Investigación Social: Introducción a los Métodos y a su diversidad*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Ramírez, S. (2017). Colombia: por una paz completa. Recuperado de: <https://nuso.org/articulo/colombia-por-una-paz-completa/>
- Ramos, E. A. (2016). El proceso de construcción de paz colombiano más allá de la negociación: una propuesta desde la Paz Transformadora y Participativa. *El Ágora USB*, 16(2), 513-532.
- Garavito, C. A. R., Franco, D. R., & Crane, H. D. (2017). *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo*. Bogotá: Dejusticia.
- Salazar, A. (2018). Acciones colectivas del Movete: caminos de reivindicación e incidencia por la defensa del territorio. En Movete (Ed.). *Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño* (pp. 137-174). Medellín: Editorial Periferia.

- Sandoval, L. (2013). Paz para la vida digna. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/paz-para-la-vida-digna-columna-417689/>
- Santos, B. (2017). *Democracia y transformación social*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- _____. (2004). *Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa*. México: FCE.
- Snow, D., Burke, E., Worden, S. y Benford, R. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. *American Sociological Review*, 51, 464-481.
- Snow, D. y Benford, R. (1988). Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. En B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (Eds.), *From Structure to Action: Social Movement Participation Across Cultures* (pp. 197-217). Greenwich, Conn.: JAI Press.
- Stiglitz, J. (2003). El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina. *Revista de la Cepal*, 80, 7-40.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Recuperado de: http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf
- _____. (2013). “Consenso de los *Commodities*” y lenguajes de valoración en América Latina”. *Nueva Sociedad*, 244, 30-46.
- Tascón Tascón, O. (2013). *Proteger la madre tierra de la minería. Resguardo Indígena Marcelino Tascón* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: <http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/140/1/EB0308.pdf>
- Tascón Yagari, G. (2013). *Fortalecimiento y revitalización de la lengua materna de la cultura Chamí a través de la historia de origen para la defensa de la cosmogonía, cosmovisión, la espiritualidad, Karmata Rua, Municipio Jardín, Antioquia* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: <http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/133/1/EB0287.pdf>
- Tavera L. (2000). Movimientos sociales. En L. Baca, J. Bokser-Liwerant, F. Castañeda, I. Cisneros y G. Pérez (Comp.), *Léxico de la Política* (pp. 450-460). México: Flacso Mexico, SEP-Conacyt, FCE, Heinrich Böf.
- Tarrow, S. (2012). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- _____. (1999). Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales. En D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (Eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (pp. 71-99). España: Ediciones Istmo.
- Temblores ONG (2019). Silencio oficial. Un aturdido grito de justicia por los 20 años del ESMAD. Recuperado de: <https://www.temblores.org/silencio-oficial>.
- Tilly, C. (1998). Conflicto político y cambio social. En B. Tejerina y P. Ibarra (Eds.), *Los movimientos sociales: transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 25-42). Madrid: Trotta.
- _____. (1978). *From mobilization to revolution*. New York: Random House.

- _____. (1985). War Making and State Making as Organized Crime. En P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (Eds.), *Bringing the State Back In* (pp. 35-60). New York: Cambridge University
- Tilly, C. y Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics*. New York: Oxford University Press.
- Tilly, C. y Wood, L. (2010). *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.
- López Toro, Y. (2018). *Drwa Warrara. Hijos de la tierra defendiendo un Territorio Sagrado para la Vida. Construcción de Buen Vivir en el Cinturón Occidental Ambiental como una expresión de Decolonialidad* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/15123/1/LopezLeidy_2018_DrwaWarraraHijos.pdf
- Torrico, M. (Ed.) (2017). *¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas*. Ciudad de México: Flacso-México.
- Torres, J. y Cáceres, N. (2012). *La comunicación como agente de movilización alrededor del Comité para la defensa ambiental y del territorio de Támesis* (Tesis de licenciatura). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: https://issuu.com/jhonatantorrex/docs/trabajo_de_grado_-_la_comunicacion_como_agente_de
- Touraine, A. (1985). An introduction to the study of social movements. *Social research*, 52(4), 749-787.
- Universidad Nacional de Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, Centro de Investigación y Educación Popular, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo, Verdad Abierta, Coordinación Colombia-Europa y Confederación Nacional de Acción Comunal (2018). *¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo*. Recuperado de: <https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/>
- Valencia, H. (1987). *Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Vallejo Cruz, L. F. (2017). La propuesta de política de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_83.html
- Vega Cantor, R. (2015). *La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado*. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33458.pdf>
- Vigías del Río Dormilón (2016). *El Dormilón que nos despertó. Sistematización del proceso ciudadano para la protección y defensa del Río Dormilón (San Luis-Antioquia)*. Recuperado de: <https://conciudadania.org/images/contenidos/libros/SistematizacionDormilon.pdf>
- Villada, M. A. y Jiménez, A. F. (2018). La lucha por la defensa de lo común: aproximación a los conflictos socioambientales desde el Movete. En Movete (Ed.), *Memorias y Resistencias*:



las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño (pp. 91-136). Medellín: Editorial Periferia.

Williamson, J. (1990). "What Washington Means by Policy Reform". En J. Williamson (Ed.), *Latin American. How much has happened?* (pp. 7-20). Washington DC: Institute for International Economics.

World Bank. (2016). *The Commodity Cycle in Latin America. Mirages and Dilemmas*. Washington: The World Bank.

Yagari González, D. (2017) *Ēbērã Sõ Bía (Embera de Buen Corazón), Referente de la Educación Propia. Ēbērã Sõ Bía Kavabidru: Dachi Evarimiká nurēadaita* (Tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín. Recuperado de: <http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2662>

Zibechi, R. (2017). *Movimientos sociales en América Latina: el "mundo otro" en movimiento*, México: Bajo Tierra Ediciones. Recuperado de: <http://cga.libertar.org/wp-content/uploads/2017/07/Raul-Zibechi-Movimientos-sociales-en-América-Latina-El-“mundo-otro”-en-movimiento-1.pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Entrevistas

Entrevistas	
Nombre	Organización
AG	Corporación Conciudadanía - MOVETE
OC	MOVETE
AS	Corporación Cocorná Consciente - MOVETE
BJ	Corporación Conciudadanía - MOVETE
RE	Corporación Jurídica Libertad - MOVETE
DJ	MOVETE
CS	Tulpa Comunitaria - MOVETE
TY	Centro de Estudios y Educación Ambiental (Cedan), Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (Amor) - MOVETE
RV	MOVETE
RJ	Mesa Ambiental de Jericó – Aliado COA
JF	Mesa Ambiental de Jericó – Aliado COA
VH	Comité por la Defensa Ambiental y del Territorio (Codéate) - COA
HD	Codéate – COA
CG	Codéate - COA
PG	Acuatámesis – Codéate – COA
AL	Asociación Agropecuaria de Productores de Caramanta (ASAP) - COA
OM	Fuerza Alternativa y Revolucionara del Común (FARC)

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Sistema de Códigos

FAMILIAS ¹²³		CÓDIGOS
Nombre de la familia	Dimensiones de la familia	
Oportunidades políticas a nivel nacional	<i>Espacios de acceso formal al sistema político</i>	Espacios de participación Mecanismos de participación Acciones legales Norma/Institución
	<i>Alineaciones y disposición política de las élites</i>	Élites
	<i>Aliados políticos disponibles</i>	Alianzas
	<i>Violencia y represión asociada al régimen político</i>	Proceso de paz Proceso de justicia y paz Represión
	<i>Acciones del movimiento directamente asociadas a la EOP¹²⁴</i>	Aprovechamiento
Oportunidades políticas a nivel sub-nacional	<i>Espacios de acceso formal al sistema político</i>	Espacios de participaciónS Mecanismos de participaciónS Acciones legalesS Norma/InstituciónS
	<i>Alineaciones y disposición política de las élites</i>	ÉlitesS
	<i>Aliados políticos disponibles</i>	AlianzasS
	<i>Violencia y represión asociada al régimen político</i>	Proceso de pazS Proceso de justicia y pazS RepresiónS
	<i>Acciones del movimiento directamente asociadas a la EOP</i>	AprovechamientoS
Hipótesis alternativas	<i>Movilización de recursos</i>	Organización internacional Organización nacional Organización regional Organización local Recursos Cooptación Estado/Sociedad
	<i>Procesos de enmarcamiento</i>	Marcos
	<i>Identidad colectiva</i>	Memoria Territorio Solidaridad Cultura
	<i>Ciclos de protesta</i>	Ciclo
	<i>Agravios en su dimensión objetiva (causas ‘objetivas’ asociadas a explicaciones funcionalistas o marxistas) o subjetiva (toma de consciencia, visualización del daño como impulso movilizador)</i>	Agravios Desarrollo Conciencia
	<i>Circunstancia excepcional que lanza al movimiento a la acción</i>	Coyuntura crítica
	<i>El eje de los escenarios (sustancia): derecho-política-sociedad</i>	Política institucional Política socio-comunitaria Derecho

¹²³ En la columna izquierda puede visualizarse el nombre de la familia. En la columna derecha se expone su desagregación en dimensiones, explicaciones o variables subsecuentes.

¹²⁴ Estructura de oportunidad política.



	<i>El eje de las escalas (espacio): nación-región</i>	Política subnacional Política nacional
	<i>El eje epocal (tiempo): la paz¹²⁵</i>	Paz Guerra
Repertorios	<i>Repertorios empleados en espacios y al interior de relaciones estatales</i>	Institucional
	<i>Repertorios empleados en espacios y al interior de relaciones no estatales</i>	No institucional
	<i>Repertorios empleados en espacios y al interior de relaciones socio-estatales</i>	Integrador
	<i>Reflexión sobre el uso de repertorios: reflexiones y consideraciones estratégicas sobre las vías de incidencia socio-política</i>	Estrategia
Acontecimientos	<i>“Turning points” en la vida de los movimientos o narrativas acerca de procesos y acontecimientos concretos que revelen, en un nivel fenomenológico, el funcionamiento preciso de la EOP y la movilización social</i>	Movimiento Conflicto armado

Fuente: Elaboración propia.

¹²⁵ Paz entendida como proceso.